



Crimen organizado y violencia homicida en ciudades intermedias



Coordinador
Luis Adolfo Martínez H.

CRIMEN ORGANIZADO Y VIOLENCIA HOMICIDA EN CIUDADES INTERMEDIAS

Coordinador:
Luis Adolfo Martínez H.

Prólogo:
Arturo Alvarado Mendoza

Rafael Rentería Ramos
Rina Mazuera Arias
Pedro Manuel Uribe
Williams Gilberto Jiménez García
Juan Manuel Martínez
José Gustavo Lenis Durán
Wilmar Andrés Morales López
Oscar Fernando Martínez H.
Didier Andrés Ospina
Vanessa Casas Ruíz
Erika María Bedoya
Erika Murillo
Neida Albornoz Arias.
Julián David Vélez Carvajal
Moisés Joel Arcos Guzmán
Paola Andrea Forero Ospina
Melissa Quintana Fernández
Martha Nereida Muñoz Argel
Rafael Gustavo Figueroa Altamiranda



Colección Trabajos de Investigación
2020

Crimen organizado y violencia homicida en ciudades intermedias /
Luis Adolfo Martínez H. y otros. -- Pereira : Editorial Universidad
Tecnológica de Pereira, 2020.
297 páginas. -- (Colección Trabajos de investigación).

ISBN: 978-958-722-429-0

1. Crimen organizado – Colombia 2. Conflicto armado - Colombia
3. Homicidio – Pereira (Risaralda) – Colombia 4. Violencia urbana
5. Violencia – Pereira (Risaralda) – Colombia 6. Delitos económicos
7. Violencia – Villavicencio (Meta) – Colombia 8. Narcóticos y crimen
9. Narcotráfico – Colombia 10. Grupos armados - Colombia

CDD. 364.861

Crimen organizado y violencia homicida en ciudades intermedias

©Luis Adolfo Martínez H.
©Arturo Alvarado Mendoza
©Rafael Rentería Ramos
©Rina Mazuera Arias
©Pedro Manuel Uribe
©Williams Gilberto Jiménez García
©Juan Manuel Martínez
©José Gustavo Lenis Durán
©Wilmar Andrés Morales López
©Oscar Fernando Martínez H.
©Didier Andrés Ospina
©Vanessa Casas Ruiz
©Erika María Bedoya
©Erika Murillo
©Neida Albornoz Arias.
©Julián David Vélez Carvajal
©Moisés Joel Arcos Guzmán
©Paola Andrea Forero Ospina
©Melissa Quintana Fernández
©Martha Nereida Muñoz Argel
©Rafael Gustavo Figueroa Altamiranda
©Universidad Tecnológica de Pereira
Primera edición

ISBN: 978-958-722-429-0

Trabajo de Investigación

Proyecto: Reconfiguración territorial a través de prácticas sociales violentas en ciudades intermedias con elevadas tasas de violencia homicida en relación con los procesos de negociación realizados con los grupos armados ilegales

Universidad Tecnológica de Pereira
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión
Editorial Universidad Tecnológica de Pereira
Pereira, Colombia

Coordinador editorial:

Luis Miguel Vargas Valencia
luismvargas@utp.edu.co
Teléfono 313 7381
Edificio 9, Biblioteca Central "Jorge Roa Martínez"
Cra. 27 No. 10-02 Los Álamos, Pereira, Colombia
www.utp.edu.co

Montaje y producción:

María Alejandra Henao Jiménez
Universidad Tecnológica de Pereira
Pereira

Reservados todos los derechos

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| PRÓLOGO | 7 |
| PRESENTACIÓN | 13 |
| CAPÍTULO I | 19 |
| ECONOMÍA ILEGAL, TERRITORIO Y CULTURA: PERSPECTIVA EXPLICATIVA DE LAS VIOLENCIAS HOMICIDAS EN LA CIUDAD DE PEREIRA | 21 |
| RESUMEN..... | 21 |
| INTRODUCCIÓN | 22 |
| APUNTES METODOLÓGICOS | 24 |
| ESCENARIOS CRIMINÓGENOS Y ECONOMÍAS ILEGALES | 25 |
| ENTRE EL CIVISMO, LA CULTURA Y EL DELITO | 35 |
| CULTURA Y VIOLENCIA..... | 37 |
| LAS LÓGICAS TERRITORIALES DE LAS VIOLENCIAS: EL CASO TIPO DE LA COMUNA VILLA SANTANA..... | 45 |
| BIBLIOGRAFÍA | 56 |
| CAPÍTULO II | 61 |
| CRIMEN ORGANIZADO Y VIOLENCIA HOMICIDA EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO (META)..... | 63 |
| RESUMEN..... | 63 |
| INTRODUCCIÓN | 64 |
| APUNTES METODOLÓGICOS | 66 |
| CONTENIDO DEL PODER Y ESTRUCTURAS DEL CRIMEN ORGANIZADO..... | 67 |
| CRIMEN ORGANIZADO, VIOLENCIA HOMICIDA Y SU RELACIÓN CON EL AUGE DEL NARCOTRÁFICO DENTRO DE LA DINÁMICA DEL CONFLICTO ARMADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META | 69 |
| RECURSOS PARA EL ANÁLISIS REGIONAL DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA VIOLENCIA HOMICIDA EN VILLAVICENCIO | 72 |
| EL AUGE DEL NARCOTRÁFICO Y SU RELACIÓN CON LA DINÁMICA DEL CONFLICTO ARMADO | 73 |
| RED DE TRANSACCIONES DE LA ECONOMÍA ILÍCITA EN LA REGIÓN DE LOS LLANOS ORIENTALES..... | 74 |
| REFERENCIACIÓN DEL HOMICIDIO EN VILLAVICENCIO CON ESCALA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL | 86 |
| EL VALOR CONFIANZA COMO ESTRUCTURADOR DEL PODER CRIMINAL EN VILLAVICENCIO | 90 |
| BIBLIOGRAFÍA | 93 |

| | |
|---|----------------|
| CAPÍTULO III..... | 97 |
| EL LABERINTO DE LAS VIOLENCIAS INVISIBLES, VISIBLES Y RECURRENTES: PRÁCTICAS SOCIALES VIOLENTAS EN EL CONTEXTO URBANO DE MANIZALES..... | 99 |
| RESUMEN..... | 99 |
| HORIZONTE DE LA INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA..... | 100 |
| ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES..... | 103 |
| CONTEXTO NACIONAL..... | 104 |
| VIOLENCIA Y HOMICIDIOS..... | 104 |
| CONFLICTO ARMADO Y NUEVAS VIOLENCIAS..... | 105 |
| FACTORES ESTRUCTURALES EN LA VIOLENCIA NACIONAL..... | 108 |
| POLARIZACIÓN DESDE LA VIOLENCIA..... | 112 |
| CONTEXTO REGIONAL..... | 114 |
| FACTORES INCIDENTES EN LA VIOLENCIA REGIONAL..... | 115 |
| LA INFLUENCIA DEL NARCOTRÁFICO Y LA ILEGALIDAD..... | 118 |
| LA TENSIÓN CULTURAL REGIONAL..... | 120 |
| CONTEXTO LOCAL..... | 123 |
| MANIZALES EN CIFRAS Y REALIDADES: HACIA UNA EMERGENCIA SOCIAL..... | 123 |
| FACTORES ESTRUCTURANTES DE LA VIOLENCIA..... | 123 |
| EDADES Y CICLO VITAL EN VIOLENCIA..... | 130 |
| SUICIDIOS..... | 132 |
| ZONIFICACIÓN URBANA..... | 134 |
| PERSPECTIVAS DE LA VIOLENCIA EN EL 2018..... | 135 |
| CONCLUSIONES..... | 138 |
| BIBLIOGRAFÍA..... | 142 |
| CAPÍTULO IV..... | 147 |
| CONFIGURACIÓN DE LA VIOLENCIA, ECONOMÍA ILEGAL Y CONFLICTO ARMADO EN LA CIUDAD INTERMEDIA DE MONTERÍA, COLOMBIA..... | 149 |
| INTRODUCCIÓN..... | 150 |
| APUNTES METODOLÓGICOS..... | 151 |
| ACERCA DE LA VIOLENCIA HOMICIDA..... | 152 |
| LA RECONFIGURACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y EL MUNICIPIO DE MONTERÍA..... | 155 |
| PRIMER MOMENTO: LA RETOMA DEL CONTROL TERRITORIAL DE LAS FARC Y LAS AUC..... | 156 |
| SEGUNDO MOMENTO: PROCESO DE PAZ Y DESMOVILIZACIÓN DE LAS AUC..... | 159 |
| TERCER MOMENTO: LA AGUDIZACIÓN DE LA VIOLENCIA, SURGIMIENTO GRUPOS POS-DESMOVILIZACIÓN..... | 159 |
| ECONOMÍAS ILEGALES Y ECONOMÍAS DE GUERRA..... | 161 |
| INSTAURACIÓN DE LAS ECONOMÍAS ILEGALES Y LAS ECONOMÍAS DE GUERRA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA..... | 163 |

| | |
|---|------------|
| RECLAMANTES DE TIERRAS..... | 171 |
| VIOLENCIA HOMICIDA: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES | 178 |
| BIBLIOGRAFÍA | 182 |
| CAPÍTULO V | 190 |
| EL COMPORTAMIENTO DEL HOMICIDIO EN TRES CIUDADES INTERMEDIAS COLOMBIANAS. UN ANÁLISIS ESPACIOTEMPORAL DEL CRIMEN A TRAVÉS DE MÉTRICAS TOPOLÓGICAS DE REDES COMPLEJAS | 192 |
| RESUMEN..... | 192 |
| ACERCA DE LOS ANTECEDENTES Y LOS INSUMOS TEÓRICOS CONCEPTUALES..... | 193 |
| SOBRE EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, LA ARTICULACIÓN DE LOS ELEMENTOS TEÓRICO-DISCURSIVOS Y LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA INVESTIGACIÓN | 200 |
| LA SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO..... | 201 |
| EL BARRIO COMO UNIDAD DE ANÁLISIS | 202 |
| EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO METODOLÓGICO | 204 |
| DIAGNÓSTICO DE LA RED DE HOMICIDIOS EN LAS TRES CIUDADES ESTUDIADAS | 206 |
| ANÁLISIS DE LA INTENSIDAD Y COHERENCIA | 207 |
| EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN: UNA LECTURA COMPARADA DEL HOMICIDIO EN LAS CIUDADES DE BELLO, PALMIRA Y PEREIRA..... | 208 |
| EL COMPORTAMIENTO DEL HOMICIDIO EN LAS CIUDADES DE BELLO, PALMIRA Y PEREIRA | 210 |
| UNA MÉTRICA TOPOLÓGICA DE REDES, APROXIMACIONES ESPACIOTEMPORALES PARA LA COMPRENSIÓN SISTÉMICA DE LOS HOMICIDIOS..... | 219 |
| UNA VISIÓN RECAPITULADORA, ACERCA DE LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO COMPARATIVO | 227 |
| BIBLIOGRAFÍA | 230 |
| CAPÍTULO VI..... | 124 |
| HOMICIDIO EN LA FRONTERA: ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA HOMICIDA EN EL ESTADO TÁCHIRA, VENEZUELA | 242 |
| RESUMEN..... | 243 |
| INTRODUCCIÓN..... | 243 |
| ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA HOMICIDA EN VENEZUELA DE LA VIOLENCIA | 245 |
| APROXIMACIÓN CONCEPTUAL | 245 |
| TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA | 248 |
| LA VIOLENCIA INTERPERSONAL..... | 250 |
| FACTORES DE INCIDENCIA: EL MODELO SOCIOLÓGICO DE LA VIOLENCIA EN VENEZUELA..... | 252 |
| DEL HOMICIDIO | 261 |
| CLASIFICACIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO SEGÚN UNODC..... | 263 |
| NIVELES O ESFERAS QUE AFECTAN EL HOMICIDIO..... | 264 |

| | |
|---|-----|
| FACTORES JURÍDICOS QUE DETERMINAN EL TIPO PENAL | |
| DE HOMICIDIO EN VENEZUELA | 265 |
| RÉGIMEN JURÍDICO DEL HOMICIDIO EN VENEZUELA | 275 |
| CONCLUSIONES | 281 |
| BIBLIOGRAFÍA | 287 |

PRÓLOGO

*Arturo Alvarado Mendoza**

El presente libro compila un conjunto de investigaciones sobre las diferentes expresiones de la violencia homicida y el crimen organizado en Colombia, en el contexto de los esfuerzos discontinuos de construcción de Paz de la nación. Con perspectiva plural, muestra las distintas problemáticas de la violencia homicida, el conflicto armado y las reacciones de los afectados, así como los distintos impactos en un conjunto de ciudades intermedias. Abarca un conjunto de espacios urbanos diversos dentro del vasto y profundo territorio colombiano.

Los autores intentan responder a un conjunto de preguntas asociadas con las tendencias de la violencia y las propuestas de construcción de paz. ¿Cuáles son las lógicas de la violencia? ¿Quiénes son sus agentes y cuáles son sus prácticas? ¿Cómo se

* Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos (CES)- El Colegio de México. Director del CES en el periodo 2012-2018. ("Maitre de Conférences") en el Institute de Hautes Etudes D'Amérique Latine (IHEAL) de la Université Sorbonne Nouvelle, "Cogut Visiting Professor" en el Watson Institute de la Universidad de Brown.

despliegan en distintos territorios urbanos? ¿Qué pueden esperar los habitantes de las ciudades intermedias de los procesos de paz? Así también ¿Es de esperar una persistencia o una disminución de las tendencias criminales? ¿Cuáles son los nuevos escenarios emergentes de los procesos de paz, reconstrucción o permanencia de las violencias? ¿Es factible construir un escenario de justicia transicional que lleve a un nuevo ordenamiento pacífico de los territorios urbanos? ¿Cómo resolver los problemas de las víctimas y la reparación? ¿Cómo garantizar la reintegración de los actores de la violencia armada? Y, respecto de los mercados ilegales que están profundamente enraizados en esas economías regionales ¿Qué escenarios pueden proponerse para su regularización? Y de manera también crucial ¿Cómo continuar un proceso de investigación penal/criminal que lleve a la captura y enjuiciamiento de jefes de facciones criminales y de aquellos que persisten en mantener las actividades criminales?

Además de las lógicas de violencia homicida y de las actividades de organizaciones criminales en cada ciudad seleccionada en el libro, los autores exploran, en diversas formas, cuáles son las respuestas de los actores públicos, de la sociedad y los actores ilícitos armados, así como la manera en que las distintas violencias afectan las posibilidades de construcción de paz.

La riqueza, novedad y contribución importante del libro consiste en que los autores exponen la situación de la violencia y las oportunidades de paz en ciudades intermedias. Buena parte de la investigación de los fenómenos de violencia urbana y general se concentran en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali o Barranquilla, pero pocos trabajos han investigado ciudades intermedias como Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Manizales, Armenia, Palmira, Bello, entre otras. Es un conjunto de ciudades llamadas intermedias, muchas de ellas capitales departamentales; otras forman parte de una red regional de ciudades; cada una tiene patrones diferentes de violencia homicida y presencia de diferentes actores criminales. Algunas ciudades son centro de

actividades agrícolas importantes como la región cafetera. Otras son urbes con núcleos de producción manufacturera, como la producción textil y del vestido.

Es una nueva mirada más profunda de la violencia homicida urbana, de la diversidad de organizaciones criminales (las bandas criminales, las autodefensas, las guerrillas), de las víctimas, individuos y familias o comunidades que han sido desplazadas o despojadas de tierras. Asistimos a un escenario contemporáneo definido como el “postconflicto armado”. No obstante, el Proceso de Paz no está ni garantizado ni consolidado, tanto a nivel nacional como en las distintas urbes del país.

Los trabajos que se publican en esta entrega incluyen un grupo diverso de autores articulados en torno a un Programa de investigación en transiciones, violencias y memorias, que además de los propósitos del análisis urbano de las violencias, tiene otros más. Por ejemplo, entre los diversos objetivos estuvo también “estudiar la variabilidad conjunta del espacio y tiempo para predecir o generar escenarios delincuenciales: focalizando áreas geográficas de inseguridad y determinar grupos vulnerables a sufrir hechos delictivos”.

Para seleccionar los casos, tomaron en consideración las características de las urbes tales como poblamiento, indicadores sociales y niveles de violencia. El diseño del proyecto llevó a seleccionar un conjunto de ciudades con tendencias de violencia homicida pronunciadas con distintos métodos, principalmente el método comparativo, que propone seleccionar y estudiar los sistemas más similares entre estas unidades urbanas, en sus principales componentes y los diferentes resultados o expresiones de la violencia.

Las bases de la selección partieron de comparar sus tasas de violencia homicida (entre otros ilícitos) con otras urbes y con los promedios nacionales. También influyeron criterios de

escala de las economías ilegales. Algunas ciudades comparten características en su desarrollo económico reciente, tales como procesos de urbanización de segregación residencial típicos de urbes latinoamericanas. Todas ellas tienen a su vez peculiaridades, por ejemplo, en las formas de violencia organizada.

Las ciudades seleccionadas como ejes de articulación en este libro son Pereira, Villavicencio, Manizales y Montería. Un capítulo presenta un análisis de redes comprando tres ciudades, Bello, Palmira, y Pereira y otro hace referencia a Cúcuta. Otro más abarca el estado fronterizo de Táchira, Venezuela y su dinámica binacional, ofreciendo un interesante contraste con lo que ocurre en territorio colombiano.

Al analizar estos casos los autores no sólo examinan la presencia de la guerrilla, sino de muchas otras organizaciones criminales regionales, asociadas algunas con otras formas nacionales o de otro orden o escala territorial, tales como la Codillera, las autodefensas (AUC) y otros grupos de distinta afiliación como las AGC Gaitanistas, u otras como los Rastrojos, los Pelusos, entre otras. Algunos autores detectan la presencia de cárteles mexicanos. También registran actividades de varias organizaciones guerrilleras como el ELN, el EPL o las FARC. Varias de ellas tienen control territorial en ciertas regiones, mientras que en otros casos se disputan los mismos territorios e interactúan con los grupos y gobiernos locales de forma diferente. Este aspecto merece mayor atención, para no centrarse solamente en temas de corrupción o actividades ilícitas, sino mecanismos locales de pacificación o sus límites.

Entre las muchas actividades ilícitas que estudian están la producción, distribución y venta de drogas como la marihuana y la cocaína, pero también está el contrabando, la extorsión o el despojo de tierras, lo que lleva a identificar distinto tipo de víctimas, como los desplazados o los reclamantes de tierra. Otras son rutas de paso del narcotráfico trasnacional. Varios autores prestaron

atención al desarrollo de las economías ilegales y en algunos casos a las economías de guerra; otros más a la reconfiguración de la violencia en el marco del conflicto armado colombiano.

Los autores parten de diferentes orientaciones teóricas, desde enfoques jurídicos hacia otros marcos sociológicos, como el uso de la noción de campo de P. Bourdieu, hasta el análisis de barrios y comunidades de la sociología urbana norteamericana.

Los métodos de análisis para cada capítulo son diversos. Enfoques etnográficos, grupos focales, análisis de redes. Los trabajos hacen énfasis en factores locales, mientras que algunos comparan sistemáticamente las diferencias locales, otros lo hacen con dimensiones nacionales o estructurales de las violencias. Algunos textos narran los procesos previos de paz y desmovilización de las AUC. Cada trabajo tiene complementos técnicos y uso de metodologías de redes, de sistemas de información geográfico, o enfoques etnográficos.

Los capítulos han sido escritos por numerosos autores. Además de Luis Adolfo Martínez, Rafael Rentería Ramos, Rina Mazuera Arias, Pedro Manuel Uribe, Williams Gilberto Jiménez García, Juan Manuel Martínez, Wilmar Andrés Morales López, Oscar Fernando Martínez, Didier Andrés Ospina, Vanessa Casas Ruíz, Erika María Bedoya, Erika Murillo, Neida Albornoz-Arias.

En conclusión, este libro es un aporte al conocimiento de la complejidad del desarrollo de las violencias en Colombia, así como un mosaico de las alternativas de pacificación. Bienvenida la obra a la literatura sobre estos procesos y a la discusión y exploración de alternativas para salir de esta larga era. Es muy grato ser parte de este gran proyecto de investigadores colombianos en busca de la paz.

Ciudad de México, México, Marzo de 2020.

PRESENTACIÓN

*Luis Adolfo Martínez H**

La construcción de paz territorial, entendida como proceso de larga duración, encuentra en la seguridad urbana uno de sus mayores retos. Las lógicas criminales, sus agentes, estructuras, prácticas, mercados y relaciones alcanzan elevados niveles de sofisticación y adaptación en los entornos locales y sub-regionales, sumado a la creciente desconfianza de amplios sectores sociales ante el parcial incumplimiento institucional de lo pactado. Así, las actuales redes criminales diseminadas en el territorio nacional y auspiciadas de manera recurrente por los poderes legales y grises presentes en los territorios, se erigen como verdaderas amenazas a los procesos de negociación que el Estado entabla con grupos armados ilegales, dinámicas que, de manera directa, están influyendo en las prácticas sociales violentas experimentadas en el territorio colombiano.

* Coordinador del Programa de Investigación en transiciones, violencias y memorias, Profesor investigador de la Universidad Católica de Pereira, líder del grupo de investigación Comunicación y conflicto e integrante del grupo de Clínica y salud mental. Integrante del GT. CLACSO: Violencias, políticas de seguridad y resistencias. Coordinador del proyecto.

Aunado a ello, algunas de las experiencias de postconflictos adelantadas en diferentes lugares del planeta, han señalado cómo la violencia en escenarios de postacuerdo aumenta en lugar de disminuir¹, aclarando que la violencia política suele decrecer a diferencia del incremento en la violencia económica y social (Moser, 2001, p. 3), situación que señala la necesidad de analizar el impacto de los procesos de negociación que el Estado configura con las estructuras ilegales que confronta.

El uso continuo de múltiples violencias experimentadas en la historia colombiana, favorecen la instauración de prácticas sociales que rutinizan el uso de las mismas, generando habituaciones que tornan normales prácticas asociadas a la barbarie o al terror. Estas expresiones violentas adquieren particularidades en los entornos locales que ameritan la realización de lecturas que interpreten las relaciones entre territorios, lógicas culturales y violencias homicidas.

Colombia, desde el año 1981 hasta 2004, ocupó el primer lugar respecto a la tasa de homicidios a nivel mundial (salvo en los años 1998 y 1999 cuando pasó al segundo lugar) y se ha sostenido en los primeros once lugares hasta el año 2019. Esta situación ha llevado a algunos investigadores a señalar la existencia de una “violencia generalizada” en Colombia (Franco, 2005), la existencia de un “Estado fallido”², de una “guerra social” o incluso la existencia de una “presencia traumática” del Estado colombiano (Gilhodes, 1974), entre otras nominaciones, configuradas para analizar la compleja situación de crisis humanitaria experimentada en el

1 Se citan como ejemplo los casos de El Salvador, Guatemala e Irlanda del Norte analizados por Bello (2009), quien señala: “Existe evidencia que muestra el papel de la violencia en sociedades en postconflicto, de modo especial en comunidades que se encuentran en transición de guerras civiles o conflictos armados a épocas de paz” (Bello, 2009, p. 165).

2 Índice promovido por la revista Foreign Policy la cual clasifica a los Estados a nivel mundial según un conjunto de criterios que señalan las capacidades de los mismos en la prestación de servicios básicos, el control institucional y legítimo del territorio y del uso de la fuerza y la capacidad de mediación de los Estados para la solución de sus conflictos. Desde el año 2005 se ha empezado a realizar dicho listado y Colombia ha sido uno de los países frecuentemente señalados como Estado fallido.

contexto colombiano, y que señalan la existencia de variables de carácter estructural que denotan fallas o “fracturas geológicas”³ en el orden democrático existente en el país, características de procesos de larga duración en la construcción de algunos Estados Nacionales ubicados ideológicamente bajo la noción de subdesarrollo.

La reciente disminución en las tasas de homicidio experimentadas en Colombia (tasas que aún superan de manera significativa el promedio mundial y regional) no debe oscurecer, ni las causas que originan dicho descenso (ya sea como resultado del crecimiento institucional, de la hegemonía de un actor ilegal en el territorio local o sub-regional, o por el cambio en las estrategias de los agentes ilegales –como por ejemplo– el paso de la masacre a la violencia selectiva entre otras estrategias de control social), ni tampoco desdibujar las complejas realidades locales y sub-regionales que explicarían las variaciones de las violencias en territorios específicos.

Por lo anterior, descentrar los análisis de las violencias homicidas de las cuatro grandes ciudades colombianas (Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla) y ubicar la mirada en las ciudades intermedias, permite reconocer las nuevas variaciones de un fenómeno que ha atravesado la historia de Colombia y que perfilaría los retos a asumir en un posible escenario de “posconflicto armado”⁴ presente en el contexto actual.

Así, los nuevos escenarios de la criminalidad urbana presentes en Colombia, señalan la creciente consolidación de distintos mercados criminales, algunos de los cuales utilizan la violencia

3 La noción de fracturas geológicas fue estructurada por Raúl Urzúa y Felipe Aguiro, (Chile, 1998).

4 “El posconflicto armado lo entendemos, entonces, como el periodo que va desde el momento en que los procesos de concertación y negociación del conflicto armado interno se tornan en irreversibles, hasta cuando se desarrollan certámenes electorales bajo las nuevas condiciones pactadas en la negociación, se da el reacomodo dentro de la institucionalidad de los actores armados irregulares y el gobierno inicia el desarrollo de las políticas públicas que apuntan a la reconciliación de la sociedad” (Vargas, 2003, p. 121).

homicida como estrategia de control y mediación social y poseen sus raíces en las propias realidades institucionales configuradas en los órdenes locales y regionales.

Analizar las expresiones de las violencias homicidas en territorios específicos en un momento de importantes cambios para la sociedad colombiana, cambios que sugieren posibles incrementos en las tasas de criminalidad y violencia, nos exige reconocer las nuevas realidades a las que se enfrentará la sociedad colombiana en su conjunto y las ciencias sociales y de la educación, en particular, al ser éstas las llamadas a promover las nuevas lecturas que nos permitan entender las complejas relaciones que se están estructurando entre víctimas y victimarios en los entornos urbanos.

De esta manera, consolidar una justicia transicional a escala local y regional que genere, por un lado, las condiciones para garantizar justicia, reparación a las víctimas y garantías a los sujetos reintegrados, y por otro, los mecanismos que permitan pasar de las capturas de cabecillas de las organizaciones criminales a dismantelar los nodos relacionales legales e ilegales que las hacen posible, constituye uno de los pilares que permitirían la construcción de procesos de paz estables y duraderos.

Por esta razón, el Programa de Investigación en transiciones, violencias y memorias define como eje territorial de análisis la realización de proyectos de investigación interdisciplinarios centrados en ciudades intermedias; para el presente caso, expone los resultados de un ejercicio de investigación interinstitucional adelantado en ciudades intermedias con elevadas tasas de violencia homicida como lo son las ciudades de Bello, Palmira, Pereira, Cúcuta⁵, Montería, Manizales y Villavicencio.

⁵ Los datos obtenidos para el caso de Cúcuta, surgen de un proyecto de investigación previo, el cual enriquece los alcances del actual programa de investigación.

El ejercicio editorial realizado favoreció las riquezas interdisciplinarias de los integrantes del programa, promoviendo ejercicios de investigación autónomos que encontraron en los espacios de discusión nacional (como los Simposios internacionales en violencias, transiciones y memorias realizados en la ciudad de Pereira, entre otras estrategias de discusión) las acciones que nos han permitido enriquecer las miradas y perfilar los ejes de articulación a escala nacional.

Con ello, se espera enriquecer los procesos de comprensión de los escenarios en transición y tensión, entendiendo que los territorios del conflicto no se deben limitar a las zonas erigidas por el gobierno y la guerrilla de las FARC a partir del análisis de las zonas históricamente afectadas por el conflicto armado, sino que se deben entender las transiciones de las múltiples violencias en las zonas urbanas donde se reconocen elevadas cifras de violencia homicida y presencia histórica de estructuras delictivas con altos niveles de organización y acción criminal, las cuales se disputan el poder micro-territorial, evidenciando con ello la existencia de sistemas ilegales de carácter histórico que perfilan mercados, agentes, grupos, intereses y capitales en disputa que estructuran el orden social presente en las ciudades colombianas.

Pereira, Colombia, marzo de 2020.

1

CAPÍTULO UNO

1. ECONOMÍA ILEGAL, TERRITORIO Y CULTURA: PERSPECTIVA EXPLICATIVA DE LAS VIOLENCIAS HOMICIDAS EN LA CIUDAD DE PEREIRA.

Erika María Bedoya⁶

Juan Manuel Martínez⁷

Luis Adolfo Martínez⁸

Resumen

Los elevados niveles de violencia homicida experimentados en la ciudad de Pereira, los cuales coinciden con los momentos de mayor violencia fatal experimentados en uno de los países más

6 Profesora de la facultad de Derecho de la Universidad Libre, seccional Pereira, Coordinadora de la línea de investigación en Derechos Humanos, Paz y Conflictos del grupo de investigación en Derecho, Estado y Sociedad de la misma Universidad.

7 Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Director del Departamento de Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira.

8 Doctor en Ciencias Sociales, (FLACSO, Argentina). Coordinador del programa de investigaciones en violencias, transiciones y memorias, profesor del programa de psicología de la Universidad Católica de Pereira, grupo de investigación Comunicación y conflicto. GT. CLACSO: Violencias, políticas de seguridad y resistencias.

homicidas del planeta, como lo es Colombia, contrastan con los discursos y las representaciones contruïdos en torno a una región cafetera figurada como pacífica, distante del conflicto armado interno y con una historia de civismo e inclusión social.

El presente análisis a la violencia homicida reconoce en las prácticas sociales violentas tres ejes de reflexión: mercados criminales, pautas culturales y lógicas territoriales de acción. De esta manera, la triada: economía, cultura y territorio, encuentran en la perspectiva relacional propia de la sociología disposicional de Pierre Bourdieu, un modelo de interpretación de las violencias homicidas experimentadas en ciudades intermedias colombianas.

Los análisis realizados permitieron reconocer la existencia de ordenes sociales casuísticos a escala regional que lograron, a través de prácticas sociales violentas, estructurar lógicas de desarrollo local y regional “exitosos”, vinculando pautas violentas enquistadas en la historia regional e invisibilizadas en las representaciones de la región cafetera.

Introducción

Las múltiples manifestaciones de las violencias en las diferentes esferas de la vida cotidiana y su uso instrumental como mecanismo de mediación social, encuentran, en la ciudad de Pereira, un elemento adicional: la configuración de ordenes sociales casuísticos que encuentran en las violencias una estrategia legítima que acompaña y modela las lógicas de desarrollo promovidas en los territorios⁹.

⁹ Tal situación se presenta no sólo en la ciudad de Pereira, la misma se identifica en otras ciudades intermedias colombianas, como se identificará en el transcurso del presente libro, y estructura una de las hipótesis desarrolladas en la presente investigación. La instauración de ordenes sociales casuísticos (Martínez, 2017) como uno de los ejes que explican la violencia homicida presente en zonas periféricas a los principales entornos urbanos presentes en Colombia.

Las evidencias de dichas prácticas sociales violentas se identifican en los procesos de configuración de las representaciones de las realidades regionales presentes en los discursos institucionales, así las pautas culturales definen disposiciones incorporadas, las cuales legitiman acciones ilegales e informales –y con ello, la consolidación de un agente económico para el cual todo vale–, por medio de unas bases de apropiación del territorio en las que se banalizan las violencias homicidas.

El lugar periférico que le habían otorgado expresiones de las élites de la región a los fenómenos delictivos y las expresiones violentas, ahora ocupan un lugar central en los discursos y en las percepciones mediáticas alusivas a las violencias en la capital de Risaralda, situación evidenciada, entre otros medios, en los informes realizados por el proyecto “Pereira, cómo vamos”, instancia inter-institucional que evalúa desde el año 2011 las percepciones de los pereiranos en temáticas que van desde el desempleo y la actuación de los funcionarios públicos, hasta las de seguridad que se vive en la ciudad, observándose un aumento en la percepción de inseguridad con el paso del tiempo¹⁰.

10 Los datos presentados por este programa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida en Pereira señalan cómo la percepción de seguridad de los pereiranos ha pasado del 61% en el 2011, el 55% en el 2012, al 48% en el 2013. Al indagar acerca de qué tanto el funcionamiento de la Justicia en Pereira está ayudando a reducir la criminalidad en la ciudad, para el 2011 el 21% de los entrevistados señaló la opción Nada, para el 2012 el 24% y para el 2013 el 37%. Ficha técnica: Realizado por: Ipsos Napoleón Franco, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral Encomendado y financiado por: Pereira Cómo Vamos. Tipo de la muestra: Muestreo estratificado, multietápico. Marco de áreas cartográfico con la conglomeración de hogares en secciones cartográficas, a partir de la información del último censo de población y vivienda 2005 con sus correspondientes proyecciones al 2012. Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, niveles socio económicos alto (estratos 6 y 5), medio (estrato 4 y 3), y bajo (estrato 2 y 1), residentes en Pereira, en cada una de las 4 zonas en que se divide la ciudad. Tamaño de la muestra: 1.008 encuestas efectivas de 1.000 previstas. (Fuente: <http://www.pereiracomovamos.org/es/inicio.html>).

Para analizar esta estrategia del uso instrumental de las violencias en las prácticas sociales y en el orden social presentes en la región, se ha decidido acotar el análisis a tres dimensiones específicas: las expresiones económicas –limitadas a los mercados criminales– y los escenarios criminógenos que acompañan dichas expresiones; las pautas culturales y cívicas presentes en la región y las lógicas territoriales de las violencias homicidas –acotando el análisis a una de las comunas que posee los mayores registros de violencia homicida en la ciudad de Pereira–, como lo es la Comuna de Villa Santana.

Apuntes metodológicos

El desarrollo metodológico que permitió el análisis de las tres dimensiones específicas desarrolladas en el presente capítulo, responden a un ejercicio de investigación cualitativa que permitió ampliar la reflexión alusiva a las expresiones económicas de los mercados criminales, los escenarios criminógenos, las pautas culturales presentes en el departamento de Risaralda y las lógicas territoriales de las violencias homicidas. A partir de un tipo de estudio descriptivo y explicativo, el cual permitió reconocer la naturaleza de dichas prácticas y sus formas de operar en el territorio elegido.

Esta investigación, de cohorte cualitativa, permitió ahondar en la reflexión hermenéutica, histórica y crítica de las cuestiones criminales, y sus relaciones con expresiones culturales, inscritas en los escenarios propios de la vida cotidiana. El diseño de investigación etnográfico –estructurado a partir de técnicas como la entrevista semi-estructurada, el diario de campo y el grupo de discusión–, estuvo acompañado del diseño documental, a través de ficha técnica realizada a informes oficiales, prensa de carácter local y artículos arbitrados en revistas de ciencias sociales y humanas.

El método se construyó a partir de un tejido de relaciones entre las técnicas utilizadas que establecían conexiones con los hechos encontrados, como son: la revisión documental e histórica de hechos relevantes, la revisión de cifras y mapas obtenidos, donde se identificaban escenarios criminógenos, relatos, entrevistas y observaciones, además de un componente visual importante documentado a partir de expresiones artísticas encontradas en las zonas de estudio.

De esta manera, se logró establecer una relación entre la descripción y la reflexión de unas dinámicas particulares de la región, que apuntan a una reflexión nacional sobre el crimen organizado y las violencias homicidas en las ciudades intermedias.

Escenarios criminógenos y economías ilegales

La amplia gama de mercados criminales y, en general, de expresiones ilegales que han constituido en Colombia una economía subterránea, posee múltiples impactos que no sólo se reducen a las dimensiones cuantitativas y materiales de los fenómenos señalados¹¹, también han afectado otras esferas de carácter intangible que le dan sentido a las lógicas que estructuran la vida cotidiana y con ello se van instaurando paulatinos cambios que van modificando esquemas mentales, percepciones y representaciones de la realidad social.

Para que dichas instancias ilegales sean posibles y alcancen ciertos niveles de orden y estabilidad en el tiempo, se requiere del papel activo de los agentes legales de los campos

11 Interpretados por disciplinas como la economía en modelos estructurales tales como “multiple indicators multiple causes” (MIMIC) y “dynamic multiple indicators multiple causes” (DYMIMIC), ambos modelos cuestionados por el “posible sesgo de variable omitida que estos pueden presentar en su estimación y las ventajas que pueden tener representaciones más generales del tipo estado-espacio estimadas mediante filtro de Kalman. Este último enfoque es aplicado al caso colombiano donde se parte de una función de demanda de efectivo” (Arango, Misas y López, 2004).

políticos y/o económicos, los cuales por acción o por omisión han favorecido la instauración de mercados de la criminalidad en el contexto colombiano. En este sentido, es posible entender cómo “La permanencia de la criminalidad en un territorio, su desarrollo, actividad y expansión no es posible sin grandes redes de protección y corrupción que los sustentan” (Ávila & Pérez, 2011, p. 27).

Es así como para poder entender el escenario criminógeno presente en el departamento de Risaralda y los mercados criminales existentes en la región, a partir de múltiples indicadores que señalan la compleja situación experimentada en la región –departamento que ocupó en el año 2011 el segundo lugar en Colombia con relación a la trata externa de personas– aquellas que salen del territorio nacional¹², segundo lugar en relación a la trata de personas a nivel interno –referido al fenómeno de trata de personas al interior del departamento-¹³, el sexto lugar en el país en relación con la explotación sexual de menores para el año 2012¹⁴, y su capital, Pereira, es considerada una de las ciudades de “mayor impacto del narcomenudeo y, por consiguiente, de la violencia y la criminalidad asociadas a dicha actividad para el año 2009” (Revista Cambio, octubre de 2009)–; se hace necesario analizar de manera más detallada algunas de las expresiones delictivas existentes en Risaralda, a partir del periodo de 1989, momento de importantes transformaciones a escala regional, nacional e internacional (Martínez, 2017).

12 Después de Antioquia, según un estudio adelantado por la OIM y la Universidad de Los Andes en el año 2011.

13 Después de Nariño, según el estudio nacional exploratorio descriptivo sobre el fenómeno de la trata de personas en Colombia publicado en el 2009.

14 Informe, Explotación Sexual en Niños Niñas y Adolescentes, en Boletín del observatorio del delito, marzo de 2012.

Respecto al fenómeno del narcotráfico, es importante señalar cómo dicho mercado logra articular otras expresiones delictivas como lo son el sicariato, la micro-extorsión, los prestamos gota a gota, el manejo de casinos, las apuestas ilegales y el lavado de activos, entre otros; evidenciando la existencia de intereses legales e ilegales en promover la permanencia de dicho mercado en la región cafetera.

Así, expresiones delictivas del orden nacional, denominadas como Grupos Armados Organizados (GAO) tales como el clan del Golfo, la presencia de Grupos Delictivos Organizados (GDO) como lo son las expresiones residuales de los Rastrojos y la presencia de estructuras criminales transnacionales como lo es el Cartel de Sinaloa, recrean en la zona cafetera expresiones de un conflicto armado degradado y en disputa por un territorio geo-estratégico como lo es Risaralda.

Megaproyectos del orden transnacional como lo son la Transversal de las Américas, la cual conectaría a nuestro país con Suramérica hasta la Patagonia, el proyecto Arquímedes definido para adelantar la extracción de recursos del Litoral Pacífico acompañado del puerto de Tribugá, el cual permitiría fortalecer la conexión con el rico mercado global existente en el pacífico, y el proyecto IIRSA, de extracción de materias primas, que articula la Amazonía con el Norte de Colombia, atraviesan el departamento y lo denotan como un escenario de vital importancia para agentes del orden económico y político en sus dimensiones legales e ilegales, (Martínez, 2016).

A escala local, la estructura del crimen organizado que logra consolidar un manejo de carácter hegemónico durante la primera década del siglo XXI se reconoce en la llamada Cordillera, la cual luego de múltiples variaciones (detenciones, pugnas internas y control de nuevas estructuras), se fragmenta y se reorganiza en Oficinas, las cuales a pesar de perder la unidad de mando y jerarquía que poseía la Cordillera, sí logran mediar el mayor flujo de drogas ilícitas presentes en la ciudad de Pereira.

Esta es una de las ciudades del país que registra un mayor incremento del fenómeno del narcomenudeo y, por consiguiente, de la violencia y la criminalidad asociadas a dicha actividad (Revista Cambio, octubre de 2009). Por tal razón, la Presidencia de la República, en asocio con la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Pereira, implementaron a partir de 2013 un plan de intervención sistemática de las “ollas” más grandes de la ciudad (El Diario del Otún, mayo 28 de 2013; El Tiempo, abril 10 de 2013). Dicha estrategia ha sido ineficaz, dado que no solamente se ha desplazado la venta y el consumo a otros lugares de la ciudad, sino que también se han mantenido las redes que sostienen dicho mercado y las problemáticas sociales que garantizan su existencia (Marulanda, 2013, p. 76).

Es así como se identifica una práctica de carácter nacional en la que se intervienen las ollas (caso Barbacoas, Medellín y Bronx en Bogotá), pero genera como efecto el desplazamiento de dinámicas delictivas a otros escenarios de las ciudades afectadas.

De esta manera, factores como la ubicación geo-estratégica de Risaralda, y su capital Pereira, respecto al Centro-Occidente del país, las condiciones socio-culturales de sus pobladores (con fuertes procesos de mestizaje gracias a una rica migración que permitió fundar la ciudad) y el interés de unas élites locales y regionales obligadas –ante las variadas lógicas de estigmatización de sectores políticos y económicos de las regiones antioqueñas, caucanas y caldenses– a buscar sus propios caminos de desarrollo económico y político, favorecieron la consolidación de una vocación económica y comercial en esta región, situación que posibilitó la existencia de incipientes mercados legales e ilegales que encontraron en el incremento de la migración y la exacerbación de la Violencia de mediados del siglo XX, sus marcos referenciales para posteriores desarrollos.

Así, en la historia del incipiente crecimiento de la ciudad de Pereira, la feria Semestral desarrollada en dicha ciudad, (acompañada de las Pulperías y otros espacios de esparcimiento ya consolidados a comienzos del siglo XX en el torno al Parque del Lago Uribe) posibilitaron no sólo un rico intercambio legal de mercancías y una acumulación importante de rentas para el municipio, sino también la consolidación de emergentes mercados ilegales como el contrabando o el comercio sexual – legal e ilegal– que crecieron con el ritmo acelerado de la llamada ciudad prodigio.

Los datos recopilados permiten reconocer las estrechas relaciones existentes entre expresiones de violencia homicida y algunos mercados criminales que operan en Risaralda y su capital Pereira. Al respecto, si se revisa la tendencia en la tasa de homicidios a nivel local y regional durante el periodo 1999¹⁵-2019, se puede reconocer, en términos tendenciales, un decrecimiento en la tasa de homicidios a nivel local y regional –a partir del año 2008–, pero si se analizan las cifras respecto a la tendencia nacional, (lugar que ocupa Pereira respecto a las 32 ciudades capitales colombianas y Risaralda respecto a los 32 departamentos), se identifican lógicas de violencia homicida que ubican a Pereira con una menor tasa de homicidios respecto a los primeros lugares que ocupan otras ciudades colombianas, pero con una permanencia histórica de la violencia con niveles altos (a diferencia de las ciudades más homicidas, las cuales varían sus registros sin conservar elevados niveles en comparación con Pereira) desde mediados del siglo XX hasta la actualidad¹⁶, salvo para el año 2005, cuando Pereira ocupa el primer lugar en tasas de homicidios para las ciudades

15 Para el año 1999 se registra una de las tasas de homicidios más alta en la historia reciente de la ciudad de Pereira: 119 por 100.000 habitantes. (Martínez, 2017).

16 El análisis alusivo a las tendencias históricas de las violencias presentes en la ciudad de Pereira, se desarrolla en el artículo titulado: “Retos del posacuerdo: Violencia homicida y prácticas sociales violentas en la ciudad de Pereira”. (Martínez, 2017). En: <http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n33/1657-6357-soec-33-00289.pdf>.

capitales en Colombia, el segundo lugar en los años 2007 y 2008 y tercer lugar en el año 2009, periodos que coinciden con las transformaciones en el mando y en la coordinación de la principal estructura criminal presente en la región como lo es la Cordillera.

Este periodo (2005-2008) corresponde a la llegada y captura del mercado ilegal del narcomenudeo por parte de paramilitares, en particular las expresiones del BCB (Bloque Central Bolívar) el cual tenía como uno de sus centros de operaciones el occidente de Risaralda con el llamado bloque “Héroes y mártires de Guática”.

Dicha organización se desmovilizó en el año 2005 y muchos de sus hombres se trasladaron a la ciudad de Pereira e iniciaron el proceso de cooptación de la llamada Cordillera. La consolidación del control de dicha organización se da en el año 2008 bajo la fuerte injerencia del Cartel del Norte del Valle.

Para el año 2009 una serie de capturas de algunos de sus cabecillas señalaba la existencia de duros golpes a esta organización, a pesar de ello, el negocio del narcomenudeo nunca alteró sus precios y los distintos mercados criminales cooptados por la Cordillera (micro-extorsión, préstamos gota a gota, apuestas ilegales, control de algunos casinos y “zonas de tolerancia” entre otros) nunca perdieron su poder de coacción y estabilidad como mercados criminales, pero ¿cómo se puede entender esta situación?.

Las acciones en contra de las estructuras criminales en Pereira y Risaralda no han afectado de manera significativa el sub-campo de la economía ilegal, con ello se quiere decir que ni las estructuras sociales objetivas (nodo de relaciones que perfila la existencia de dinámicas estructurales que cobran existencia, ya sea a través de instituciones intermedias presentes en los barrios y en la ciudad en general, o los diferentes campos y sub-campos existentes en la región) ni tampoco las estructuras sociales incorporadas (nodo de relaciones que perfila la existencia de

disposiciones para la acción mediada por el uso de la fuerza e incorporadas en los cuerpos como propensiones para la acción), las cuales configuran las prácticas sociales violentas, han afrontado impactos significativos que alteren las lógicas estructurales que explican en gran medida las violencias experimentadas en Pereira y Risaralda.

Esta situación señala cómo sin importar el número de incautaciones que la POLFA¹⁷ pueda realizar para contrarrestar el contrabando de diferentes productos¹⁸, o el número de cabecillas de la Cordillera apresados y luego condenados a penas menores como en el caso de Niño Fabián (principal cabecilla de la Cordillera capturado en el año 2009) a quien la policía le endilgaba más de 100 delitos incluidas 6 órdenes de captura por homicidio y quien es finalmente condenado por concierto para delinquir con una pena de seis años y cuatro meses de prisión, además le asignan la casa por cárcel por una supuesta enfermedad terminal (El Colombiano, abril 28 de 2012). En el caso de el mercado sexual, para el cual no importa cuántos operativos se realicen en los lugares donde se presume se están explotando a menores, porque las redes de prostitución rediseñan estrategias para mantener esta forma de comercio sexual, utilizando nuevos dispositivos tecnológicos para ello.

Este complejo panorama evidencia la existencia de diferentes mercados ilegales que no surgen en la actualidad y que poseen algunas de sus raíces y lógicas en la historia misma del departamento, a su vez, coyunturas específicas han profundizado la crisis económica experimentada en la región, y con ello, condiciones de carácter estructural han forjado campos

17 Policía Fiscal y Aduanera, que opera en el marco de los parámetros establecidos por la dirección de impuestos y aduanas nacionales.

18 En el caso de los textiles y confecciones, los miles de decomisos no han representado una disminución significativa de este producto en el mercado y es posible -como señalan los mismos empresarios de la región-, encontrar productos de contrabando en el AMCO cercanos al 50% de los productos que se consiguen en estas ciudades, ya sea en la calle o en almacenes de reconocidas marcas de trayectoria histórica en la región.

económicos y políticos en los cuales, un tipo de agente del desarrollo ha incorporado prácticas de acumulación que priorizan el interés individual sobre el colectivo generando un imaginario social de progreso “a cualquier precio”.

Tal disposición para la acción –arraigada en un eidos que configura formas de pensar las fronteras entre lo legal y lo ilegal– permite invisibilizar los impactos negativos de los mercados criminales afianzando valores “paralelos” que sirven como sustento para adelantar acciones que trascienden el marco normativo en un país que posee su propia crisis de legitimidad de carácter estructural.

En estas condiciones, el contrabandista, el narcotraficante o el proxeneta señala cómo sus acciones generan empleo e inversión regional bajo la mirada complaciente de sectores sociales, políticos y económicos que perciben de manera favorable dichas acciones.

Las condiciones para denotar la existencia de un habitus construido en torno a un campo de la economía ilegal en la región, señalan un elemento estructural, el cual se identificó como elemento de cruce entre los tres mercados ilegales.

Los orígenes disímiles y las lógicas diferenciadas de los mercados del contrabando, el narcomenudeo y el comercio sexual, poseían un conjunto de características centrales similares, entre las que se logra identificar la existencia de un tipo de agente socialmente privilegiado, resultado –por un lado– de las tensiones entre los campos políticos y económicos de la región e igualmente originados por un conjunto de condiciones históricas y disposiciones duraderas que le daban sentido a las prácticas sociales generadas por dichos agentes.

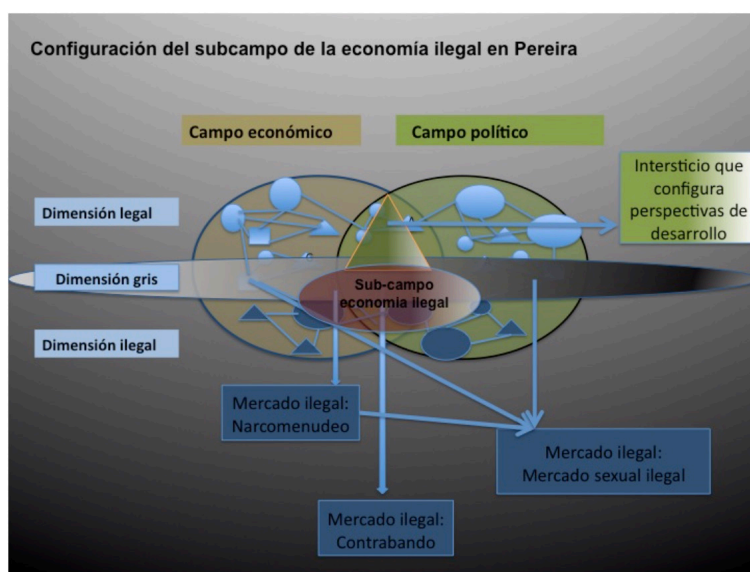
Unas condiciones típicas ideales que encontraron materialidad empírica en un tipo de agente económico y político que se convertía en eje nodal del futuro campo de la economía

ilegal presente en una región con históricas tasas de homicidio como lo es Risaralda y su capital Pereira.

Este histórico escenario criminógeno evidencia la existencia de unas lógicas institucionales que reproducen estructuras sociales violentas hechas cuerpo e igualmente objetivadas en para-institucionalidades que reproducen prácticas sociales mediadas por la fuerza y la violencia en Pereira y su área metropolitana.

Este conjunto de situaciones señala la existencia no de organizaciones criminales hegemónicas de carácter histórico, sino de un sub-campo de la economía ilegal denotado en el marco de la llamada zona gris, (ver esquema No. 3) que nace de las propias estructuras del poder económico y político de la región y que ha permeado mercados legales (como en el caso de la confección) o ha configurado mercados ilegales (como el comercio sexual ilegal o la venta de drogas en la región).

Figura 1. Configuración del sub-campo de la economía ilegal en Pereira. (Fuente: Elaboración propia).



De esta manera, es posible interpretar un conjunto de condiciones históricas que permiten la reproducción de distintos mercados criminales en el contexto regional y que señalan la existencia de un conjunto de capitales en disputa (exaltando para el presente caso, la existencia de capitales sociales negativos o ilegales) en torno a los cuales se disponen un conjunto de actores, grupos e instituciones, los cuales han recreado un conjunto de regulaciones, normas o disposiciones que se aprenden y se reproducen en contextos específicos, razón por la cual es posible nombrar tal nodo de relaciones bajo la figura de un sub-campo de la economía ilegal presente en la ciudad de Pereira.

Tal sub-campo recrea las condiciones criminógenas que promueven algunos de los mercados criminales de mayor incidencia en la ciudad-región y permiten su continua reproducción en la historia de la capital risaraldense. Uno de los esquemas de reproducción está asociado a la existencia de un conjunto de disposiciones para la acción que operan como valores socialmente instaurados y que son los que se aprenden de una generación a otra y con ello se recrean continuamente las condiciones que hacen posibles los mercados ilegales específicos³⁸.

Una de tales dimensiones ubica el análisis en los trazos culturales presentes en la región y que han configurado la distorsionada imagen de una región cívica e integradora que ha configurado esquemas excluyentes bajo la representación sesgada de la integración regional.

19 Se hace referencia a tres disposiciones específicas: mediación violenta y cualificación ilegal (presente en los agentes ilegales); emprendimiento informal y habituación a la ilegalidad (identificada en los agentes grises) y civismo relativista e integración diferenciada (identificada en los agentes legales). Para ampliar dicho análisis ver: "Retos del posacuerdo: Violencia homicida y prácticas sociales violentas en la ciudad de Pereira". (Martínez, 2017). En: <http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n33/1657-6357-soec-33-00289.pdf>.

Entre el civismo, la cultura y el delito

Como sucedió con los procesos de modernización en diferentes partes del mundo, Colombia pasó de estructurar la economía estatal de manera centralizada, con la inversión en nacientes empresas del Estado a principios del siglo XX, a estimular la competencia territorial con procesos de sostenibilidad y desarrollo por regiones, siendo clara la apuesta económica de la empresa privada gracias a la rentabilidad de grandes mega-proyectos.

El Eje Cafetero, y específicamente Pereira, no ha sido exento de tal proceso, junto con la re-estructuración de la economía de Caldas, la proyección de la productividad del turismo en el Quindío y la ubicación estratégica de Risaralda, la región tiene su propia proyección económica a partir de sus particularidades específicas, donde, en el caso de Risaralda, se hace protagónico el papel de la Megaminería y el narcotráfico en una época de profunda transición económica, social y política.

En el caso de Pereira, esta situación llevó a diseñar una apuesta por su eficiencia y proyección desde la venta de servicios, concretamente desde una agresiva apuesta comercial, la cual se viene consolidando a partir de fuertes cambios en la infraestructura de la ciudad y, por ende, en su ordenamiento territorial, tal como sucedió inicialmente con la desaparición de la antigua galería, ubicada en todo el centro de la ciudad, la cual cubría 3 manzanas, con aproximadamente 12 cuadras y donde vivían por lo menos unas 2.000 personas, construyendo allí el Centro Comercial Ciudad Victoria, el Centro Cultural Lucy Tejada y un almacén Éxito.

Este proceso trajo consigo un incremento en los índices de violencia homicida, particularmente de limpieza social, al igual que un gran desplazamiento interno de los actores sociales que allí vivían hacia algunos barrios periféricos, acrecentando la crisis

social ya generada, en buena medida, por la disputa territorial del microtráfico que se desarrollaba en ese entonces.

Después de este episodio de transformación urbana, la relación responsabilidad ciudadana y problemas sociales parece en años posteriores haberse superado, silenciado o mitigado ante la majestuosidad y pulcritud del nuevo sector, en donde emergen entonces con bastante protagonismo la idea de Cultura en el efecto Político de las transiciones sociales de Pereira.

Con la agudización de las problemáticas sociales en la ciudad en los últimos años, las formas de representación de los diferentes actores sociales ha variado de muchas maneras, la violencia adscribe motivaciones diversas y las manifestaciones de ésta tiene escenarios y territorios cada vez más frágiles, esto dada la movilidad que implican las disputas territoriales entre grupos por el control de la droga, los conflictos entre pandillas por el manejo de sectores específicos, los desplazamientos que trae consigo la re-urbanización y los proyectos como hipermercados y centros comerciales en la ciudad.

Tal dinámica es sumamente atractiva, en especial para los niños y jóvenes que se vinculan bajo diferentes formas, ya sean persuasivas o coercitivas, donde, su rol como actores sociales termina siendo desarrollado por la inclusión desde la ilegalidad y como respuesta a la exclusión desde la legalidad, ya que la falta de oportunidades, el limitado acceso a la educación con garantías y la falta de acompañamiento en los procesos de formación dejan a merced de actores ilegales las ofertas de supervivencia y ante de todo el reconocimiento que no reciben desde la institucionalidad.

Pensar la génesis de tal vulnerabilidad social con niños y jóvenes, implica problematizar la misma idea de Identidad local o regional, aunque arrojaría una cantidad desbordada de análisis en relación con los posibles elementos que intervienen en ello desde lo económico, lo político, lo social y lo cultural, es este

último criterio, sin estar por encima del resto, el que posee una particular importancia cuando nos referimos a fenómenos de esta naturaleza.

Cultura y violencia

La cultura pereirana, dinamizada por la noción de tradición, civismo y ciudadanía en la ciudad, ha ocupado renglones de la discusión particularmente entre sectores que se abrogan tal denominación o buscan sacar provecho de ello, de igual forma, ha despertado un interés en algunos sectores académicos que leen en este debate la oportunidad para rastrear la noción de Identidad que mejor se aproxima a una ciudad en continua transformación como ésta, aclarando que tal interés no es exclusivo del departamento y obedece en buena medida a dinámicas nacionales en donde la Historia Regional ha capturado la mirada pública en los últimos años, tal como sucede en el departamento aledaño de Caldas, donde autores como Orlando Jaramillo problematizan la incidencia del civismo desde la historia de aquellos que han tenido que ver con el manejo del poder territorial:

“Azúcenos” y “Grecocaldenses” (2009), los cuales, según el autor, son un posible reflejo de una dinámica ubicada territorialmente, pero con grandes coincidencias nacionales: “la aparición de los llamados azúcenos y de los grecocaldenses en su primera fase y su posterior suplantación por los llamados barroccaldenses”. De esta manera, se advierten los cambios que han sufrido las costumbres políticas en Caldas y que después de veinticinco años, aún no se modifican. Considero que esta radiografía caldense puede, en cierta medida, generalizarse para el país en su historia reciente de caciquismos, clientelismo y corrupción (2008, p. 231).

El caso de Pereira, en relación con el Civismo, tiene en la actualidad un fuerte componente comercial, ya que este tipo de imaginarios oferta la ciudad desde una perspectiva integradora,

solidaria y orgullosa de sus valores cívicos, una muestra de ello lo testimonia Mauricio Vega Lemus, ejecutivo de la Cámara de Comercio de la Ciudad, cuando participó del World Meetings Forum en el 2015 en Cancún, participación que le permitió además ser invitado a programas televisivos de gran alcance internacional como “CALA de CNN” en el mismo año, al respecto de su intervención en el Evento señaló:

Es un sueño hecho realidad, haber presentado la historia de El Primer Ladrillo en medio del World Meetings Forum en Cancún fue una de las experiencias más gratificantes y enriquecedoras de mi vida. Se me hinchó el corazón de alegría al poder mostrar al mundo las maravillas que logramos los pereiranos, nuestro civismo es reconocido (Revista Risaralda Hoy, 2015).

La aparente inclusión social y el gesto de solidaridad que se dio en el pasado, señalado por el funcionario como experiencia cívica, se logró en buena medida gracias a sectores de la sociedad, particularmente a clases medias y altas, que fueron parte activa de este proceso, dicha gesta parcialmente incluyente estimula y promueve proyectos comerciales actuales donde el ítem identitario y cultural juega un rol protagónico, como lo es el Paisaje Cultural Cafetero, en donde es frecuente encontrar algunas nociones esencialistas de la condición cafetera, particularmente destacando ideas como tradición, hábitos, prácticas y riqueza cultural, lo cual promueve un imaginario hegemónico de la cultura y termina por destacar unos valores culturales excluyendo y marginando otros igual de relevantes para la ciudad que van más allá del café.

Sin embargo, la tradición y el Civismo como imperativo público se forja y se instrumentaliza desde años atrás, no solo desde una apuesta por lo comercial reciente, sino también desde mediados de siglo cuando se fomentaba la responsabilidad ciudadana a la hora de trabajar, respetar, honrar o amar la ciudad, con gran influencia cristiana como sentido de apropiación y

empoderamiento cultural del territorio, como lo indica John Jaime Correa por medio de piezas de publicidad que destacaran del rol del buen ciudadano:

Otro mecanismo publicitario bastante empleado fueron los distintos medios impresos, con los cuales se notificaba a la ciudadanía de las grandes gestas realizadas y las obras por realizar. A través de estos medios se creó un lenguaje de exaltadas virtudes cívicas y normas de urbanidad que debían ser acatadas por la ciudadanía. Se requería acompañar las obras cívicas de una ideología que, como ya hemos visto, se apoyaba en la idea de una ciudadanía virtuosa republicana, con muchos rasgos complementarios de ciudadanías sacras (2009, p. 25).

Dicha propaganda sobre el valor del Civismo apelaba a la subjetividad como recurso humano que se inscribiera en el buen hábito y ante todo en el buen comportamiento como imperativo de éste, lo que proyectaba una representación social de la cultura local desde el ciudadano mismo, empero, tanto en lo comercial como en el fomento de una buena ciudadanía, se obtura la mirada de una forma concreta en algunos sectores de la ciudad y por ende en algunos actores específicos, en especial clases media y alta las cuales podían, a través de un comportamiento ejemplar, solidario y preferiblemente carismático, encarar esos valores cívicos.

Desde los primeros epígonos de la cultura ciudadana en la ciudad, hasta las grandilocuentes intervenciones sobre la identidad del pereirano y sus profundos valores sociales, existe un actor marginado culturalmente que no es convocado de forma activa en tales procesos, lo que el mismo Correa llamaría un esquema de exclusión que pretende unificar, “hegemonizar”, una idea de civismo que no consensa realidades y contextos diversos:

¿Cómo construir ciudadanías democráticas bajo esquemas tan excluyentes, tan afectos a un virtuosismo extremo de sus ciudadanos, en procura de imponer una ciudadanía ideal que

muy poco tiene que ver con las “ciudadanías reales” que hacen parte de la compleja y aglomerada escena pública de la ciudad en el presente? Más aun, cuando la propia historia cívica de la ciudad, a pesar de sus innegables implicaciones en la vida pública de la ciudad, se cela de una manera, a veces, recalcitrante (2009, p. 26).

¿Cómo pensar en Identidad local en medio de condiciones básicas insatisfechas?, ¿Qué ciudadanía se puede reconocer con actores que ni siquiera son reconocidos como tales?, estas preguntas no serían precisamente nuevas ya que el sistema de ciudadanía de primera mano no es ajeno a la historia de la ciudad, pero estas inquietudes sí se vuelven más problemáticas si las contextualizamos con el crimen y la violencia en la ciudad en el momento actual.

Pensar el crimen y el aumento de la violencia en una ciudad como Pereira requiere entender los cambios que los grupos ilegales insertan en su modo de operar, la disputa territorial en ciertas zonas por el control, no solo de estupefacientes sino también de contrabando, apuestas ilegales, mercado sexual comercial, entre otras prácticas que diversificaron hace varios años la dinámica de estas bandas, deja en evidencia transformaciones en sus formas de ejercer control, así como en sus métodos a la hora de funcionar, esto gracias a la persecución por parte de las autoridades, el conflicto por el mando de estos grupos y el enfrentamiento entre ellos por ciertas zonas.

Para el caso concreto de la capital de Risaralda, el éxito en la movilidad de una estructura ilegal no se da exclusivamente por su capacidad de adaptación, sino más bien, en buena medida, a la vulnerabilidad social de ciertos actores que, como se mencionó anteriormente son en especial niños y jóvenes, encuentran en las estructuras ilegales oportunidades económicas. Pero, además de ello, gracias a esa tradición cívica excluyente de la mano de la carencia de políticas culturales integradoras y de empoderamiento ciudadano hallan en estos grupos Lugares de apropiación,

representación colectiva y proyectos de significación de vida en donde se les otorga la voz, el lugar y el reconocimiento público desde la ilegalidad.

La relación entre el delito y la Cultura no se puede limitar a un uso instrumental de esta en el cual tan solo se lea una generalidad como la condición de vulnerabilidad o las necesidades económicas como únicas causas que dinamizan la vía a la violencia organizada, es precisamente la obligatoriedad de estudiar y entender relaciones tales como Identidad, Civismo y Representación Cultural las que posibilitan entender un panorama mucho más profundo de un fenómeno que está lejos de caer en un sincretismo estructuralista.

Desde las definiciones más tradicionales de Cultura como la expuesta por Tylor, hace ya más de un siglo, se hace evidente la relación de la Cultura, para la Antropología, con los comportamientos sociales que cada grupo o colectivo de personas decide para relacionarse con su entorno:

Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre (1995, p. 29).

En ese sentido, la Cultura es el recurso que permite leer el comportamiento social y político del ciudadano vinculado a su Identidad, de forma tal que esta última es un reflejo de aquello que desde la forma de actuar se representa en la construcción e imaginarios de participación, inclusión o exclusión cívica construida desde todos los actores que habitan la urbe y no solo desde aquellos que se deciden destacar o promocionar por encima de otros.

De tal forma, volver a la clásica tesis sobre la disposición a la violencia en sectores más vulnerables no parte de un enunciado errado, lo que se torna equivocado es pensar esta situación exclusivamente desde lo económico, en donde la relación básica que pasa por el deseo del sujeto a la hora de tomar la elección no va en contra de sus intereses y se ubica de la mano de una alternativa por la supervivencia, así en el mismo margen de la necesidad insatisfecha por la vía de lo material viene la necesidad del empoderamiento por la vía de lo simbólico y lo social, a lo cual las sociedades responden por medio de sus instrumentos de formación cultural o, como en el caso abordado, por medio de sus valores ciudadanos, el civismo de su comportamiento y la apropiación de su identidad, lo que constituye un diferenciador Territorial que le permite una Inclusión a partir de los dispositivos que forman, lo que autores como Olga Molano (2007) definen como “Identidad Cultural”:

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio (2007, p. 73).

El lugar así de la Identidad Cultural, se inscribe en el imaginario de un civismo excluyente que en condición de abandono económico, social y político no se limita a la automarginación de sus ciudadanos, sino más bien a la búsqueda por otros medios de formas de expresión pública, que van de la mano de un proceso de empoderamiento subjetivo, lo que permite garantizar varias necesidades insatisfechas al tiempo, con un Lugar dentro del

Territorio que se pueda asir para un sujeto etiquetado en una idea de civismo, pero movilizado por una realidad opuesta a ésta noción.

El grupo ilegal abastece un sustento, pero adicional a ello evidencia en lo concreto resultados que identifican al sujeto en zonas específicas con pares, lo que le permite hacer Comunidad de sentido, esto en función tanto de lo ilegal como de ese tesoro simbólico que, como se formuló anteriormente, la institución no ofrece de forma incluyente, y donde además estos actores encuentran al ingresar la posibilidad de seguir alimentando sus patrones de identificación locales como lo son, por ejemplo, el pertenecer a la barra del equipo de la ciudad o Re-territorializar parcialmente zonas de la ciudad en el marco de actividades como fiestas de la cosecha, Halloween o conciertos públicos.

En ese sentido, no podríamos clasificar la participación en el escenario público como un ejercicio que no se ejerce por parte de los actores que ingresan a grupos ilegales, sino más bien un ejercicio que se autodetermina desde otros lugares opuestos a lo que se ofrece como el civismo del pereirano, al respecto Correa plantea: “La precariedad de la participación ciudadana en el contexto local parece mostrar otra realidad para el civismo” (2009, p. 27), donde, si bien es cierto, la realidad alterna del civismo, no lo sería del todo pensar la participación desde un escenario precario, desde lo poco recurrente, sino más bien precario desde lo marginal, objeto de análisis aún en mora por parte de los escenarios académicos de la ciudad.

Finalmente, esta ambigüedad a la que de manera muy clara Martínez denomina “integración diferenciada y civismo relativista” (2017), entendida como un tránsito permanente que va de una estructura política con actores claramente diferenciados por condiciones socio-económicas hacia una búsqueda integracionista de comunidad cívica, implica un estado de ambigüedad desde un llamado a la concertación y adhesión social,

pero desde una lógica ya tradicional de la división de clases, una concentración de factores que incide en el imaginario social y en la subjetividad política de sectores marcados por un mismo espacio-tiempo, pero con territorios claramente definidos y distanciados.

Como lo señala el mismo Martínez, esto se materializa en buena medida gracias a la tensión permanente entre “lógicas estructurales”, entendidas estas como:

La configuración de la región cafetera en la especificidad que implica leerse por fuera y desde adentro del departamento antioqueño (esta doble condición de ser herederos de prácticas culturales siempre en la mixtura que implica la influencia de la llamada “cultura paisa”, pero a su vez influenciada por la tradición caucana, valluna y tolimente) denotaron las bases de una nueva región: “el viejo Caldas”. En este panorama, interpretar las lógicas promovidas por las violencias existentes en la región exige reconocer las dinámicas del orden nacional que afectaron la construcción del naciente departamento de Caldas y su posterior división en la década de 1960 en los departamentos cafeteros de Caldas, Quindío y Risaralda (2017, p. 302).

Y de otro lado “factores coyunturales”, en especial los gestados desde los cambios en el modelo de desarrollo (Martínez, 2017) los cuales van incidiendo progresivamente en la interpretación del contexto que los ciudadanos hacen de su realidad, a partir de los recursos simbólicos y fácticos que la región va construyendo desde viejos y nuevos paradigmas como el café, el narcotráfico, la venta de servicios, la constitución política, la apertura económica, el postacuerdo, etc.; modelos que sedimentan una forma de hacer y comprender pero desde escenarios transicionales.

De esta forma, lo estructural como lo coyuntural se anudan en un mismo escenario con resultados culturales, sociales y políticos diversos, inconsistentes y en ocasiones antagónicos,

los cuales nos ayudan a preguntarnos por nuestra Identidad, Civismo y ese sincretismo extraño que se pretende definir como Pereirania.

En este sentido, la lectura crítica de la cultura y el civismo regional y las anotaciones a los mercados criminales que evidencian la existencia del sub-campo de la economía ilegal, orientan la necesidad de construir y revisar casos tipo territoriales, que identifiquen en esta dimensión espacio-temporal, las formas cotidianas del delito en los territorios que han experimentado largos periodos de tiempo, matizados por múltiples violencias homicidas.

Las lógicas territoriales de las violencias: el caso tipo de la Comuna Villa Santana.

Los barrios en la Comuna Villa Santana expresan una delimitación de lugar, territorio, sentidos y subjetividades, permiten visualizar realidades sujetas a procesos de construcción y reconstrucción de ciudad, de identidad, de trayectoria, una historia, una dinámica de prácticas y de vida.

El describir las características de los barrios permite realizar una versión de su constitución que muestra una radiografía actual desde el adentro y desde el afuera; con una historia reciente que demuestran una realidad de la ciudad. A partir de los ejercicios de planeación urbana, que buscaban reorganizar el centro del municipio de Pereira en una periferia donde confluyen actores de todas partes de la ciudad y de todas partes del país, a causa del desplazamiento interno, siendo esto no único ni determinante en su proceso de constitución; en la actualidad la Comuna es reconocida, desde el afuera, como un sector llamativo para la constitución/ubicación de focos o escenarios de violencia, reorganización de grupos delictivos, ausencia del Estado e influencia de muchas instituciones con intenciones de intervenir las situaciones de violencia y de ausencia presentes allí.

Así mismo, se observan dinámicas que desde el adentro se asemejan a las que pueden tener otros barrios de ciudades del país que han vivido de cerca la violencia, que han permitido la convivencia, espacios interculturales que permiten la interacción de las personas, pero también, prácticas que no se asumen desde la legitimidad establecida por el Estado.

La historia de los barrios de Villa Santana denota dinámicas delincuenciales que, aunque en los últimos años han variado según su nivel de intensidad y reaparición por sectores, sigue identificando una tendencia que tiene que ver con la permanencia de acciones delincuenciales, reorganización de bandas criminales, entre otros.

Villa Santana se ha convertido en una comuna que denota gran interés como espacio de observación de este estudio, no solo por ser representativa en términos de violencia y estructuras criminales, sino también por las dinámicas de interculturalidad y convivencias, resistencias que resultan de las prácticas cotidianas de sus habitantes, permitiendo evidenciar la articulación de espacios y vivencias que apuntan a la construcción propia y característica de su territorio, son muchos los aspectos importantes que demarcan particularidades en los barrios que constituyen esta comuna y que la hacen particular entre otras.

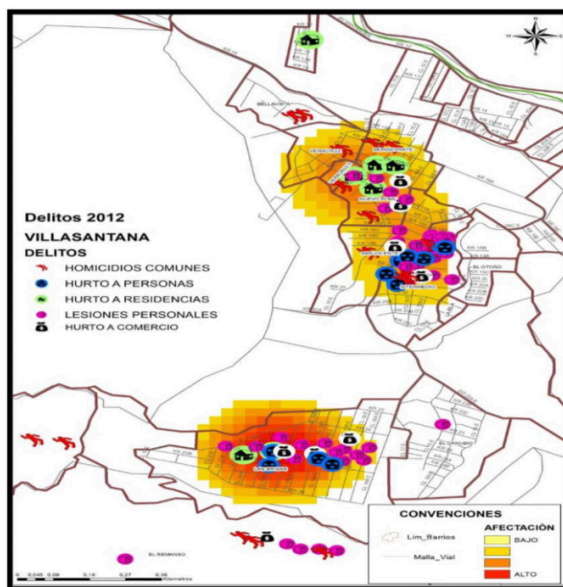
Desde los datos y cifras se evidencian dinámicas del delito que constituyen prácticas de violencia en el territorio, la revista Criminalidad, de la Policía Nacional, expresa que Pereira cuenta con un reporte de delitos de impacto en personas de 4.041 en total, esta cifra incluye los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, terrorismo, acciones subversivas, lesiones y hurto a personas (Policia, 2016), así mismo, el informe de calidad de vida de Pereira cómo vamos, cuenta que para el año 2017 en Pereira se reportaron 148 homicidios, 31 homicidios por cada 100 mil habitantes y dentro de las comunas con mayor incidencia de homicidios se

encuentra la Comuna Villa Santana con un aporte de 22, seguido por la Comuna Centro con 21 (Pereira cómo vamos, 2017), lo cual ha sido reiterativo a través de los años.

Según información recolectada por el Observatorio del Delito de la Policía Metropolitana, los delitos se encuentran tipificados de la siguiente manera: hurto a personas, homicidios comunes, lesiones personales, hurto a residencias, entre otros; estos son algunos de los delitos más frecuentes en la Comuna Villa Santana e históricamente se ha revisado la incidencia de estos delitos en los barrios que la componen.

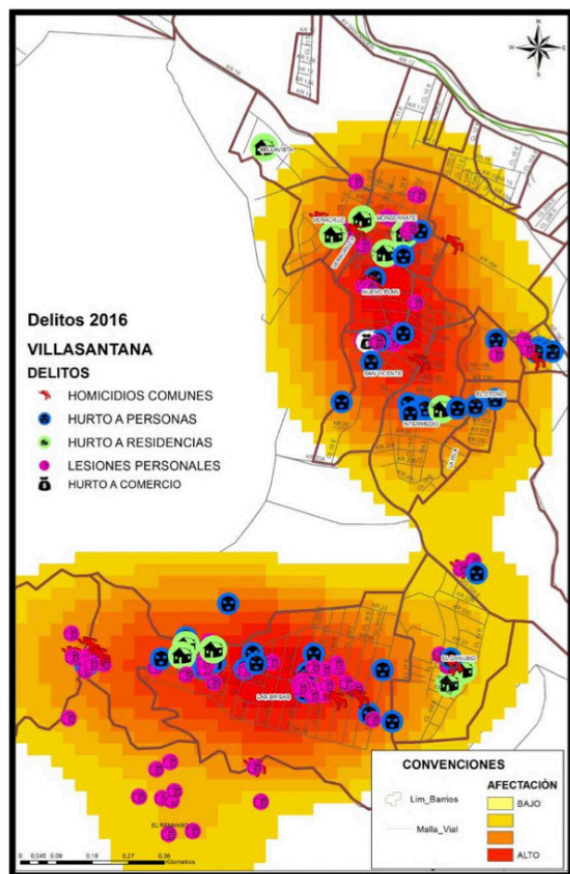
Se cuenta con reportes desde el año 2006, para el delito de hurto a personas se identifica mayor incidencia de este en los barrios El Danubio y Las Brisas, con respecto a los casos de homicidio común es reiterativo el barrio Las Brisas, pero se presenta un mayor porcentaje en el barrio Monserrate, para los años 2007 y 2008 nuevamente Las Brisas aparece con el mayor número de homicidios comunes, así mismo para el 2009 y 2010, sin embargo, en este último año aparecen nuevos barrios con cifras de homicidios comunes como lo es El Remanso y reaparece nuevamente en el 2012, la dinámica cambia un poco para el año 2013 ya que el homicidio común se hace presente en el barrio Tokio y reaparece el barrio Intermedio.

Figura 2. Delitos en la Comuna Villa Santa 2012. (Fuente: Observatorio del Delito Policía Metropolitana).



De esta manera la dinámica de los delitos para el 2014, 2015 y 2016 la mantienen su incidencia de homicidios comunes en el barrio El Remanso, y los demás delitos en los barrios anteriormente mencionados reaparecen nuevamente en el barrio Las Brisas, sin embargo, para el año 2016 aparece una condición particular, la cual tiene que ver con el incremento de homicidios comunes en las fronteras o límites barriales, entre Tokio, El Remanso y Las Brisas.

Figura 3. Delito en la Comuna Villa Santana 2016. (Fuente: Observatorio del Delito Policía Metropolitana).



Por otro lado, la existencia de bandas delincuenciales ha sido un rumor permanente en esta Comuna, aunque la fiscalía, en respuesta a solicitud de información, comunica que “las labores de inteligencia han permitido establecer la no presencia de estructuras irregulares en la Comuna Villa Santana de Pereira como (Rastrojos y Urabeños o ELN)...”, con respecto al narcotráfico señalan que “las bandas delincuenciales de orden barrial, heredadas de la organización Cordillera, son consideradas la principal red que

delinque en la comuna...”²⁰, sin embargo, en lo cotidiano de esta comuna se menciona la presencia o permanencia de dichos grupos: “sí, aquí esta Cordillera, ellos solucionan algunos de los problemas de la comunidad” (Grupo de discusión 1).

Se identifican sectores en los que aun hacen presencia/permanencia las bandas delincuenciales, su forma de operar o manifestarse ha cambiado, sus dinámicas se han modificado, pero se mantiene el control sobre el microtráfico y otras actividades delincuenciales, transporte informal y la modalidad de “gota a gota”, conocida como una forma de cobro directo; asimismo, se evidencia en los últimos años el crecimiento tanto de delitos sexuales, como de violencia intrafamiliar.

Son diversas las situaciones en el interior de la Comuna Villa Santana, aparecen prácticas de violencia que se reproducen como respuestas a ejercicios que proyectan relaciones de poder, marcadas por los grupos delictivos constituidos o reconstituidos en el sector y que denotan presentaciones a partir de ejercicios de violencia, en robos, control del territorio, control del mercado criminal, redes de cobros, entre otras; siendo una constante. Así mismo, aparecen otras prácticas que son coyunturales como son las paces reproducidas a través de escenarios y ejercicios de convivencias, aquí se presentan dos acepciones de la convivencia: una anclada a partir de los escenarios violentos y otra que busca establecerse a partir de los espacios que administran los conflictos y las paces, potencializados a través del arte.

En ese sentido, no pueden comprenderse estos barrios sin atender a su historicidad, a las transformaciones y a su interrelación con los límites geográficos que los rodean; constituida a partir de diferencias culturales, de ejercicios de poder por el control de

20 Apartes de la respuesta de la Fiscalía Seccional de Risaralda al derecho de petición donde se solicita información general de la Comuna Villa Santana.

un territorio; en el marco de una experiencia social que no debe buscarse entre supuestos rasgos culturales objetivos, sino en las experiencias históricas y creencias prácticas que esa experiencia ha generado (Grimson, 2001), y que solo ha sido vivida en esta comuna, es en esa práctica cotidiana donde se reproduce una historia y evidencia los rasgos culturales y los ejercicios de poder.

Por otro lado, las actividades cotidianas al interior del barrio se desarrollan en la normalidad, viviendas, tiendas, personas, espacios de encuentro, intercambios culturales, expresiones artísticas como el grafiti, que conjugan el reconocimiento a personas que han muerto y, en el marco de la violencia, expresan “toda vida es sagrada”²¹; se identifica presencia de grupos juveniles y culturales, que denotan espacios de convivencia y, así mismo, se enmarca una delimitación del territorio en sectores estratégicos y estos permitan la gestión del conflicto de manera directa. Sin embargo, es reiterativa la presencia de grupos delincuenciales, Villa Santana, una comunidad envuelta en la dualidad de sus historias, de las relaciones de poder y de la necesidad de resistir.

“En otros sectores se encuentra la presencia de grupos delincuenciales que tienen presencia en la comunidad desde hace aproximadamente 10 años” (Comentario Ob1). Grupos que en la mayoría de los casos conviven en el margen de la prácticas cotidianas, grupos que manejan sus negocios y resuelven sus problemas internos sin involucrar a la comunidad o, en otros casos, actuando como mediadores, pero siempre alrededor de la figura del narcomenudeo, allí donde el microtráfico y el consumo resultan ser unas de las actividades que contrastan las dinámicas de la comunidad, controlan el expendio de estupefacientes y se concentran en sectores (parques) donde es aceptado el consumo de sustancias psicoactivas, la ocupación de ese territorio se ancla a una actividad que configura un código establecido y delimita la ocupación. “Ellos controlan la comunidad, ellos protegen la comunidad” (Comentario Ob2).

21 Expresión encontrada en uno de los grafitis expuestos en las paredes de casas de la comuna.

Estas relaciones, enmarcadas en el control y en el poder, generan espacios de seguridad no legitimada por el poder estatal, hay personas que ofrecen dirimir situaciones de conflicto, sin la presencia del control oficial. La dinámica se presenta de manera práctica cuando se atenta en la seguridad de las personas de la misma comuna, se establece una regulación interna; por otro lado, los actos homicidas y de violencia en la comunidad adquieren características que se remontan a la idea de limpieza social materializada hace aproximadamente 15 años, en algunas zonas ya se viene fortaleciendo un código donde “nadie debe estar en la calle después de las 11 de la noche”²². Emanan otras características de control que permiten, además de la subsistencia, la legitimidad de un poder y un dominio en la cotidianidad de la comuna, pero ilegítimo en el marco del control y la ley establecida por el Estado.

En el marco de las relaciones establecidas en este sector, y que son pensadas desde la resistencia, se evidencia la expresión del poder, que se convierte en un dispositivo que se complementa a través de condiciones de libertad. Si bien es cierto que, gracias a la fuerza del poder se resiste y que, a menores opciones de resistencia menores los espacios para los ejercicios del poder, también es cierto que la resistencia es inmanente al poder, por lo cual las dos nociones se contienen (Molina, 2005), la resistencia es una forma de convivir en medio de la violencia que en su práctica se convierte en la representación física del poder y, así mismo, se empieza a establecer una relación directa de la convivencia y relaciones que se contienen, por eso la práctica violenta resulta ser reproducida con mayor facilidad.

Estos barrios, lugares que reafirman expresiones de cotidianidad, donde los ejercicios de violencia tienen una fuerte relación con las prácticas y donde las relaciones de poder se producen dentro de la actividad diaria que se asimila y se reproduce como la normalidad del vivir, donde la violencia

22 Comentario de una persona de la comuna.

es una representación de control, de poder del Estado y se ve materializada a partir de las prácticas de las personas, que evidencian la presión y el control del Estado en tratar de contener la proliferación de la misma; pero que al resistir este control se ven direccionadas a reproducir patrones violentos buscando otras relaciones de poder en el marco de los grupos delictivos, de esta manera los grupos delincuenciales en este sector tienden a reconstituirse o buscar formas de reproducirse, para mantener ese ejercicio de control dentro de otras dinámicas internas: las figuras de bandas delincuenciales tradicionales, se reconfiguran ante el ojo expectante de un aparato estatal y de control, buscan la forma de establecer el manejo del microtráfico y los actos delictivos desde una figura de outsourcing buscando generar eficiencia y distractores en su ejercicio desde la subcontratación.

En la Comuna Villa Santana, al no encontrar una legitimidad o un respaldo en el Estado, se reproducen las practicas violentas representadas en la participación de bandas delincuenciales, grupos y redes que representan el delito, sin embargo, estas prácticas violentas o delictivas continúan teniendo su estructura organizativa, pero han transformado las formas de operar y estas responden a dinámicas que permiten resistir al ejercicio de control establecido. El poder no se ve reflejado en el gobernar sino en la acción de dirigir, conducir y producir actos, actuaciones y acciones en otros, en los otros, en la población y en los cuerpos vivos (Quien, 2018).

En la Comuna Villa Santa, se identifica la presencia de acciones, prácticas violentas, crimen organizado y homicidio directamente ligado al tráfico o mercado de estupefacientes, la presencia de este comercio y mercado ilegal se reconfigura en el expendio y control del territorio, que se enmarca en su expresión práctica a través de la violencia, como lo expresa Molina, la violencia está basada en las capacidades productivas del poder y que se evidencia principalmente en las expresiones que denotan los grupos delictivos, la cual muestra en sus prácticas cómo el

poder se posiciona a través de muertes, pobreza, desapariciones, entre otras; impidiendo la posibilidad de tomar decisiones y crear opciones para vivir en paz (Molina, 2005), pero, por otro lado, se vive desde la reconfiguración de una idea de paz que no es la estatal, aunque se construye en el día a día de una comunidad que encuentra en el grafiti, la danza y la convivencia su expresión.

Es así como la relación entre cultura, economía y territorio permite realizar un análisis de las diversas posibilidades que emergen en un sistema social alrededor de la violencia homicida y los mercados criminales, en este caso, no se pueden dejar de revisar las acciones que históricamente han desviado el impacto territorial de estos en la ciudad de Pereira, permitiendo la constitución de sub-nodos de proliferación de micro-tráfico, violencia homicida, entre otros, en diferentes sectores de la ciudad saturados de prácticas que se reproducen cotidianamente y, además de significados, en tanto se reproducen como formas de vida socialmente aceptadas por algunos sectores sociales y también rechazadas por otros. La violencia homicida y el crimen organizado presentes en la Comuna Villa Santana representa la constitución, reproducción y mantenimiento de estructuras criminales que se han logrado mantener en el tiempo y que de alguna manera demuestran el control territorial, económico y cultural de varios sectores de la ciudad; es así como no se podría observar cada una de las categorías de manera desligada ya que cada una tiene un vínculo directo con la otra, pues sus impactos afectan o reproducen cada una de estas esferas en las comunidades.

Esta interpretación compleja, relacional y diacrónica, tomando como referencia la existencia de trazos históricos de la cultura, y el llamado civismo, y en continua relación con las dinámicas económicas propiciadas por distintos mercados criminales, identificaron en el caso tipo de Villa Santana, una adecuación o naturalización de las violencias en territorios específicos, contribuyendo a su continua reproducción en el territorio.

De esta manera, algunas expresiones violentas superan el uso instrumental atribuido habitualmente a las mismas y entran a configurar una estrategia de acción social, económica y política que favorece un tipo de desarrollo regional económico, acotado a intereses específicos.

La existencia de un orden social que opera bajo la contingencia de lo gris (lugar liminal entre las dimensiones legales e ilegales), perfila una de las explicaciones que le dan sentido al uso estratégico de las violencias en la ciudad intermedia de Pereira, y perfila la posible existencia de un tipo de orden presente en las regiones colombianas. Dicha hipótesis explicativa de las violencias necesita ser confrontada en las ciudades intermedias que poseen altas tasas de violencia homicida y que fueron seleccionadas para el presente estudio, ahora expuestas en esta publicación.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, J. (2013). Balas por encargo. Vida y muerte de los sicarios en Colombia. Rey Naranjo Editores.

Arango, O. (1989). Pereira, años 80. Funderalda.

Ávila, A. & Pérez, B. (2011). Mercados de la criminalidad en Bogotá. Corporación Nuevo Arco Iris, Secretaría de Gobierno de Bogotá. Editorial Talleres de Edición Rocca.

Ávila, A. (2010). Injerencias armadas e ilegales en la transformación del mapa político e institucional. En C. López (Ed.), Y refundaron la patria... de cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano. Editorial Random House Mondadori.

Ávila, A. (2010). Grupos Armados Ilegales, Violencia Urbana y Mafias Coercitivas. Gobernabilidad y Crisis Democrática. Revista Cuadernos Gobernabilidad y Convivencia Democrática FLACSO: 32.

Bello, C. (2009). Posconflicto en Colombia: un análisis del homicidio después del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa. Revista criminalidad. 51(1): 163-177.

Bourdieu, P. & Wacquant, L. (2012). Una invitación a la sociología reflexiva. Edición Siglo XXI.

Castillo, F. (1987). Los jinetes de la cocaína. Documentos Periodísticos.

Centro de Estudios e Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Pereira. (2009). Pereira y Risaralda coyuntura económica.

Correa, J. J. (2014). *Civismo y educación en Pereira y Manizales (1925-1950): un análisis comparativo entre sus sociabilidades, visiones de ciudad y cultura cívica*. (Tesis Doctoral Laureada). Doctorado en Ciencias de la Educación. Rudecolombia.

Correa, J. (2009). El discurso del civismo en Pereira o la “sacralidad” de lo público durante el siglo XX. *Revista HiSTORELo* 1(2). Diciembre. 2009.

Deas, M. (2000). Reflexiones sobre la guerra de los Mil días. *Revista Credencial Historia* (121). Bogotá: Enero.

Duncan, G. (2005). Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra. *Revista Documento CEDE*, Universidad de los Andes. Enero. 2005.

Fajardo, D. (1994). La política social rural. En Moscardi, Edgardo.

Gonzáles, F. (2003). ¿Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: Una mirada desde la historia. *Revista Colombia internacional*. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Julio Diciembre. 2003: 124-157.

Aproximación a la configuración política de Colombia. (1988). Publicado originalmente en *Controversia*, 153-154, Bogotá, CINEP.

Gutierrez, A. (2012). *Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu*. Edición. Eduvim.

Grimson, A. (2001). *Interculturalidad y Comunicación*. Norma.

Guzmán, G., Fals Borda, O. y Umaña, E. (1962). *La violencia en Colombia*. Tomo I. Taurus.

Han, B. C. (2013). Tipología de la Violencia. Titivillus.

Jiménez, F. (2014). Paz neutra: Una ilustración del concepto. *Revista de Paz y Conflictos* (7): 14-52.

Jaramillo, O. (2009). La formación socioeconómica de Caldas y sus características políticas. *Revista Virajes* (11): 229 – 253, Universidad de Caldas. Diciembre 2009.

López, M. V., Pastor, M. D., Giraldo, C. A. & García, H. I. (2014). Delimitación de fronteras como estrategia de control social: el caso de la violencia homicida en Medellín, Colombia. *Salud Colectiva*.

Martínez, L. A., Marulanda, L., Martínez, J. M., Perdomo, C. & Martínez, O. F. (2016). *Contra-caras del poder regional. Contrabando, narcomenudeo y explotación sexual comercial*. Editorial Universidad Tecnológica de Pereira.

Martínez, L. A. (2012). Planeación del desarrollo y violación a los derechos humanos: Risaralda y la “reinención del territorio”. *Revista Universitas Humanística Antropología y Sociología de la Universidad Javeriana Bogotá*. 73:120-121.

Martínez, L. A. (2017). Retos del posacuerdo: Violencia homicida y prácticas sociales violentas en la ciudad de Pereira. *Sociedad y Economía*, [S.l.] (33), Santiago de Cali. Septiembre. 2017

Martínez, L. A. (2017). Contrabando, narcomenudeo y explotación sexual en Pereira, Colombia. *Revista Mexicana de Sociología*, 459-486.

Melo, J. (2014). Cincuenta años de homicidios: tendencias y perspectivas. Razón Pública. Recuperado de: <http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/217-cincuenta-ade-homicidios-tendencias-y-perspectivas.html>

Molano, A. (2005). Desterrados. Crónicas del desarraigo. Editorial Grupo Santillana.

Molano, O. (2007). Identidad Cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera (7), Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Noviembre 2007.

Molina, N. (2005). Resistencia Comunitaria y Transformación de Conflictos. Reflexión Política: 70-91.

Montoya, J. (2004). Los procesos de industrialización en Pereira. Revista AD-Minister, 4: 19-50.

Moser, C. et al. (2001). Violence in a Post-Conflict Context. The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington, USA.

Muñoz, M. B. (2004). Manual de la Paz y los Conflictos. Universidad de Granada.

Perea, C. M. (2006). Comunidad y resistencia poder en lo local urbano. Universidad de los Andes.

Restrepo, C. P. (2006). Comunidad y resistencia poder en lo local urbano. Colombia Internacional.

Reyes, A. (1997). Compra de tierras por narcotraficantes. En: Drogas ilícitas en Colombia: Su impacto económico, político y social. Planeta Colombia Editorial.

Rojas, E. & Guerrero, M. (1997). La Calle del barrio popular. Barrio Taller. Recuperado de: www.barriotaller.org.co.

Romero, M. & Arias, A. (2008). Bandas criminales, seguridad democrática y corrupción. Revista Arcanos. (14). Diciembre 2008.

Revista Risaralda Hoy. (2015). Civismo pereirano destacado en el World Meetings Forum 2015.

Sáenz, J. (1998). Hacia una pedagogía de la subjetivación. Revista Educación y Pedagogía: 114-135.

Sánchez, G. (1999). Conflictos regionales. La crisis del Eje Cafetero. Fescol IEPRI. Universidad Nacional de Colombia.

Tylor, E. (1995). La ciencia de la cultura. En: Kahn, J. S. (comp.): El concepto de cultura. Ed. Anagrama. (1995) [1871].

Wills, M. E. (1993). La política gubernamental frente al Proceso de Paz: entre el peso del pasado y un futuro incierto; Gobernabilidad en Colombia. Retos y Desafíos. En: Colombia ISBN: 9580442681. Editorial Norma:129 -185.

2 CAPÍTULO DOS

2. CRIMEN ORGANIZADO Y VIOLENCIA HOMICIDA EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO (META)

José Gustavo Lenis Durán²³

Wilmar Andrés Morales López²⁴

Vanessa Casas Ruíz²⁵

Resumen

La presente investigación se pregunta por la relación existente entre el crimen organizado y la violencia homicida, en tanto práctica social violenta, en la ciudad de Villavicencio como consecuencia de su posición dentro de la red de transacciones de la economía ilícita del narcotráfico, en el marco de los procesos de desmovilización con Grupos Armados Ilegales entre el 2003 y el 2016.

23 Docente investigador, Universitaria Minuto de Dios, miembro del grupo de investigación trabajo de Llano.

24 Docente Corporación Universitaria Minuto de Dios, miembro del grupo de investigación trabajo de Llano, Coordinador de la Mesa de Género, Cultura y Sociedad de la Red de universidades del departamento del Meta.

25 Docente investigadora, Corporación Universitaria Minuto de Dios, miembro del grupo de investigación trabajo de Llano.

Los aportes teóricos de Rosinaldo Silva da Sousa resultan fundamentales al determinar la extensión de la mencionada red, en contraste con la de la economía informal, por medio de tres componentes fundamentales, a saber: la violencia racionalizada, el valor confianza y la corrupción como elementos dinamizadores del proceso. Adicionalmente, Pierre Bourdieu contribuye al análisis de las prácticas sociales violentas, en este caso la violencia homicida, en tanto se define la necesidad de reconstruir la trayectoria histórica de la violencia en la región de la Orinoquía y de Villavicencio, como un elemento que permite la comprensión y configuración de un habitus, social e individual, que predispone a dicha práctica violenta.

Con base en todo lo anterior, se identificó que Villavicencio es el centro de consumo de SPA más grande del departamento del Meta y que las variaciones encontradas en las tendencias del homicidio en la ciudad corresponden con las dinámicas establecidas por el control territorial, y del narcotráfico, entre los diferentes Grupos Armados Ilegales asentados en la región, por lo que se infiere una posible relación entre el microtráfico en la ciudad y la existencia de una red de transacciones ilícitas más grande; asimismo, se identificó la existencia de lugares de expendio, “ollas”, en los tradicionales barrios de invasión con una estructura organizativa estructurada en relaciones de parentesco y amistad.

Introducción

Se evidencia la pertinencia de esta perspectiva en el análisis del subcampo de la economía ilegal en la ciudad de Villavicencio, haciendo énfasis en que no se ha abordado la base económica de la globalización (la cual tiene que ver directamente con la relación entre economía ilegal y economía legal) como variable fundamental de análisis.

Para encuadrar la relación entre crimen organizado y violencia homicida en términos metodológicos y teóricos, se parte de la propuesta de Rosinaldo Silva da Sousa (2004); este autor señala la importancia de la distinción conceptual sustantiva entre economía informal y economía ilícita, para lograrlo propone un análisis que lleve a diferenciar la extensión de la red de transacciones necesaria para los negocios de la economía ilícita en comparación con aquella más limitada de la economía informal.

En la base de esta distinción teórica se encuentra el argumento que subraya el hecho de que la economía informal se sustenta en una red de transacciones que pasa por lo étnico, lo familiar, la amistad (lo que el autor denomina como valor confianza). A diferencia de la anterior, lo propio de la economía ilícita, es que en esta escasea y se devalúa el tipo de capital “valor confianza”, ya que la red de transacciones supera el ámbito local y su preservación depende, en palabras de Silva (2004), del “uso ilegítimo de la violencia racionalizada” (p. 169).

La corrupción es otro de los elementos constitutivos del sistema de intercambio ilícito y la formación de las redes de crimen organizado; el citado autor muestra cómo en la coexistencia de sistemas económicos formales, informales e ilícitos, siempre habrá una dependencia de la economía ilícita respecto a la formal, así, el aspecto que dinamiza esta relación es la corrupción y ésta, entendida como práctica social normalizada, es incorporada en el habitus de los agentes, resultando fundamental para el acceso a capitales que permiten el mantenimiento de las posiciones dentro del campo económico legal e ilegal. Silva (2004) plantea, en conclusión:

La corrupción, la violencia racionalizada (uso ilegítimo y agresivo de la fuerza física) y el “valor confianza” son, según mis análisis, los elementos que componen y regulan el funcionamiento de las redes del crimen organizado en Río de Janeiro, y creo también que esto es una realidad en muchos otros sistemas de intercambio ilícito en el mundo. (p. 173)

Una vez argumentados los componentes de la red del crimen organizado, el autor brasileiro desarrolla uno de los aspectos centrales de su propuesta: la adaptación local del crimen organizado global; es decir, sintetiza en tres componentes el sistema de comercio ilícito, a saber: valor confianza, corrupción y violencia. Estos tres factores son generales al sistema independiente de los contextos específicos que relaciona y, por tanto, un segundo momento de análisis dará cuenta de la adaptación local al sistema global de comercio ilícito, en el que resalta como particularidad de Colombia, no solo el accionar racional del uso ilegítimo de la violencia del crimen organizado en busca del acceso a las rentas de la economía ilícita, sino también su injerencia en el escenario transicional como una estrategia propia de grupos posdesmovilizados interesados en las dinámicas y la configuración de este escenario.

Apuntes metodológicos

El presente capítulo se enmarca en el desarrollo del proyecto “Reconfiguración territorial a través de prácticas sociales violentas en ciudades intermedias con altas tasas de violencia homicida en los contextos de desmovilización de grupos armados ilegales, 2002-2016” que, como proyecto de investigación nacional, hace parte del Programa de investigación en Transiciones, Violencias y Memorias, liderado por la Universidad Católica de Pereira, Risaralda.

La perspectiva metodológica que permitió la construcción del presente capítulo es cualitativa, dentro de la cual se propuso, en primera instancia, un diseño de investigación documental, ya que fue fundamental un abordaje histórico de las dinámicas nacionales y regionales del conflicto armado y del narcotráfico que permitieran construir un escenario interpretativo de las lógicas del crimen organizado y la violencia homicida de la ciudad de Villavicencio. De esta forma, se realizó una revisión de documentos históricos, prensa digital e informes de investigación

especializada sobre el tema señalado. En segunda instancia, se realizó una revisión de las bases de datos sobre los homicidios ocurridos en la ciudad de Villavicencio entre los años 2003 y 2016, éstas fueron proporcionadas por la Policía Metropolitana de Villavicencio, lo cual permitió zonificar en la ciudad el fenómeno de la violencia homicida, lo anterior, con el propósito de realizar un contraste entre las dinámicas del conflicto armado a nivel regional y las dinámicas del homicidio en la ciudad.

Una vez se identificaron las zonas (comunas) de la ciudad que dentro del período de análisis concentran el fenómeno del microtráfico y la violencia homicida, se llevó a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas a informantes claves de la comuna tres y cuatro, con el propósito de identificar las características de los grupos delincuenciales que operan al interior del territorio, así como las posibles configuraciones territoriales (Fronteras invisibles).

Por medio de las entrevistas se buscó identificar los periodos de violencia más agudos dentro del periodo de análisis con el propósito de contrastar esta información percibida desde los actores de la comunidad con las regularidades de homicidio arrojada por el análisis de las bases de datos de la policía metropolitana. También se aplicaron entrevistas a miembros de la Policía Metropolitana, con el objetivo de identificar actores, periodos complejos en términos del orden público, así como sus interpretaciones del fenómeno homicida y criminal al interior de la ciudad de Villavicencio.

Contenido del poder y estructuras del crimen organizado

Las perspectivas teóricas trabajadas hasta este punto, a pesar de los contextos y los temas específicos que abordan, tienen en común una pregunta por el poder como situación que se cristaliza a partir de las relaciones que tejen lo local y lo global en los ámbitos legal, ilegal e ilícito, así se propone responder sobre el poder en el orden de abstracción que plantean las siguientes preguntas:

¿Cómo se definiría el poder como situación en los ámbitos legal, ilegal e ilícito?

En el trabajo *Ciudades en la encrucijada: Violencia y poder criminal* en Río de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez, se plantean una serie de preguntas sobre el asunto que son necesarias citar como referencia para el desarrollo de esta propuesta: “¿De qué forma se construye la conflictividad violenta en relación con el sitio ocupado en la cadena del mercado de la droga? ¿Cuál es la naturaleza del poder criminal que anida en más de una urbe latinoamericana?” (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales [IEPRI] y Corporación Región, 2014, p. 14).

En el trabajo citado, los investigadores proponen la ubicación nacional como matriz de lectura de la ciudad “Entramos entonces, en este primer apartado, en la consideración de los nexos entre país y conflicto. Desde allí es posible el salto a la ciudad, nuestro objeto temático” (IEPRI y Corporación Región, 2014, p. 14).

Esta consideración implica que, para leer la ciudad de Villavicencio en los términos propuestos, es indispensable realizar un abordaje histórico de las dinámicas nacionales del conflicto armado y del narcotráfico, que nos permita deducir un escenario interpretativo en el que las lógicas locales cobren mayor sentido.

Se habla de conflicto armado, ya que esta investigación tiene como contexto las negociaciones de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y estos procesos de negociación generaron una serie de consecuencias en las ciudades intermedias que pasan por la reconfiguración del territorio, así como la construcción de prácticas sociales violentas que se actualizan en las nuevas características del campo político y económico. Se habla de narcotráfico como actividad económica propia del subcampo de la economía ilícita que condiciona estructuralmente el campo político y económico, pero sobre todo del narcotráfico asociado

a una premisa básica: a mayor nivel de acumulación monetaria mayor conflictividad violenta (IEPRI y Corporación Región, 2014).

Esta premisa que propone la investigación citada, nos ubica en el ciclo hoja de coca - cocaína y en consecuencia remite a la pregunta sobre la relación específica de Villavicencio con los eslabones de la cadena de producción del narcotráfico: producción, procesamiento, comercio y consumo. La pregunta sería entonces: ¿Qué lugar ocupa la ciudad de Villavicencio en la cadena de producción del narcotráfico? Al plantear la respuesta a esta pregunta, se estarían estableciendo las dimensiones de los dividendos del negocio del narcotráfico en la ciudad, así como los grupos que lo regulan, al tiempo que reglamentan la vida cotidiana en los territorios a través de altas dosis de fuerza (violencia homicida) en un negocio que se caracteriza por su ilegalidad.

Crimen organizado, violencia homicida y su relación con el auge del narcotráfico dentro de la dinámica del conflicto armado en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta

En este apartado se encuadra lo nacional y regional como matriz de lectura de la ciudad de Villavicencio, es decir, se busca dar cuenta de las particularidades que las dinámicas del conflicto armado y el narcotráfico han contribuido a estructurar en la ciudad, caso específico de la violencia homicida y el crimen organizado, planteando como hipótesis que las variaciones cuantitativas del homicidio están estrechamente relacionadas con el lugar que la ciudad ocupa en la red de transacciones de la economía del narcotráfico presente en la región y con las transformaciones del conflicto armado.

Al oriente de Colombia, entre los 73° 38' 20" longitud oeste y 4° 9' 43" de latitud norte, sobre una altura de 467 m.s.n.m., y con una temperatura media anual entre 23 °C y 29 °C (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2018), se erige la ciudad de

Villavicencio, también conocida como el “Portal a las llanuras tropicales”. Fundada en 1840 en el piedemonte de la Cordillera Oriental de Los Andes entre los ríos Guatiquía y Negro, como un lejano puesto de avanzada en la frontera de los Llanos, Villavicencio hubo de atravesar desde sus orígenes diversas etapas históricas que, siempre enmarcadas en las condiciones de frontera, colonización espontánea, lucha por la supervivencia e incluso refugio para perseguidos políticos o forajidos, le configuraron las características socioculturales que identifican a esta ciudad y a la región.

Así, Villavicencio, pese a su aparente distanciamiento de la capital de la república y del resto del país, describió procesos históricos acompañados con los de otras áreas de la nación. Para explicar el particular, se parte de algunos aspectos consignados por la especialista en estudios comparativos de regiones de frontera Jane M. Rausch (2011) en su obra *De pueblo de frontera a ciudad capital. La historia de Villavicencio, Colombia, desde 1842*. Así, se tiene que:

Una vez fundada y constituida como frontera en la sabana orinoquense, un par de décadas más tarde, durante la Época de la Federación (1863-1886) señalada por el predominio de las doctrinas radicales liberales, Villavicencio se designó como la capital del Territorio de San Martín, uniéndose de esta forma al nuevo sistema de gobierno territorial. Para la Época de la Regeneración (1886-1899) período en que los conservadores retomaron el poder, ni Boyacá ni Cundinamarca logran sostener las extensas áreas orientales que se les habían encomendado y en el caso de Villavicencio su concejo municipal solicita al Congreso que la región volviese a ser territorio nacional. Hacia finales del siglo XIX, la agitación política nacional alcanza a la llanura preparando la escena para la guerra y dictadura del cambio de siglo, que supuso el ataque a Villavicencio por parte de rebeldes liberales el 30 de septiembre de 1899. La revuelta se extendió por un largo tiempo y por el corredor que cubría desde Medina hasta Uribe y San Martín. (Rausch, 2011).

Durante el período comprendido entre 1909 y 1930 conocido como la República Conservadora o la Época de la Armonía Nacional, Villavicencio es designada como capital de la Intendencia Nacional del Meta, iniciando así la restauración de esta unidad administrativa, la planificación urbana del municipio y motivando su crecimiento económico. En la época de la República Liberal (1930-1946) el compromiso gubernamental de integrar las regiones fronterizas favoreció el crecimiento excepcional de Villavicencio y el área llanera circundante. Dos puntos de inflexión en esta política fueron la apertura de la carretera Bogotá-Villavicencio en 1936 y la titulación de tierras que favoreció a los ocupantes ilegales (Rausch, 2011).

La época de La Violencia entre 1947-1953 también tuvo consecuencias en Villavicencio. Siendo la población más grande de los Llanos, padeció episodios de violencia partidista e inestabilidad social, económica y política que motivaron la salida del territorio de muchos colonos. Entre 1953 y 1958, con la dictadura militar de Rojas Pinilla, el gobierno consiguió la pacificación de los Llanos. En 1959, el Meta se convirtió en departamento por Acto Legislativo y Villavicencio recuperó el empuje económico que proseguiría a lo largo del siglo XX, pero sin alcanzar una solución a los problemas subyacentes de la sabana que continuaron pesando durante la siguiente etapa: El Frente Nacional (1957-1974), pacto político por medio del cual los dos partidos tradicionales se alternaron equitativamente el poder durante las cuatro elecciones siguientes. No obstante, la fracasada reforma social y la creciente desigualdad junto a la insurgencia guerrillera izquierdista, marcaron fuertemente esta etapa cuyos efectos también se hicieron sentir en la Llanura colombiana (Rausch, 2011).

Promediando la década de los años sesenta, continuó el crecimiento de la población de Villavicencio con la avalancha de campesinos procedentes de otros departamentos y el renacimiento de la actividad guerrillera en el Meta. Junto a estos fenómenos socioculturales se presentaron innovaciones tecnológicas como la

electrificación y el fortalecimiento del transporte aéreo y terrestre, la consolidación de la exploración petrolera y el fortalecimiento de la ganadería extensiva. Los anteriores aspectos prosiguieron en el último cuarto de siglo, pero acompañados por el advenimiento de un nuevo factor: las actividades relacionadas con el narcotráfico sobre un corredor que iniciaba y terminaba en Villavicencio, dando paso a acumulaciones de capital y a la conformación de fuerzas oscuras, que ejercieron diversas formas de violencia para proteger los intereses de los barones de la droga (Rausch, 2011).

Recursos para el análisis regional del crimen organizado y la violencia homicida en Villavicencio

Para este acercamiento al estado del arte de la perspectiva regional acerca del crimen organizado y violencia homicida en la ciudad de Villavicencio, se emplearon documentos presentados tanto por instituciones nacionales como el Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos (Unillanos), con datos estadísticos tomados a su vez del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y otras provenientes de publicaciones periódicas del Observatorio de Derechos Humanos del Departamento del Meta y de la Defensoría del Pueblo. De igual manera, se contó con los informes de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Todos ellos en épocas recientes se ocuparon puntualmente del fenómeno.

Para fechas anteriores relativas al siglo XX, el grueso de la producción bibliográfica referente a la temática de la investigación aborda mayoritariamente el período conocido como La Violencia de finales de los años cuarenta y la década de los cincuenta, mientras que para los años ochenta el enfoque se torna muy general, siendo analizada la situación criminal y el narcotráfico a la luz del contexto nacional. Por lo tanto, las fuentes bibliográficas confiables y puntuales para el período que abarca el estudio son más bien exiguas, destacándose entre estas el texto de la autora

estadounidense anteriormente citada Jane Rausch quien, en su historia de Villavicencio, contada desde el siglo XIX hasta el presente, dedica una pequeña parte al análisis del impacto de la guerra contra las drogas.

El auge del narcotráfico y su relación con la dinámica del conflicto armado

Para comprender a cabalidad esta relación, se recurre al recuento histórico que inicia hacia 1964 con el desplazamiento de los jefes de las FARC hacia el Llano como resultado de la Operación Marquetalia en el Tolima, que significó la derrota de los grupos guerrilleros por parte del Ejército Nacional, bajo la presidencia del líder conservador Guillermo León Valencia. Para las FARC, el Meta fue uno de los lugares estratégicos para el crecimiento económico de sus frentes y la posibilidad de comunicación con el centro del país. Además, albergó al secretariado mayor, donde se tomaban las decisiones centrales. El crecimiento de esta guerrilla se dio a mediados de 1960 dada la presencia de guerrilleros liberales en la zona como las “Columnas en Marcha” del Partido Comunista (Rausch, 2011).

Por entonces, la situación de los colonos en el Meta era de vulnerabilidad ante la ausencia del Estado, la nascente presión de la guerrilla, los terratenientes y los ganaderos; pues oscilaban entre vender los predios que ellos mismos habían limpiado y sembrado, resistir, o unirse a unidades de autodefensa o a la guerrilla. Como afirma Reinaldo Barbosa, citado por Rausch (2011):

Los intentos permanentes de los grandes terratenientes para expulsar a los colonos, junto con la ausencia de una presencia fuerte del gobierno en la frontera del Meta, permitieron que las FARC, bajo el liderazgo de Manuel Marulanda Vélez (alias “Tirofijo”), logaran el respaldo de la población, aun cuando el número real de sus efectivos no superara los seis mil. (p. 165)

Para la década siguiente, con la llegada del auge marimbero que consistió en la “introducción directa del cultivo por parte de traficantes de Estados Unidos, mediante la distribución de semillas y el compromiso de comprar la cosecha” (Barbosa, citado por Rausch, 2011, p. 165), campesinos de Vistahermosa y Puerto Lleras comenzaron a cultivar marihuana, configurando en los años setenta del siglo XX una bonanza económica con la llegada del narcotráfico a la región proveniente de la economía de la marihuana y después de la coca que permitió el arribo de nuevos colonos. Dada esta situación, las FARC cambiaron sus estrategias de funcionamiento y de dominio, creando “el gramaje” como impuesto a los campesinos por los cultivos ilícitos, lo que favoreció su expansión territorial y una nueva dimensión de la violencia.

Posteriormente, finalizando los años setenta y para la década de 1980 se presentó una alianza temporal entre los carteles colombianos de la droga y las guerrillas, para procesar la planta de coca y garantizar protección en todas las fases del procesamiento y distribución de la cocaína.

Red de transacciones de la economía ilícita en la región de los Llanos Orientales

Lo definido como escenario transicional en Colombia, se inicia con el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, por medio de la Ley 975 de Justicia y Paz, y es ampliado con el Proceso de Paz adelantado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP representadas por Rodrigo Londoño.

Siguiendo la cronología de las desmovilizaciones, se iniciará por establecer las raíces históricas en el departamento del Meta de las Autodefensas Unidas de Colombia y posterior a

su desmovilización, se relacionarán los grupos que emergen, es decir, las estructuras que hacen presencia en el territorio a partir de 2006, que es el año en el que el último grupo paramilitar se desmoviliza.

En el texto Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales (Echandía, 2013) se identifican tres periodos en la evolución de las organizaciones armadas ilegales asociadas al narcotráfico entre 1981 y 2012; en primera instancia se señala el surgimiento del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) entre 1981-1993, grupo que conformó el cartel de Medellín como reacción al rompimiento de relaciones con los grupos guerrilleros en zonas de producción de cocaína:

Adicionalmente, el recrudecimiento de la violencia se relaciona con la ruptura de los acuerdos que por tiempo prolongado existieron entre la guerrilla y el narcotráfico en áreas de la producción de coca, ubicadas sobre todo en el suroriente del país. En el proceso de fortalecimiento del aparato militar de las FARC, el grupo guerrillero comenzó a imponerles a los narcotraficantes sus condiciones, el pago de “impuestos” y el reconocimiento de su predominio. (Echandía, 2013, p. 7)

El grupo aludido se considera como el antecedente más cercano a los grupos que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 y su surgimiento se ubica en la región del Magdalena Medio; así mismo, no se puede entender la conformación de este tipo de grupos sin hacer mención al proceso de expansión territorial del narcotráfico vivido en Colombia en la década de 1980 (Echandía, 2013).

Es importante relacionar que las dinámicas descritas a escala nacional e inscritas en el contexto del Magdalena Medio han tenido un capítulo importante en los Llanos Orientales así, retomando la argumentación de Echandía (2013) el “modelo Puerto Boyacá” de las autodefensas se extendió a otras zonas del

país como “Córdoba, Urabá, Putumayo y la región del Ariari en el Meta” (p. 9), y no sólo se importó el modelo, se destaca la significativa correspondencia entre presencia de grupos de este tipo y las altas tasas de homicidios registrados por los municipios en el periodo que va de 1987 a 1992: “La correspondencia entre las elevadas tasas de homicidios y los escenarios con presencia de los grupos irregulares, es especialmente significativa en el Urabá antioqueño, Bajo Cauca, Magdalena Medio, zona bananera del Magdalena y Ariari” (Echandía, 2013, p. 9).

En el portal digital Verdad Abierta.com (2011) se encuentra un artículo específico sobre el paramilitarismo en los Llanos Orientales respecto al periodo 1981-1993, donde muestra cómo la expansión del narcotráfico comienza a chocar directamente con el proceso de adjudicación de tierras que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) venía entregando a los miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) que en la región consolida un sindicato denominado Sintragrim, con cobertura en municipios como San Juan de Arama, Puerto López y Vistahermosa:

Los narcotraficantes, que se habían disputado a muerte una tajada del negocio de las esmeraldas, después, ricos, invirtieron sus inmensas utilidades en los Llanos. Compraron allí fincas enormes y, al igual que los esmeralderos, pusieron sus ejércitos privados a cuidarlas. Así, el legendario empresario de las esmeraldas, Víctor Carranza, compró tierras en El Dorado y Cubarral en el Meta. El narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, integrante del Cartel de Medellín, compró tierras en Vistahermosa en el mismo departamento. (Verdadabierta, 2011)

Es en conexión con Rodríguez Gacha que el M.A.S crea una estructura armada que el portal citado ubica desde el alto río Ariari hasta el norte del departamento del Meta, donde “Los Masetos” efectúan sus primeras acciones violentas en el año de 1982 (Verdad Abierta, 2011).

Dado el avance del partido político Unión Patriótica, se registra en la zona el asesinato sistemático de miembros de ese partido a manos, según lo señala la evidencia histórica recolectada por el Cinep citado por Verdad Abierta (2011), de “Los Masetos” en relación con las fuerzas militares “la Séptima Brigada del Casanare” y grupos pertenecientes a la clase política y económica tradicional, como lo plantea el portal citado:

Muy pronto empezaron los atentados contra los líderes de la UP. Según reportó el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, para el banco de datos Noche y Niebla del Cinep, los primeros en caer a manos de sicarios del paramilitarismo fueron, en 1985, Hernández Yate Bonilla, concejal por la Unión Patriótica de Granada y en 1986, Rafael Reyes Malangón, concejal de Granada por la UP; Octavio Vargas Cuellar, representante a la Cámara; y Pedro Nel Jiménez, senador de la UP; en 1987 cayeron abaleados Alfonso Perdomo, concejal de Vistahermosa por la UP; Arnulfo Vargas Dimate, concejal de El Castillo por la U. P. y Gabriel Alfredo Briceño, concejal de la UP en Villavicencio. (Verdadabierta, 2011)

En conclusión, en el departamento del Meta, entre 1981 y 1992, se evidencia la adopción del “modelo Puerto Boyacá”. Como resultado del proceso de expansión del narcotráfico y su natural acaparamiento de tierras, “Los Masetos” se convierten en la estructura armada a partir de la cual se desarrolla un proceso sistemático de asesinato de miembros del partido político Unión Patriótica y también como acicate a la relación con facciones militares y miembros de la clase política y económica tradicional.

El segundo período (1994-2002) se caracteriza, a nivel nacional, por la búsqueda del reconocimiento político por parte de las AUC; además, el gobierno del presidente conservador Andrés Pastrana inicia el Proceso de Paz con la guerrilla FARC, dentro del cual se despejaron 25.600 km², en el departamento del Caquetá, al sur del Meta. Mientras tanto, siguieron reinando el

terror y la inseguridad en la llanura colombiana, generando que cientos de colonos se desplazaran hacia Villavicencio en búsqueda de seguridad tras confrontaciones armadas, masacres y amenazas particulares perpetradas principalmente, aunque no exclusivamente, por el paramilitarismo (Echandía, 2013).

En el año 2002, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez introdujo la política del Plan Patriota, que consistía en golpear a las estructuras armadas ilegales. En el Meta, esta medida de seguridad permitió contrarrestar el poder de las FARC, obligándolas a replantear sus estrategias, replegándose a las zonas rurales de los municipios de Vistahermosa, Macarena y La Uribe. Vale aclarar que los sitios que eran dominio de las FARC fueron tomados entonces por las AUC (Echandía, 2013).

Es notoria la expansión territorial de las Autodefensas, según Cubides, citado por Echandía (2013), en 1994 se realiza la primera cumbre de autodefensas de Colombia en la que se proyecta generar un espacio de negociación con el Estado colombiano, esta cumbre coincide con el periodo en el que se desestructuraron los grandes carteles de la droga en Colombia, lo que produce un vacío y reestructuración en la cadena de valor del narcotráfico a nivel local y global.

Figura 4. Territorialidad de las autodefensas 1987-1992. (Fuente: Echandía, 2013).

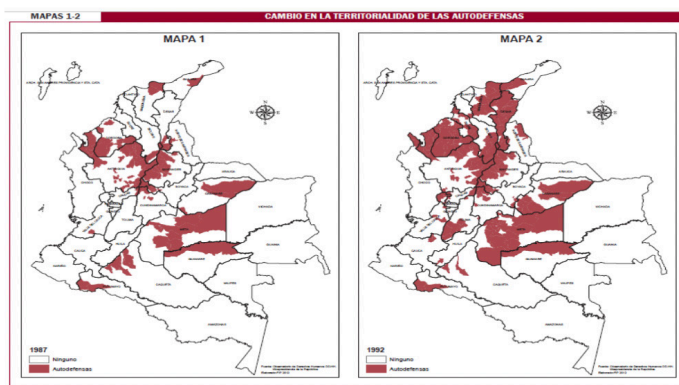
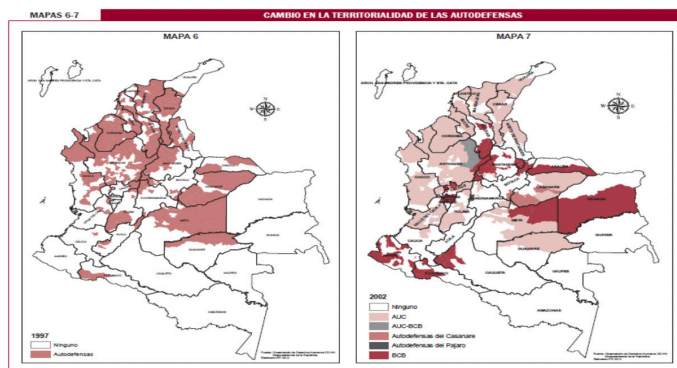


Figura 5. Cambio en la territorialidad de las Autodefensas 1997-2002.
(Fuente: Echandía, 2013).



Es importante destacar que la ampliación de las operaciones de las autodefensas en el territorio nacional estuvo dada en clave de apoderarse de las rentas del narcotráfico, esto más allá de la pretendida lucha contrainsurgente, Echandía (2013) señala de nuevo:

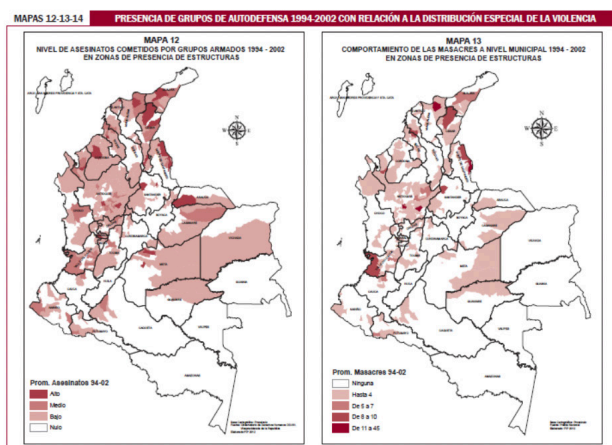
La territorialidad de las autodefensas evidencia que los intereses de estos grupos desbordan la pretendida dimensión contrainsurgente. En efecto, de los 531 municipios con presencia de estos grupos entre 1997 y 2002, solo en 100 –que representan el 18%– hay una correspondencia con una elevada actividad guerrillera que represente una grave amenaza. Y lo que es más diciente, en 279 municipios –que representan el 52% de los que tienen presencia de las autodefensas– la amenaza guerrillera es baja y en los 152 que representan el 30% restante, no hay presencia activa de las guerrillas. Es importante subrayar que entre los factores que explican la presencia de las autodefensas, el narcotráfico es el principal. Si bien la relación entre las autodefensas y los cultivos de coca es muy significativa, el dispositivo de las autodefensas los sobrepasa, pues abarca igualmente corredores entre estos y los puntos de embarque, pasando por los centros de procesamiento. (p. 14)

Como resultado del proceso de consolidación territorial de las Autodefensas, es significativo el aumento en los niveles de violencia objetivada en el incremento de las tasas de homicidio y las masacres en los lugares donde éstas han tenido presencia. Una vez se da la consolidación de estos grupos en el territorio, se puede observar un decrecimiento de los homicidios y de las masacres en los lugares ya dominados por las estructuras armadas citadas, este dominio permitió una nueva expansión del fenómeno paramilitar a través de la venta de sus franquicias paramilitares a narcotraficantes interesados en hacerse pasar por “paras”.

También buscaban garantizar una silla en el proceso de negociación iniciado a finales de 2002. Entre otros narcotraficantes, los alias “Gordo Lindo”, “Don Berna”, “Cuco Vanoy”, “Macaco”, “Los Mellizos Mejía”, “Juan Carlos Sierra”, y “Miguel Arroyave” fueron admitidos como “comandantes” de las autodefensas. (Echandía, 2013, p. 18)

En el siguiente mapa se evidencia la relación entre la presencia de estructuras paramilitares y los niveles de violencia representados en homicidios y masacres.

Figura 6. Nivel de asesinatos cometidos por grupos armados 1994-2002. (Fuente: Echandía 2013).



Conviene resaltar el caso de Villavicencio que presentó, entre 1994 y 2002, un nivel alto de asesinatos, también se evidencia en el mismo periodo la perpetración de diferentes masacres. En el Meta, la masacre de Mapiripán se convierte en una cruda referencia del ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento. También se corrobora la expansión de estas una vez se da su unificación en la figura de Carlos Castaño, y es importante señalar que las AUC generan alianzas con paramilitares locales, un ejemplo claro de esto es la relación inicial con Héctor Buitrago alias “El Viejo” fundador de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). Verdad Abierta (2011) plantea:

Héctor Buitrago, que como se dijo, vino de Boyacá al Casanare y había fundado su pequeño grupo de autodefensa, se alió luego con ‘El Mexicano’, se convirtió en los noventa en un gran hacendado y jefe fundador de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). Este era el capítulo local de las Autodefensas de los hermanos Castaño, que habían sellado una alianza desde 1994 en la que también estuvieron José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’ de las autodefensas del Vichada, Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’ y Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’. (p. 34)

Un segundo capítulo en la historia del paramilitarismo en la región de los Llanos Orientales lo constituye el rompimiento de la alianza entre la casa Castaño y Héctor Buitrago, lo anterior, por la captura del segundo y el asesinato de su compañero Jaime Matíz. A este escenario se suma la presencia en la región de José Miguel Arroyave y de Daniel Rendón, alias “Don Mario”, que generan, según Verdad Abierta (2011), toda una red de relaciones con políticos locales y terratenientes tradicionales que fortalecen la creación y expansión del Bloque Centauros. Es en este momento en que se da la confrontación entre las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Bloque Centauros, y dada la victoria Militar del Bloque Centauros hay un dominio de este grupo en todo el Meta.

A partir del 2002 se inicia el proceso de desmovilización de las AUC, dentro de las particularidades que tuvo este proceso en el departamento del Meta, se encuentra la resistencia del José Miguel Arroyave a la desmovilización, según Verdad Abierta (2011):

En septiembre de 2005, en el corregimiento de Tilodirán, a media hora de Yopal, se desmovilizaron 1.135 hombres del Centauros. ‘Martín Llanos’ fue a Santa Fe de Ralito como representante de las autodefensas del Llano, pero nunca se desmovilizó. ‘Pirata’ está en la cárcel en el proceso de Justicia y Paz. ‘Cuchillo’ siguió delinquiendo hasta diciembre de 2010, cuando cayó abatido por un operativo policial, cerca de Mapiripán, Meta. (p. 50)

El Estudio de contexto del fenómeno del microtráfico y comercialización de sustancias psicoactivas ilegales en zonas urbanas del departamento del Meta (Gobernación del Meta y UNODC, 2018) evidencia que el departamento del Meta y su ciudad capital, Villavicencio, han visto transformar las dinámicas violentas y delictivas que buscan el control de sus territorios, y los réditos del narcotráfico a partir de dos períodos diferentes pero complementarios: a) Los años anteriores al establecimiento de la mesa de negociación de la Habana, Cuba, entre el Estado colombiano y las FARC-EP (Antes del 2010). b) Los años posteriores a dicha negociación hasta nuestros días (después del 2010).

Sin embargo, antes de delimitar los dos periodos mencionados, es necesario tener presente que el Meta es un corredor histórico para el tráfico de sustancias y mercancías ilícitas, llámense éstas abigeato, contrabando, narcotráfico, tráfico de armas y hasta de hidrocarburos; como consecuencia de su posición geográfica colindante con los departamentos del Guaviare, Caquetá, Casanare y Vichada, que conducen a las fronteras de Venezuela y Brasil, a través de las subregiones del río Ariari (del noroeste al sureste, hasta desembocar en el río Guaviare) y del río Meta (norte del departamento).

Estas subregiones naturales, río Meta y Ariari, han concentrado el mayor número de hechos violentos debido a la confrontación entre los diferentes grupos armados al margen de la ley que han luchado por el control de las rentas ilícitas.

De manera que, el Bloque Centauros de las AUC, al mando de José Miguel Arroyave, rivaliza, después del 2002, con la franquicia Bloque Central Bolívar por el control de las rutas del narcotráfico con destino al Casanare, concluyendo en la supremacía del primer bloque y miles de muertos en este departamento hacia el 2004. Miguel Arroyave finalmente fue asesinado por un grupo comandado por Pedro Oliveiro Guerrero alias “Cuchillo” que, tras conformar los Héroes del Llano y Héroes del Guaviare y su fallida desmovilización, crea finalmente el Ejército Revolucionario Anticomunista de Colombia – ERPAC- (Insigh crime, 2018).

El ERPAC presenta un rango de acción en todos los Llanos Orientales y, particularmente, en las subregiones del río Meta y del Piedemonte Llanero, donde se localiza el municipio de Villavicencio. Este grupo controló la producción de base de coca y cocaína procesada que vendía a intermediarios con destino a Brasil y Venezuela (Insigh crime, 2018).

Por su parte, las FARC se localizaron en la subregión del Ariari, al ser un lugar estratégico de comunicación con el centro del país y de fácil repliegue de hombres hacia los departamentos del Guainía y Caquetá. Inevitablemente, el ERPAC tenía que entrar en confrontación con este bloque guerrillero por el negocio del narcotráfico generando zozobra en las subregiones del río Ariari, del río Meta y del Piedemonte Llanero (Gobernación del Meta y UNODC, 2018).

El ERPAC se sometió a la justicia en 2011 tras la caída de alias “Cuchillo” y la rendición de alias “Caracho”, máximos jefes de la organización, registrándose su transformación en el Bloque Meta y Libertadores del Vichada al no desmovilizarse completamente sus

estructuras armadas. Estas nuevas organizaciones al margen de la ley entraron en confrontación con otros grupos paramilitares o grupos armados ilegales, para utilizar terminología más reciente, al registrarse la segunda etapa, a saber: el proceso de negociación con las FARC (Gobernación del Meta y UNODC, 2018).

Se recuerda que existió una primera etapa de negociación con los líderes de la guerrilla comprendida entre 2010 y 2012, que fue mucho más hermética que las demás, pues todavía se estaba consolidando la hoja de ruta para efectuar la debida desmovilización de los guerrilleros y su incorporación a la sociedad. Por ello los Llanos, para este caso particular el departamento del Meta, no vio las consecuencias de este proceso hasta el 2012, año en el que se inauguran nuevas disputas por el control territorial y el negocio del narcotráfico, tras el vacío dejado por las FARC.

El Bloque Meta y el Libertadores del Vichada, herederos del ERPAC, entraron en la señalada disputa mediante enfrentamientos directos y asesinatos selectivos en las subregiones del río Ariari y del río Meta; este último grupo, Libertadores del Vichada, logró una considerable capacidad armada al aliarse con el Clan del Golfo, ahora más conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para controlar las rutas del narcotráfico hacia Venezuela y Centro América. Actualmente, los Libertadores del Vichada cambiaron su nombre a Los Puntilleros y controlan los laboratorios de procesamiento de coca en Puerto Gaitán, el microtráfico en Acacías y Villavicencio, extorsionan a la población en sus áreas de influencia y controlan el tráfico de armas en Puerto Gaitán y Puerto López (Gobernación del Meta y UNODC, 2018).

En este punto, los municipios de Villavicencio y Acacías se han visto inmersos en las dinámicas del control territorial de la región y del Meta por parte de grupos armados ilegales, ya que se han consolidado como el centro de comercialización y consumo de sustancias psicoactivas más grande del departamento; asimismo Villavicencio ha sido la ruta de comercialización de paso de SPA hacia el sur de Bogotá (Gobernación del Meta y UNODC, 2018).

El narcomenudeo en Villavicencio se ha visto favorecido por el establecimiento de barrios de invasión de larga data, debido a las condiciones de vulnerabilidad económica y social de los habitantes de los barrios en cuestión; de modo que, en estos lugares se crean “ollas” con una estructura organizativa que asimila tanto a las pandillas (combos) como a los grupos armados ilegales, en este caso las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Puntilleros, que se dividen funciones dentro de la cadena del microtráfico y mantienen la custodia del tráfico de armas (Gobernación del Meta y UNODC, 2018).

Estas estructuras criminales han desplegado el control territorial en los barrios y en las Comunas con más fuerte presencia mediante el uso de la violencia, en caso de requerirlo, pero generalmente han gozado de legitimidad dentro de estos espacios ya que han provisto de servicios de seguridad, administración de justicia e instauración de normas de convivencia, resultando en zonas de impunidad que han facilitado la comisión de diversos delitos.

Los 17 puntos de expendio identificados en los grupos focales y que coinciden con la información oficial son: Villa Julia, Lambada, Santafé, Gaitán, Industrial, Villa Suárez, Cero Uno, Alkosto, San José, Nueva Granada, Nueva Colombia, Popular, Porfía, La Esperanza, 7 de agosto, Playa Rica y El Triunfo. (Gobernación del Meta y UNODC, 2018, p. 36).

Respecto a la división del trabajo en la cadena de valor del narcotráfico, se sostiene que en Villavicencio han existido lugares de acopio de la cocaína, en estos lugares el producto es rendido con otras sustancias como analgésicos, cafeína, taurina, incluso harina, y demás, igualmente es dosificada, re manufacturada y distribuida a los lugares de distribución y consumo de SPA (Gobernación del Meta y UNODC, 2018).

Referenciación del homicidio en Villavicencio con escala nacional y departamental

En el informe Violaciones al derecho a la vida y a la libertad física: una perspectiva regional (Unillanos, 2011), se mencionan dentro del departamento del Meta cuatro categorías de hechos delictivos: masacres, homicidios, secuestros y desapariciones forzadas, cuya hipótesis rastreada en el mencionado documento permitió considerar que el alza de homicidios se debió a los enfrentamientos por parte de grupos de autodefensa y guerrillas por el control territorial, además de la presencia de narcotraficantes que tenían grandes extensiones de tierra. Para el caso de Villavicencio, el incremento se relacionó con la delincuencia común y el narcotráfico; al respecto de este último, las bandas reorganizadas después del proceso de desmovilización con los paramilitares buscaron obtener controles territoriales mediante acciones delictivas como el homicidio, orientado al control de la economía ilegal.

Con relación al índice de violencia asociada al narcotráfico y los grupos armados ilegales, el informe de la ACNUR refiere que la tasa de homicidios en el Meta entre 2003 y 2006 fue de 90 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra que superaba en más del doble a la tasa nacional.

En cuanto a las masacres, según el Observatorio de DH y DIH en el Meta, oficina promotora de paz, para el municipio foco de la investigación (Villavicencio), se presentó una masacre en 2008 dejando un saldo de 4 muertos.

Respecto a los secuestros, el Observatorio del Territorio de la Universidad de las Llanos basado en datos del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal Fondelibertad, reporta para Villavicencio una tasa superior a la de los demás municipios con 38 secuestros en 2006, 3 para 2007 y 16 en 2008.

Finalmente, la desaparición forzada, como mecanismo de violencia selectiva, también registró datos para los años 2007 y 2008, según la Defensoría del Pueblo, Oficina de Desaparecidos. En cuanto a Villavicencio, este fenómeno fue el más alto del departamento, siendo el año 2007 el de mayor número de casos registrados con 86; mientras que para el 2008 se redujo casi al 50% con 44. Según los autores, estos actos delictivos respondieron a la presencia de bandas criminales al servicio del narcotráfico, grupos delictivos que se habían organizado con personas desmovilizadas, como también hechos protagonizados por la fuerza pública.

Al abordar estadísticamente el fenómeno del homicidio entre los años 2003 y 2016, tomando como punto de partida los niveles de comparación nacional, regional y la ciudad de Villavicencio, se encontró que las tasas departamentales y de la ciudad están por encima del promedio nacional en todos los años mencionados.

El gráfico 1 resume la tendencia del fenómeno homicida en la ciudad de Villavicencio, se destacan tres periodos que marcan tendencias diferentes en la variación del hecho punitivo. El primero va del año 2003 al 2007 y muestra una reducción del número de decesos violentos. El segundo periodo comprende los años 2008 a 2011 y evidencia un aumento en la violencia homicida. Finalmente, se presenta una reducción del homicidio en el periodo comprendido entre 2012 y 2016.

Las tendencias descritas coinciden con el transfondo que estructura las disputas por el territorio entre los diferentes actores armados presentes en la región. Como se describió páginas atrás, entre los años 2002 y 2004 se presenta la confrontación entre José Miguel Arroyave, Bloque Meta y el Bloque Central Bolívar. Después de 2004, se suaviza la tendencia hasta el 2006, año en que se evidencia un incremento del homicidio en la ciudad. Sería oportuno establecer a cabalidad si este ascenso en las cifras se origina por la transición de las estructuras armadas denominadas como Libertadores del Llano y del Guaviare a la consolidación del ERPAC como estructura armada dominante.

El periodo comprendido entre 2007 y 2011 llama la atención por el sostenido aumento de la violencia homicida, el año 2011 es la cúspide de esta tendencia en la ciudad, a la vez que la Comuna 3, como se explicará más adelante, también registra esta misma tendencia. En este punto, también se tendría que comprobar la relación entre esta tendencia y el choque entre el ERPAC y la llegada y consolidación en la región de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Es posible considerar que la reducción del homicidio que se registra en adelante, es por la negociación entre las AGC y los reductos del ERPAC, es decir, “Los Puntilleros”, para generar alianzas estratégicas que les permitan optimizar su operación en el territorio.

Figura 7. Homicidios Villavicencio 2003-2016. (Fuente: Policía Metropolitana de Villavicencio, elaboración propia).



Según lo argumentado hasta ahora, se puede plantear, como conclusión, que existe una relación del microtráfico en la ciudad de Villavicencio con una red de transacciones ilícita más amplia, que está regulada por Bandas Criminales. El caso de la ciudad está definido por grupos familiares y combos que se alinean, ya sea por el uso de la violencia, o la negociación con estructuras criminales de más largo alcance en el territorio.

A su vez, el reacomodamiento de las estructuras armadas presentes en la región por las dinámicas del conflicto armado hace que las dinámicas en la ciudad varíen, caso específico de la violencia homicida. Otro tanto tiene que ver con la reconfiguración del territorio; sin embargo, este ítem se perfila para un segundo momento de análisis. Se tiene entonces, que la Comuna 3 de la ciudad de Villavicencio y los barrios aledaños de las Comunas 4 y 5 serían el escenario seleccionado para desarrollar un estudio de caso que precise la estructura y el alcance del poder criminal que opera en éstas, así como los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración han insidido en todo el escenario descrito, ya sea por su adecuada o parcial implementación. Se elige la Comuna 3, ya que al calcular la tasa de homicidios de ésta para el período 2013, se encontró que fue de 80,3 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que la tasa de la Comuna 4 fue de 25,7; la de la Comuna 5 de 23,1 y de la 8 fue de 19,2 homicidios por cada cien mil habitantes.

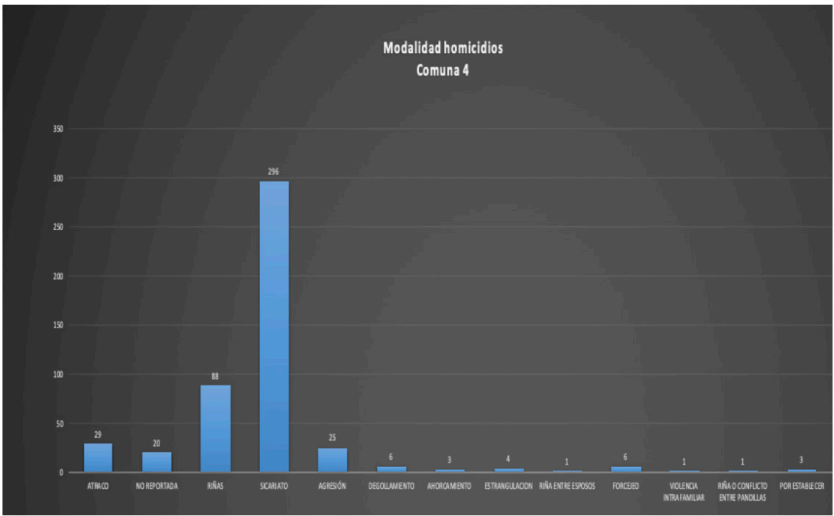
Figura 8. Número de homicidios Villavicencio por Comunas y veredas 2003-2006. (Fuente: Policía Metropolitana de Villavicencio, elaboración propia).



En el gráfico anterior se señala que las Comunas 3, 4, 5 y 8 son las que, en el período de análisis, registran el mayor número de homicidios en la ciudad; teniendo en cuenta que, como se mencionó páginas atrás, los barrios más golpeados por el

microtráfico pertenecen a estas comunas, se puede deducir una relación directa entre microtráfico, violencia homicida y crimen organizado. Este argumento se refuerza al observar la modalidad de homicidio más frecuente en las comunas mencionadas; en la Comuna 3 el 55% de los homicidios se realizó bajo la modalidad de sicariato; en la Comuna 4, de los 492 casos registrados en 13 años, 296 (60%) fueron efectuados bajo la modalidad de sicariato, y en la Comuna 5 ocurrieron bajo esa modalidad el 64%.

Figura 9. Modalidad homicidios Comuna 4, Villavicencio 2003-2016. (Fuente: Policía Metropolitana de Villavicencio, elaboración propia).



El valor confianza como estructurador del poder criminal en Villavicencio

En el apartado anterior, se argumentó que los hilos que controlan las dinámicas del microtráfico en la ciudad de Villavicencio están amarrados a grupos definidos por relaciones de parentesco y de amistad, son estos grupos los encargados del almacenamiento y distribución de SPA en las zonas que controlan; lo anterior se sustenta en las afirmaciones que diferentes miembros de la Policía Metropolitana y de la Policía del Meta hacen al referirse

a las características de los grupos que controlan el tráfico de estupefacientes en la ciudad. El argumento esbozado desde la Policía niega la presencia en la ciudad de Bandas Criminales y limita la red de transacciones del comercio ilícito de estupefacientes a la ciudad.

Si bien es aceptable el argumento que plantea que son grupos cuya cohesión se estructura desde el valor confianza, hay un vacío interpretativo referente a la explicación de la relación de la red de transacciones ilícitas correspondientes a la ciudad con una red más amplia, es decir, la que se ha consolidado en la región y que está orientada al mercado global de estupefacientes. Es menester explicar la “línea” que comunica los mercados ilícitos que se evidencian en la ciudad con los de la región, ya que es poco probable que un grupo familiar y de amigos pueda sostener la ruta que permite traer marihuana del departamento del Cauca y cocaína de centros de cultivo y procesamiento ubicados en el departamento del Guanía.

Se argumenta en este sentido, que la explicación de la violencia homicida en la ciudad de Villavicencio no pasa simplemente por el ajuste de cuentas entre grupos ubicados en el marco de transacciones ilícitas de la ciudad, se plantea, dadas las explicaciones desarrolladas hasta este punto, que el homicidio en Villavicencio está directamente relacionado con las dinámicas violentas evidenciadas en la región, en últimas, con las transformación de las estructuras armadas dadas las dinámicas del conflicto armado.

El análisis debe tender a comprender en qué punto de la red de transacciones el valor confianza se agota y es reemplazado por el uso racional de la violencia como forma de mantener la cohesión de la red de transacciones ilícitas. Esto se desarrollará cuando el trabajo de campo se oriente a dar cuenta de la estructura y alcance del poder criminal.

A partir de entrevistas practicadas a personas que pertenecieron a la dinámica delincriminal de las Comunas 3 y 4, específicamente del los barrios Santa Fé y Brisas del Guatiquía, su pudo concluir que las dinámicas delictivas de la ciudad están vinculadas con la Comuna 3, en la medida en que este sector se ha convertido en centro de acopio de estupefacientes que luego se distribuyen a otros lugares de la ciudad, pero también como un escenario de tráfico de armas que son alquiladas “subcontratadas” por la delincuencia común en un arreglo en efectivo o dando un porcentaje de los rendimientos de la actividad delictiva.

Dentro del proceso de análisis de entrevistas, varias personas señalaron el año 2011 como el inicio de una disputa territorial entre la delincuencia organizada del sector de Brisas del Guatiquía y la delincuencia del barrio Santa Fé, plantearon a su vez que esta disputa se dio por una parte del territorio que denominan el “botadero”, sector estratégico como corredor para evadir a las autoridades, también se señala “La calle del Industrial” como una frontera invisible configurada al calor de la confrontación. Es importante destacar que la cronología de los relatos coincide con la imagen estadística de la ciudad, que deja al año 2011 como uno de los años en el que más se cometieron asesinatos en la ciudad de Villavicencio, y el 2012 como uno de los años más sangrientos en las Comunas 3, 4 y 5.

BIBLIOGRAFÍA

Castillejo, A. (2015). La imaginación social del porvenir: reflexiones sobre Colombia y el prospecto de una Comisión de la Verdad. Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150131091650/CastillejoFinal.pdf>

Echandía, C. (2013). Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales. Bogotá, Colombia: Fundación Ideas para la Paz.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2002). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2003). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2004). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2005). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2006). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2007). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2008). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2009). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2010). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2011). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2012). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2013). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2014). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2015). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

_____. (2016). FORENSIS Datos para la vida. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

Fundación Insight Crime. (2018). Insight Crime. Recuperado de: <https://es.insightcrime.org>

Gobernación del Meta y UNODC Colombia. (2018). Estudio de contexto del fenómeno del microtráfico y comercialización de sustancias psicoactivas ilegales en zonas urbanas del departamento del Meta. Bogotá, Colombia: UNODC Colombia.

Silva de Sousa, R. (2004). Narcotráfico y economía ilícita: Las redes del crimen organizado en Río de Janeiro. Recuperado de: <http://www.ejournal.unam.mx/rms/2004-1/RMS04105.pdf>

Rausch, J. (2011). De pueblo de frontera a ciudad capital. La historia de Villavicencio, Colombia, desde 1842. Bogotá, Colombia: Banco de la República - Universidad de los Llanos.

Unillanos. (2011). La violación del derecho a la vida: Homicidios: muertes selectivas y masacres en 18 municipios del departamento del Meta durante los años 2009 y 2011. Recuperado de: <http://observatorio.unillanos.edu.co/portal/archivos/28DEFINITIVO%20trabajo%20de%20grado%20VIDAL.pdf>

Verdad Abierta. (2011). Así creció el paramilitarismo en los Llanos Orientales. Recuperado de: <https://VerdadAbierta.com/asi-crecio-el-paramilitarismo-en-los-llanos-orientales/>

3

CAPÍTULO
TRES

3. EL LABERINTO DE LAS VIOLENCIAS INVISIBLES, VISIBLES Y RECURRENTE: PRÁCTICAS SOCIALES VIOLENTAS EN CONTEXTO URBANO DE MANIZALES²⁶

Oscar Fernando Martínez Herrera²⁷

Didier Andrés Ospina Osorio²⁸

Resumen

La violencia en el contexto de una sociedad como la colombiana, tiene múltiples expresiones tan visibles como las prácticas ilegales, recurrentes como las tasas de homicidio, y otras prácticas más difusas como la intolerancia social, que puede llegar a ser multifactorial y que tiene dinámicas de aprehensión en ocasiones intangibles.

26 El presente capítulo es resultado derivado de procesos de investigación aprobados mediante Acuerdo de Consejo Académico Universidad Católica de Manizales número 158 de diciembre de 2016.

27 Candidato a doctor en Ciencia Política, Magíster en Territorio, conflicto y cultura y Antropólogo. Docente investigador, miembro del núcleo de estudios en Memoria y Paz de la Universidad Católica de Manizales. Grupo de investigación ANTHROPOS de la Universidad Católica de Manizales. omartinez@ucm.edu.co.

28 Estudiante de Doctorado en Educación, Magíster en Educación, Especialista en Gerencia Educativa y Licenciado en Ciencias sociales. Docente investigador Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales. Grupo de investigación ALFA de la Universidad Católica de Manizales. daospina@ucm.edu.co

Es el caso de Manizales, ciudad en la cual se desarrollan múltiples formas de violencia que están estructuradas a factores nacionales, regionales y locales, donde se correlacionan estas escalas territoriales en expresiones históricas y emergentes de la violencia urbana.

El presente documento da cuenta de algunas tipologías de violencia nacional, regional y local que, desde su contexto, ayudan a entender la realidad de las prácticas violentas en una ciudad como Manizales. Las expresiones de violencia abordadas, se estructuran desde factores como la violencia armada, la violencia política, las formas de ilegalidad, las tensiones regionales y las dinámicas de violencia local, como agentes estructurantes de lo que configura esencialmente las formas de violencia social para Manizales, no porque estas últimas sean las únicas, pero sí se convierten en un elemento recurrente en el territorio.

Horizonte de la investigación: Metodología

El presente texto da cuenta de una investigación que trianguló datos estadísticos y de campo de actores académicos, institucionales y sociales, que hacen parte o se han articulado de alguna manera al Observatorio de violencia y paz de Manizales²⁹, desde el mes de febrero del 2017 al mes de mayo del 2018.

Los resultados alcanzados en este proceso, han permitido lograr conclusiones importantes que, en consideración a la realidad violenta, se espera puedan ser insumo para la generación y propuesta de políticas públicas, programas y proyectos orientados, no solo a la comprensión del fenómeno, sino también

29 El Observatorio de Violencia y Paz de Manizales es una iniciativa conformada y coordinada desde el 2017 por la Universidad Católica de Manizales, la Red de investigadores en Paz, Conflictos y DDHH, nodo Caldas, y el programa de investigación en Asuntos criminales, violencias y castigo. En este espacio confluyen instituciones públicas y privadas, actores sociales, organizaciones comunitarias y actores académicos de Manizales, quienes constituyen mesas de análisis inter-sectoriales para ahondar en el monitoreo de los fenómenos y prácticas violentas y el seguimiento de experiencias y dinámicas de paz en la ciudad de Manizales.

a la generación de alternativas y estrategias contundentes que permitan la mitigación y reducción de los índices de violencia que presenta la ciudad en los últimos tiempos.

El proceso de observación de la violencia representó en esta primera fase el desarrollo de un estudio etnográfico, que soporta el objeto empírico de indagación, siendo la ciudadanía y el contexto municipal de Manizales la base de la interpretación/descripción derivadas (Guber, 2001, p. 6).

De esta manera, el ejercicio de indagación desde este enfoque etnográfico ha permitido la identificación de las categorías que han surgido de manera inductiva, a partir de la observación del fenómeno de la violencia en la ciudad de Manizales y, con ello, logrando una concepción esencial de la realidad y un concepto orientador sobre los aspectos más relevantes que permiten comprender el fenómeno de la violencia en sus diversas tipologías y expresiones más marcadas en el territorio, generando como resultado un análisis basado en la caracterización preliminar de la violencia en el entorno ciudad.

En este escenario, la investigación permitió desarrollar un proceso comprensivo de las acciones cotidianas, comprendidas estas desde el planteamiento de Heller (1998) entendiendo la heterogeneidad de la vida y la relación del hombre con su mundo. Así, las formas de reproducción de prácticas sociales y culturales fueron asociadas a diversas tipologías de violencia, logrando también comprender la dimensión de temporalidad que tienen estas prácticas con escenarios como la familia, el barrio o la escuela, en donde los individuos reflejan en ellos y desde ellos, su asociación con las prácticas sociales violentas.

En el desarrollo del ejercicio de indagación y comprensión de la violencia en la ciudad de Manizales, ha sido posible y necesario adentrarse en la comprensión de las dinámicas reales de vida y cotidianidad, comprendida desde Méndez como “el conjunto

de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, crean la posibilidad de la reproducción social” (2005, p. 53), en este caso, referente a los grupos humanos en las zonas donde se ha identificado mayor vulnerabilidad y concurrencia del fenómeno.

Tal acercamiento ha permitido desarrollar grupos focales con diferentes actores: jóvenes, líderes comunales, líderes religiosos, Agentes de Policía Comunitaria, y demás ciudadanos, quienes han permitido conocer desde su percepción los posibles rasgos de vulnerabilidad que reconocen en la población, en su barrio y en la ciudad, acerca del fenómeno de la violencia; así como también las características de la violencia que reconocen y perciben como mayor impacto en su vida cotidiana y la de los demás habitantes.

Así, el trabajo de campo etnográfico ha sido una modalidad de investigación social que ha demandado del equipo investigador un compromiso vital con su propio sentido del mundo, del prójimo y de sí mismo, de la moral, del destino y del orden (Guber, 2001, p. 48).

Las cifras reportadas en algunos indicadores específicos de violencia son las entregadas por el Instituto de medicina legal y ciencias forenses capítulo Caldas y la Policía nacional de Colombia, en sus respectivos informes regionales y nacionales.

De manera complementaria, los relatos expuestos se derivan de entrevistas abiertas y semiestructuradas, además de la participación de la población en los grupos focales desarrollados en 5 comunas de la ciudad de Manizales: comuna Ciudadela del Norte, comuna la Macarena, comuna Universitaria, comuna Cumanday y comuna la Fuente.

Este es un primer proceso analítico que estructura una perspectiva causal, desde fenómenos nacionales, regionales y locales, que inciden en la dinámica de violencia en Manizales.

Esta mirada metodológicamente emerge de reconocer que existen particularidades inductivas y deductivas que configuran la violencia como proceso social, es decir, en marcos territoriales no se puede atribuir a un factor mayor o menor relevancia en el desarrollo del fenómeno violento. Como lo señala Blanco:

El concepto de violencia, pese a ser usado con profusión por referirse a un fenómeno de indudable relevancia social, por ello es importante darle una nueva y mayor determinación a partir de los conceptos de comunicación y atribución e imputación comunicativa, con la que se abren nuevos horizontes interpretativos de la violencia colectiva en nuestra sociedad. (2017, p. 163)

Es por ello que el presente estudio reconoce algunos elementos representativos que dinamizan la violencia en Manizales y abre el debate sobre la profundización estructural de estos fenómenos en las prácticas violentas en ciudades intermedias.

Análisis de la violencia en la ciudad de Manizales

Manizales ha sido reconocida en múltiples índices de medición de percepción ciudadana, como una ciudad tranquila, mientras que la inseguridad se ha tornado en uno de los más importantes –sino el principal– eje organizador de los modos de vida cotidiana. De la Paz (2006), lo anterior evidenciado a través de indicadores de inseguridad elevados con relación a otras ciudades de Colombia.

Según cifras de Manizales cómo vamos, en su informe sobre la percepción de seguridad³⁰, para el 2015 era del 57% y se elevó en el 2016 a 71%, lo que ha generado un ambiente social de ser una ciudad tranquila y con tasa de violencia reducida. No obstante, esta percepción de seguridad dista de la realidad social

30 Manizales cómo vamos. “6to Informe de Calidad de Vida #AsíVaManizales”. Manizales cómo vamos, editorial La Patria. 2017.

de la ciudad, cuyos indicadores de violencia, desde la tasa de homicidios, las riñas y problemas asociados a la intolerancia social, como lo plantea Camacho (1990) asociado a una sociología del conflicto que tiende a profundizar en las bases sociales, tal como se manifiesta en los niveles elevados y constantes de violencia bajo esta causa en los últimos 3 años.

Para entender este fenómeno de la violencia en Manizales, se abordaron tres categorías de análisis incidentes. La primera relacionada con el contexto nacional, la segunda con el contexto regional y la tercera con el contexto local. Si bien estas categorías analíticas intentan explicar parte del fenómeno de la violencia en Manizales, evidentemente no son los únicos factores incidentes, pero sí se convierten en elementos relevantes, especialmente en el reconocimiento de la información que hace parte de la investigación, como permiten reconocerlo Schutz y Natanson (1995) sobre el reconocimiento del sentido y la interpretación científica de la acción humana, en este caso desde la reproducción de las prácticas violentas.

Contexto nacional

Violencia y homicidios

Aunque es evidente que la tasa de homicidios en Colombia ha bajado porcentualmente de una manera significativa en el periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, este indicador aún se encuentra por encima del estándar mundial.

Tabla 1. Cifra general del histórico de la tasa de homicidio en Colombia. (Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis, 2016).

| Año | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Casos | 16.31 8 | 15.25 0 | 17.71 7 | 17.45 9 | 16.55 4 | 15.72 7 | 14.29 4 | 12.62 6 | 11.58 5 | 11.53 2 |
| Tasa * 100 | 37,15 | 34,31 | 39,39 | 38,36 | 35,95 | 33,76 | 30,33 | 26,49 | 24,03 | 23,66 |

Si bien Manizales es una ciudad con indicadores de homicidio bajos en relación a otras ciudades de Colombia, esto no implica que su tasa sea un porcentaje normal o ideal. La tasa de homicidio promedio en el mundo es de 6,4 por cada 100.000 habitantes, y según la OMS (2003) se considera una epidemia social cuando la tasa de homicidio de una ciudad supera los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, Colombia en 2016 está en más del doble de esta cifra y particularmente Manizales tiene una tasa del 20,88 por cada 100.000 (Instituto de Medicina Legal, 2017), lo cual supera el doble del mínimo planteado.

Conflicto armado y nuevas violencias

Colombia conserva elevadas cifras en sus tasas de homicidio en relación a la media mundial, situación que preocupa en diferentes escenarios sociales y políticos, no obstante, este fenómeno del homicidio no es aislado de la realidad social y cultural de nuestro contexto, puesto que existen otras expresiones de violencia que han permeado la sociedad.

Es preocupante que ciudades capitales grandes e intermedias tengan tan elevados índices de violencia social y cultural, derivados de formas cotidianas de agresión, negación a los otros o tramitación violenta de las diferencias.

Esta realidad da cuenta que la sociedad colombiana, aunque con los Diálogos de Paz ha logrado disminuir en cifras históricas las tasas de violencia armada especialmente en contextos rurales, esta situación no ha alterado la realidad violenta de ciudades como lo afirma Carrión (2008) y, en este caso específico, no ha modificado la realidad violenta de ciudades intermedias como Manizales, Pereira o Armenia, las cuales llevan varios años con los mismos niveles de violencia delictiva, social y cultural.

La violencia en Colombia durante años se relacionó fundamentalmente al fenómeno del conflicto armado, en el momento actual, con la inclusión de las FARC en la vida civil y la disminución de la intensidad del mismo en el territorio nacional, se devela cómo la violencia urbana no necesariamente se explica desde este conflicto armado, como lo afirma Valenzuela (2002) cuando reconoce cómo la constatación de la “violencia callejera” cobra más víctimas que la guerra misma, dando lugar a numerosas explicaciones, ninguna de ellas exenta de problemas y controversia.

La disminución del conflicto en ciertas zonas del país se ha relacionado desde el impacto positivo en la reducción de violencias específicas, especialmente en la lucha entre Estado e insurgencia. No obstante, en la actualidad existen nuevas formas de violencia y criminalidad emergentes de la lucha armada. A continuación, es posible enunciar tres factores coyunturales, sin desconocer que existan muchos más:

o El reordenamiento territorial por parte de grupos armados en zonas donde tuvieron presencia las FARC: las FARC como organización insurgente logra tener presencia en un amplio territorio a nivel nacional, la salida de estas zonas implicó una re-ocupación espacial y disputa militar en muchos casos de grupos armados aún vigentes y con presencias territoriales más delimitadas, tales como ELN, EPL, Gaitanistas en sus vertientes y Rastrojos, entre otros. Este reordenamiento ha generado nuevas

expresiones del conflicto armado, ligado a combates bélicos, desplazamiento forzado y asesinatos selectivos, como estrategias de control y ordenamiento armado.

o Emergencia de nuevos grupos armados: al desarrollarse la reincorporación de las FARC a la vida civil en diferentes zonas del país, se empiezan a reorganizar otros nacientes actores armados, que van desde las disidencias de las FARC, Los Pelusos considerados un reducto del EPL, pasando por la presencia más activa de actores proveniente de carteles mexicanos.

Esta emergencia de nuevos grupos armados está ligada más a prácticas delictivas que a reivindicaciones subversivas, lo que hace que su modus operandi no estén sujetos a mediaciones políticas de ninguna naturaleza, sino a acciones criminales particulares. Esto no implica negar la existencia de otros grupos violentos de accionar político, que no son fácilmente identificables, pero que en los últimos dos años han hostigado, perseguido y asesinado a más de 100 líderes sociales en Colombia, empero esta práctica sistemática la ubicaremos como un factor estructural nacional.

o Nuevos reordenamientos urbanos y expansiones territoriales: las mutaciones que ha presentado el conflicto armado, han implicado el reposicionamiento nacional de estructuras como los AGC o Gaitanistas y el ELN, quienes han desplegado un plan de expansión fuerte en diferentes zonas del país. Sin embargo, es importante resaltar cómo en los contextos urbanos vuelven y emergen actores delincuenciales locales, quienes empiezan a buscar tener control monopólico en zonas urbanas delimitadas, un ejemplo de ello es Cordillera en Pereira, los Ganchos en Bogotá, los Puntilleros en los Llanos Orientales, los Botalones en el Magdalena medio, los Costeños en Barranquilla y Cartagena, entre otros. Cabe resaltar el modelo de funcionamiento de estas bandas quienes, en la mayoría de casos, establecen alianzas y pactos territoriales, especializándose en la comercialización

focalizada de estupefacientes u otras prácticas ilegales, pero en zonas locales específicas, aparentemente sin intentos de expansión más allá de sus contextos urbanos y con tributaciones específicas a organizaciones criminales de mayor impacto, quienes producen y tienen grandes redes de distribución.

Estas expresiones del conflicto armado en Colombia, que están asociadas fundamentalmente a economías ilícitas, tienen impactos aun no dimensionados en los contextos urbanos, puesto que tanto el narcotráfico, el contrabando, la extorsión, entre otras formas delictivas, tienen presencia estructural en las formas delictivas locales. Un ejemplo de ello es el caso del narcotráfico, donde, si bien los canales de consumo son locales, su producción y distribución proviene de circuitos macro regionales y nacionales asociados al conflicto armado.

Factores estructurales en la violencia nacional

Como se ha mencionado, existen múltiples factores que inciden en los fenómenos de violencia en el contexto nacional, especialmente en las coyunturas específicas del país, no obstante, es posible enunciar tres factores que en la actualidad se develan como estructurantes de la violencia en Colombia, cuya relación directa se ve de manera explícita en ciudades como Manizales.

o La configuración de la violencia como un instrumento de participación política:

Han sido múltiples los conflictos que en Colombia han desarrollado el uso de la violencia y las armas, reconocido esto por Calveiro (2005) como mecanismo de participación o expresión política, que en este caso y desde su constitución como República y la denominada Patria boba, y la sucesión de más de seis guerras civiles reconocidas por ser pugnas que buscaban definir la administración política del país en el siglo XIX, así como

la Guerra de los Mil Días, la independencia armada de Panamá, la denominada Época de la violencia, guerras civiles, entre otras, son expresión del uso de la violencia como formas históricas de participación política.

No obstante, en tiempos no tan lejanos, como lo permiten recordar Velásquez y González, por citar un ejemplo:

En 2002, el 70 o 75% del total de municipios del país tenía presencia guerrillera importante y las ciudades capitales no escapaban a este fenómeno. Las cifras de la Federación Colombiana de Municipios indican que entre 1998 y 2002 fueron secuestrados 17 alcaldes, amenazados 554 y asesinados 54. La cifra de alcaldes que despachan fuera de su municipio era de 300 en noviembre de 2002. (2003, p. 6)

Lo anterior demuestra que el uso de la violencia como mecanismo de participación política, y la guerra como instrumento de configuración del poder, son referentes históricos de la naturalización de la violencia en la sociedad colombiana, que en ciertas ocasiones priorizan las acciones de hecho y la violencia, como lo reconocen Benjamin y Zorita (2010) según sirva ésta a fines naturales, jurídicos, entre otros relacionados con la función diversa de la violencia. En esta perspectiva reconocida como una herramienta de participación en distintas esferas de la cotidianidad y que afectan la realidad colectiva de las personas, como lo afirma Cruz (2000), más allá de su impacto en la pérdida de vidas y el desarrollo económico, la violencia ha transformado también la cultura política y afectado los procesos democráticos.

o La tensión entre las institucionalidades y las autoridades:

La sociedad colombiana ha estado sujeta a múltiples tensiones en la administración política y en sus propios modelos de desarrollo. La historia bipartidista en Colombia y las múltiples expresiones de violencia de esta disputa por la forma de administrar y gobernar

el país, han configurado lógicas en ocasiones antagónicas de relacionamiento entre los entes gubernamentales.

En este sentido, es importante reconocer, como lo señalan Parísí, Pagnone y Soledad, que:

Los gobiernos con sesgos autoritarios suelen desalentar todo tipo de práctica participativa, exceptuando aquella que se enmarque en el denominado clientelismo político. Ésta, por otra parte, no constituye una práctica participativa que busca provocar algún tipo de cambio, sino lo contrario, persigue mantener una forma particular de ejercicio de poder. (2012, p. 3)

Este fenómeno de disparidad, tensión y en ocasiones de negación explícita entre autoridades nacionales, regionales y locales, da cuenta de una institucionalidad que aún no logra ubicar en el consenso y el diálogo una vía para conciliar las diferencias.

Comúnmente, se observan múltiples agresiones entre pares legislativos, o entre autoridades públicas donde queda en evidencia un estado fragmentado bajo modelos de desarrollo con intereses disímiles, evidenciándose cómo en múltiples episodios se usa la violencia verbal, la difamación y la denigración del opositor como una forma natural de tramitar discrepancias. Esta tensión en varias ocasiones ha desencadenado formas de violencia y se naturaliza que la agresión pública y verbal es una constante en la institucionalidad y sus distintos poderes.

La tensión abierta y en ocasiones violenta entre diferentes autoridades, en escalas nacionales y locales, se reproduce igualmente en niveles micro-sociales, donde en diversas ocasiones las autoridades sean políticas, familiares, religiosas u otras, tramitan sus diferencias en medio de actos violentos, agresiones físicas o simbólicas donde prima la disputa de poderes y la fragilidad de la misma autoridad.

o La polarización social y política:

La polarización es un fenómeno de radicalización de posturas ante la posibilidad de un consenso, en medio de tensiones permanentes en las cuales, en ocasiones, la violencia se promueve como forma de negación, al contrario. En Colombia dicha polarización emerge desde un contexto histórico en el cual el sistema político se encuadró y determinó expresiones de legitimación de la violencia hacia contrarios.

Velásquez y González (2003) afirman que.

Dos características marcan al sistema político colombiano desde la segunda mitad del siglo XX: el clientelismo y el autoritarismo (la respuesta autoritaria del Estado a la protesta ciudadana), que se erigieron como ejes articuladores del sistema y como referentes percibidos como legítimos de las conductas políticas de gobernantes y gobernados. Sin embargo, las lógicas subyacentes a ambas prácticas se encargaron de crear las condiciones para su deslegitimación. (p. 4)

Esta polarización social tiene un nicho especial en la construcción de la opinión pública pues es desde allí donde se instrumentaliza la construcción de sentidos violentos contra actores u acciones que representen algo diferente a quien promueve esta radicalización. Si bien existen múltiples formas de polarización de la sociedad, es posible remitirse a la radicalización de la opinión pública que se moviliza a través de actos violentos para rechazar algo que represente un sentido opuesto a algún interés particular.

Dicha polarización se ha convertido en una expresión social que naturaliza la negación arbitraria y en ocasiones violenta de los contrarios u opositores a una idea o interés particular. En esta realidad, la polarización se desarrolla desde medios comunicativos y simbólicos, y asciende hacia construcciones cotidianas colectivas

en las que se incita a la práctica y generación, directa o indirecta, de formas de violencia específica, como una forma de exclusión o marginación del otro.

Velásquez y Gonzáles (2003) permiten recordar que producto de la polarización y hasta la actualidad, así afirman:

La guerra ha obligado a los líderes a desarrollar un trabajo de bajo perfil para evitar ponerse en la mira de los grupos armados. Así la violencia ha sido un obstáculo para la participación, le ha generado altos costos y, sobre todo, ha impedido la emergencia de nuevos liderazgos, aunque, como se verá más adelante, el conflicto también se ha convertido en una motivación para participar. (p. 6)

En este sentido, se debe reconocer que la polarización no es un fenómeno exclusivamente político y que en la cotidianidad también se presentan expresiones de radicalización por motivos religiosos, éticos, económicos y morales, entre otros, no obstante, la característica específica es que estas tensiones, más allá de su naturaleza, en ocasiones pueden adquirir formas violentas en medio de una práctica común de negación entre diferentes actores.

Polarización desde la violencia

La polarización política tiene su expresión más radical, en el marco de los grupos de posturas ideológicas disímiles, quienes han usado la violencia como mecanismo de negación y anulación del otro.

Esta forma de violencia que tuvo un gran despliegue en la llamada Época de la violencia en la cual militantes del Partido Liberal se enfrentaban a la fuerza con sus oponentes conservadores y la polarización implicó múltiples formas de asesinatos, torturas y expresiones violentas.

No obstante, también en la denominada guerra sucia, el asesinato selectivo de líderes de la Unión Patriótica, movimiento político de izquierda, por parte de grupos paramilitares, dio cuenta del exterminio de más de 3.000 militantes (cifra aún en debate) de un solo partido político.

La polarización política con el episodio del exterminio de la Unión Patriótica instaaura nuevas formas de persecución y asesinato selectivo a militantes de partidos de oposición.

En la actualidad, la muerte sistemática y selectiva de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, ha vuelto a poner en la palestra pública la existencia de grupos paramilitares de ultraderecha, quienes están difusamente ubicados, pero que continúan con una política de asesinato selectivo. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz menciona que en el 2017 se presentaron 170 muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El tener una sociedad en la cual la polarización radical entre opuestos sea una práctica común, implica que la violencia como expresión de la negación de las diferencias tenga tantas expresiones que terminan en actos violentos o agresiones entre actores de posiciones disímiles. La coyuntura actual del país denota los niveles tan elevados de agresiones a defensores de Derechos Humanos, ambientalistas y líderes sociales, quienes han sido y siguen siendo perseguidos en el marco de esta polarización

Aunque estos factores efectivamente no son los únicos incidentes en las expresiones y prácticas de violencia en el país, si los evidenciamos como factores estructurantes e históricos en el marco de la generalización de prácticas violentas organizadas y no organizadas.

Esto denota cómo la violencia, en sus múltiples expresiones locales, tiene también elementos causales anclados al contexto nacional. Desde los homicidios, hasta las agresiones violentas por no aceptar alguna diferencia, las prácticas de intolerancia social o las agresiones interpersonales, son expresiones que, si bien son multivariantes en los marcos locales, tienen una articulación contextual explícita en los paradigmas socio-culturales y políticos que tiene el país. La violencia urbana no solo emerge insito, esta violencia está articulada y configurada en múltiples ocasiones a problemáticas de orden nacional como lo hace evidente Blandón Ramírez (2019) en su obra *Escarbando la verdad*, desenterrando la justicia: memoria social y acción colectiva en la comuna 13 de Medellín, presentando de manera precisa, las huellas de la violencia y la relación del desplazamiento forzado, como un reflejo de los efectos de la violencia en nuestro país.

Contexto regional

La guerra irregular que vive el país y que hoy toca de forma significativa el territorio regional, es un proceso complejo que ha permitido visibilizar cómo, rápidamente, las estrategias bélicas se han desplegado en busca del control territorial y social, que involucran una variada gama de actores armados y colaboradores de éstos, y que tienen múltiples y devastadores efectos sobre la población civil, sobre el ordenamiento institucional y social y sobre las condiciones de gobernabilidad. La complejidad y la agudización del conflicto armado colombiano configuran una lógica de difícil comprensión, caracterizada por la multicausalidad, la multipolaridad y la multidimensionalidad del fenómeno, como lo plantean Patiño y Valencia (2005).

La violencia en el plano regional tiene comportamientos propios de cada departamento, pero comparte elementos similares en ciertas estadísticas específicas y algunas prácticas violentas. Los tres departamentos del Eje Cafetero tienen procesos de crecimiento similares, aunque sus especificidades económicas

y políticas sean diferentes, sin embargo, la cercanía territorial y la histórica socio-cultural común, hacen de la integración regional un factor propicio para la construcción de escenarios compartidos, tanto en desarrollos positivos, como negativos, en este caso se abordará particularmente desde la violencia regional.

Sin embargo, como lo señalan Patiño y Valencia:

Es innegable la existencia y agudización del conflicto en el Eje Cafetero, la singular importancia de esta región en el contexto de la guerra irregular colombiana y la vulnerabilidad de su población a la influencia de los grupos armados en confrontación. (2005, p. 100)

A nivel regional, y en particular de las ciudades capitales, presentan en la actualidad una tasa de homicidio donde Manizales es la más baja de las 3 ciudades capitales del Eje Cafetero, según Forensis de medicina legal en 2016 los indicadores son, Pereira 31,36 homicidios por cada 100.00 habitantes, Armenia 40,58 por cada 100.000 habitantes y Manizales 20,88 por cada 100.000 habitantes. Empero, en otros indicadores como la violencia interpersonal, Medicina Legal registra que la tasa en Pereira es de 283 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Manizales es de 317 casos por cada 100.000 habitantes.

Esta situación, da cuenta de una región con niveles de violencia elevados y con cifras permanentes en el tiempo, pero cuyos análisis estructurales aún no correlacionan este fenómeno desde su causalidad y posibles alternativas de reducción.

Factores incidentes en la violencia regional

Al igual que en los factores de incidencia a nivel nacional, existen muchas razones explicativas de cómo la violencia considerada regional, puede afectar los indicadores y realidades

locales, sin embargo, aquí referenciamos dos formas de violencia que se transversalizan y son recurrentes en las dinámicas explicativa de la situación regional.

En la perspectiva histórica Echandia afirma:

Los municipios de campesinado medio cafetero que se habían caracterizado por el predominio de un campesinado medio estable y acomodado dedicado a las actividades de producción de café, con la crisis albergan un sector endeudado y desesperado. La cosecha cafetera en estas zonas produce una alta inmigración de trabajadores de regiones pobres ocasionando alta densidad poblacional que no encuentra pleno empleo, acentúa la delincuencia, genera expresiones de justicia privada y es explotada por grupos guerrilleros que encuentran apoyo en los desempleados. Adicionalmente, la expansión más fuerte de los grupos guerrilleros se ha registrado en los últimos años sobre los municipios del Eje Cafetero, buscando aumentar su presencia en esta zona estratégica por cuanto de manera obligada pasan por aquí los intercambios comerciales entre Medellín, Cali y Bogotá. (2000, p. 11)

Se reconoce la economía cafetera como factor regional, que territorialmente impone prácticas y modelos de movilidad, justicia y relacionamiento social ligados a procesos ilegales. El auge cafetero y la posterior crisis de esta dinámica económica, abrió paso a la inmersión de actores ilegales en el territorio, quienes, en medio de esta inestabilidad institucional, se posicionarían en ciertos lugares y epicentros poblaciones del Eje Cafetero.

Posterior a esta incursión de actores armados y de sus repertorios, se empiezan a configurar impactos y afrontamientos propios de la guerra, como lo es el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la violencia social. Se configuran en el Eje Cafetero nuevas olas migratorias derivadas de estas prácticas violentas en crecimiento.

Así mismo Castrillón afirma que:

El salto entre 1999 y 2000 es dramático: los desplazados de 2000 que llegan a Caldas, Quindío y Risaralda, y sobre todo a sus capitales, superan en más de siete veces la suma de los años anteriores. Mientras en seis años (1994–final de 1999) 790 desplazados fueron recibidos en estos departamentos, en los cuatro años siguientes, hasta final de 2003, sumaron 40.877. (2002, p.3)

No solo el desplazamiento, los reasentamientos urbanos y la precarización de la vida en el campo, fueron efectos propios de la guerra en la región, también se configuran otras formas de violencia como los asesinatos selectivos y el recrudecimiento de la violencia armada fundamentalmente en escenarios rurales.

Patiño y Valencia plantean también que:

En la complejidad del conflicto interno en Caldas se entrecruzan variables, actores, situaciones y lógicas particulares de articulación, que dibujan la cartografía de éste y registran hoy la lucha por el control territorial y social entre los actores armados para y contra estatales. De una parte, se identifica la acción militar de las FARC, que, con una trayectoria de cooptación de campesinos pobres, aprovecha las condiciones derivadas del empobrecimiento provocado por la crisis cafetera para desplegar estrategias de expansión. Y, por otra, las autodefensas, asentadas en la zona ganadera del oriente del departamento, desarrollan acciones dirigidas a contrarrestar la expansión guerrillera y a “limpiar” los territorios supuestamente vinculados con la organización insurgente. En este marco, se perfila una redefinición del control territorial: mientras el occidente es zona de guerrilla y avance de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, el oriente es zona de las AUC y avance de la guerrilla. (2005, p. 105)

La territorialización del conflicto armado, en el marco regional de Caldas particularmente, denota cómo las divisiones político administrativas no responden a las lógicas propias de la

confrontación, es decir, las fronteras regionales, departamentales y locales se vuelven porosas en la dinamización de la guerra. El Eje Cafetero, y Caldas en este marco, denotan esta lógica territorial en la cual se dan procesos de violencia armada desde la movilidad y prácticas de los actores en confrontación, es decir, la guerra asume múltiples facetas de expansión, crecimiento y reposicionamiento en el marco de las dinámicas regionales en disputa, que pueden incluir, desde intereses económicos, hasta dinámicas de persecución o posicionamiento político.

Este primer eje de violencia regional está anclado a las expresiones activas del conflicto armado en la región y en las cabeceras municipales. Si bien existe una tesis replicada por muchos actores del bajo impacto del conflicto armado en el Eje Cafetero, lo mencionado anteriormente da cuenta de cómo sí se presentaron y se siguen dando formas de violencia derivadas del conflicto. Manizales, no ajena a esta situación regional, recibe impactos directos e indirectos de las dinámicas de violencia mencionadas.

La influencia del narcotráfico y la ilegalidad

Las prácticas propias del narcotráfico han estado enmarcadas en todo el territorio nacional, puesto que los grandes carteles han tenido presencia en múltiples zonas, no exclusivamente en la región cafetera, sin embargo, si se puede denotar ciertas expresiones propias del narcotráfico que tuvieron presencia a nivel regional. Estas expresiones son derivadas fundamentalmente de la influencia de los carteles de la droga del Magdalena Medio y del Norte del Valle, quienes encontraron en ciudades intermedias como Pereira, Armenia y Manizales, espacios propicios para la comercialización de estupefacientes y lugares de co-habitabilidad de capos o mandos medios de estas estructuras.

Después de los años noventa, las ciudades capitales del Eje Cafetero, en proporciones y contextos distintos, fueron receptoras

de dineros y estructuras ligadas al tráfico de estupefacientes, ya sea bajo la modalidad de lavado de activos o en la comercialización de sustancias psicoactivas.

En el año 2016 fueron incautados por la policía nacional 720 kilos de marihuana prensada en la ciudad de Manizales, en inmediaciones de la quebrada Olivares en el perímetro urbano de la ciudad. Esta cantidad de droga incautada da cuenta de una dinámica de comercialización a gran escala en la ciudad, como lo señalan las autoridades policiales, a través de redes de microtráfico de presencia activa en ciertas zonas y comunas.

Existen en la región cafetera espacios que se podrían denominar “zonas grises o espacios liminales” como fronteras porosas y difusas de acciones ilícitas que se entremezclan con actores o acciones lícitas, a través de escenarios de convergencia. Marulanda menciona:

La noción de liminalidad nos permite referir los espacios y las redes de relaciones en las que se produce un entrecruzamiento entre lo formalmente prohibido y lo realmente permitido, al punto que la separación taxativa entre ambas dimensiones sociales lo ilegal y lo legal se vuelve completamente imposible. (2006, p. 24)

En el marco regional, esta relación liminal está condicionada a la historia del proceso de narcotráfico cuyas expresiones legales se encontraban establecidas en economías formales, lo que hizo más complejo el proceso de seguimiento e identificación de actores ilegales en las dinámicas legales.

Estos casos de narcotráfico y los diferentes procesos de extinción de dominio de bienes muebles e inmuebles en la ciudad, reafirman la presencia de estas actividades en el contexto urbano y su relación con economías ilegales regionales y nacionales. No obstante, es importante distinguir entre las prácticas violentas derivadas de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, de los

procesos de organización y reivindicación del consumo consciente de algunas expresiones sociales de la ciudad.

Actividades ilícitas, tales como el narcotráfico y el lavado de activos, son generadores permanentes de violencia, tanto en las tasas de homicidio, como en otras expresiones delictivas, como la extorsión, la expansión de pandillas y fronteras invisibles entre las mismas, y el crecimiento de otras problemáticas violentas como el mismo consumo inducido de estupefacientes.

La tensión cultural regional

En el marco regional existe un elemento generador de violencia cultural que, si bien es fluctuante y ha variado en los últimos años, nunca ha dejado de percibirse especialmente en ciertos grupos poblacionales. Este tipo de violencia es la generada por los regionalismos radicales, que expresan formas de rechazo permanente entre una región y otra. Aunque no es un fenómeno exclusivo de la región cafetera, sí evidenciamos cómo en esta región se expresa abiertamente entre la “rivalidad” histórica de ciudades como Manizales y Pereira.

Esta naturalización de la tensión entre ambas ciudades, ha permeado esferas políticas, económicas y sociales, donde se han visto involucrados regionalismos que abiertamente han planteado la existencia de la división territorial. Analizar el impacto cultural de este fenómeno no es simple, pues las variables de medición implicarían un estudio de caso en profundidad, empero, sí se quieren referenciar algunos episodios específicos en los cuales esta división regional se ha convertido en violencia. Especialmente se logran referenciar algunos conflictos de mayor exposición mediática.

Violencia física y simbólica entre las denominadas “barras de fútbol”, en las cuales la violencia se extiende en radicalismos territoriales que centran su tensión en las diferencias regionales.

La rivalidad regional, extendida en las barras de fútbol, es una expresión tácita de las formas de violencia que se entroncan en las diferencias regionales y la no aceptación de la diversidad territorial. Esta violencia entre barras de fútbol de las tres ciudades capitales, ha desencadenado, desde confrontaciones públicas a las afueras de los estadios, hasta asesinatos selectivos o aleatorios a rivales de barra en zonas periféricas de las ciudades.

Este fenómeno tiene una naturalización particular anclada a expresiones de violencia verbal o simbólica en la cual existen permanentes amenazas de muerte e incitaciones de violencia entre barras como mecanismos de relacionamiento regional. Como lo afirma Galtung:

La violencia cultural pueda ser utilizada para legitimar la violencia en su forma directa o estructural. La violencia simbólica introducida en una cultura no mata ni mutila como la violencia directa o utiliza la explotación como la violencia incorporada en una estructura. Sin embargo, se utiliza para legitimar ambas o una de ellas. (1997, p. 147)

Procesos de tensión en esferas políticas y económicas, han sido otra forma de violencia denotada a nivel regional. Estas expresiones de violencia emergen en ciertos momentos en los cuales se hace referencia directa a la marca diferenciadora de una región o ciudad sobre otra, campañas de gremios buscando calificar o descalificar la economía vecina, o campañas políticas que referencian la supremacía de una ciudad sobre otra, dan cuenta de esta situación. Si bien es cierto que son procesos comunicativos que buscan fortalecer las lógicas locales por encima de la integración regional, lo que transversaliza este fenómeno comunicativo es la negación territorial o la imposición de valores locales diferenciales.

En los discursos cotidianos, públicos y privados, es recurrente escuchar retóricas confrontacionales o de supremacía de una región sobre otra, lo que a largo plazo sigue alimentado esta tensión cultural y gestando nuevas violencias.

Esta característica de la tensión cultural regional, aunque no es generalizada ni es tendencial, lamentablemente sí ha afectado en algunos episodios las dinámicas de violencia en la ciudad, y en el caso, por ejemplo, de la violencia emanada de la tensión de barras de fútbol, estas prácticas de agresiones se han naturalizado en ciertos escenarios y momentos específicos, sin evidenciarse variaciones o procesos de conciliación entre las partes.

Los factores regionales incidentes en las prácticas violentas propias de una ciudad como Manizales, pueden ser variados y amplios, empero mencionamos dos fenómenos recurrentes, el primero de las actividades ilícitas de impacto regional, derivados de las estadísticas institucionales, y el segundo de la tensión regional evidenciado en el diálogo local, con las comunidades y actores abordados.

Es indispensable pensar que las prácticas violentas a nivel regional están ligadas a dinámicas territoriales de negación, exclusión o incapacidad de construir lógicas de integración entre las mismas localidades.

Esto no implica negar los esfuerzos de diversos actores en procesos de inclusión regional, sin embargo, hace falta aportar más en la construcción de escenarios de reconciliación y convivencia territorial desde lugares comunes, tanto desde las instituciones como desde la ciudadanía en general. Esta convivencia debe propender porque las tensiones culturales regionales disminuyan y porque la atención a problemáticas estructurales tales como la criminalidad tenga abordajes macro regionales.

Contexto local

Manizales en cifras y realidades: hacia una emergencia social

Las cifras en Manizales son preocupantes, no solo por los indicadores mencionados, sino por la permanencia de sus elevados niveles, ya que en comparación con otros años los indicadores varían muy poco en sus cifras.

Esta realidad de la ciudad conlleva a analizar el llamado a una Emergencia social, derivada de la permanencia y variación leve de las cifras de violencia en la ciudad. Si bien existen variaciones significativas en algunos aspectos, en general Manizales sigue siendo una ciudad que en percepción ciudadana es segura, no obstante, esta percepción positiva contrasta con los datos reales de las cifras de convivencia e intolerancia reportados por las autoridades, que denotan grandes dificultades al respecto.

El enunciar una Emergencia social, conlleva a reconocer los aspectos positivos y negativos que transversalizan la realidad de la ciudad, pero desde una perspectiva autocrítica en la cual se asuman estructuralmente las casualidades de la actual situación y se realice un ejercicio colectivo de caracterización y transformación de esta realidad.

Para analizar esta realidad, ubicamos algunos factores de análisis específicos, que pueden ampliar el marco analítico cuantitativo y cualitativo de estos fenómenos de violencia.

Factores estructurantes de la violencia

o Intolerancia social y prácticas culturales

En Manizales, las cifras de intolerancia social, de riñas, de conflictos comunales y vecinales entre la población o actos de agresión ciudadana, se han convertido en un referente permanente

en las cifras de violencia en los últimos años. La línea 123 de la Policía registra un promedio de más de 300 quejas atendidas por fin de semana en la ciudad, de las cuales en su mayoría son reportes por intolerancia social, ya sea familiar, interpersonal o vecinal.

Los datos anuales de denuncias por violencia interpersonal y violencia intrafamiliar, en correlación al año anterior son:

- o Violencia interpersonal, casos 2017 (1.001), casos 2016 (1.243).

- o Violencia intrafamiliar, casos 2017 (504), casos 2016 (560).

Estas cifras se han sostenido en los últimos años, pues, aunque las estadísticas varían levemente en datos, es indiscutible la magnitud de la problemática mencionada por la cantidad de casos, para una ciudad como Manizales. La ciudad presenta en esta categoría de la intolerancia social datos alarmantes, que ponen en un primer plano las formas de violencia cultural que se gestan entre los ciudadanos, los cuales en múltiples episodios priorizan la violencia como medio de canalización de conflictos.

Estas formas de violencia ligadas a prácticas sociales o culturales, referenciadas por Blair (2009), se registran en múltiples escenarios cotidianos, los cuales cuando desbordan su impacto son registrados o denunciados ante las autoridades pertinentes. Se debe reconocer que las cifras consolidadas son de los casos denunciados ante Medicina Legal o Policía Nacional, pero muchos de estos mismos episodios no son expuestos ante las autoridades, por lo cual existe un subregistro no determinado de formas de violencia desde la intolerancia social.

Dicha situación es expresada permanentemente en las comunidades, quienes enuncian cómo en lo cotidiano formas de violencia social, como el maltrato infantil o el maltrato contra la mujer, en múltiples ocasiones no se denuncian y si bien son conocidas por personas de la comunidad, no existe exposición pública de los episodios ante las autoridades.

Existe una idea del respeto a la intimidad ajena, en el cual algunos ciudadanos al no querer involucrarse en conflictos de otros, conocen de los episodios, pero no interfieren o denuncian la situación.

Este imaginario de respeto ajeno, en algunas ocasiones está relacionado con formas de naturalización de la violencia en la cual se denotan episodios de agresión a terceros o incluso a personas con vínculos sociales o sanguíneos más cercanos, pero que se minimiza la acción o se termina justificando la misma, por razones especulativas.

Es allí donde se reconocen, desde el mismo lenguaje, frases de presencia cotidiana que aluden a la razón de las acciones, por ejemplo, se menciona por parte de un actor entrevistado ante un episodio de violencia lo siguiente: “yo no estoy de acuerdo, pero por algo le pegaron”³¹. Esto es un juego de argumentaciones contradictorias donde quien la menciona toma aparente distancia del acto violento, pero a su vez ubica a la víctima de las agresiones como posibles causantes de la misma.

En este sentido, Arón plantea que:

En el abordaje de las distintas formas de violencia (intrafamiliar, interpersonal, de grupos, política, etc.), se ha detectado un conjunto de creencias que justifican el sometimiento del otro en circunstancias de transgredir y vulnerar su bienestar, creencias asociadas a una cultura patriarcal y que han tenido como consecuencia la reproducción y ‘la invisibilización’ de la violencia en nuestra sociedad. (2000, p. 34)

31 En el desarrollo de los grupos focales en diversos barrios de Manizales, se encontraron varias enunciacines de esta naturaleza, las cuales aluden a la existencia de motivos desconocidos, pero que posiblemente justifican las acciones violentas.

Esta permeabilidad de la violencia en algunas esferas sociales, igualmente tiene un componente intersubjetivo importante, en el cual se evidencian casos de maltrato consentido a nivel familiar o social. La violencia social consentida, implica formas de agresión en los cuales los actores directamente involucrados aceptan este tipo de acciones o toman distancia de las mismas siendo conscientes del acto violento. En la violencia social consentida, se enuncian múltiples justificaciones que validan el acto violento por parte de las víctimas o los testigos indirectos de estos episodios.

Un ejemplo de ellos son algunos casos encontrados de maltrato a la mujer, que después de interponer denuncias ante sus agresores, las mismas víctimas posteriormente levanten la denuncia bajo consentimiento personal, aludiendo a justificaciones del episodio o promesas de no recurrencia del mismo.

Este fenómeno no solo se presenta ante los casos denunciados, sino en los mismos episodios de violencia no denunciados, en los cuales un agresor violenta a una víctima familia³², en ocasiones en presencia de un tercero, y el episodio no trasciende de estos núcleos cercanos, validando la forma de violencia por expresar alguna justificación del agresor, que va desde la ira o rabia extrema desbordada no intencional, hasta la necesidad de correctivos violentos ante acciones indebidas, estas explicaciones se convierten en dispositivos que justifican la violencia y no reducen la posibilidad de recurrencia, legitimando la misma.

Otra forma de violencia social evidenciada en los planos estadísticos, es la tasa de homicidios en la ciudad, la cual expresa su mayor porcentualidad en la intolerancia social o actos asociados a esta.

32 En el desarrollo del trabajo de campo era frecuente escuchar que este tipo de acciones se presentaron, la mayoría de casos, en menores o mujeres, que terminan siendo población vulnerable ante estas realidades.

Tabla 2. Cuadro de causas de homicidio en Manizales 2017. (Fuente: Observatorio de delito Sijin 2018 - Policía Nacional).

| | | |
|--------------------------|----|------|
| Ajuste ilegal de cuentas | 6 | 7% |
| Culposo | 1 | 1% |
| Intolerancia social | 50 | 67% |
| Por hurtar | 1 | 1% |
| Por hurtarle | 3 | 4% |
| Problemas familiares | 2 | 3% |
| Problemas pasionales | 3 | 4% |
| Procedimiento policial | 1 | 1% |
| Venganza | 9 | 12% |
| Total | 76 | 100% |

En el cuadro anterior se ve la relación de homicidios por causalidad social-cultural del 79% (intolerancia social y venganza³³), mientras que los homicidios por actos delictivos es de un 13%.

A diferencia de otros contextos a nivel nacional, las muertes en Manizales, en un porcentaje muy elevado, son derivadas de fenómenos de intolerancia social, donde las riñas callejeras o

³³ Se ubica la “venganza” en la categoría de intolerancia social, ya que esta está referenciada en actos premeditados de agresión a terceros, por razones de conflictos sociales no resueltos. Igualmente sucede en algunos casos de problemas familiares y problemas pasionales, no obstante, no se presenta una causalidad de intolerancia en todos los actos por eso no se suman estos porcentajes.

los conflictos de convivencia se vuelven una constante en la causalidad de homicidios en la ciudad. Esto implica plantear que en Manizales se presentan más homicidios por intolerancia que por causas delictivas.

En lo evidenciado en las estadísticas y en el ejercicio de campo en diversos contextos urbanos, la tramitación de diferencias por medios violentos se convierte en constantes dentro de las comunidades, especialmente de las más vulnerables, lo que incide en esta causalidad en la tasa de homicidio tan elevada y en los niveles de violencia social permanentes en este campo.

Si bien, como se enunció anteriormente, estamos ante una sociedad que tramita muchas de sus diferencias a través de la violencia, Manizales responde a niveles muy elevados de intolerancia evidenciados en esta tasa de homicidio, pero también en la cantidad de riñas, peleas y conflictos sociales que se presentan en el contexto urbano, muchas de ellas que no son fácilmente rastreables, medibles y mucho menos analizables.

o Delitos sexuales

Es preocupante la situación de los delitos sexuales en Manizales, como ya se referenció, estos aumentaron 55 casos más en el 2017, tomando en cuenta que estos delitos son los que se denunciaron y fueron sometidos a exámenes médico legales por parte de Medicina Legal.

Exámenes médico legales delito sexual para el año 2016 se presentaron 226 casos, para el año 2017 se presentaron 281 casos.

En esta cifra existe, como en otras formas de violencia, una gran cantidad de denuncias no hechas. Las acciones violentas denominadas abusos sexuales, tienen implicaciones físicas directas, pero a su vez tienen una enorme implicación psicológica y social. La agresión sexual genera respuestas sociales impredecibles

tanto del afectado/a como de sus entornos inmediatos, donde lamentablemente encontramos episodios enunciados en los cuales se asume una corresponsabilidad del agredido por su forma de vestir o por su permanencia en lugares solitarios propensos a estos ataques.

En el trabajo de campo, encontramos que socialmente algunas personas terminan justificando la agresión sexual o convalidando su naturaleza causal a razones que inculpan a la víctima, como si fuera un argumento de susceptibilidad a tener en cuenta para la agresión. Se encontraron frases en la población entrevistada, como “es que uno de mujer no puede andar sola por lugares tan oscuros, como esa cuadra X, y más tarde de la noche”, haciendo referencia directa a una agresión sexual a una mujer en una zona boscosa de un barrio de la ciudad, y otra de un vecino de un sector que mencionó “es que esas muchachitas salen mostrando todo, casi empelotas”, refiriéndose a una denuncia de una joven de ser agredida sexualmente por un conocido en una fiesta de un barrio de la ciudad.

En términos culturales, es alarmante que la violencia sexual tenga expresiones de legitimidad social y de naturalización cotidiana, que no permitan analizar la dimensión de estas agresiones y que se conviertan en un limitante a la hora de denunciar y de atender estos episodios.

A este factor se le agrega la característica de que en múltiples ocasiones las agresiones sexuales son cometidas por personas familiares o sociales cercanas a las víctimas, lo que implica prácticas culturales de violencia física en las cuales se desnaturalizan los vínculos sociales o consanguíneos y se configuran agresiones de este tipo.

Finalmente, es preocupante la dificultad del acceso y desarrollo de rutas institucionales de atención a víctimas de violencia sexual, fundamentalmente referidas a la ausencia de estrategias de

prevención y atención, además del déficit de recursos humanos y financieros para el abordaje de esta problemática. Diversas instituciones como Medicina Legal o algunas Comisarías de Familia, mencionan la dificultad de trabajo por falta de recursos en este aspecto.

Por un lado, es preocupante el aumento porcentual de estos delitos y la naturalización social de los mismos, pero más complejo aun es la ausencia de análisis causales de esta tipología violenta. Si bien existen múltiples reportes de denuncias de agresiones sexuales y desde algunas esferas institucionales y sociales se promueve la prevención en la violencia sexual, no se encontraron estudios analíticos que abordasen la causalidad estructural de estas prácticas en la ciudad.

Esta ausencia de análisis estructurales de la violencia sexual, no permiten abordar el fenómeno integralmente y por ende intervenir de una manera estructural la problemática, reconociendo las implicaciones sociales en términos de vulneración de derechos, la necesidad de mejorar las rutas de atención evitando la re-victimización y la ausencia de estrategias culturales en términos de transformación cotidiana de las prácticas habitadas de maltrato.

Edades y ciclo vital en violencia

Los rangos etarios en la tasa de homicidio en la ciudad ameritan una atención especial, al evidenciar cómo la mayoría de homicidios se presentan en jóvenes menores de 18 años y en rangos delimitados. Esta realidad implica reconocer la ausencia de proyectos de vida, lo que implica que sea la población juvenil un actor vulnerable en los indicadores de violencia.

La situación juvenil es preocupante por factores de vulnerabilidad permanentes, como: del total de homicidios en la ciudad durante 2016, el 14% del rango etario de víctimas se

concentra en jóvenes entre 15 y 17 años, lo que implica que esta población es una de las más vulneradas en la garantía del derecho a la vida, convirtiéndose en un rango tan delimitado de dos años una de las principales víctimas de la violencia. Es importante revisar el desarrollo psicosocial de este rango etario, puesto que es precisamente el momento en el cual muchos de los jóvenes terminan ciclos escolares y empiezan ciclos laborales en relación a sus condiciones de vida. Esta etapa de desarrollo juvenil está mediada por definiciones subjetivas en relación al presente y el futuro, lo que necesariamente marca la disposición de algunos jóvenes para asumir riesgos vitales y desprenderse de filiaciones sociales.

Igualmente sucede en el 2017, donde el rango mayoritario de homicidios es en las edades entre 20 y 24 años con un 27%, lo que implica que siguen siendo jóvenes los actores más vulnerables en el contexto homicida local.

Niveles de escolarización en sectores específicos, si bien la región y el país ha mejorado sus niveles de cobertura escolar, esta realidad encuentra limitantes en relación a los índices de deserción escolar y la ausencia de procesos de seguimiento institucional a niños, adolescentes y jóvenes que quedan por fuera del modelo educativo. El modelo escolar no tiene estrategias de acompañamiento y modelos de formación alternativos a la población que está por fuera de los circuitos institucionales.

Desarrollo de grupos ilegales con población adolescente y juvenil; las edades tempranas, menores a los 17 años coinciden con los límites de la penalidad jurídica, lo que hace que sean una población deseable para los grupos armados, pues su actuar delictivo tendría menos implicaciones judiciales.

El problema no es la vulnerabilidad, es la ausencia de proyectos de vida que puedan superar las expectativas sociales, económicas y culturales que les abren los grupos armados, quienes articulan

población juvenil con vínculos culturales amplios y garantías económicas particulares. La población delictiva tiene niveles de formación técnica que se presenta de manera libre y cotidianidad a los jóvenes, quienes desarrollan capacidades delictivas con las cuales pueden insertarse en el universo del crimen organizado, sin mayores limitaciones sociales.

Todos estos factores responden a realidades sociales, económicas y culturales, no obstante, se evidencia una crisis en proyectos de vida para jóvenes, puesto que un proyecto estructural de vida no implica la satisfacción inmediata de una necesidad, sino la proyección estructural de alternativas de existencia, relacionadas con sus expectativas, oportunidades y emotividades.

Igualmente, es innegable la coexistencia de expresiones de criminalidad local, que continúan encontrando, especialmente en sectores juveniles, la población más vulnerable y propensa para su accionar e incidencia.

Si bien no solo son los jóvenes quienes están en situación de vulnerabilidad, sí se presenta como una población mayoritaria en los indicadores de violencia. Cabe resaltar que estos indicadores están ligados igualmente a los índices de desigualdad social de ciudades como Manizales, que presenta en Necesidades Básicas Insatisfechas (diciembre 2016, DANE) Sector urbano 8,93%, Sector rural 23,59%, Total en Manizales 9,97%, cifra que puede ser leída como baja, pero para una ciudad intermedia como Manizales es de analizar en profundidad.

Suicidios

En relación a la situación de suicidio en la ciudad, las cifras son bastante complejas, en el 2016 se reportaron 22 casos, mientras que durante el 2017 se reportaron 35 casos, lo que implica que hay 13 casos más que el año anterior, 59% de incremento (Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018).

En el mes de enero de 2017 se reportó un caso de suicidio en Manizales, en el mismo periodo en enero del 2018, ya van reportados 3 casos en la ciudad, lo que implica que ha sido permanente el aumento en esta tasa y que en comparación con otros momentos estamos en una etapa más compleja. En este panorama encontramos algunos elementos a analizar para la ciudad.

El incremento de la tasa de suicidio es tendencial y se podría considerar una emergencia epidémica al respecto, lo que implica reconocer el abordaje psicosocial de las familias y el acompañamiento de la población que intenta suicidarse y no lo logra. Dimensionar esta realidad obliga a desvelar el nivel estructural del fenómeno en la ciudad.

Revisar el aumento de casos en población escolarizada y menores de edad, puesto que el fenómeno del suicidio implica políticamente reconocer cuál es la población vulnerable y por qué motivos aumentan los casos en esta. El caso de tener más escolares en etapa secundaria y universitaria, además de más menores de edad con intentos de suicidio, da cuenta del posible aumento de niveles de insatisfacción existencial, ausencia de proyectos de vida y políticas de acompañamiento psicosocial a esta población.

Los patrones en el comportamiento suicida se remiten en diversos casos a problemas sentimentales, dificultades emocionales y depresiones con múltiples causas. Esta realidad amerita evaluar la situación de salud mental y riesgos psicosociales en la ciudadanía en general. En la ciudad, en algunas comunidades no se encuentran políticas de atención preventiva o intervención, ligadas a la salud mental.

Se encontraron diversas campañas y líneas de atención a población vulnerable, pero estos conductos han sido insuficientes en personal humano y en el diseño de políticas de prevención y atención de estos episodios.

Se reconoce que existen diversas causalidades explicativas del suicidio, pero no se encontraron a nivel local, análisis estructurales del fenómeno, abordando sus causalidades y dimensiones sociales, económicas y culturales. Se levantan informes estadísticos y algunos análisis específicos de naturaleza descriptiva sobre la tasa de suicidio, pero es necesario abordar de manera estructural el fenómeno y correlacionar las variables que lo componen.

Zonificación Urbana

Figura 10. Mapa de homicidios en Manizales 2017. (Fuente: Mapa, I Informe Observatorio Violencia y Paz Manizales 2017).

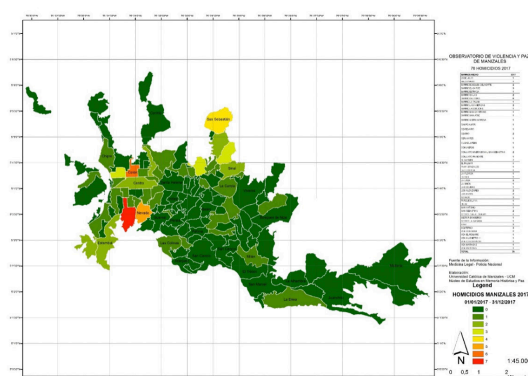
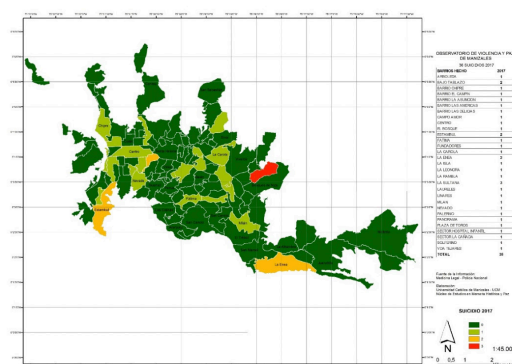


Figura 11. Mapa de suicidios Manizales 2017. (Fuente: Mapa, I Informe Observatorio Violencia y Paz Manizales 2017).



La presente zonificación da cuenta de la concentración durante el 2017 de zonas rojas en los picos de homicidios y de suicidio respectivamente. En el caso de los homicidios, es de referenciar particularmente la situación del barrio El Carmen, cuya dimensión territorial no es muy amplia y cuya tasa de homicidios en 2016 fue baja, no obstante, la tasa de homicidios en 2017 fue a nivel espacial de barrios la más alta en la ciudad.

En el caso de las comunas la comuna ciudadela del Norte también se evidenció como la que concentró mayores niveles de homicidio en la ciudad, especialmente en barrios como San Sebastián, Solferino y El Caribe. Cabe resaltar que, si bien esta es la comuna más amplia de la ciudad, igualmente es la comuna de mayor intervención inter-institucional en el contexto urbano.

Perspectivas de la violencia en el 2018

En el mes de enero del 2018, se reportaron 12 casos de homicidios en la ciudad, cifra alarmante si se toma en cuenta que es el doble de los presentados en el 2017. Este fenómeno de aumento de homicidios tiene graves implicaciones, como el resurgimiento del microtráfico como forma causante de violencia homicida en la ciudad. Según lo reportado por actores sociales en comunidades como el barrio Solferino, donde en una semana se presentaron 3 homicidios, la motivación de estos casos es conflicto por tráfico de estupefacientes.

Cerrando febrero, ya se han reportado según la Policía Nacional 17 homicidios, 8 casos más en comparación con el mismo periodo el año anterior donde se registraron 9 homicidios. Al 8 de abril de 2018 se han presentado en Manizales 26 homicidios, cifra preocupante si se tiene en cuenta que el consolidado de homicidios de enero a abril, en 2017, fueron 15 homicidios según Medicina Legal, y ya van 26 casos a solo 9 días de abril del 2018.

Esta situación se hace más compleja tomando en cuenta que se desarrolló un homicidio múltiple en la vereda Morrogacho de 4 personas, asesinadas bajo la modalidad de tiros de gracia. Este caso, según hipótesis de la Policía Nacional, sería por temas asociados a microtráfico, lo más relevante es que por el *modus operandi* de la acción efectivamente responde a una acción delictiva organizada.

A este alarmante problema le sumamos las cifras permanentes de violencia urbana e intolerancia, que en la ciudad no bajan y tiene picos significativos donde aparentemente no existen motivaciones especiales para incrementar esta violencia.

Muestra de ello es el registro de agresiones con arma blanca, tipo cuchillo, el sábado 03 de marzo, donde se reportaron en centros asistenciales de la Manizales 15 casos, una cifra muy elevada para un solo día de registro y sin ninguna festividad³⁴ de por medio.

Según información de un medio local, sobre los últimos datos de violencia urbana, se menciona (periódico La Patria, 27 de febrero).

Entre el 24 de enero y el lunes pasado, 66 personas ingresaron heridas con armas blancas o de fuego a los hospitales, tras disputas familiares, riñas callejeras o intentos de atraco. -Me miró feo, se acercó y me apuñaló-. Así narró un estudiante de grado de un colegio de Manizales el momento en que un compañero, de 17 años, lo lesionó en el abdomen, dentro de la institución, durante el receso de la mañana de ayer- En una riña dentro de una casa en el barrio Samaria, hubo dos heridos. Un hombre, de 25 años, peleó con su hermano, de 22. El primero recibió siete puñaladas, el otro, tres.

34 La mención a las festividades, es fundamentalmente al hecho de que, en épocas festivas y días especiales de celebración, como partidos de fútbol, día de la madre u otras festividades se aumentan los indicadores de violencia en los contextos urbanos. Una de las hipótesis preponderantes al respecto es el aumento de violencia derivada del aumento del consumo del alcohol y otras sustancias psicoactivas en estas celebraciones.

Este marco de referencia en relación a prácticas intolerantes permanentes en la ciudad, que elevan las tasas de violencia, finalizando abril del 2018 se reportó un caso de violencia intrafamiliar en el cual, en medio de una disputa entre un hombre y una mujer, quienes se agreden mutuamente, el hombre termina apuñalando a un niño de 9 años, hijo de la mujer que estaba discutiendo.

Este tipo de acciones dan cuenta de las dinámicas socio-culturales violentas en la ciudad en lo transcurrido del año, que generan afectaciones diversas, tanto a nivel familiar como psicosocial, contra niños en edades tempranas, entre otras.

Igualmente sucede con los indicadores de violencia ligada a entornos delictivos que durante este primer trimestre también se encuentran en aumento sin mucha claridad de su naturaleza local. Aunque se mencionan diversas versiones sobre los grupos armados en reordenamiento local, es evidente que las formas de operar y tipos de violencia urbana presentados, dan cuenta de disputas territoriales en las lógicas criminales.

Este marco de violencia del primer trimestre del 2018, es preocupante en su carácter social y estructural, no existen indicios claros sobre la razón del aumento de este pico de violencia trimestral, en el caso de la intolerancia social esta sigue siendo una constante generadora de violencia urbana, especialmente con poblaciones vulnerables.

Ya en el marco de otras prácticas violentas derivadas de escenarios criminógenos, se gestan múltiples especulaciones en diversos sectores de la ciudad, sobre la presencia y activación de tensiones entre grupos delictivos de mediano y gran alcance en procesos de reorganización territorial. Allí se hace referencia a estructuras organizadas regionales y nacionales, quienes estarían teniendo vínculos territoriales a través de bandas locales.

Conclusiones

Entender fenómenos como la violencia urbana, la violencia homicida o la violencia socio-cultural, implica reconocer que todas estas expresiones tienen elementos articuladores directos y que en contextos como el colombiano existen múltiples factores que estructuran las expresiones de violencia en general.

La violencia, en ciudades intermedias como Manizales, implica caracterizar estas relaciones multifactoriales en las diversas escalas territoriales, tanto en su contexto nacional, como regional y local. La violencia no emerge como un proceso ínsito carente de relaciones estructurantes externas, por el contrario, se evidencia como un cúmulo de factores correlacionales constituyentes.

Manizales configura esas correlaciones nacionales, regionales y locales en diversas expresiones de violencia urbana de distinta naturaleza, delincuencial, social, política, etc., no obstante, sí se encuentran algunos patrones estructurales en las expresiones de violencia.

Inicialmente, y el más recurrente, es el patrón de la violencia por intolerancia social, esta intolerancia no se reduce a conflictos sociales vecinales o familiares mínimos, sino que implica vulneraciones, carencias y conflictos culturales que terminan gestando múltiples formas violentas. Se evidencia en el caso de Manizales, que factores como el desarraigo social, las carencias económicas y la falta de oportunidades en la constitución de proyectos de vida en algunos grupos poblacionales, como elementos generadores de violencias múltiples en la ciudad, denotando esto en la elevada tasa de homicidios por “intolerancia social” o los indicadores de ciclos vitales afectados en fenómenos violentos, concentrados en adolescentes.

Además de este factor de violencia, derivado de elementos sociales, es necesario reconocer cómo el 2018 implicó el resurgimiento de otras formas de violencia, como la violencia delictiva. Si bien son diversos grupos y actores los que elevan la cifra de delitos en la ciudad, y los móviles varían en diversas circunstancias, el 2018 demostró estadísticamente el aumento de acciones violentas ligadas a grupos delincuenciales simples y organizados, lo que implicaría revisar en profundidad las relaciones de estas expresiones delictivas con estructuras locales, regionales y nacionales.

El presente documento da cuenta de un diagnóstico genérico de la violencia en Manizales, buscando encontrar relaciones entre sus factores estructurantes e hilando correlaciones locales, regionales y nacionales que establezcan el desarrollo de esta violencia en la ciudad. En tal virtud las características de la violencia y en particular de las prácticas sociales violentas en Manizales nos abre el foco de análisis en la configuración de expresiones violentas interdependientes y dinámicas, que constituyen algunos patrones comunes, como la intolerancia social y ponen en prospección de riesgo creciente otros fenómenos violentos como la delincuencia simple y organizada.

Grandes e importantes retos son reconocidos para la sociedad de Manizales, como lo señala Pinheiro (2006) en su obra *Acabar con la violencia contra los niños, niñas y adolescentes*, es necesario dar lugar a una política pública educativa dirigida a docentes, familias, niños y jóvenes que permita cambiar la mirada hacia la realidad social, una política que represente la acción política de los sujetos para la construcción de escenarios sociales de mayor tolerancia, concienciación y construcción de paz.

La transformación no es fácil, sin embargo, los principios de respeto, libertad y corresponsabilidad deben permitir tejer un puente que posibilite reconstruir los valores y principios que necesitan quienes comparten un mismo espacio social.

Pensar en los cambios que necesita realizar la sociedad implica, parafraseando a Patiño:

Pensar la apertura sobre situaciones nuevas y acontecimientos inéditos, significa abrirnos a diversos estados posibles de resolución y cambiar las reglas de juego de los sistemas que enjaulan estructuralmente al sujeto. La apertura nos mantiene en movimiento, recurre a la profundización interactuante del conocimiento dada la necesidad de emerger aquello que estaba oculto o negado. Por tanto, el concepto de apertura reintroduce la perspectiva del sujeto como una “figura de lo pensable” y posible de ser potenciado en la diversidad y en la diferenciación. (2017, p.59)

Las formas de relacionamiento en el contexto social ante el incremento de formas, expresiones y prácticas sociales violentas relacionadas con factores como la intolerancia social, obligan a pensar en la necesidad de resignificar las relaciones sociales, reconociendo, por ejemplo, diversas apuestas, entre ellas, la perspectiva de abordaje propuesta por González, Flórez, y Rodríguez, quienes afirman que:

La relación ciudadanía/civilidad construye interacciones, interdependencias y emergencias de lo público, sobre lo público, para lo público y acerca de lo público: la acción política ciudadana produce y es producida por las relaciones de reconocimiento mediante el trámite no violento de conflictos y un «cuidado del otro» actualizado que trasciende las buenas maneras, la cortesía y el orden para ocuparse del otro y de lo otro, desde el reconocimiento y la acción combinadas. (2013, p. 246)

Desde el escenario de transformación social que representa la Escuela, es posible definir importantes retos que desde la educación se deben promover en favor de las relaciones interpersonales, el agenciamiento de los derechos y la representación de las libertades. La escuela, entonces, representa el escenario posible para el

cambio, el reconocimiento de los desafíos que presenta el entorno socio cultural más próximo y por supuesto la realidad violenta de la ciudad, que como se planteó en la presente investigación, evidencia a la población juvenil como una población que presenta importantes riesgos marcados por la insana convivencia, la intolerancia social, la reproducción de las violencias y la falta también de oportunidades. Por ello, la escuela, como lo afirman Ospina y Ospina (2019) será necesario que:

El ejercicio de la convivencia en el contexto escolar y toda comunidad educativa, pueda transitar hacia procesos de cambio que favorezcan el desarrollo de una nueva cultura que implique la superación de la pasividad de los actores, en el cambio de la realidad y del problema de las violencias, logrando contribuir desde el desarrollo de acciones colectivas a la mitigación y el desescalonamiento de la violencia a partir de procesos y prácticas de diálogo, concertación y acuerdo que permitan aprender y apropiar nuevas formas de resolución pacífica de los conflictos. (2019, p. 228)

En todo caso, el papel de la formación ciudadana representa un escenario posible para la transformación de las lógicas de violencia imperantes en el contexto urbano de Manizales, en donde la corresponsabilidad y el reconocimiento del otro deben posibilitar la construcción de acciones y estrategias que medien y mitiguen el riesgo social de la reproducción de la violencia, en su diferentes formas y expresiones, en cada contexto sociocultural en el que nos encontramos inmersos.

BIBLIOGRAFÍA

Arón, A. (2000). Programa para la educación de la no violencia. *Psykhé*, 2(9), 25-39.

Barreto, I., Borja, H., Serrano, Y. & López-López, W. (2009). La legitimación como proceso en la violencia política, medios de comunicación y construcción de culturas de paz. *Universitas Psychologica*, 8 (3), 737-748.

Benjamin, W. & Zorita, E. M. (2010). *Crítica de la violencia. Literatura prohibida*, Madrid, España.

Blair Trujillo, E. (2009). Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición. *Política y cultura*, (32), 9-33.

Blanco, J. M. (2007). Violencia, acción y comunicación. *Papers: revista de sociologia*, (84), 157-166.

Castrillón, P. P. (2005). Conflictos y desplazamiento en el Gran Caldas. Red de Solidaridad Social. Unidad Territorial de Risaralda y Quindío.

Calveiro, P. (2005). Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70, Buenos Aires, Norma, 14-15.

Carrión, F. (2008). Violencia urbana: un asunto de ciudad. *EURE (Santiago)*, 34(103), 111-130. En: <https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612008000300006>

Camacho, Á. (1990). Colombia: ciudad y violencia. *Revista Foro*, (12), 22-32.

De la Paz Echeverría, M. (2006). El miedo a ser ciudad. Un análisis del espacio como elemento formativo en los modos de percibir la inseguridad. *Question*, 1 (12).

Corsi, J. (Comp.). (2003). *Maltrato y abuso en el ámbito doméstico. Fundamentos teóricos para el estudio de la violencia en las relaciones familiares*. Buenos Aires: Paidós.

Cruz, J. M. (2000). *Violencia, democracia y cultura política*. Nueva Sociedad, 167, 132-146.

Del Olmo, R. (2000). *Ciudades duras y violencia urbana*. Nueva sociedad, 167 (1-15).

Echandía Castilla, C. (2000). *El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos*. Colombia Internacional, (49-50), 117-134.

Galdames, S. & Arón, A. M. (2007). *Construcción de una escala para medir creencias legitimadoras de violencia en la población infantil*. Psyke (Santiago), 16 (1), 15-25.

Heller, A. (1998). *Sociología de la vida cotidiana* (No. 316). Ediciones Península.

Heller, A., & Rivero, Á. (1996). *Una revisión de la teoría de las necesidades*. Barcelona: Paidós.

Galtung, J., & Galtung, J. (1997). *Violencia cultural*.

Galtung, J. (2016). *La violencia: cultural, estructural y directa*. Cuadernos de estrategia, (183), 147-168.

Guber Rosana (2001). *La etnografía, método, campo y reflexividad*. Bogotá: Grupo Editorial, Norma.

González, G. C. V., Flórez, L. C. & Rodríguez, C. A. M. (2013). *Ciudadanía y civilidad en la universidad, un acercamiento de lectura a las voces de los estudiantes en la Universidad de La Salle, Colombia*. Aula, 19, 243-256.

Instituto Nacional de Medicina Legal (2016). Forensis Datos para la vida 2016. Centro de referencia nacional sobre violencia CRNV

_____. Boletín estadístico mensual 2015- 2016-2017-2018. Centro de referencia nacional sobre violencia CRNV. Subdirección de registros forenses.

Jerade Dana, M. (2007). De la violencia legítima a la violencia revolucionaria. *Acta poética*, 28 (1-2), 257-278.

Martínez, O (2011). Desde los imaginarios de la violencia, hacia la exclusión o legitimación del conflicto armado en Colombia. *Revista Zona*. julio de 2011, no.11.

Martínez y Ospina (2018) Primer Informe Observatorio de Violencia y Paz. Manizales Hacia una Emergencia Social. Violencia, Paz y Reconciliación. Centro Editorial Universidad Católica de Manizales.

Manizales cómo vamos (2017) “6to Informe de Calidad de Vida #AsíVaManizales”. Manizales como vamos, editorial La Patria.

Marulanda, Martínez, P. (2016). Contra-caras del poder regional. Contrabando, narcomenudeo y explotación sexual comercial. Proyecto interinstitucional Universidad tecnológica de Pereira, la Universidad Católica de Pereira y Fundación Universitaria del área Andina. Centro editorial Universidad tecnológica de Pereira.

Méndez, L. (2005). Modernidad tardía y vida cotidiana. *Sociológica*, año 20, número 58, mayo-agosto de 2005, pp. 53-75.

Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de investigación criminal e interpol seccional Manizales. (2017). Información estadística homicidios y suicidio Manizales. Observatorio del delito de la seccional de investigación criminal Manizales.

Ortega. R. (2000). Más allá de la instrucción: La educación para la convivencia. El modelo SAVI Sevilla para la antiviolencia escolar. Ensayos y Experiencias, 35, 39-53.

Ospina. D. & Ospina D. A. Formación Inclusiva, Convivencia y Paz desde la Escuela: Posibilidades para el Posconflicto Colombiano. En G. Valencia. (Ed.), Saberes, Conocimientos y Epistemes de la Investigación en América Latina (p. 228), Manizales, Colombia: Universidad Católica de Manizales, Red Latinoamericana de Metodologías de las Ciencias Sociales.

Parisi, E. R., Pagnone, C., & Soledad, M. (2012). Participación política, manifestaciones culturales y mecanismos de resistencia. Revista de psicología política, Brasil.

Patiño, M. R. C., & Valencia, M. C. P. (2005). El departamento de Caldas: su configuración como territorio de conflicto armado y desplazamiento forzado. Trabajo social, (7).

Patiño, S. (2017) El Pensamiento educativo en la relación Escuela – Comunidad. En B. Nates. (Ed.). Memoria y Territorio (pp. 53-61) Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. ICANH.

Pinheiro, P. S. (2014). Acabar con la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Informe UNICEF.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (1999). Informe nacional sobre la situación de la violencia de género contra la mujer. (Proyecto RLA/97/014). Santiago de Chile.

Schutz, A., & Natanson, M. (1995). El problema de la realidad social: escritos I. Buenos Aires: Amorrortu.

Velásquez, F. & González, E. (2003). ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? (pp. 10-11). Bogotá: Fundación Corona.

Valenzuela, P. (2002). Reflexiones sobre interpretaciones recientes de la violencia en Colombia. *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*, (30).

WHO. (2003). Global Consultation on Violence and Health. Violence: a public health priority. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1996 (OPS/OMS Informe Mundial sobre Violencia y Salud, Washington D.C).

4

**CAPÍTULO
CUATRO**

4. CONFIGURACIÓN DE LA VIOLENCIA, ECONOMÍA ILEGAL Y CONFLICTO ARMADO EN LA CIUDAD INTERMEDIA DE MONTERÍA, COLOMBIA

Julián David Vélez Carvajal³⁵

Moisés Joel Arcos Guzmán³⁶

Paola Andrea Forero Ospina³⁷

Melissa Quintana Fernández³⁸

Martha Nereida Muñoz Argel³⁹

Rafael Gustavo Figueroa Altamiranda⁴⁰

35 Director del grupo de investigación COEDU, docente titular de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.

36 Director del grupo de investigación CAVIDA, docente titular de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.

37 Integrante del grupo de investigación COEDU, docente asistente de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.

38 Integrante del grupo de investigación COEDU, docente asistente de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.

39 Integrante del grupo de investigación CAVIDA, docente titular de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.

40 Integrante del grupo de investigación COEDU, docente titular de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.

Introducción

En este documento se aborda el fenómeno de la violencia en el departamento de Córdoba, teniendo en cuenta la transversalidad que sobre dicho fenómeno ejercen aspectos como: a) reconfiguración de la violencia en el marco del conflicto armado colombiano; b) economías ilegales y economías de guerra; c) reclamantes de tierras; y d) violencia homicida. Un abordaje de estas características permite realizar una lectura compleja del fenómeno de la violencia que trascienda las concepciones deterministas del fenómeno en cuestión.

En tal sentido, este documento se estructura en torno a interrogantes como: ¿Implica la reconfiguración de la violencia una sucesión lineal de etapas o momentos históricos como premisa fundamental para la emergencia de otros subsecuentes? o ¿Dicha reconfiguración se ha dado en el marco de la coexistencia de una serie de hechos históricos, presentes en diferentes temporalidades, que han incorporado como garantía de su permanencia las mutaciones políticas, sociales, culturales, económicas e ideológicas? ¿Existen rasgos comunes y actores estructurales en el proceso de reconfiguración de la violencia?

Es importante aclarar que este documento no da una respuesta definitiva a los anteriores interrogantes, pero sí se constituye en un esbozo de la ruta investigativa que, en torno a un abordaje complejo del posconflicto, se han trazado los grupos de investigación COEDU⁴¹ y CAVIDA⁴² de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, en el marco de las líneas de investigación en: a) Cultura, comunicación y educación; y b) Psicología, salud y

41 Grupo de investigación en Comunicación, Derecho y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, al cual se encuentran adscritos investigadores de los programas de Comunicación Social - Periodismo, Derecho y el Centro de Formación Humanista. En la actualidad, se encuentra reconocido en categoría C por COLCIENCIAS.

42 Grupo de investigación en Calidad de Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, al cual se encuentran adscritos docentes de los programas de Psicología y el Centro de Lenguas. En la actualidad, se encuentra reconocido en categoría C por COLCIENCIAS.

calidad de vida. Las anteriores líneas de investigación, se concretan en el proyecto: Configuraciones territoriales desde las víctimas de desplazamiento a partir de los procesos de paz entre el gobierno y actores armados ilegales durante el periodo 2003-2017. Caso Montería, Córdoba, realizado en cooperación con la Universidad Católica de Manizales, la Universidad Católica de Pereira y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México; en el marco del programa de investigación: “Transiciones, violencias y memorias”, a través del cual pretendemos dar algunas respuestas a los interrogantes anteriormente planteados.

Este escrito se estructura a partir de cinco apartados. En el primero, se da cuenta de un marco contextual acerca de la violencia homicida; en el segundo, se aborda la reconfiguración de la violencia en el departamento de Córdoba y su capital, Montería; entretanto, en el tercer apartado, se reflexiona sobre la relación entre economías ilegales y economías de guerra; en el cuarto momento, se hace referencia al proceso llevado a cabo por los reclamantes de tierras; mientras que en el quinto, se realiza una discusión en torno a la violencia homicida, pero transversalizada por los aspectos discutidos en los apartados anteriores.

Apuntes Metodológicos

Se hizo uso de la investigación documental para consolidar el universo de análisis que se estimó en 60 documentos; para la selección de estos, se establecieron las siguientes categorías de búsqueda: violencia homicida, reclamantes de tierras, economías ilegales y economías de guerra.

Para el análisis de la información se utilizó la técnica cualitativa de análisis de contenido, lo cual permitió abordar distributivamente los datos seleccionados, para luego filtrarlos a través de tablas de contingencia con el propósito de cruzar las categorías emergentes y así tener una visión compleja y relacional del fenómeno abordado.

Acerca de la violencia homicida

La violencia y sus manifestaciones son tan antiguas como la historia de la humanidad (Aparicio-Ordás, 2015; Domenach, 1981), los actos violentos y la vida tienen una relación tan cercana que sin duda aparecen conflictos insalvables (Fernández, 2015); como tendencia depredadora es una de las dimensiones de la cotidianidad que más preocupa a la mayoría de las sociedades (Jiménez, 2012). De este modo, tiene en su proceso de construcción conceptual un enorme cúmulo de aportes y aristas que han sido utilizados para señalar un abanico amplio de escenarios (Martínez, 2016; Villarruel, 2017).

Es posible identificar acotaciones desde la sociología, antropología, derecho, filosofía, ciencia política, psicología y psicoanálisis, por citar algunas (Cuervo, 2016), incluso desde unidades de análisis como el instinto, el aprendizaje social o la frustración (Jiménez, 2012), su impacto perceptible va “desde el sufrimiento invisible de los individuos más vulnerables de la sociedad a la tragedia tan notoria de las sociedades en conflicto” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2002, p. 2), su presencia no representa un acto ético o mucho menos justo, sino político (Jiménez, 2012).

Hablar de la violencia como fenómeno social se vuelve complejo, es considerado como un “concepto esencialmente en disputa” (Villarruel, 2017, p. 12), ya que no existe un consenso sobre la construcción y precisión del fenómeno (Martínez, 2016), en tanto que es posible identificar diferentes tipos. No obstante, se resaltan en principio aquellas formas que causan un impacto inmediato por su dramatismo, como es el caso de la violencia directa (Galtung, 2016).

Se considera pertinente retomar, entonces, la perspectiva teórica que el Observatorio Nacional de la Salud (ONS, 2014), suscribe respecto a este tema. En este sentido, el ONS define la

violencia como “toda forma de interacción humana en la cual, mediante la fuerza, se produce daño a otro, para la consecución de su fin” (Franco, p. 331). Esta acepción de la violencia permite tipificarla en sus diferentes manifestaciones que van desde lo físico, psicológico y sexual; en diferentes grados: leves, moderados o graves; considerando como daño más grande, la privación de la vida por cuanto elimina la posibilidad del goce de los demás derechos. Por tanto, entiende al homicidio “como todo acto mediante el cual una persona priva a otra de la vida con conocimiento o intención de hacerlo” (Informe, Violencia homicida en Colombia. p. 6). En este sentido, el homicidio, se constituye en uno de los indicadores más utilizados a nivel internacional, para medir la presencia de la violencia (Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2013).

Las explicaciones al fenómeno de la violencia homicida son abundantes; por un lado, se han estudiado desde elementos objetivos, entre ellos la pobreza o condiciones sociales y, desde otra óptica, se ha dado mayor relevancia a causas que señalan a la economía criminal (Álvarez & González, 2012). Cada explicación ha llegado a conclusiones en algunos casos disímiles; no obstante, coinciden en que los diferentes tipos de violencia, especialmente los homicidios, son manifestaciones de problemáticas mucho más complejas como el crimen organizado, la corrupción, impunidad e incluso la desigualdad social (González, Vega & Cabrera, 2012; Llorente, Escobedo, Echandía & Rubio, 2002; Vilalta, Castillo & Torres, 2016).

En este sentido, la perspectiva trazada por Galtung hace referencia a la configuración de tres tipos: a) violencia directa que se concreta en actos visibles (agresión física a otro); b) violencia estructural, asociada a la no satisfacción de necesidades como consecuencia de la configuración de la estructura social; y c) violencia cultural, que hace referencia a los marcos interpretativos usados por un grupo social para legitimar la violencia y que se concretan en comportamientos y expresiones del lenguaje (ONS, 2014).

A la par, “si el homicidio se examinara como una epidemia, sin duda sería considerada entre las más graves y letales que enfrenta el planeta” (Rodríguez, 2008, p. 126). Anualmente, la cifra de muertes por actos de violencia a nivel global supera los 1,6 millones de personas, siendo una de las primeras causas de muerte para las personas dentro del rango de edad de los 14 a 44 años, la responsable del fallecimiento del 7% de población femenina y 14% de la población masculina. Además, por cada muerte asociada a la violencia otras resultan heridas y vivencian contrariedades físicas, sexuales, reproductivas y mentales (OMS, 2002).

Su impacto, además de la pérdida de vidas humanas, genera miedo e incertidumbre, siendo el homicidio, entonces, una herramienta para el monitoreo de la seguridad, la inseguridad percibida y el ejercicio de justicia (Arcos, Ávila, Vera & Pérez, 2018; Gómez, Vera, Ávila, Arias, Vega & Arcos, 2016; UNODC, 2013); del mismo modo, la huella de violencia homicida atraviesa otras aristas, como los costos financieros asociados a la atención sanitaria, judicial, policial y disminución en la productividad (OMS, 2002).

Por otro lado, aunque es difícil caracterizar los datos sobre homicidio, se pueden identificar algunas tendencias a nivel global, entre ellas: el noventa y cinco por ciento de quienes cometen homicidio son hombres, lo mismo ocurre con ocho de cada diez víctimas; dos tercios de las víctimas tenían como victimario un compañero íntimo; respecto a la edad, la mitad de las víctimas a nivel global tenían menos de treinta años (UNODC, 2013), dejando claro que la violencia representa un freno para la esperanza de vida (González, Vega, Ramos & Wernersbach, 2017) y con ello un lastre para la consolidación de la calidad de vida.

Al hacer énfasis en América Latina, se puede identificar que esta región es considerada como la región más violenta del planeta (Briceño, 2008; Garmendia, 2011; Llorente, Escobedo, Echandia & Rubio, 2002; Rodríguez, 2008; Salama, 2008; Vilalta, 2015;

Vilalta, Castillo & Torres, 2016). En ella se encuentra solo el 8% de la población mundial, no obstante, ocurren en este contexto el 30% de todos los homicidios reportados de manera global (Vilalta, Castillo & Torres, 2016). De tal modo, que la violencia homicida representa un problema de salud pública (Briceño, 2008).

En el caso de Colombia, este país es considerado como uno de los más violentos de la región (Dávila & Pardo, 2015), ocupando una de las tasas más altas de la zona, siendo la violencia homicida la segunda causa de muerte y la primera para la pérdida de años de vida por muerte prematura y costo de mortalidad evitable (Instituto nacional de Salud & Observatorio Nacional de Salud, 2014). Su impacto se refleja en variables económicas como la inversión, empleo, consumo, comercio, intercambio, productividad y crecimiento económico (Cuartas, Valencia & Zapata, 2011). La sistematización de los datos sobre homicidio, ha ayudado a comprender la complejidad del fenómeno y sus efectos, además de la asociación con otras actividades o grupos delictivos (UNODC, 2013).

La reconfiguración de la violencia en el departamento de Córdoba y el municipio de Montería

Para comprender el fenómeno de la violencia homicida en el contexto del departamento de Córdoba y su capital Montería, hace falta revisar los diferentes acontecimientos que configuran el impacto de la violencia por parte de los diferentes grupos armados ilegales que han hecho presencia en el territorio, en tanto las afectaciones han sido diferenciales y acordes a las dinámicas propias de las subregiones del departamento. Basta con revisar los diferentes hechos de violencia expresados en asesinatos, masacres e incursiones guerrilleras y paramilitares que han terminado por atentar contra la vida de la población civil de estos territorios.

En este apartado, se pretende desarrollar sintéticamente el periodo que va del 2000 al 2019, a partir de la identificación de algunos elementos transversales que ponen de manifiesto el alto impacto que ha tenido en el conflicto armado interno, entre estos, el periodo de incursión y fortalecimiento paramilitar como estrategia contrainsurgente, los procesos de desarme, las negociaciones de paz, desmovilización de grupos armados ilegales, y la posterior degradación de los grupos y reagrupamiento de algunas de sus facciones, que en su reconfiguración devinieron en grupos vinculados a economías ilegales, delictivas y criminales, como más adelante se desarrollará.

Primer Momento: La retoma del control territorial de las FARC y las AUC

El periodo inmediatamente anterior al año 2000, se caracterizó por la contraofensiva por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hacia facciones y redes de apoyo de las autodefensas que se ubicaron en el municipio de Tierralta y Puerto Libertador, esta acción terminó por retomar el control de las zonas del piedemonte cordobés en Juan José, La Rica y Puerto López, así mismo, se presentaron otros hechos asociados, tales como ataques contra el ejército y algunas de sus bases militares ubicadas en los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano (Ocampo et al.,2013).

Estos hechos, sin duda, asociados a mantener o fortalecer el control territorial por parte de los grupos armados ilegales, terminaron propiciando hechos de violencia concretos que afectarían a la población civil, líderes sociales, mujeres, hombres y, en general, a la población habitante de estas zonas de interés estratégico para el desarrollo de diversas actividades vinculadas a las economías ilegales (narcotráfico y extorsión principalmente), que sostenían y financiaban para el momento el accionar delictivo de los grupos armados ilegales presentes. Esto se expresa en el

repunte de la tasa de homicidios para el periodo en mención (1998-2000) que evidencia cómo en las zonas del alto Sinú y San Jorge hay un aumento significativo, superando el promedio nacional.

Valga aclarar que, para el caso de la capital, Montería, el comportamiento del fenómeno de la violencia homicida se mantuvo por debajo de la media departamental; esto se explica porque, si bien la violencia en el marco del conflicto armado afectó el departamento en general, las expresiones directas de la misma se presentaron con mucha mayor intensidad en la zona rural.

La violencia, para esta época, se tornó intensa para toda la población, en clave de retomar el control social, los paramilitares centraron su accionar en restablecer el orden y atacar directamente a líderes sociales o a quienes desempeñaban roles de importancia dentro de diferentes entidades públicas, organizaciones sociales, educativas e incluso étnicas; en este sentido, para el año 2000, sucedieron hechos de violencia contra el líder Kimy Pernía, indígena Embera que lideró la oposición para la construcción de la represa de Urrá y la ocupación de paramilitares y guerrilla en los territorios indígenas, de acuerdo a los registros disponibles, fue retenido y desaparecido por las Autodefensas (Verdad Abierta, 2010).

Para el periodo 2002-2004, el control social por parte de las Autodefensas se daba prácticamente en todo el departamento de Córdoba y se expresaba en diferentes acciones de instauración de un orden que privilegiaría su consolidación como grupo ilegal. La institucionalidad fue cooptada, la mayoría de los alcaldes tenían un nexo con los paramilitares, quienes definían los horizontes de la política local; así mismo, instituciones educativas como la Universidad de Córdoba en Montería, fueron controladas de manera violenta, a través de la vinculación a los entes organizativos institucionales: “En una versión libre de noviembre de 2008, Salvatore Mancuso dijo que para comienzos de 2000 en

la Universidad de Córdoba ordenaron asesinatos de profesores y estudiantes por el solo hecho de pertenecer a sindicatos y agremiaciones sociales” (Verdad Abierta, 2013) .

En este mismo contexto, la economía ilegal asociada al narcotráfico tomó fuerza hacia los municipios de Tierralta y Valencia, bastión paramilitar en donde el jefe paramilitar y narcotraficante Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, mantuvo el control de los cultivos y laboratorios de cocaína; así mismo, las desapariciones, homicidios y hostigamientos a la población civil fueron hechos que consolidaron su poderío (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009, p. 144).

Sin embargo, hacia el año 2002, el departamento de Córdoba se convirtió en escenario de las negociaciones adelantadas por el gobierno con las autodefensas a nivel nacional; las conversaciones iniciaron con la declaratoria del cese unilateral de hostilidades, el Alto Comisionado para la Paz y la Comisión Exploratoria, constituida con participación de la Organización de Estados Americanos (OEA), establecieron cuatro mesas de diálogo paralelas: una con las AUC, otras dos con el Bloque Central Bolívar y la Alianza Oriente, y una cuarta con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009, p. 148).

En enero de 2004, el presidente Álvaro Uribe Vélez y el Secretario General de la OEA, firmaron un convenio para poner en marcha la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia; este proceso se formalizó con lo que se conoció como la firma del “Acuerdo de Fátima”, el 13 de mayo de 2004 (Landinez & Rettberg, 2013, p. 62).

Segundo Momento: Proceso de Paz y Desmovilización de las AUC

En el año 2005, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se da la aprobación de la Ley de Justicia y Paz; este marco legal, daría elementos adicionales para consolidar el ya iniciado proceso de paz en el corregimiento de Santa Fé de Ralito, municipio de Tierralta. Con posterioridad a esta fase de negociaciones, se dan las desmovilizaciones más emblemáticas de las autodefensas, inicialmente se da la del Bloque Héroes de Tolová, cuya zona de influencia eran los municipios de Tierralta y Valencia principalmente, el acto se da en el corregimiento de Mata Maíz, en Valencia; si bien este hecho marcó lo que fue el inicio de la pacificación de la región al neutralizar las acciones violentas de las facciones paramilitares, con posterioridad se pudo establecer que por órdenes de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, exjefe del bloque Héroes de Tolová, no todos sus paramilitares se desmovilizaron (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009, p. 158).

Tercer Momento: La agudización de la violencia, surgimiento grupos pos-desmovilización

El periodo que siguió a la desmovilización de las autodefensas se caracterizó por una agudización de la violencia y la transformación de la dinámica de control territorial; si bien las FARC continuaban haciendo presencia, su accionar se concentraba en el sur del departamento, donde los frentes 5, 18 y 58, de alguna manera, fueron neutralizados en una ofensiva del ejército, que generó una reducción importante de los hechos de violencia por parte de esta guerrilla (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009, p. 161).

Esta estrategia se centró en cercar a la guerrilla para evitar el despliegue de la misma en la zona del Parque Nacional Natural del Paramillo hacia el Valle del Sinú, la retoma del control territorial por parte de la fuerza pública era prioritaria; sin embargo, no

bastó para que no se dieran algunas acciones delictivas por parte de las FARC, tales como el ataque contra una estación de policía en el corregimiento de Tierradentro que terminó con la vida de cerca de 30 personas, entre civiles y miembros de la fuerza pública (Revista Semana, 2006).

Este proceso de reconfiguración de la violencia, en gran medida, se relacionó con el hecho de que la desmovilización provocaba una reestructuración en el negocio del narcotráfico que anteriormente estaba bajo el control de los comandantes y jefes paramilitares, y que una vez desmovilizados genera una transformación en la dinámica organizacional. Situación que se explica porque algunos de los miembros de los desaparecidos grupos, no entraron en el proceso de reintegración, o lo hicieron con el fin de aprovechar los beneficios que le permitía la Ley de Justicia y Paz, tal fue el caso de Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’, quien era mando medio del Bloque Centauros, pero se desmovilizó como un patrullero del Elmer Cárdenas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 269).

Para el año 2007, empezó el reclutamiento de jóvenes en asentamientos subnormales en la ciudad de Montería, por parte de los grupos emergentes; los jóvenes se vinculaban a estos grupos para realizar actividades relacionadas con el narcotráfico, vigilar rutas, proteger haciendas, realizar inteligencia, entre otras (Negrete, 2008); esta situación expresa la forma como los grupos emergentes empezaron a cambiar su estrategia de acción, que se integra de manera importante en las dinámicas cotidianas de las comunidades donde hacían presencia.

La presencia y dominio territorial de estos grupos fue diversa, ya que se reconfiguraron en diferentes bandas, organizadas por líderes que nunca emprendieron una desmovilización real, sino que se organizaron en grupos más pequeños, muchos de cuyos líderes mantuvieron su accionar delincuencia, en diferentes municipios del departamento de Córdoba, y tomando una denominación

diversa; entre estos grupos se reconocen Los Paisas, Urabeños, Águilas Negras y Los Rastrojos, quienes se expandieron a la región costanera de Córdoba, en el alto San Jorge, el Bajo Cauca antioqueño y finalmente, el Urabá antioqueño (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 269). Este proceso de degradación de la violencia propició que muchos de los grupos armados pos-desmovilización, se reubicaran en los antiguos territorios de dominación paramilitar, deviniendo diferentes estructuras que fueron diversificando su actividad criminal.

Economías ilegales y economías de guerra

En algunos escenarios académicos de corte determinista, suele plantearse una relación de causalidad entre el nivel de desarrollo económico y la seguridad ciudadana; lo cual llevaría a inferir que los países de ingresos menores, tienen un mayor riesgo de experimentar delitos violentos (Vilalta, Castillo & Torres, 2016). Esto se ha constituido en un argumento importante para explicar la criminalidad (y con ella la violencia), teniendo en cuenta una dimensión económica (Ramírez, 2014).

No obstante, el caso colombiano requiere otro tipo de abordajes que entiendan la complejidad de este fenómeno en el país. Pues más allá de darse una relación determinista entre pobreza y economía ilegal, confluyen, en este fenómeno, toda una serie de factores que lo ubican en una lógica de lo multidimensional. En Colombia, el entrecruzamiento de la economía ilegal con el conflicto armado, obliga a abordar este fenómeno desde el establecimiento de relaciones de continuidad entre legalidad/ilegalidad, formalidad/informalidad, legitimidad/ilegitimidad, entre otros.

Es en este sentido, que el informe especial de la Defensoría del Pueblo: Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el postacuerdo, recomienda profundizar respecto a este tema en términos conceptuales, en el sentido de distinguir

relaciones de continuidad y discontinuidad entre las categorías economía ilegal y economía de guerra (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 20).

La economía ilegal sugiere la existencia de bienes y servicios que son producidos, intercambiados y consumidos violando la normatividad establecida (Lemieux, citado en: Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018). Entre tanto, la economía de guerra implica la focalización de los recursos económicos para sostener un conflicto; además, supone urdir estrategias económicas de guerra, para socavar la dignidad de los grupos poblacionales involucrados (Goodhand, citado en: Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018).

En este sentido, pareciera ser que un tipo de economía presupone a la otra; lo que llama la atención, es justamente el carácter recursivo de las prácticas que traen consigo tanto la economía ilegal, como la economía de guerra. La primera no se agota en la guerra, pero sí se constituye en el eje transversal de la segunda; mientras que, si bien la economía de guerra no se constituye en la única causa del surgimiento de la economía ilegal, en un país como Colombia, la guerra sí deviene en el principal caldo de cultivo para la ilegalidad económica.

En este sentido, Pontón (2016) plantea que la economía criminal hace referencia a las actividades económicas realizadas sin reconocimiento del marco legal; estas actividades se desarrollan entre agentes del mercado que incluyen la práctica de la comercialización de productos de modo ilegal, la corrupción y métodos que implican el ejercicio de la violencia, tales como la amenaza y la extorsión.

En este orden de ideas, la continuidad de prácticas asociadas tanto a las economías ilegales, como a las economías de guerra, es algo que ha hecho presencia en todas las regiones del orbe. Latinoamérica, y particularmente Colombia, se han visto

involucradas en este tipo de prácticas (Pontón, 2013), en las que confluyen narcotráfico, contrabando, minería ilegal no tradicional, entre otros (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018).

Bajo este mismo marco interpretativo, Garzón (2008) (Citado en Giraldo, et al., 2011; Pineda, 2018 y Rincón 2018), plantean que tanto las economías ilegales, como las economías de guerra, se estructuran a partir de tres realidades: mercancías criminalizadas, circuitos económicos protegidos por grupos armados al margen de la ley y crimen organizado; los cuales ejercen influjo sobre el sistema social, político y económico del país, en el sentido de que la captación de las instancias legales, supone favorecer la consolidación de este tipo de economías.

En síntesis, en un contexto como el colombiano, la coexistencia de los factores descritos en párrafos anteriores, evidencia que el problema de las economías ilegales y de las economías de guerra, tiene orígenes multidimensionales que van más allá del nivel de desarrollo económico del país. La complejidad del fenómeno en cuestión se ve reflejada en la confluencia de prácticas asociadas a la informalidad, el crimen organizado y la corrupción.

Instauración de las economías ilegales y las economías de guerra en el departamento de Córdoba

Córdoba es un departamento de la Costa Caribe colombiana, que tiene zonas limítrofes con Antioquia, Sucre y Bolívar. Tradicionalmente, dicho departamento se divide en dos subregiones, una conformada por los municipios pertenecientes al centro y al norte de esta jurisdicción; mientras que la otra, se encuentra constituida por los municipios del sur que, con algunas poblaciones de Antioquia, comparten la zona biogeográfica denominada el Nudo del Paramillo, dentro de la cual se encuentra la Serranía de Abibe, un accidente geográfico que ha fungido como punto nodal del conflicto armado en el país, en tanto se constituye en un importante corredor para los diversos actores legales e ilegales del conflicto colombiano.

En este sentido, Pineda (2018) afirma que Córdoba se encuentra ubicado en una zona estratégica respecto al tránsito para el comercio de narcóticos hacia México y Estados Unidos. Dicho departamento limita con el Mar Caribe y se comunica con el Pacífico, a través del Urabá y el Chocó; además, une las regiones Andina y Caribe con el Bajo Cauca antioqueño; situación geográfica propicia para la infraestructura y despliegue de actores armados que van desde guerrillas, paramilitares y, actualmente, organizaciones criminales.

La característica del corredor estratégico ha implicado que históricamente el departamento de Córdoba haya sido un escenario prolífero para la concreción de las diferentes manifestaciones del conflicto colombiano. Lo cual, teniendo en cuenta lo planteado en párrafos anteriores, ha hecho de las economías ilegales y de guerra, un asunto presente en la cotidianidad de esta región del país.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia (2018), los principales renglones de las economías ilegales y de las economías de guerra en el conflicto colombiano, se encuentran constituidos por el narcotráfico y la minería ilegal no tradicional. Mismos que se constituyen en fuente de financiación directa e indirecta de las diferentes vertientes del conflicto armado y que, a través de la ilegalidad, la informalidad, la criminalidad, las mercancías de guerra y la corrupción (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018), han implicado no solo a los actores directos del conflicto, sino a varios sectores de la población, bien sea a partir del constreñimiento que implica el control territorial de los actores armados, o bien, como consecuencia de la falta de oportunidades para la movilidad ascendente en la escala socio-económica.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2018), la producción mundial de cocaína, para 2016, se estimó en 1.410 toneladas, lo que la ubica como la cifra más

alta registrada en toda la historia de la humanidad; lo cual implica un aumento del 56% en el periodo de tiempo 2013-2016. En este contexto, Colombia se ubica como el mayor productor de cocaína del mundo, con un total de 866 toneladas producidas durante 2016 y con una dedicación del 69% del total de las 213.000 hectáreas, dedicadas al cultivo del alcaloide en el mundo.

Si bien el Informe Mundial sobre Drogas 2018, no asocia los cultivos ilícitos y el narcotráfico con el conflicto armado que ha vivido Colombia, el Informe Especial de la Defensoría del Pueblo sobre economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo (2018), afirma que el narcotráfico, junto con la minería ilegal no tradicional y el contrabando, se constituyen en ejes dinamizadores del conflicto en el país y, particularmente, en Córdoba.

En el mismo informe, la Defensoría del Pueblo de Colombia (2018) plantea que, para descifrar el escenario del conflicto en este país, es importante abordar las relaciones entre las economías ilegales, las economías de guerra, los actores armados y las consecuencias e impactos humanitarios que esto genera sobre la población. El narcotráfico desempeña un papel importante en estas economías ilegales y de guerra, en tanto los diversos actores del conflicto participan en los diferentes procesos de producción y comercialización: siembra, producción, control de corredores estratégicos y puntos de embarque.

Y esta participación no solo aplica para grupos guerrilleros como las FARC, ELN, EPL, entre otros (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018); sino también para los diferentes grupos de autodefensa y paramilitares (López, 2007). Lo cual hace más complejo el asunto de las economías ilegales y de guerra en el marco del conflicto colombiano, pues éstas, en la práctica, flexibilizan los ortodoxos límites que se plantean desde los discursos ideológicos.

En este orden de ideas, la Defensoría del Pueblo, con respecto a la manera en que se comprende el conflicto armado en Colombia, afirma que:

Dos constataciones son insoslayables: el narcotráfico no se puede entender sin considerar los actores armados que garantizan su funcionamiento; así mismo, el tamaño de los actores armados, la expansión que lograron, el cubrimiento territorial que alcanzaron, la capacidad de intimidación, los métodos que seleccionaron, la fortaleza que adquirieron y el impacto en la sociedad que ocasionaron, no es entendible sino por sus relaciones con el narcotráfico y/o con otras economías ilegales. (2018, p. 26)

En este sentido, la Fundación Ideas para la Paz (2018) plantea que, en los últimos 30 años, el fenómeno del narcotráfico ha empezado a diversificar los actores, entre ellos, particularmente, las autodefensas que se involucraron en esta actividad ilegal como forma de financiar su actividad criminal; lo cual implica un aumento en las disputas entre los diferentes grupos por el control del narcotráfico:

Algunas de las bandas, sellaron alianzas con la guerrilla. Según el informe, al menos seis frentes de las FARC, han pactado el manejo conjunto de cultivos de coca, la producción de laboratorios y la utilización de rutas. Aún así, las masacres comprueban la intensidad de disputas en zonas estratégicas. A esto se suman los golpes de las autoridades. De acuerdo con la policía, las bandas pasaron de ser 33 en 2006, a 21 en 2007, 23 en 2008, 16 en 2009 y 6 en 2011. (2018, p. 5)

Lo anterior, permite afirmar que la incidencia del narcotráfico en la economía criminal y su coexistencia con la economía legal y la economía informal, tiene límites borrosos (Kaplan, 1996). En este sentido, se evidencia que estas economías se sostienen mediante el consumo y la demanda, a través de relaciones comerciales ilícitas.

Proceso que implica altas rentabilidades; lo cual trae consigo la capitalización de los actores ilegales participantes en este negocio (Pontón, 2013, 2016).

Este sentido, la condición de Córdoba como ruta de importancia geoestratégica, junto con los procesos de surgimiento y resurgimiento del paramilitarismo, ha implicado el recrudecimiento de las confrontaciones entre bandas criminales que se financian del narcotráfico, buscando el control del territorio. Los Urabeños se perfilan como la banda más poderosa. Estos se han fortalecido y han ampliado su presencia territorial a más de 100 municipios del país, ejecutando acciones armadas a través de lógicas terroristas, que han permitido instaurar temor en las poblaciones donde han promovido paros armados, tal como el que sucedió en el año 2016 (Castro, 2016).

En este orden de ideas, las transformaciones de estas organizaciones criminales, tanto en su estructura como en sus propósitos, llevan a preguntarse por la responsabilidad del Estado en su surgimiento y mantenimiento; el aparato gubernamental les refiere “como bandas criminales y los consideran un asunto de orden público” (International Crisis Group, 2007); lo cual ha propiciado un debate entre organismos gubernamentales y ONG’s en el sentido de que su naturaleza y la falta de intervención estatal, evidencian la ausencia de una política clara frente a estos grupos criminales.

Adicional a este aspecto, que sin duda incide en la configuración de la economía ilegal como un elemento dominante de las relaciones sociales, el último proceso de negociación desarrollado con las FARC, ha traído consigo un proceso de reconfiguración de la territorialidad ejercida por este grupo armado, lo cual implica que los territorios y rutas que antes eran dominados por esta organización, hoy día estén en pugna por parte de otros grupos armados emergentes (Pineda, 2018), lo que ha agudizado elementos propios del conflicto, tales como: combates

por el control territorial, laboratorios para el procesamiento de cocaína, cultivos ilícitos, corredores de droga y demás prácticas ilegales.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Colombia, plantea que:

En su conjunto, la incidencia de las FARC-EP en las economías ocurría en no pocas regiones del país. En la medida en que dejaron espacios vacíos para reincorporarse a la vida civil, otras guerrillas y grupos armados organizados que existían previamente, o estructuras que se conformaron después, con una alta composición de exguerrilleros, han buscado posicionarse en los mismos. El escenario relacionado con el narcotráfico, cambió radicalmente y nuevas dinámicas en torno a grupos armados se han configurado. (2018, p. 25)

Esto ha llevado a la emergencia de organizaciones que, en contraste con los grupos armados tradicionales, se configuran como estructuras pequeñas y dinámicas que combinan economías legales con economías ilegales y de guerra; además, tienen capacidad de infiltración en las comunidades locales, para consolidar sus objetivos económicos y militares. Estas características han posibilitado que dichos grupos puedan incursionar con mayor facilidad en los territorios urbanos (International Crisis Group, 2007).

Ahora bien, la presencia activa de estas organizaciones criminales ilegales en la zona urbana de Montería, se enfocan también en el control territorial para el microtráfico de estupefacientes, entre otras prácticas ilícitas. Según Pineda, la directriz 0015 de 2016 del Ministerio Defensa, considera que estas organizaciones criminales minan:

La seguridad ciudadana, siendo a la vez una amenaza para el Estado como poder soberano; la lucha del Estado contra estos, en su mayor parte ha sido responsabilidad de la Policía Nacional y en algunos casos de las Fuerzas Armadas. (2018, p. 25)

Por otro lado, la minería ilegal no tradicional también se ha constituido en una actividad económica que se ha solapado con las dinámicas de los diferentes grupos armados existentes en el país. En su condición de actividad económica que representa un alto nivel de rentabilidad, ha tenido un incremento significativo en Colombia, desde principios del siglo XXI.

La Defensoría del Pueblo de Colombia plantea que los siguientes aspectos son los causantes del incremento en mención:

a) El aumento de los precios internacionales de los productos mineros, en especial del oro; b) La pérdida de interés de los grupos armados ilegales en el narcotráfico como fuente de financiación, debido a los esfuerzos del Estado para combatir este fenómeno y al descenso de los precios internacionales de la cocaína; y c) La incapacidad institucional para regular de manera efectiva la explotación de minerales en Colombia. (2018, p. 26)

Lo anterior ha llevado a que los diferentes grupos armados ilegales, al incorporar este tipo de economía como fuente de financiación, entren en una disputa por los territorios prolíficos para el ejercicio de la actividad minera. El proceso de desmovilización de los paramilitares y de las FARC-EP, han permitido la emergencia de dinámicas de control territorial, en aras de acceder a los escenarios abandonados por los grupos desmovilizados (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018).

El departamento de Córdoba no se caracteriza por ser el de mayor actividad minera en el país; pues representa solo un 4% de la participación nacional, en contraste con Chocó y Antioquia que concentran el 38% y 37%, respectivamente (Oficina de las Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito, 2018); no obstante, este bajo nivel de participación, el entrecruzamiento de la actividad minera ilegal no tradicional, con el funcionamiento de las estructuras armadas ilegales, permite entrever el alto impacto que ejerce esta actividad en el departamento, en cuanto a las confrontaciones bélicas por el control del territorio, los desplazamientos forzados, los constreñimientos económicos y el deterioro medioambiental.

En este sentido, el periódico El Universal (2018) afirma que el incremento de las actividades de minería ilegal en este departamento, tiene preocupadas a las autoridades. Los municipios de Ayapel, Puerto Libertador, San José de Uré, son los que presentan el mayor índice de esta actividad. Destacan, también, el importante grado de conexión que se da entre esta práctica económica y el financiamiento de grupos armados ilegales; siendo el Clan Usuga una de las principales organizaciones que usufructúan la actividad minera ilegal no tradicional. En consonancia con lo planteado anteriormente, Monsalve (2018) refiere la intervención de las Fuerzas Armadas del Estado Colombiano, para frenar la minería ilegal que se venía desarrollando en el municipio de Ayapel, Córdoba, como fuente de financiación del Clan del Golfo.

En todo caso, a pesar de la escasez de estudios y diagnósticos relacionados con el entrecruzamiento de la minería ilegal no tradicional y la financiación de los grupos armados ilegales, la mayoría de documentos y de expertos coinciden en que la gran incidencia de este fenómeno se ve representada en tres aspectos: a) agudización del conflicto y emergencia de nuevas organizaciones criminales; b) afectación humanitaria de las poblaciones involucradas; c) captación de las instancias del Estado; y d) deterioro medioambiental.

En síntesis, el carácter del departamento de Córdoba como corredor estratégico para los diferentes actores del conflicto armado, ha implicado la confluencia de economías ilegales y economías de guerra, a partir de la articulación de los actores

armados con prácticas de financiamiento como el narcotráfico, la minería ilegal no tradicional y el contrabando. Esto ha implicado que, dada la territorialidad ejercida por los actores del conflicto, los diferentes sectores sociales se vean involucrados en las diversas dinámicas de estas economías.

Además de lo anterior, es importante poner foco en la población civil, dado que las prácticas asociadas a la economía ilegal, aún en escenarios del posconflicto, implican una revictimización de esta población que se representa en homicidios selectivos, amenazas, intimidación, desapariciones forzadas, asesinatos de líderes y lideresas sociales y desplazamiento forzado (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018).

Reclamantes de tierras

Continuando con la lectura del fenómeno de la violencia en Colombia, resulta necesario articular el proceso de reconfiguración de la misma y las prácticas asociadas a las economías ilegales con el problema del despojo de tierras. Tal concepto, da lugar a espacios sociales, burocráticos, políticos y académicos; posibilitando así una comprensión conjunta desde sus múltiples significaciones, las disparidades implícitas y los hechos materiales alrededor de este fenómeno.

Para ello, no solo basta abordar el concepto de manera aislada, sino trazar un diálogo con otras herramientas conceptuales que posibiliten hacer una lectura sobre los sedimentos de múltiples historias versus la noción de despojo; haciendo un recorrido, también, por lo que ha implicado la posesión de tierras y sus consecuencias políticas, reconociendo la complejidad de los sujetos políticos más allá de las categorías: víctimas y victimarios del despojo.

Salcedo (2018) plantea que es clave ahondar sobre los conceptos de víctima, trauma y crisis, con el propósito de ver el entramado presente en las poblaciones desplazadas. Sin embargo, para Butler & Athanasiou (2013), el despojo debe ser comprendido desde la lógica de la posesión, la cual no es solo de carácter individual sino también colectivo, es decir, reconociendo las formas políticas y relacionales del ser y del tener.

Este marco referencial dialoga con los hallazgos obtenidos por Morelo (2013), quien refiere a Córdoba como el octavo departamento más afectado por el desplazamiento forzado en el país. Ello da cuenta del escenario itinerante de su población a razón de las constantes amenazas por la reivindicación de sus derechos, específicamente, por la reclamación de sus tierras producto del despojo que deviene del conflicto armado interno que involucra a la sociedad civil.

Bajo esta lógica, Montería se ha convertido en el municipio con mayor recepción de desplazados en Córdoba, teniendo en cuenta que desde el año 2013 el 10% de su población es refugiada, sin embargo, cabe señalar que la situación puede ser peor, puesto que más del 43% de las personas que rindieron declaración de su condición no fueron incluidas en el Registro Único de Población Desplazada, según la Defensoría del Pueblo (Citado en Morelo):

Córdoba es un departamento de 23.980 kilómetros cuadrados, distribuidos inequitativamente. Las grandes extensiones de tierras productivas están en manos de una pequeña élite, mientras que la gran masa se debate en medio de la pobreza. El 53,53% de los hogares cordobeses tiene las necesidades básicas insatisfechas, mientras que un 23,91% se encuentra en la miseria absoluta, precisa la Defensoría del Pueblo. (Morelo, 2013)

A su vez, la puesta en marcha de varias reformas agrarias en Córdoba no ha logrado superar el conflicto, a pesar de haber transcurrido cerca de 47 años de ejecución entre 1963 y 2010, y que el departamento contó con dos regionales del antiguo Incora⁴³, hoy Incoder⁴⁴:

En 1970 un 4% de la población poseía el 86% de la tierra en Córdoba. Actualmente la tendencia es a la concentración de la tierra, pues en este departamento, en la margen izquierda del río Sinú, el 12% de la población posee el 80% de la misma. El territorio en disputa en Córdoba pinta en el mapa diez puntos rojos, en donde la pelea por la tierra está que arde, bien sea porque los actores armados no permiten que los beneficiarios gocen de los predios, o porque el Incoder volvió a adjudicar lo que ya tenía dueño, o porque los campesinos no viven ahí, ya que el Estado no los dotó de proyectos productivos. (Morelo, 2013)

Frente a la investigación citada anteriormente, se pueden señalar cinco tipologías alrededor del fenómeno del despojo en Córdoba y Urabá, partiendo de los enormes vacíos legales en la tenencia de la tierra, los cuales han facilitado la apropiación y el desalojo de campesinos en todo el territorio nacional:

(i) Desalojo de campesinos por parte de paramilitares, algunas veces mediante asesinatos de personas y masacres que obligaron a sus familias a vender, generando desplazamientos, o mediante la quema de sus viviendas. (ii) Desplazamientos por la llamada Casa Castaño, que se apoderó de predios, luego llegaron otros paramilitares y volvieron a desplazar a la población. (iii) Tierras entregadas por el Gobierno a campesinos, que después los paramilitares compraron a precios que no correspondían con su valor real. (iv) Familias beneficiarias de tierras por parte del

43 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

44 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.

Incora, que no pudieron establecerse por razones de seguridad, ya que eran señaladas de ser colaboradoras de actores armados. (v) Asesinato de líderes reclamantes de tierras.

El total de hectáreas usurpadas o forzadas a dejar en abandono durante los últimos once años sería de 5,5 millones (equivalentes al 10,8% de la superficie agropecuaria del país), de esos millones a la Costa Caribe le corresponde el 38,2%. (Morelos, 2013)

Adicional a ello, diversos estudios realizados por la Universidad de los Andes, indican que, entre los años de 1961 y 2010, se titularon alrededor de veintitrés millones de hectáreas, de las cuales el 92% fueron terrenos baldíos entregados a campesinos o a grupos étnicos. Sin embargo, en los últimos veinte años, 6,6 millones de dichas hectáreas les fueron despojadas a campesinos y, por lo menos, tres millones al Estado.

Uno de los agravantes de este panorama, es que el Estado desconoce la cantidad de terrenos baldíos y su ubicación; además, no tiene claridad sobre la tierra en manos de campesinos cuyos títulos nunca fueron registrados. Tampoco ha dimensionado la corrupción que se escondió por años en el hoy llamado Incoder; cuyos funcionarios adjudicaron tierras que posteriormente abandonaron los campesinos, como consecuencia de la violencia, siendo estas mismas parcelas adjudicadas a otras personas que las usufructúan y a la fecha tienen papeles para demostrar legalidad en el proceso.

La respuesta del Gobierno de Juan Manuel Santos frente a las vulneraciones de los derechos de las víctimas por cuenta de la guerra, se entrevén en la Ley 1448 de 2011⁴⁵, sin embargo, esta política de tierras trajo consigo una serie de retos jurídicos alrededor de la propiedad de la tierra y los terrenos baldíos, más aún en

45 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

un marco transicional mediado por un escenario de postacuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que involucra a la sociedad civil para legitimar procesos de reconciliación, verdad y justicia para la no repetición de los hechos.

Sin embargo, en el ejercicio práctico de aplicabilidad de la Ley, muchas de las víctimas han sido revictimizadas, en la ruta para la reclamación y exigencia de sus derechos. Muestra de ello es el asesinato sistemático de 282 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el país, según cifras de la Defensoría del Pueblo (2019). Igualmente, el informe de dicha institución señala que la violencia se centra en líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos; tal como lo estipula el informe de Riesgo 010 - 17, de la Defensoría del Pueblo de Colombia (2017).

Otro de los elementos que precisa dicho informe es que los homicidios evidencian dinámicas específicas relacionadas con la expansión de la guerrilla del ELN; los enfrentamientos entre la fuerza pública con otros grupos armados, especialmente en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Arauca y Nariño; la articulación con la disidencia de la guerrilla de las FARC; y con la reconfiguración del área de dominio de los grupos armados en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo.

La reconfiguración territorial de los actores del conflicto, luego del Acuerdo de Paz entre Gobierno Nacional y FARC-EP, incidió en la visibilidad de otros conflictos territoriales, en los cuales se ven representados, por su carácter de exigibilidad, los defensores de Derechos Humanos de las zonas rurales, que se convierten en enemigos de quienes ostentan el poder a partir de intereses particulares para el control territorial; por lo que al denunciar estas nuevas conflictividades empiezan a ser amenazados y asesinados sistemáticamente.

En el sur del departamento, más exactamente en el

municipio de San José de Uré, 243 familias han sido desplazadas por el accionar de los grupos armados ilegales que se disputan la minería ilegal y el control de los cultivos ilícitos de la hoja de coca en la región. Esto, entendiendo la dinámica alrededor del corredor geográfico que representa el Alto San Jorge y que recrudece la situación de violencia por la disputa territorial entre las bandas criminales como el Clan del Golfo y los Caparrapos (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2019).

Las características de este conflicto se han vuelto recurrentes en diferentes territorios del país: amenazas directas e indirectas contra líderes y víctimas reclamantes de sus tierras despojadas y defensores de territorios étnicos; actores con poder económico, político o militar interesados en los predios despojados y medidas de protección a medias.

Órganos del Estado y organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en señalar que la violencia contra los defensores de la tierra en Colombia no solo es sistemática o generalizada, sino que también está en aumento y responde a lógicas atadas al uso mismo de la tierra. (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2019)

La Procuraduría General de la Nación (2018), señala que los homicidios contra personas involucradas en procesos de restitución de tierras se han triplicado entre el 2015 y el 2017, y han aumentado gradualmente, en particular desde el 2016, año de la firma del acuerdo de paz.

Desde junio de 2011, que entró en vigencia la Ley 1448 —o Ley de Víctimas— (...) a abril de 2018 fueron asesinados 45 líderes de tierras, de los cuales el 73% eran defensores de territorios campesinos y un 27% correspondían a comunidades étnicas. (Gómez, 2018)

Frente a ello, la Defensoría del Pueblo ha señalado que esta persecución estaría dirigida a integrantes de organizaciones que denuncian la privatización, ocupación y robo de bienes comunes y territorios étnicos, además del acaparamiento de tierras.

La Defensoría —a partir de un estudio sobre la violencia contra líderes sociales entre enero del 2016 y marzo del 2017— concluyó que los líderes asesinados pertenecían a organizaciones sociales, especialmente rurales, campesinas y étnicas, que se oponen al modelo de desarrollo extractivista y a los daños ambientales causados a los ecosistemas, como consecuencia de la expansión de la minería y la agroindustria, consigna el informe de la Procuraduría (Gómez, 2018).

Bajo este análisis de contexto, es posible identificar algunos departamentos que presentan una situación crítica, por ser escenarios sensibles de violencia contra defensores del territorio: Chocó, Antioquia, Córdoba, Nariño, Sucre, Cesar, Bolívar, Cauca y Magdalena. Departamentos con sendos conflictos asociados a la tierra, ya sea por su apropiación para grandes proyectos agroindustriales y para la ganadería extensiva, por su geografía estratégica para el narcotráfico, la minería y proyectos de infraestructura, y por la presión privada que existe sobre territorios étnicos.

En este sentido, se puede precisar que el solapamiento territorial de la violencia pone en riesgo a quienes participan en procesos de restitución o de defensa comunitaria. Al respecto, Sánchez, Marín, De Sandt y Moor plantean que:

(...) en el conflicto han estado involucrados diferentes actores con poder económico que, en menor o mayor grado, no solo se han beneficiado, sino que han contribuido en la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos y en el fenómeno de la acumulación de tierras. (Sánchez, Marín, De Sandt, & Moor, 2017, edición electrónica).

Violencia Homicida: discusión y conclusiones

El caso de Montería es particular en lo que a violencia homicida se refiere. Como ciudad intermedia, el histórico conflicto armado de Colombia ha tenido una incidencia importante en la configuración de la violencia, a partir de la presencia de grupos armados ilegales que se relacionan con el microtráfico, la extorsión y demás actividades criminales. A lo anterior se agrega el hecho de que, al ser centro de referencia de los diferentes actores del conflicto, esta ciudad ocupa el tercer lugar, después de Bogotá y Medellín, en cuanto a la presencia de reincidentes del paramilitarismo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016).

No obstante, lo anteriormente dicho, la violencia homicida presenta dos particularidades importantes para el caso que nos atañe; en primer lugar, este tipo de violencia no es exclusivo de las situaciones de conflicto armado; y en segundo lugar, dada la diversidad de fuentes que aportan información sobre homicidios, no se cuenta, en lo que a Montería se refiere, con estudios suficientes que aborden los procesos estructurales asociados a este fenómeno. La información disponible, consiste en estadísticas sobre el número de homicidios que se pueden cruzar con variables de tipo socioeconómico y sociodemográfico.

En este orden de ideas, desde el Observatorio Nacional de la Salud -ONS- (2014), se considera pertinente complementar las acepciones sobre violencia y homicidio, con los planteamientos de Galtung, en el entendido de que existen diferentes formas de abordar y entender estos conceptos. Galtung (2003), (citado en ONS, 2014), entiende los conflictos como algo inherente a las relaciones sociales, consecuencia de las diferencias entre los sujetos con respecto a la manera en que estos interpretan el mundo. No obstante, lo que no es natural es la forma violenta de resolver dichas diferencias, lo cual debe ser objeto de intervención por parte de la sociedad (ONS, 2014). En este sentido, se retoma “el triángulo de

la violencia” que, a criterio del Observatorio Nacional de la Salud, “permitiría una aproximación a los determinantes sociales de la violencia homicida en Colombia” (Informe digital, ONS, 2014).

Es importante aclarar que los elementos constitutivos del triángulo en mención (violencia directa, estructural y cultural), se pueden distinguir para efectos analíticos, pero nunca disociar, por cuanto en la concreción de la existencia, acaecen de manera conjunta. Lo cual indica que lo que propone Galtung, es una especie de marco interpretativo que nos permite entender que los actos visibles de violencia, son apenas las manifestaciones superficiales de un fenómeno que presenta latencias en el plano de lo social y lo cultural.

Es justamente esta perspectiva teórica la considerada pertinente para comprender la multidimensionalidad de la violencia en Colombia y avizora posibles rutas de investigación en un escenario en el que las estadísticas institucionales son más abundantes que las lecturas explicativas y/o interpretativas. En términos de lo planteado por Galtung, se puede afirmar que los actos de violencia directa que, en la ciudad de Montería, se concretan en homicidios, dan cuenta de aspectos latentes relacionados con la estructura socio-cultural propia de esta región del país.

Teniendo en cuenta lo afirmado en apartados precedentes, podemos plantear algunos aspectos que fungan como latencia socio-cultural con respecto a la violencia; aclarando que estas figuran como hipótesis de trabajo para nuestras líneas de investigación:

- a) Condiciones de exclusión social y de pobreza.
- b) Incorporación de marcos interpretativos de carácter socio-cultural, que legitiman la violencia física como estrategia de gestión de los conflictos entre seres humanos.

c) Economías ilegales y economías de guerra; dentro de las que se destacan el narcotráfico, la minería ilegal no tradicional y el contrabando; articulados a la perpetuación y emergencia de grupos armados al margen de la ley.

d) Conflictos sociales.

e) Corrupción.

De este modo, con la intención de tomar distancia de perspectivas basadas en la linealidad del tiempo y en la causalidad, se propone una mirada socio antropológica de la reconfiguración de la violencia en el departamento de Córdoba y en la ciudad de Montería; lo cual permite entender que las transformaciones de este fenómeno, más allá de implicar la evanescencia de unos fenómenos como premisa fundamental para la emergencia de otros subsecuentes, se han dado en el marco de la coexistencia simultánea de una serie de hechos históricos, presentes en diferentes temporalidades, que han incorporado como garantía de su permanencia las mutaciones políticas, sociales, culturales, económicas e ideológicas.

En este sentido, todos los aspectos desarrollados a lo largo de este documento, no dan cuenta de una sucesión lineal de épocas, sino de la coexistencia de múltiples aspectos articulados al fenómeno de la violencia, lo cual ha permitido identificar tres componentes estructurales: a) unos actores permanentes: Estado, grupos armados ilegales y bandas criminales; b) unos elementos desencadenantes de la violencia: narcotráfico e ideología; y c) un rasgo común en el que históricamente han confluído los dos aspectos anteriores: la lucha por el control territorial y la consecuente afectación de la población civil que se encuentra en medio del conflicto.

Finalmente, desde nuestras líneas de investigación, se traza una ruta de trabajo, fundamentada en la tesis sobre la violencia homicida en Colombia y, particularmente en Montería, estructurada a partir de cuatro factores: a) Conflicto armado, b)

Delincuencia común; c) Crimen organizado; y d) Situaciones de convivencia y conflictividad social. En este sentido, nos preguntamos por la manera en que se han ido perfilando los marcos interpretativos de la población colombiana respecto a esta situación.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, C. & González, C. (2012). Análisis espacial de la violencia homicida en el Pacífico colombiano. *Revista de Economía y Administración*. 9 (1), 69-85.

Aparicio-Ordás, L.A. (2015). El origen de la violencia en las sociedades humanas: violencia simbólica, violencia fundadora y violencia política. *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*. 90 (1), 1-14.

Arcos, M. J., Ávila, M. E., Vera, J. A. & Pérez, B. (2018). Percepción sobre instituciones de seguridad y su relación con la percepción de inseguridad en el estado de Morelos. *Revista ConCiencia EPG*. 3 (1), 117-137. DOI: <https://doi.org/10.32654/>

Briceño, R. (2008). La violencia homicida en América Latina. *América Latina hoy*. 50, 103-116.

Buvinic, M., Morrison, A., & Orlando, M. B. (2005). Violencia crimen y desarrollo social en América Latina. *Papeles de población*. 11 (43), 167-214.

Butler, J. & Athanasiou, A. (2013). Dispossession: The Performative in the Political. Recuperado de: https://monoskop.org/images/1/1f/Dispossession_The_Performative_in_the_Political.pdf

Castro, J. (2016). Los “Urabeños” paralizan el departamento de Córdoba. Recuperado de: <https://www.las2orillas.co/los-urabenos-paralizan-el-departamento-de-cordoba/>

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016). Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias,

rupturas y continuidades, CNMH, Bogotá.

Cuartas, D., Valencia, G. D., & Zapata, O. (2011). Violencia y criminalidad urbana en Colombia (2000-2010): El enfoque económico ortodoxo. *Perfil de Coyuntura Económica*, 17 (1), 141-164.

Cuervo, E. (2016). Exploración del concepto de violencia y sus implicaciones en educación. *Política y Cultura*, 46 (1), 77-99.

Dávila, C. A. & Pardo, A. M. (2015). Análisis del impacto de la mortalidad por homicidios de acuerdo al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en Colombia, 2000-2011. *Revista Gerencia y Política de Salud*. 14 (28), 63-77.

Defensoría del Pueblo de Colombia. (2018). Informe especial: Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo. Bogotá.

_____. Defensor del Pueblo lideró misión humanitaria por el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. Obtenido de: <http://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/7745/Defensor-del-Pueblo-lider%C3%B3-misi%C3%B3n-humanitaria-por-el-sur-de-C%C3%B3rdoba-y-el-Bajo-Cauca-antioque%C3%B1o-Bajo-Cauca-antioque%C3%B1o-Defensor-del-Pueblo-Defensor%C3%ADa-Bajo-Cauca-antioque%C3%B1o>

Domenach, J. M. (1981). La violencia. En J.M. Domenach (Ed.), *La violencia y sus causas* (pp.32-44). París: Editorial de la UNESCO.

Fernández, F. A. (2015). La violencia y el ser humano. *Instituto Español de Estudios Estratégicos*. 32 (1), 1-18.

Fundación Ideas para la Paz [FIP]. (2018). ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? Balance del 2017 y lo que viene

en 2018 [Where are we at with the substitution of illicit crops? Balance of 2017 and what is to come in 2018] (Report No. 3). Retrieved from <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1654>

Galtung, J. (2016). La violencia cultural, estructural y directa. Cuadernos de estrategia. 183 (1), 147-168.

Garmendia, F. (2011). La violencia en América Latina. Anales de la Facultad de Medicina, 72 (4). 269-276.

Giraldo, J., Naranjo, A., Jaramillo, A. & Duncan, G. (2011). Economía criminal en Antioquia: narcotráfico. Primera edición Medellín. Centro de Análisis Político-Universidad Eafit: Pregón Ltda.

Gómez, E., Vera, J. A., Ávila, M. E., Arias, G., Vega, E. & Arcos, M. J. (2016). Victimización e impunidad en el estado de Morelos, México. Revista de Ciencias Sociales. 151(1), 151-170.

Gómez, J. (16 de octubre de 2018). Reclamante de tierras en Colombia: riesgo inminente. Colombia 2020.

González, G. J., Vega, M. G. & Cabrera, C. E. (2012). Impacto de la violencia homicida en la esperanza de vida masculina en México. Pan American Journal of Public Health.

González, G. J., Vega, M. G., Ramos, E., & Wernersbach, L. (2017). Mortalidad por violencias y su impacto en la esperanza de vida: una comparación entre México y Brasil. Ciênc. saúde coletiva, 22 (1), 2797-2809. DOI: 10.1590/1413-81232017229.12172017

Instituto Nacional de Salud & Observatorio Nacional de Salud (2014). Violencia Homicida en Colombia. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional de Colombia. 32 (5), 335-342.

International Crisis Group (2007). Los nuevos grupos

armados de Colombia, Informe sobre América Latina. N°20 – 10 de mayo.

Jiménez, F. (2012). Conocer para comprender la violencia: origen, causa y realidad. *Convergencia, Revista de Ciencias Sociales*, 19 (58), 13-52.

Kaplan, M. (1996). Economía criminal y lavado de dinero. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 1 (85). DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/ijj.24484873e.1996.85.3410>

Landinez, J., Rettberg, A. (2013). La empresa de la paz. *Negociaciones de paz y empresarios en Colombia (1982-2006)*. Bogotá: Universidad de los Andes.

Llorente, M. V., Escobedo, R., Echandía, C. & Rubio, M. (2002). Violencia homicida y estructuras criminales en Bogotá. *Sociologías*. 4 (8), 172-205.

López, C. (2007). *Monografía político-electoral departamento de Córdoba*. Bogotá: Misión de Observación Electoral.

Martínez, A. (2016). La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio. *Política y Cultura*. 46, 7-31.

Ministerio de Defensa (2018). *Indicadores de seguridad 2017-2018 Córdoba – Montería*. Dirección de Estudios Estratégicos Grupo de Información Estadística.

Monsalve, R. (2018). Golpe a la minería ilegal en Córdoba. Recuperado de: <https://www.elcolombiano.com/colombia/golpe-a-la-mineria-ilegal-en-cordoba-EY9177723>

Morelos Martínez, G.P. (2013). *Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar*. Recuperado de: <https://premiosimonbolivar.com/>

inscripciones/anexos/51916feb36dfa_LA_RUTA_1.pdf

Negrete, V. (2008). Situación de conflicto y pobreza en el Departamento de Córdoba y perspectivas de paz. Montería: Publicaciones Acción contra el Hambre.

Observatorio Nacional de la Salud (2014). Violencia homicida en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2009). Dinámica en el departamento de Córdoba 1967-2008. Bogotá: Colombia.

Ocampo M. et al. (2013). Desplazamiento forzado y territorio, reflexiones en torno a la construcción de nuevas territorialidades: nuevos pobres, ciudadanía inconclusa y la búsqueda de una nueva vida digna". Colombia: Departamento de Publicaciones Universidad Externado de Colombia.

Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013). Estudio Mundial Sobre el Homicidio. Resumen ejecutivo. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf

_____. (2018). Informe mundial sobre drogas 2018. Recuperado de: https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf

_____. (2018). Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2016 mayo 2018. Recuperado de: <https://biblioteca.minminas.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6397>

Organización Mundial de la Salud (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Sinopsis. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Recuperado de: <https://www.who.int/>

violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf

Periódico El Universal (2016). Se dispara la minería ilegal en Córdoba. Recuperado de: <https://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/se-dispara-mineria-ilegal-en-cordoba-217062-GREU321007>

Pineda, S. (2018). Crimen Organizado y Economía Criminal en Colombia: el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el sur de Córdoba. Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo Vol. 5 No. 2, pp. 246-261.

Pontón, D (2013). La economía del narcotráfico y su dinámica en América Latina. Revista de Ciencias Sociales. No. 47, Quito, septiembre 2013, pp. 135-153 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador.

_____. (2016). Presentación, Las economías ilegales y sus trayectorias. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. 18 (1), 7-11. DOI: <https://doi.org/10.17141/urvio.18.2016.2301>

Procuraduría General de la Nación. (2018). Violencia sistemática contra defensores de derechos en Colombia. Informe Procuraduría General de la Nación abril de 2018. Recuperado de: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/180710_Violencia%20sistemica-contr%20defensores-derechos-territoriales.pdf

Ramírez, L. D. (2014). Crimen y economía: una revisión crítica de las explicaciones económicas del crimen. Argumentos. 27 (74), pp. 261-290.

Revista Semana (2006), ¡Así los masacraron! Recuperado de: <https://www.semana.com/nacion/articulo/asi->

masacraron/80763-3

Rincón, D. (2018). Corrupción y captura del Estado: la responsabilidad penal de los servidores públicos que toman parte en el crimen organizado. Bogotá, D.C., Colombia - Volumen XXI - No. 42, julio-diciembre de 2018. Revista Prolegómenos - Derechos y Valores, pp. 57-71.

Rodríguez, M. A. (2008). Violencia homicida: Clasificación y factores de riesgo. Medicina UPB. 27 (2), pp. 125-139.

Salama, P. (2008). Informe sobre la violencia en América Latina. Revista de Economía Institucional. 10 (18), 81-102.

Salcedo Fidalgo, A. (2008). Defendiendo territorios desde el exilio: desplazamiento y reconstrucción en Colombia contemporánea. Revista Colombiana de Antropología 44.

Sánchez, C., Marín, D., De Sandt, J. & Moor, M. (2017). La Paz, responsabilidad de todos. La responsabilidad corporativa en la justicia transicional: lecciones para Colombia. Utrecht (Países Bajos): PAX.

United Nations Office on Drugs and Crime (2013). Global Study on Homicide 2013. Viena: UNODC.

Verdad Abierta. (2010). Kimy Pernía, líder indígena emberá asesinado. Recuperado de: [https://Verdad Abierta.com/kimy-pernia-lider-indigena-embera-asesinado/](https://VerdadAbierta.com/kimy-pernia-lider-indigena-embera-asesinado/)

Verdad Abierta. (2013). La toma de la Universidad de Córdoba. Recuperado de: [https://Verdad Abierta.com/la-toma-de-la-universidad-de-cordoba/](https://VerdadAbierta.com/la-toma-de-la-universidad-de-cordoba/)

Vilalta, C. J. (2015). Tendencias y proyecciones globales en la

violencia homicida, 2000 a 2030. Río de Janeiro: Instituto Igarapé.

Vilalta, C. J., Castillo, J. G., & Torres, J. A. (2016). Delitos violentos en ciudades de América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de <file:///C:/Users/DOCENTE-PSICOLOGIA/Downloads/Delitos-violentos-en-ciudades-de-Am%C3%A9rica-Latina.pdf>

Villarruel, A. (2017). Violencia estructural: una reflexión conceptual. Vínculos Sociología, Análisis y Opinión, 11 (1), 11-36.

5

CAPÍTULO
CINCO

5. EL COMPORTAMIENTO DEL HOMICIDIO EN TRES CIUDADES INTERMEDIAS COLOMBIANAS. UN ANÁLISIS ESPACIO TEMPORAL DEL CRIMEN A TRAVÉS MÉTRICAS TOPOLÓGICAS DE REDES COMPLEJAS

Rafael Rentería Ramos⁴⁶

Williams Gilberto Jiménez García⁴⁷

Resumen

El presente capítulo es el resultado de una investigación en la que se aplican herramientas de la complejidad en la comprensión e interpretación de una problemática social que tiene gran

46 Doctor en Ciencias Económicas, Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales - Grupo de Investigación de Automatización, Control, Computación y Mecatrónica Aplicada (GIACMAP).

47 Doctor en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia. Red de conocimiento en violencias y criminalidad, Red VICRI.

impacto en la construcción de sociabilidades. El objeto de análisis es la comprensión de las dinámicas espacio-temporales del homicidio en tres ciudades intermedias colombianas que poseen altas tasas de este delito. Las herramientas metodológicas que se usaron fueron las redes topológicas, para las que se hizo uso de las variables espacio y tiempo y, los hotspots del delito en cada una de las tres ciudades, de forma que se pudiera posteriormente hacer una lectura comparada. El principal hallazgo de la investigación es que en las tres ciudades el homicidio posee una morfología similar, pues se concentran los homicidios en una zona central que posee se conecta con otros centroides mas pequeños. Además, también se pudo evidenciar una compleja red que interconecta los homicidios espacio-temporalmente en cada una de las tres ciudades, señal evidente que en ambas ciudades los móviles de la mayoría de los homicidios obedecen a causas estructurales y estructurantes.

Acerca de los antecedentes y los insumos teóricos conceptuales

No es posible determinar una relación lineal o causal exclusiva entre la violencia y la ciudad, lo cual no significa que no exista una interacción entre ambas. En la ciudad, no solo se contiene la violencia, se reproduce, a veces sus habitantes la pueden ocasionar y en otras padecer los efectos de la misma. La relación entre ciudad y violencia puede encontrarse cuando se entiende a la primera como un escenario de relaciones sociales (Carrión, 1993) y a la segunda como una relación particular de conflicto que se presenta en este escenario (Gúzman Barney, 2007).

Se puede afirmar que en América Latina existe una relación histórica entre la ciudad, sus tasas de urbanización y violencia (Carrión, 1993; Gaviria & Pagés, 1999; Vargas & García, 2007). Lo anterior, no limita a la violencia a circunscribirse en la ciudad, de hecho, hay violencias rurales, pero lo que sí se puede señalar es que hay una diferenciación del tipo de violencia entre ambos

contextos, dónde, según Duncan (2005), en el campo primarían los delitos contra las personas, la familia y la moral, y en la ciudad los delitos contra la propiedad.

En el estudio de Churruca (2014), se evidencia que las migraciones masivas del campo a la ciudad en América Latina generaron un escenario que permitió la confrontación y el conflicto social, según Jiménez García, “llegaron más personas de las que el territorio podía tener, el gobierno atender y la sociedad tolerar” (2013, p. 64). Este desplazamiento humano generó un aumento en las tasas de urbanización en las ciudades, pero también generó un crecimiento en las tasas de criminalidad⁴⁸, dado que en la ciudad :1) se concentra más riqueza y por lo tanto se diversifican los medios para obtener y competir por ella (Perea, 2016); 2) se acumulan mayores cantidades de riesgos (Chardon, 2008); 3) Se produce la marginalización de amplios sectores de grupos humanos (Petrella & Vanderschueren, 2003); 4) existen mayores presiones para el reconocimiento social (Del Olmo, 2000); y 5) se diluyen los lazos de solidaridad que se traían del campo (Guzmán Barney, 2007).

Latinoamérica se ha convertido en un continente de ciudades, su acelerada urbanización ha coincidido con el aumento en las tasas de homicidios (Carrión, 2008). Son diversas las explicaciones que han ofrecido las investigaciones a esta relación de urbanización y violencia: Briceño-León (2002) establece que las dinámicas migratorias del campo a la ciudad, en la mayoría de los países latinoamericanos, no solo explican la aceleración de la urbanización, sino también el incremento de la violencia, puesto que la ciudad es el escenario donde se presentan los conflictos y las competencias por bienes y servicios (Cocco & Lopes, 2010; De Quinto & Arcila, 2004; Del Olmo, 2000).

48 Sin embargo, países como Chile, Uruguay y Argentina son altamente urbanizados y no tienen tasas de homicidio tan altos como otros del continente (Carrión & Ron, 2009).

Según Jiménez García:

[...] La rápida urbanización en las ciudades plantea presiones adicionales sobre los recursos naturales y económicos, el espacio, la movilidad urbana, la democracia, el control territorial y la seguridad, que las autoridades locales y la sociedad en general son incapaces de atender de manera eficiente y oportuna. Estas presiones de la población, traducidas en necesidades sentidas, generan expectativas en los habitantes; cuando éstas no se cumplen los ciudadanos empiezan a desconfiar en las autoridades y en los demás ciudadanos, generando así escenarios de confrontación de orden socio-político, desatención y marginalización de sectores de la población, que encuentran en la violencia una oportunidad para resolverlos. (2013, p. 64)

Sin embargo, la explosión demográfica no genera violencia por sí misma, para Martín (2011), el proceso de urbanización latinoamericano está relacionado con la violencia en el sentido de que este crecimiento desorganizado y no planificado ha propiciado profundos problemas de convivencia y marcados resentimientos sociales entre los grupos más marginales (Rotker, 2000; Vargas & García, 2007). Este proceso de urbanización sin articulación, regido por las lógicas del poder y el control territorial, caracterizado por la falta de equilibrio y equidad (Briceño-León, 2007) ha propiciado en las ciudades latinoamericanas todo un orden social que reconoce en la violencia un medio que garantiza la supervivencia en la ciudad (Kessler, 2004), ya sea usándola contra algún otro individuo o adaptándose a ella.

A su vez, el tema de la segregación socio-espacial (Caldeira, 2011; Paternain, 2006) es ocasionado, en parte, por la migración del campo a la ciudad y por las condiciones socio-económicas de las ciudades en general (más que por las individuales), generando sitios, zonas y barrios peligrosos e inseguros (Bordorf, 2003), en donde se gestan actos delictivos violentos (Jiménez García, 2014). En su estudio de hábitat y seguridad urbana, De León y

Velásquez (2012) afirman que las zonas marginales de las ciudades latinoamericanas como el extremo Este de Caracas, Ciudad Bolívar en Bogotá, las Villas en Buenos Aires y las Favelas en Río de Janeiro, concentran problemáticas sociales estrechamente relacionadas con la violencia, en estas zonas se concentra la mayor cantidad de los desposeídos y desempleados (ONU-Hábitat, 2012), pero también se consolidan los actores del crimen organizado (bandas criminales) (Contento, 2015), las redes de tráfico de estupefacientes, de personas, de homicidas y de ladrones.

Algunos académicos se centran en que la marginalidad tiene una conexión con la violencia y sus prácticas violentas, ya que la marginalidad de ciertos grupos poblacionales genera exclusión social y frustración, según Petrella y Vanderschueren (2003), si bien no genera directamente la violencia, sí condiciona las acciones de los individuos excluidos a involucrarse en actividades ilícitas que generalmente están signadas por la violencia. Así mismo, las zonas marginales bajo el argumento crítico en la investigación de Caldeira (2011), adolecen de equipamientos urbanos suficientes y de calidad, no tienen control policial, no cuentan con presencia institucional, hay aumento de la angustia y el temor, a la vez que se generaliza la urbanización privada, convirtiéndose –las zonas marginales– en el “habla de la ciudad”, es decir la otra identidad y la otra realidad de las ciudades.

Estas zonas marginales tienen la característica político-físico-espacial de ser descuidadas por las autoridades (Ackerman & Murray, 2004; Dammert & Oviedo, 2004), incluso, varios sitios en las ciudades latinoamericanas son vedados para los cuerpos policiales (Frühling, 2003). La capacidad de organización de los criminales llega a establecer barreras invisibles para todo tipo de actores: políticos, civiles, coercitivos, que sean contrarios a sus intereses (Ruíz, 2008), siendo la violencia en este caso, el terror sembrado en la población civil y el abandono estatal, las condiciones que permiten estas restricciones de movilidad en la ciudad (Cortés, De León, Penilla, & García, 2015), el reconocimiento de

los actores ilegales como garantes de un control social (Briceño-León, Ávila, & Camardiel, 2012) y la imposibilidad que tienen los pobladores locales de habitar dignamente un territorio (Jiménez García, 2015).

Desde mediados de los años noventa, varios estudios ecológicos del delito han intentado encontrar los factores político-institucionales y socioeconómicos que se configuran en escenarios urbanos donde hay altos índices de violencia en Latinoamérica, comparando la distribución de los homicidios en diferentes unidades agregadas: países, regiones, provincias, departamentos, áreas metropolitanas, municipios, ciudades, comunas y barrios (Beato, Peixoto & Andrade, 2004; Dammert & Linecke, 2004; Jiménez García, 2016). Todos estos estudios se han basado en los datos oficiales que ofrecen instituciones como la Policía, Fiscalía o el mecanismo médico-legal competente, hecho que ha producido que sobresalgan los estudios que se centran en la distribución espacial de los delitos y en los móviles que están detrás de ellos, y que hallan menos estudios que busquen medir la percepción del delito, la desorganización social, la cohesión social y la eficacia colectiva (Villareal & Silva, 2006).

En este sentido, el estudio de Villarreal y Silva (2006) resulta iluminador, ya que prueba empíricamente teorías sociológicas del delito en una escala territorial definida: el barrio. En esta investigación se probó el efecto de las características estructurales del barrio en la cohesión social de los habitantes y en la producción de delitos en esta área político-cultural. El estudio partió de un diseño multinivel y los datos fueron recolectados por medio de una encuesta en una comunidad de la ciudad de Belo Horizonte (MG). La principal conclusión de dicho estudio se centró en afirmar que la presencia de barrios pobres de redes densas y altos niveles de homicidio constituye un reto epistemológico para las teorías de desorganización social, resultados que son similares a los encontrados por Manzano (2009) en barrios marginales de Santiago de Chile.

En la misma ciudad de Belo Horizonte, Silva (2014), aplicando el indicador de desorganización social diseñado por Sampson y Groves (1989), con datos de la encuesta de victimización de esta ciudad, el censo nacional del año 2000 y datos de la policía militar, encuentra que las tasas de delito son efecto de un nivel comunitario, donde emerge una relación entre las redes locales de amistad, las altas densidades de contactos sociales y bajas tasas de delitos, en otras palabras, esta investigación muestra que hay una relación negativa entre las redes de amistad y los crímenes, hecho que sustenta la hipótesis de que un barrio con fuertes redes de amistad contrae mayor cohesión y control social informal, produciendo que haya menores tasas de crímenes en este espacio territorial.

En la misma línea, el estudio de Escobar (2012) desarrollado en barrios de Bogotá y haciendo uso de análisis de datos espaciales, halló que la concentración de desventajas sociales, segregación socio-espacial, desorden social y la presencia de instituciones formales de control social, pueden predecir los altos niveles de violencia de algunos barrios de la capital colombiana. Sin embargo, también encontró que variables proxi como el sexo y el grupo etario (específicamente hombres jóvenes, entre los 17 y los 25 años) no explicaban gran parte de los homicidios de los barrios más peligrosos de Bogotá, lo que quiere decir que, para estos barrios, la existencia de estructuras criminales como las milicias urbanas, los combos de jóvenes y las pandillas, no tienen una incidencia tan fuerte como se plantea en otros estudios como el de González y otros (2012), sino que hay otros elementos como las desventajas sociales que pueden explicar de forma más completa la situación homicida que está presente en estos barrios.

Por otro lado, siendo que las desventajas socioeconómicas explican y justifican el uso de la violencia, también hay otros factores político-institucionales y socioculturales que deben ser explorados para comprender las prácticas sociales violentas en Latinoamérica (Frühling & Gallardo, 2012). En las ciudades

de América Latina la extraordinaria histórica concentración de personas con aspiraciones comunes de la vida urbana, pero con graves privaciones materiales y escasas esperanzas en el futuro “produce sentimientos de privación relativa. Estas circunstancias favorecieron el surgimiento de los aspectos más perturbadores de la pobreza” (Katzman, 2002, p. 181). Como argumentó Lunecke (2012), no obstante la mayoría de los residentes de los barrios que sufren de altos índices de homicidios le temen a las organizaciones criminales, las profundas y amplias relaciones que se han tejido entre la comunidad y los delincuentes disminuyen el peso del juicio moral y su consecuente control social, sucediendo así, que aunque la mayoría de los vecinos no compartan el patrón normativo implantado por estos grupos, lo legitiman cada vez que la organización social lo precisa, ya sea pagando por la protección que ofrecen (Bedoya, 2006), acudiendo a sus sistemas de ajusticiamiento (Montoya, 2009) o simplemente cuando no denuncian los hechos criminales e, incluso, cuando simplemente los ignoran (Lunecke, 2012).

Así mismo, desde el estudio de Rotker (2000), la violencia trae como consecuencia la pérdida de los espacios físicos en los que los ciudadanos pueden socializar y ejercer su derecho a la ciudad, a su vez que la convierte potencialmente en un campo de batalla entre grupos marginados por fuera de la ley, en búsqueda de controles territoriales, reconocimiento social y (re)construcción de nuevas escalas de valores. Al mismo tiempo, la violencia marginaliza, estigmatiza y (auto) excluye las zonas violentas de las ciudades, generando que la ciudadanía no disfrute de toda la ciudad y logre plenamente su derecho de ser ciudadanos, es decir, en palabras de Pedrazzini (2006) coarta la libertad de la ciudad, y no permite la conjugación del ser, estar y tener (Heidegger, 1994) en un territorio.

En este sentido, el presente estudio busca, desde una perspectiva amplia, propia de un programa de investigación, establecer las relaciones territoriales que se plasman sobre un

espacio geográfico definido como lo es la ciudad, para entender las prácticas sociales violentas que producen los homicidios. Sosteniendo la hipótesis de que los homicidios no se distribuyen homogéneamente en los territorios y tampoco lo hacen de manera aleatoria, es decir, esto sucede gracias a una intencionalidad que nace desde una racionalidad de explotación de las rentas de un territorio.

Por ello, el presente capítulo busca, desde un estudio de grafos y desde el análisis de métricas de redes complejas, entender la distribución de los homicidios desde dimensiones 1) político-espaciales y; 2) espaciotemporales, de forma que se puedan establecer patrones de distribución y concentración de homicidios en las ciudades. Resultados que pueden resultar útiles para entender: 1) la naturaleza y motivaciones de los homicidios; 2) las lógicas de la acción criminal de las organizaciones criminales, así como el comportamiento de los mercados criminales; 3) el control territorial ejercido por las organizaciones criminales; 4) la utilidad socioeconómica de los territorios de las ciudades; y 5) cuáles son las comunidades más vulnerables frente a la violencia homicida.

Sobre el diseño de la investigación, la articulación de los elementos teóricos-discursivos y los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación

Para cumplir con el propósito de la presente investigación, en el estudio de carácter explicativo se desarrollaron técnicas de investigación mixta, cuantitativas y cualitativas, y con diferentes niveles de análisis (ciudad y barrios). En lo particular, el presente capítulo busca responder al objetivo específico de “estudiar la variabilidad conjunta del espacio y tiempo para predecir o generar escenarios delincuenciales: focalizando áreas geográficas de inseguridad y determinar grupos vulnerables a sufrir hechos delictivos”. Acciones que permiten construir información que busca principalmente incentivar la formulación de políticas

públicas y facilitar la toma de decisiones en el tema de inseguridad. Para ello se analizaron los resultados de la información estadística criminal que construye la Policía Nacional de Colombia. El análisis es de tipo estadístico-relacional con un uso de la teoría de la complejidad, hecho que lo hace correlacional-explicativo, pues busca conocer la relación entre variables y entender el sentido de dicha relación.

La selección del caso de estudio

La búsqueda de producir conocimiento que resulte de utilidad para comprender fenómenos que afectan a las zonas urbanas de Colombia demandó, en una primera etapa, seleccionar ciudades que fueran representativas de las urbes de la región. Los elementos que se tuvieron en consideración fueron sus características de poblamiento, indicadores sociales y niveles de violencia.

Metodológicamente, se determinó utilizar dos criterios condicionantes, el primero estuvo relacionada con el hecho de que sean ciudades intermedias, ya que en la investigación colombiana de los fenómenos de violencia pululan las investigaciones de las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá y recientemente Barranquilla, y poco se conoce de las ciudades intermedias como Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Manizales, Armenia, Soledad, entre otras.

Por su parte, el segundo criterio fue la aplicación de un método de diferencias en estudios comparados, conocido como Most Similar System Design (MSSD) que busca comparar unidades (ciudades intermedias) similares en sus componentes y diferentes en sus resultados (Anckar, 2008). Así, las ciudades seleccionadas fueron Bello (Antioquia), Palmira (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda). Estas ciudades comparten características en su desarrollo económico reciente, procesos de urbanización caracterizados por el desplazamiento forzado colombiano, así como procesos de segregación residencial, que son recurrentes en la realidad urbana latinoamericana (Muggah, 2012).

El barrio como unidad de análisis

Desde una perspectiva criminológica, el barrio es una categoría difícil de asir. El uso del término barrio no es sencillo porque no hay una interpretación generalizable ni social, ni jurídicamente hablando (Galster, 2001; Kearns & Parkinson, 2001). Dada la dificultad que se presenta al momento de definir barrio, en la mayoría de los estudios criminológicos, ya sea desde la criminología crítica, ambiental o desde la ecología del delito, se opta por usar la expresión “unidades de estudio”, las cuales fueron definidas, por ejemplo, en el estudio de Dietz (2002, p. 541), desde las diferencias geográficas evidentes como cruce de avenidas, parques recreativos y bloques de manzanas. Sin embargo, es preciso indicar que incluso cuando las secciones seleccionadas como unidad de estudio corresponden con las lógicas de poblamiento local y, a su vez son consistentes con la noción de áreas ecológicas anidadas (Manzano, 2009), esta codificación puede resultar imperfecta, tal como lo argumentó Sampson (2002).

En la mayoría de los países de Latinoamérica, la falta de datos sobre el delito desglosados en el contexto local (ya sean sectores o barrios) hace que el problema de la delimitación sea más difícil de solucionar. Por esta razón, la mayoría de los estudios sobre el delito (desde la teoría ecológica del delito) se centran en analizar las problemáticas desde un nivel municipal o regional (Abdullah, Razak, Salleh & Sakip, 2012; Ackerman & Murray, 2004; Arias, 2006; Bruinsma & Bernasco, 2004) y, solo algunos de ellos analizaron el fenómeno de una forma más local (Jiménez García, 2014; Manzano, 2009). Sin embargo, se hace oportuno mencionar que, sin importar la escala de análisis, la mayoría de los estudios se realizaron sobre la base de criterios censales o enraizados en la división geográfica y administrativa de la ciudad, los cuales, en ambos casos, obedecen a elementos que son de carácter oficial (institucional) (Briceño-León, 2002; Dammert & Oviedo, 2004).

En un trabajo pionero de la escuela sociológica de Chicago, Park, Burgess & McKenzie (1984, pp. 179-180) definieron el barrio como un área geográfica donde las personas y las instituciones compartían sentimientos, tradiciones y una historia propia. Además, argumentó que el barrio es la unidad más pequeña de organización social y política de la ciudad porque la proximidad y el contacto vecinal se fomentan allí. Sin embargo, la construcción social de lo que es un barrio no siempre coincide con las lógicas normativas-nominativas que la administración de la ciudad precisa para ordenar su territorio. Como describió Park (1915), la administración de la ciudad, en ultimas, determina los límites y los arreglos generales de los edificios públicos y privados erigidos en la ciudad. Esta delimitación “administrativa” se hace con base en iniciativas políticas (como los planes de vivienda) o en elementos del mercado como el valor del uso del suelo y, en contadas ocasiones, por elementos como la construcción histórica de los pobladores. Gracias a esta situación, Park, Burgess y McKenzie (1984) propusieron un enfoque conocido como natural area, el cual ha sido muy influyente para el campo de la sociología urbana, particularmente en los estudios ecológicos del delito, y que permite configurar un “área de estudio” que permite comprender de mejor forma las lógicas locales de vecindad. Este enfoque también encuentra críticas en estudios como los realizados por Bursik & Grasmick (1993) y Sampson & Groves (1989).

Haciendo eco de las críticas, el presente estudio toma en consideración la unidad espacial barrio desde la perspectiva que propusieron Kearns y Parkinson (2001, p. 2.103), en la que agregan una nueva variable a la definición de barrio y es que además de ser una centralidad que permite la construcción social e histórica de un territorio, será aquel espacio geográfico que cubra una extensión entre cinco a diez minutos caminando de su hogar. En esta área, las redes se basan simplemente en la proximidad de la residencia y el uso de las instalaciones locales (Bursik & Grasmick, 1993). Las funciones psicosociales típicas de esta área son establecer conexiones con otros y fomentar el apego

y la pertenencia (Brower, 1996, citado por Kearns y Parkinson 2001, p. 2.103). Como resultado, los residentes pueden sentirse más integrados y más seguros en esta área que en áreas un poco más distantes.

Con base en estos ámbitos, se operacionalizó la unidad territorial denominada barrio, para fines del estudio, de la siguiente manera:

- o Población entre 50 y 1.000 hogares, dependiendo del tipo de construcción (plana o en altura).
- o Homogeneidad de la trama urbana, teniendo como límites hitos disruptivos tales como carreteras, grandes parques, u otros.

El diseño del instrumento metodológico

Este estudio se suma a la creciente cantidad de trabajos académicos que hacen uso de las redes complejas para explicar fenómenos multicausales como la violencia. Primero, se presenta la relación espacial del homicidio en cada uno de los tres municipios, para luego, en segundo lugar, mostrar la relación espacio temporal de los homicidios.

El conjunto de datos proviene del observatorio del delito de la Policía Nacional de Colombia, el cual es el área de investigación de la Policía que se encarga de recolectar, tratar, analizar y evaluar la información de los homicidios aplicando la ciencia criminológica (Policía Nacional de Colombia, 2017b). Estos datos contienen la información de los homicidios de los municipios de Bello, Palmira y Pereira durante los años 2010-2016, describiendo variables como: estación de policía, fecha, hora, barrio, clase de sitio, arma, características de la víctima y características del victimario. La Policía recolecta esta información gracias a un mandato legal que le confiere dicha responsabilidad y con base en un protocolo interno que les da validez a los datos aquí procesados.

El conjunto de datos construido a partir de la información que suministró la Policía contiene 3.398 registros, cada uno con 15 variables que describen el hecho violento. Información que se levantó en campo por personal de la Policía Nacional de Colombia, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y otras instituciones de perfil criminológico como la Fiscalía General de la Nación.

Este estudio hace uso de herramientas propias de las redes complejas desde las perspectivas de Strogatz (2001), Dorogovtsev & Mendes (2003), Estrada & Rodríguez-Velázquez (2005) y Newman (2010). Las redes complejas se pueden entender como conjuntos de muchos nodos conectados que tienen alguna interacción. A los nodos se les llama vértices o elementos y se representan con símbolos como v_1, v_2, \dots, v_N , donde N es el número total de nodos de la red. Si un nodo v_H se conecta con otro nodo v_S , está conexión se representa por una pareja ordenada (v_H, v_S) . Matemáticamente una red se puede entender de la siguiente manera:

[...] Una red R consiste en un conjunto de nodos $V = \{v_1, v_2, \dots, v_N\}$, y un conjunto de parejas ordenadas $E = \{(v_i, v_j)\} \subset V \times V$. Cada pareja ordenada (v_i, v_j) se llama conexión dirigida del nodo v_i al nodo v_j . La red R se llama no dirigida si para cada pareja $(v_i, v_j) \in E$ también existe la pareja $(v_j, v_i) \in E$. De lo contrario, la red se denomina dirigida. Llamaremos a todos los nodos que estén conectados directamente a un nodo v_i , los vecinos de v_i . Finalmente, el número k_i de vecinos del nodo v_i (es decir, el número de conexiones de v_i) se llama la conectividad de v_i , y el promedio de estas conectividades, $\bar{k} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i$, es la conectividad de la red. (Aldana, 2006, p. 3)

Una red representa un sistema a través de sus componentes y las relaciones que se configuran entre ellos. La red se puede mapear por medio de un gráfico $A(V, E)$, con V el conjunto de vértices $v \in V$ y E el conjunto de bordes o enlaces entre vértices. Esta metodología ha sido ampliamente utilizada para investigar

sistemas naturales, sociales y artificiales, como por ejemplo la cohesión social y la victimización (Rentería-Ramos & Soto, 2016), el óptimo de las redes delincuenciales (Sarmiento, Cantillo, Realpe & Montoya, 2016), diseño y planificación de redes de vigilancia inteligente (Relanzón, 2009), medidas del desempeño policial a través de redes complejas (De Oliveira Muniz & Proença Júnior, 2005) y estilos de vida y salud (Pastor-Satorras & Vespignani, 2002).

Estudiar las dinámicas espacio temporales de los delitos en las ciudades intermedias usando este tipo de instrumentos metodológicos, permite evidenciar y comprender el comportamiento, el impacto y las relaciones de poder que se configuran en los territorios. Los resultados que aquí se expondrán son insumos para las autoridades locales, ya que estas redes podrían predecir la ubicación espacio temporal de nuevos homicidios.

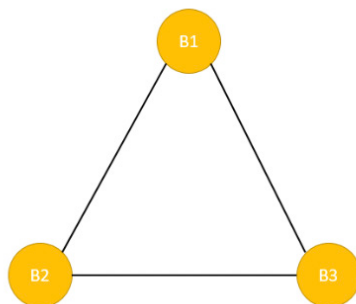
Diagnóstico de la red de homicidios en las tres ciudades estudiadas

Para la construcción de un diagnóstico de la red y del comportamiento de los homicidios, se contó con la base de datos de la Policía Nacional de Colombia de los delitos registrados año a año (2010-2016). En esta base de datos se encuentran los homicidios de todos los municipios de los departamentos en los que se encuentran las tres ciudades objeto de estudio (Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda).

Luego de depurar la base de datos y seleccionar las variables a estudiar, que para el caso de este estudio son: tiempo (hora del homicidio) y espacio (barrios), los que se conocerán de ahora en adelante como los nodos de la red, se procedió a evidenciar la relación de los homicidios con los espacios geográficos en donde se perpetraron, siguiendo un esquema básico como el que se evidencia en la Figura 12, donde B1, B2 y B3 representan barrios

dónde se cometió algún homicidio, en los tiempos t_1 , t_2 , t_3 , donde el número (1, 2 y 3) representa la simultaneidad (distribución temporal) del homicidio.

Figura 12. Estructura de la red de homicidios.
(Fuente: Elaboración propia).



A mayor número de homicidios en un sitio o a una hora determinada, mayor será la fuerza de relación que exista entre las variables.

Análisis de la intensidad y coherencia

En redes complejas, los motivos muestran patrones de interconexión con frecuencias mucho mayores que aquellos gráficos que estudian situaciones aleatorias. Este tipo de estudios o análisis se han usado en trabajos como los de Delmas et al. (2017) y Rodríguez-Rodríguez, Jordano & Valido (2017). Los motivos o la coherencia poseen características intrínsecas que condicionan la probabilidad de que sucedan ciertos valores en los nodos, a pesar de su aplicación a cortes particulares de la red (Milo et al., 2002).

Este hecho permite que se genere una serie de tendencias en la información que permiten visualizar elementos como el consenso de los nodos que configura las direcciones y magnitudes de esas relaciones en la red. Esta condición es fundamental para entender

la topología de los delitos y también para encontrar patrones de homicidios en los territorios.

Para introducir aspectos topológicos de motivos en redes ponderadas (o fuerza), se hace uso de la métrica de intensidad y coherencia desarrollada por Onnela et al. (2005). En este modelo metodológico, la Intensidad $I(g)$, para el grafo g con vértices V_g y los bordes E_g como la medida geométrica de sus pesos W_{ij} .

Esta fórmula garantiza la calificación del enlace en la coherencia de los valores W_{ij} y lleva a priorizar los barrios donde se registran más coincidencias en el espacio tiempo de los homicidios. Desde allí, se establece la coherencia $Q(g)$, que permite estudiar el consenso de las variables en los bordes de los motivos. La coherencia toma valores cercanos a la unidad más importante para su grafo para establecer la asociación entre un conjunto de barrios y, se define como la relación entre la intensidad $I(g)$ y la media geométrica de sus ponderaciones o fortalezas W_{ij} .

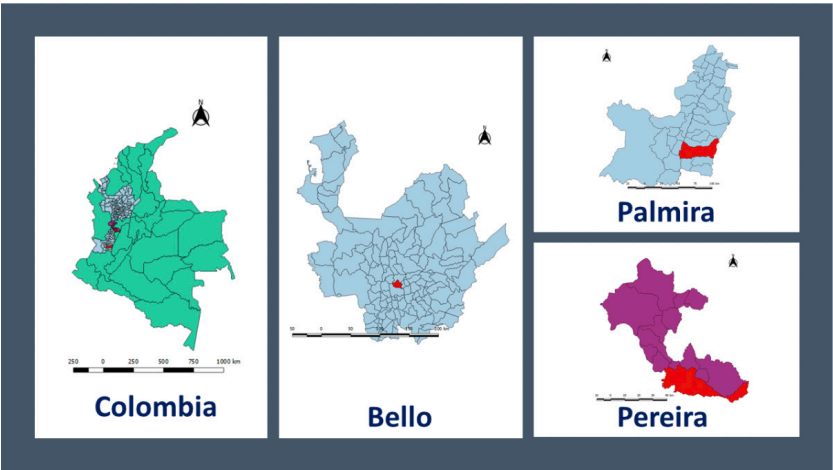
El contexto de la investigación: una lectura comparada del homicidio en las ciudades de Bello, Palmira y Pereira

Las ciudades seleccionadas para el presente estudio fueron Bello (Antioquia), Palmira (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda), (Figura 13). El municipio de Bello cuenta con una población de 464.614 y es la mayor población, después de la ciudad de Medellín, que presenta algún municipio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Tabla 3). Por su parte, Palmira es la segunda ciudad en población de la región metropolitana del Sur del Valle del Cauca (no es un área metropolitana legalmente constituida), habitando 306.706 personas en esta ciudad (Tabla 3). Finalmente, Pereira es la capital del departamento de Risaralda, es la ciudad más grande del Área Metropolitana del Centro Occidente (y del presente estudio) y cuenta con 472.000 habitantes (Tabla 3).

Tabla 3. Habitantes por ciudad, 2016.
(Fuente: Elaboración propia con datos de DANE, 2016a).

| A.M | Ciudad | 2016 (Proyección) | % del A.M | Pob. Total A.M |
|--|---------|----------------------|-----------|----------------|
| Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA- | Bello | 464.614 | 3.821.890 | 12,15 |
| Cali Metropolitana -CM- | Palmira | 306.706 | 2.943.634 | 10,41 |
| Área Metropolitana del Centro Occidente -AMCO- | Pereira | 472.000 | 704.944 | 66,95 |

Figura 13. Ubicación geográfica de Bello, Palmira y Pereira con respecto a sus departamentos y a Colombia. (Fuente: Elaboración propia).



Las tres ciudades tienen elementos en común que se deben resaltar. Los tres centros poblados: 1) tienen altas tasas de homicidios (Policía Nacional de Colombia, 2017); pero 2) en los últimos diez años estas tasas han tendido a descender como ha sucedido en todo el país (Policía Nacional de Colombia, 2017);

3) son importantes centros para el tráfico de drogas desde la perspectiva de los mercados locales y globales (Cortés, Gómez & García, 2015); 4) tienen altas tasas de desempleo (DANE, 2016b); 5) reciben gran cantidad de desplazados por la violencia, pero también de inmigrantes locales que llegan buscando mejores oportunidades económicas (Departamento Nacional de Planeación, 2012); y 6) tienen una ubicación estratégica particular que dinamiza e incentiva la configuración y operación de mercados ilegales: 6.1) Bello se encuentra en el nodo vial que conecta el Valle de Aburrá y el Sur de Antioquia con la principal centralidad del país, Bogotá, 6.2) Palmira se encuentra al lado de Cali y es parte de un gran centro agroindustrial del país, además se emplaza en un punto que conecta el puerto de Buenaventura en el Océano Pacífico con regiones andinas como el Eje Cafetero y el Cauca, y 6.3) Pereira es un nodo que conecta las ciudades de Medellín y Cali y, a su vez, al Océano Pacífico con Bogotá.

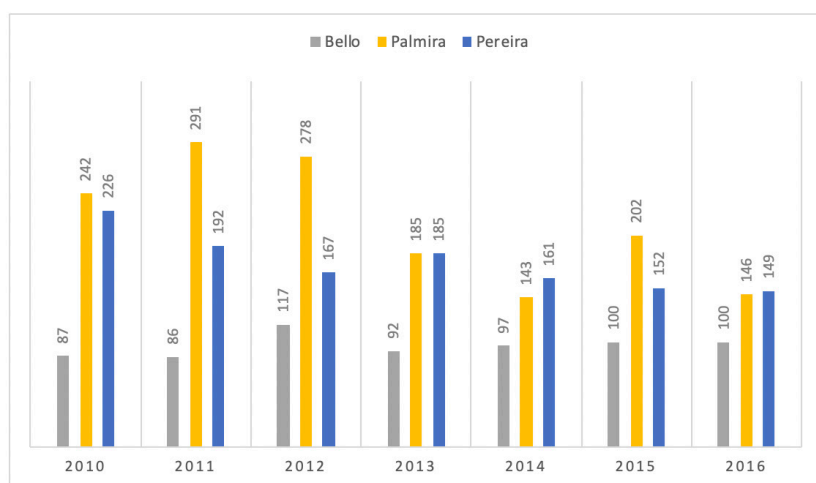
Estas ciudades tienen dinámicas criminales similares, desde una perspectiva nacional y regional, pero diferentes desde una perspectiva municipal, local e incluso micro local. Para efectos del presente estudio, se analizará comparativamente el comportamiento de los homicidios para cada una de las tres ciudades.

El comportamiento del homicidio en las ciudades de Bello, Palmira y Pereira

Durante el periodo estudiado, en las tres ciudades hubo 3.398 homicidios, el 20% de los homicidios se registraron en Bello, el 36,3% en Pereira y el 43,8% en Palmira (Figura 14). A pesar de que la ciudad de Palmira fue el centro urbano donde más homicidios se registraron, no siempre fue la ciudad en la que año tras año se registraron mayor cantidad de homicidios. Por ejemplo, los años 2013, 2014 y 2016 la ciudad de Pereira registró mayor cantidad de homicidios que Palmira (Figura 14). En este sentido, se debe decir que Palmira acumula tantos asesinatos debido a su cercanía

con la ciudad de Cali, la cual es la ciudad que presenta mayor tasa de homicidios a nivel Nacional. Es decir, la dinámica criminal en Palmira está influenciada por Cali, mientras que, en Pereira, su dinámica criminal más que estar influenciada por alguno de sus municipios conurbados, más bien sucede que Pereira influencia las dinámicas criminales de Dosquebradas, La Virginia e incluso Cartago.

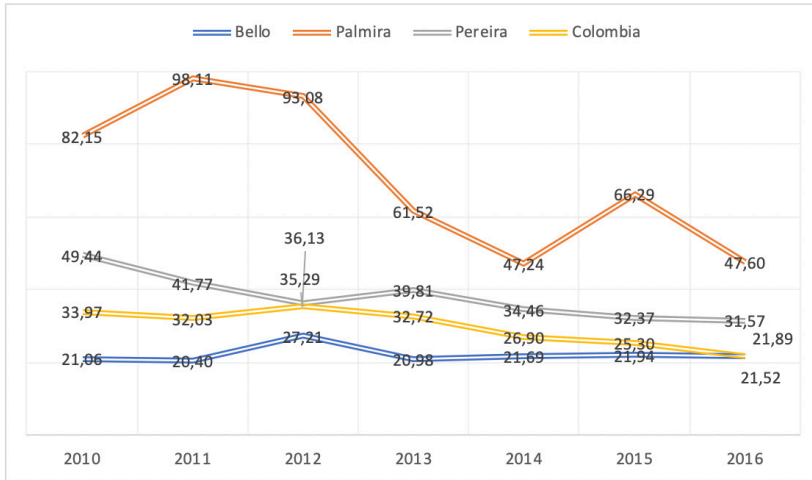
Figura 14. Homicidios registrados en las ciudades de Bello, Palmira y Pereira, años 2010-2016. (Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia, 2017).



En cuanto a las tasas de homicidios, las cuales permiten comprender el impacto de este delito frente a la sociedad que lo recibe y comparar el alcance que tiene el homicidio en cada una de las tres ciudades, se pudo observar que la tasa de homicidios más alta fue la de Palmira, que en algunos casos dobló a las tasas de Pereira, y que superó a su vez hasta por cuatro veces a las tasas de Bello (Figura 15). Igualmente, se debe decir que Palmira y Pereira siempre superaron la tasa de homicidios nacional, no así Bello que siempre marcó tasas menores (Figura 15). También es preciso indicar que los tres municipios superaron el límite establecido por

la OMS que categoriza al homicidio en los territorios como una pandemia (Franco, 1999).

Figura 15. Tasa de homicidios de las ciudades de Bello, Palmira y Pereira, años 2010-2016. (Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia, 2017a y cálculos con base poblacional del DANE, 2016a).

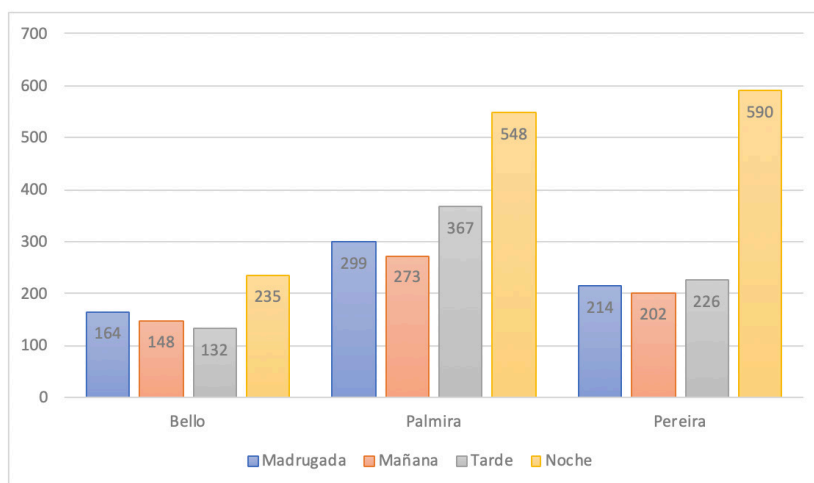


Si se observa por ciudad el comportamiento año a año de los homicidios, es posible evidenciar que para Palmira el año 2011 fue el más violento, ya que en ese año se registró la mayor cantidad de homicidios (292 y una tasa de 98,11) y el año donde menos hubo fue 2014 (143 y una tasa de 47,24). Para Pereira el año con más homicidios fue 2010 (226 y una tasa de 49,44) y el de menos fue 2016 (149 y una tasa de 31,57) y, para Bello, el año con más decesos violentos fue 2012 (117 y una tasa de 27,21), mientras que el año con menos asesinatos fue 2016 (92 y una tasa de 21,52) (Figuras 14 y 15).

En cuanto a la jornada (temporal) en la que se registraron los homicidios, se encontró que para todas las ciudades fue la noche el espacio del día en donde ocurrieron más homicidios, seguido por la tarde, la mañana y la madrugada (Figura 16). Esta

tendencia solo fue interrumpida en el municipio de Bello, donde se registraron más homicidios en la jornada de la madrugada que en la de la tarde (Figura 16).

Figura 16. Jornadas en las que se cometieron homicidios en las ciudades de Bello, Palmira y Pereira. (Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia, 2017a).



Por otra parte, para encontrar las relaciones espaciales de los delitos en espacios geográficos, se hizo uso de las herramientas SIG, en particular de los hotspots. Para realizar el mapa de hotspots de homicidios se aplicó un método conocido como Kriging. Para aplicar esta técnica fue necesario realizar previamente tres tareas: 1) determinar las variables dependientes e independientes, que para el caso del presente fueron los homicidios; 2) recolectar los datos de homicidios por medio de la base de datos ya citada; y 3) realizar las predicciones por medio del uso de software libre Qgis.

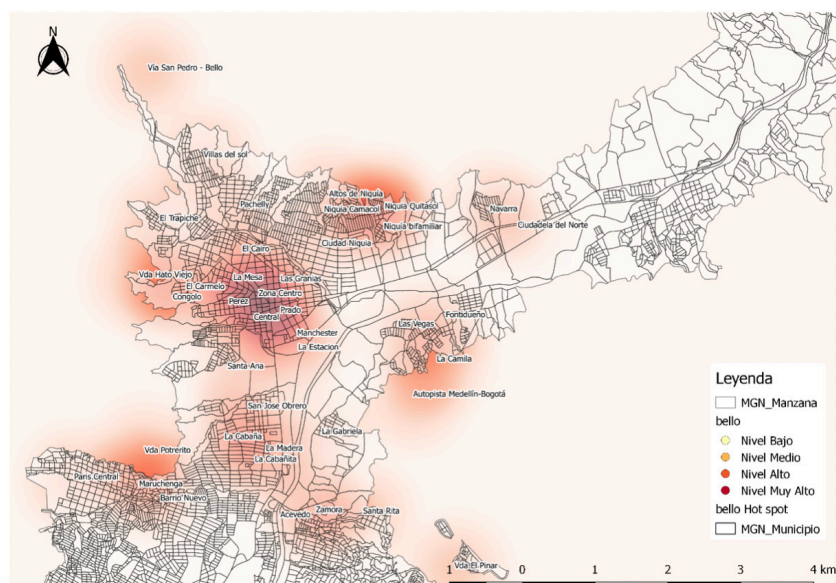
El método Kriging presupone que el valor medio constante homicidios es desconocido, que obedece al azar y que su distribución es homogénea, ofreciendo como resultado un mapa de densidad que muestra en color rojo los sitios donde se

concentran la mayor cantidad de delitos (superiores a la media de homicidios) y en blanco en aquellos donde no se presentan concentración de hurtos. De esta manera, se logró construir un mapa que muestra la distribución espacial de los homicidios y la concentración que se genera en ciertos puntos de la ciudad.

En el caso de Bello, los barrios que mayor cantidad de homicidios concentraron fueron: Ciudad Niquía (54), en este barrio se cometieron 9 homicidios en promedio por año. Otros barrios con un alto número de homicidios fueron: Zamora (42), La Cabaña (27), Niquía Camacol (27), Autopista Medellín-Bogotá (25), La Gabriela (25), Prado (21), Paris Central (19), Vereda El Pinar (18), Maruchenga (17), Vereda San Félix (17), y El Cóngolo (13).

Si se observa la concentración de los homicidios, es posible evidenciar que se generan tres ejes (Figura 17): 1) en el norte con los barrios Altos de Niquía, Niquía Camacol, Niquía Quitasol, Niquía Bifamiliar y Ciudad Niquía; 2) en el centro, el cual particularmente concentra la mayor cantidad de homicidios, en él se localizan los barrios de: Central, Prado, Pérez, La Mesa, Cóngolo, El Carmelo, Las Granjas, El Cairo y Manchester; y 3) en el sur en la frontera con Medellín y en el inicio de la Autopista hacia Bogotá, con los barrios La Madera, La Cabañita, Acevedo, Zamora y Santa Rita.

Figura 17. Hotspots de homicidios en Bello. (Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia, 2017a).

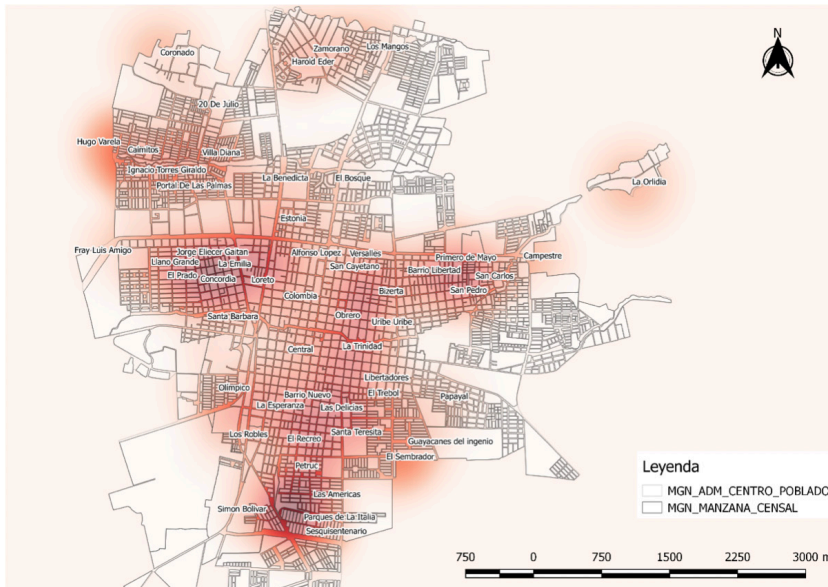


En el caso de Palmira, hubo cuatro barrios que superaron el valor de un homicidio mensual (algo que en realidad es alarmante). Por ejemplo, en los barrios Zamorano (79 homicidios), San Pedro (76) y La Emilia (72) hubo dos decesos violentos mensuales y, en Las Delicias (60 homicidios), ocurrieron dos decesos violentos trimestrales. Otros barrios que poseen alto número de homicidios son: Loreto (44), Central (36), La Trinidad (34), Corregimiento de Roza (31), Coronado (31), Colombia (29), Sembrador (26), Villa Diana (24), Caimitos (21), Colombina (21), Sesquicentenario (21), Barrio Nuevo (20), Harold Eder (20), La Odilia (20), Simón Bolívar (19), Alfonso López (18), Campestre (17), El Prado (17), Ignacio Torres (17), San Cayetano (17) Corregimiento los Dolores (16), Corregimiento Nueva Tienda (15), Danubio (14) y Olímpico (14).

En cuanto a la concentración de los homicidios en Palmira, se encontró un hecho particular y es la mayor concentración

de estos delitos en la zona centro-sur de la ciudad, un eje que va desde los barrios Llano Grande (centro-occidente) hasta Campestre (centro-oriental) (Figura 18). En este eje se concentra casi el 70% de los homicidios de la ciudad. Adicional a este eje se encuentran otros tres: el primero ubicado en el nor-occidente de la ciudad (Figura 18) y en el que se localizan los barrios de Hugo Varela, Caimitos, Ignacio Torres, Portal de las Palmas y Villa Diana; el segundo ubicado al norte de la ciudad (Figura 18) con los barrios Harold Eder, Los Mangos y Zamorano (barrio en el que se concentró la mayor cantidad de homicidios en el periodo de estudio); y el tercero ubicado al sur de la ciudad y en el que se hallan los barrios de Petruc, Las Américas, Sesquicentenario, Parque La Italia y Simón Bolívar (Figura 18).

Figura 18. Hotspots de homicidios en Palmira. (Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia, 2017a).

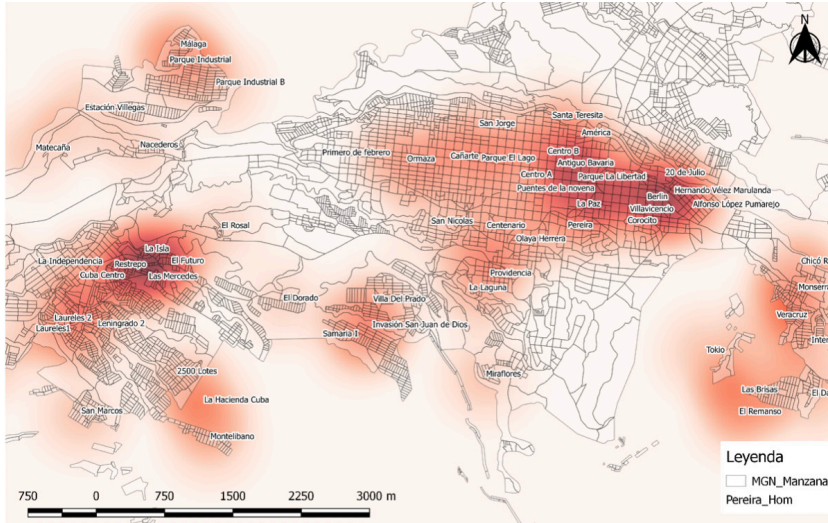


En el caso de Pereira, hubo una distribución más heterogénea de los homicidios, en el sentido de que no se concentraron muchos homicidios en pocos barrios, sino que, al contrario, hubo

muchos barrios que concentraron niveles medios de homicidios. Por ejemplo, el barrio que más homicidios concentró fue El Dorado (41 homicidios), el cual, si se compara con barrios como Zamorano (79) y Ciudad Niquía (54) claramente concentró una menor cantidad de homicidios. Otros barrios que concentraron una cantidad considerable de asesinatos en Pereira fueron: Corregimiento Puerto Caldas (36), Centro de Pereira (31), Villavicencio (24), Las Brisas (21), El Remanso (20), Corocito (19), Parque Industrial (19), Intermedio (19), Ciudadela Tokio (17), Cuba-Centro (16), Puentes de la Novena (16), Caimalito (15), Nacaderos (15) y Parque La Libertad (14).

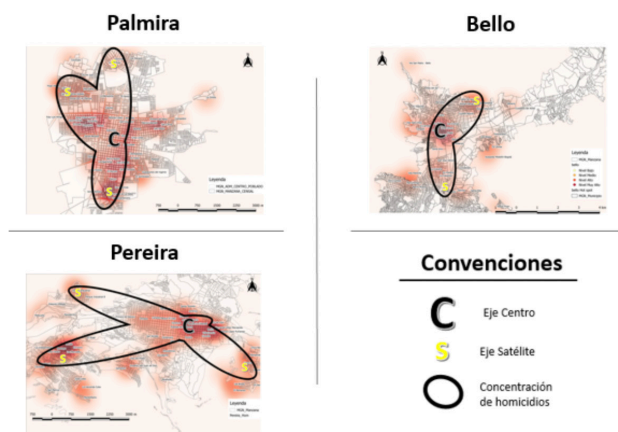
En cuanto a la concentración de los homicidios, se encontró que en Pereira se formaron cuatro ejes: 1) el más grande se ubicó en el centro de la ciudad (Figura 19) y representó casi el 40% de los homicidios de toda la ciudad, en esta zona de la ciudad se localizan los barrios de Centro, La Paz, Puentes de la Novena, Antigua Bavaria, Parque de La Libertad, Parque El Lago, Villavicencio, Berlín, Corocito, América, Santa Teresita, 20 de Julio, Alfonso López y Hernando Vélez Marulanda; 2) otro eje con una alta intensidad de homicidios fue el que se ubicó al suroriente de la ciudad (Figura 19), donde se encuentran los barrios de El Remanso, Ciudadela Tokio, Intermedio, Monserrate, Veracruz, El Danubio y Chico Restrepo; 3) otro eje al suroccidente de la ciudad en el sector de Cuba (Figura 19) y en el que se emplazan los barrios de Laureles 1 y 2, Leningrado 2, La Isla, Cuba Centro, Las Mercedes, Restrepo, 2.500 Lotes y La Independencia; y 4) finalmente, otro eje al noroccidente de la ciudad (Figura 19), en donde se encuentran los barrios de Málaga, Parque Industrial sector A y B y Ciudad Boquía.

Figura 19. Hotspots de homicidios en Pereira. (Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia, 2017a).



Si se observan los tres mapas de hotspots de homicidios, se puede ver una similitud gráfica-espacial y es que en cada una de las tres ciudades hubo una centralidad que concentró la mayor cantidad de homicidios y, unos ejes satélites ubicados en los extremos de este núcleo central (Figura 20), lo que indica, al menos morfológicamente hablando: 1) que hay una distribución en la concentración de los homicidios que puede ser similar dentro de cada una de las ciudades; y 2) que los homicidios se concentran en una centralidad que se comunica con cada uno de los satélites, en otras palabras esta centralidad puede influenciar la dinámica criminal de cada satélite. Estos dos hechos podrían justificar otras investigaciones en otras ciudades intermedias, de forma que se compruebe si en las ciudades intermedias ocurre un patrón en la distribución de homicidios como el que en la presente investigación sí se pudo evidenciar en cada ciudad.

Figura 20. Patrón de concentración de los homicidios en las ciudades de Bello, Palmira y Pereira. (Fuente: Elaboración propia).



Una métrica topológica de redes, aproximaciones espaciotemporales para la comprensión sistémica de los homicidios

Cuando se aplica un análisis de métricas topológicas, se intenta analizar la distribución espacio temporal de los homicidios de forma que permita entender elementos como la simultaneidad y la espacialidad con el fin de encontrar patrones de organización. Este hecho de facto permite afirmar que el homicidio no se distribuye al azar en los territorios donde se produce, de hecho, reconoce que los homicidios son prácticas sociales violentas premeditadas que están mediadas por una serie de circunstancias que van desde la captación de rentas criminales que produce un territorio, incluso como un mecanismo de control de los hábitos de producción de rentas en un territorio, hasta como un mecanismo de producción, sostenimiento y acumulación de poder en un territorio.

En este sentido, la siguiente red topológica de los homicidios en cada una de las tres ciudades estudiadas permite: 1) definir el comportamiento del homicidio en los espacios de cada una de las ciudades; 2) comprender las lógicas de ocupación y uso de los espacios por parte de los actores criminales; y 3) conocer cuáles

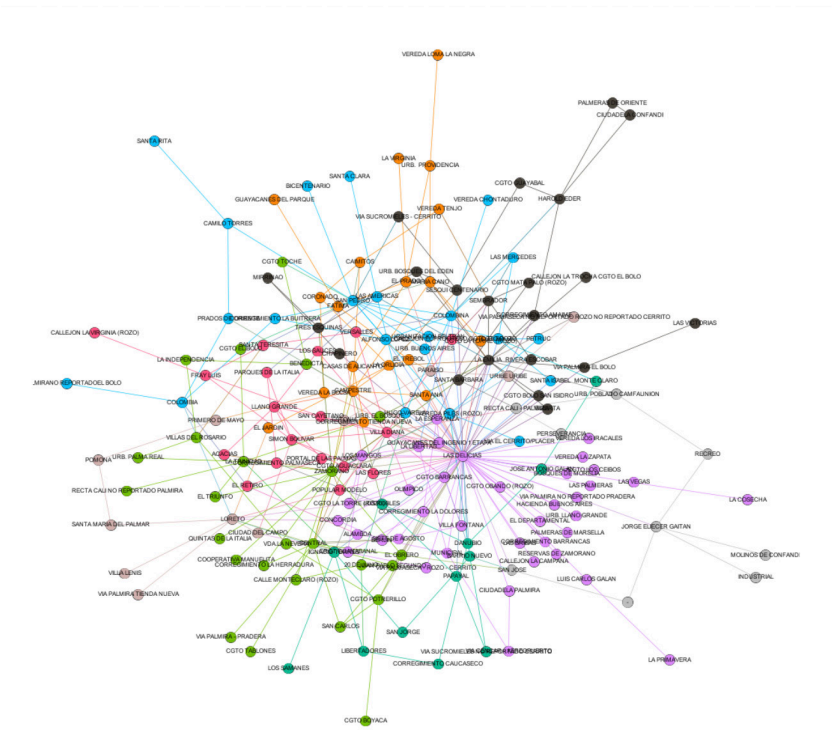
son los territorios dentro de la ciudad que necesitan especial atención, ya sea para promover nuevas estrategias de control policial o para garantizar la presencia del estado local en forma de planes preventivos y asistencia psicosocial de la población que funge tanto como potencial víctima, pero también de aquellos que suelen ser los victimarios.

En el municipio de Palmira, se obtuvo una red densa de homicidios que mostró la conexión existente entre cada uno de los homicidios en cada uno de los barrios. En la Figura 17 se muestra gráficamente cómo se distribuyeron geo-crónicamente cada uno de los homicidios. Para interpretar esta figura hay que comprender que cada punto representa un homicidio en un barrio y que este punto se conecta con otros puntos, mostrando básicamente: 1) la conectividad que se presentan entre los homicidios de cada barrio, donde la cantidad de conexiones mostrará un patrón de homicidios, que estará representado por el mayor número de conexiones que presente un barrio, información que permitirá comprender el papel o la trascendencia que tiene este barrio para la acumulación de homicidios; 2) la conexión entre los homicidios en los barrios generan circuitos, es decir, redes dentro de la red, los cuales para efectos visuales están representados por distintos colores. Estos circuitos son conocidos como comunidades y estas indican la fuerza que tienen las conexiones.

Para efectos de la intensidad del homicidio, se encontró en Palmira que barrios como La Emilia, Las Delicias y Zamorano tienen mayores valores de intensidad (Figura 17). La intensidad es una medida de la significancia estadística que tienen estos barrios a la hora de entender la espacialidad del homicidio. En otras palabras, la intensidad mide qué tan fuerte es el delito de homicidio dentro de la comunidad, es una medida del impacto de la existencia del homicidio y de su simultaneidad y, se calcula haciendo uso de la media geométrica que resulta de una multiplicatoria. Este dato permite entender la importancia que tienen estos barrios para comprender el comportamiento de los

homicidios. Esta información resulta útil si se quieren planear controles operativos por parte de la Policía, pues como mínimo se tendría que planear vigilancia policial efectiva y simultánea en estos sitios prioritarios. A su vez, la cantidad de homicidios en estos barrios y las conexiones que ocurren debido a la simultaneidad de estos homicidios, geográficamente hablando, permiten conocer la intensidad y esta a su vez es una medida probabilidad que permite comprender, incluso inferir, el comportamiento del homicidio, pero también las lógicas de las organizaciones criminales que cometen este delito.

Figura 21. Red de homicidios del municipio de Palmira, Valle del Cauca. (Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia, 2017a).



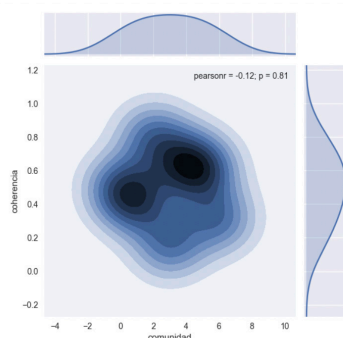
En Palmira fue posible evidenciar múltiples comunidades, las cuales están representadas en la Figura 21 por distintos colores. Sin embargo, hay cuatro comunidades que tienen un alto poder explicativo a la hora de hablar de la distribución de homicidios y son aquellas que están señaladas con color morado como centroide en el barrio Las Delicias; con color negro con centroide en el barrio La Emilia; con color azul con centroide en el barrio Central; y con color verde con centroide en el barrio Zamorano.

Si bien, la intensidad determina la fuerza del homicidio dentro de un espacio geográfico, no es suficiente para comprender el patrón organizativo que tiene el homicidio en un territorio, ya que la intensidad se calcula multiplicando dos valores de existencia de homicidios, lo que ofrece un valor que puede indicar relaciones entre los homicidios de dos barrios que no necesariamente estén conectados ni espacial ni temporalmente hablando y que, por lo tanto, no tengan una relación evidente. Para solucionar esta situación se hace un cálculo, conocido como coherencia, la cual, a través de una esperanza estadística (la media aritmética) que hace una relación entre la media geométrica con la media aritmética, busca comprender el estado de los flujos que se generan en las conexiones de los nodos, en otras palabras, busca determinar si la intensidad y la fuerza de los nodos corresponde a eventos que sean lógicos con la realidad. En este sentido, valores cercanos a uno determinan que hay una alta coherencia en la red y cercanos a 0 que los valores no tienen coherencia y, por lo tanto, no están conectados, es decir, están por fuera del patrón de la distribución espacio temporal de los homicidios.

Para el caso de Palmira, se halló que hay una coherencia del 0,8 (muy elevada) para el caso de las comunidades de Central-Los Mangos, de 0,60 para las comunidades de Las Delicias-La Emilia, y 0,64 para las comunidades de La Emilia-María Cano, los cuales son los anillos más externos evidentes en la Figura 22. Este resultado indica que estos barrios concentran la mayor intensidad de delitos y que desconectar a estos barrios de la producción de

homicidios permitiría atacar de manera estratégica y sistémica la red de homicidios.

Figura 22. Coherencia por Cliques y comunidades del homicidio en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. (Fuente: Elaboración propia).



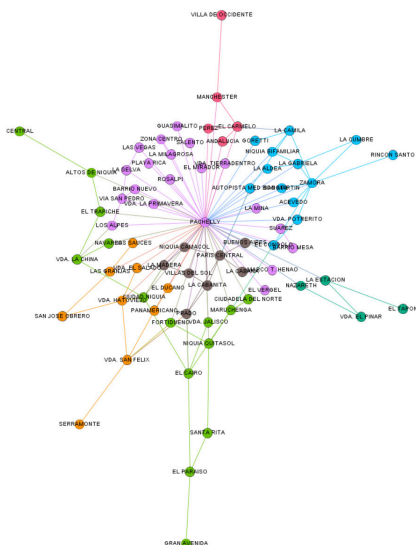
Por su parte, en el municipio de Bello se encontró una red menos densa que en Palmira, debido a que en Bello se registraron menos homicidios (Figuras 14 y 15). Bello tiene un elemento muy característico y es que se ve con claridad que el barrio Pachely es el nodo central que conecta los homicidios con todos los demás barrios. En este sentido, se podría plantear que si se genera un control estatal efectivo en este barrio, se podría garantizar una reducción integral de los homicidios, ya que se está atacando integralmente a la estructura que puede gerenciar, administrar o, tal vez, controlar la dinámica criminal de este territorio.

Otro elemento particular que tiene Bello, y que lo diferencia con Pereira y Palmira, es que no hay barrios en los que los homicidios estén desconectados de otros homicidios. Es decir, todos los homicidios presentaron simultaneidad y por lo tanto conexión, no hay casos aislados. Este hecho es un indicador del control efectivo territorial ejercido por parte de las organizaciones criminales en Bello, las cuales luego de consolidar el poder y manejar todos los capitales de un territorio, se encargan de

racionalizar el uso de la violencia, particularmente del homicidio. En este sentido, se presenta una condición y es la selectividad de los homicidios, hay pocos homicidios, pero los que se comenten generan alto impacto (se busca dejar un claro mensaje del control del territorio). Esto se puede constatar también por la baja de homicidios que tiene Bello (Figuras 14 y 15).

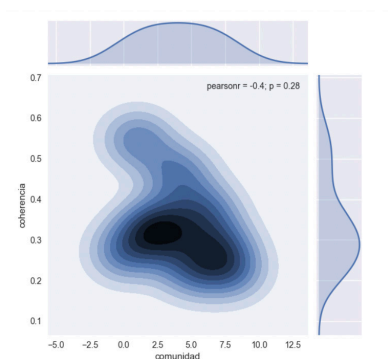
En Bello se registraron seis comunidades (Figura 19). La comunidad más densa estuvo representada por los cliques de color morado, formando un eje en los barrios Pachely, Los Alpes, Zona centro y Suarez. Seguida por la red de color azul, representada por Zamora-Niquía-Rincón Santo. Luego, la red de color verde conformada por barrios como Maruchenga-Ciudadela del Norte-El Paraíso. Luego, en la zona rural la de color naranja con sitios como la Vereda de San Félix- Hato viejo-El Salado.

Figura 23. Red de homicidios del municipio de Bello, Antioquia.
(Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia, 2017a).



Por su parte, al estudiar la coherencia en cuanto a comunidades y cliques se encontró que los niveles de coherencia son altos (0,20 a 0,50) (Figura 24). Llama la atención la presencia de valores muy altos (0,54) (Figura 24), correspondientes a cliques representados por barrios como Zamora, Maruchenga y Pachely, y a la comunidad que está representada por el color morado (Figura 23).

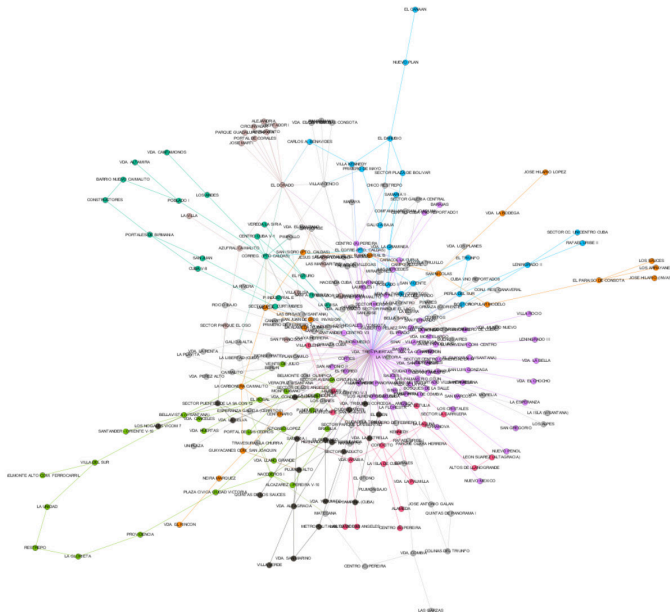
Figura 24. Coherencia por Cliques y comunidades del homicidio en el municipio de Bello, Antioquia. (Fuente: Elaboración propia).



Finalmente, el municipio de Pereira presentó una red más grande que las de los otros dos municipios, esto dado que este municipio tiene más barrios que los otros dos, aunque esta red es menos densa que la de Palmira, debido a que Palmira presentó mayor cantidad de homicidios que Pereira (Figuras 14 y 15). La red de homicidios muestra una centralidad muy marcada por tres puntos que son focales, dos que se pueden decir periféricos como son: Villasantana y Tres Puertas, y uno central como es el sector Parque de La Libertad (Figura 25). En Pereira los barrios que mayor intensidad presentaron en cuanto a homicidios fueron: Las Brisas de Villasantana, El Dorado, La Vereda tres puertas, Parque Industrial, El Parque de la Libertad, Corocito y el centro de la ciudad (Figura 25).

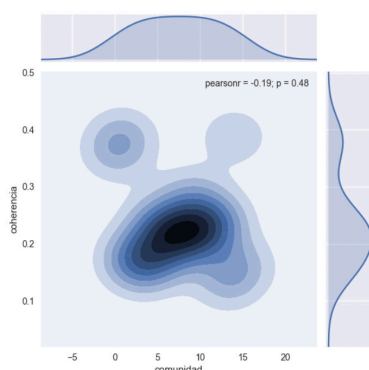
En cuanto a las comunidades fue posible diferenciar muchas más comunidades que las presentadas en los municipios de Bello y Palmira (Figuras 21 y 23), lo cual es también una muestra de la espacialidad evidente en los hotspots de homicidios en esta capital departamental. En este análisis es evidente la multicentralidad que tienen los homicidios en Pereira, pues no se evidencia una concentración tan marcada y “homogénea” como en los otros dos municipios. Las principales comunidades fueron: Centro-Villasantana-Parque de La Libertad-Tres Puertas de color morado; Las Brisas-Veracruz-El Danubio de color azul; El Dorado-Parque Guadalupe Zapata-Libertador de color gris oscuro; Villavicencio-Corocito-Parque Bolívar de color gris claro (Figura 25).

Figura 25. Red de homicidios del municipio de Pereira, Risaralda.
(Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia, 2017a).



En cuanto a la coherencia, es posible evidenciar que en Pereira la coherencia es más baja en comparación con Bello y Palmira. Sin embargo, hay dos comunidades que tienen valores altos que representan un alto factor explicativo a la hora de entender la simultaneidad de los homicidios como son: Centro-Parque de La Libertad (0,42) y Las Brisas-Veracruz (0,39) (Figura 26).

Figura 26. Coherencia por Cliques y comunidades del homicidio en el municipio de Pereira, Risaralda. (Fuente: Elaboración propia).



Una visión recapituladora, acerca de las conclusiones del estudio comparativo

De acuerdo con la literatura revisada, es posible evidenciar y concluir que los estudios de redes complejas han sido poco utilizados para comprender las dinámicas espacio temporales de los delitos y en particular de los homicidios. El presente estudio es apenas un preámbulo, tanto para comprender esta compleja realidad, como para perfeccionar la aplicación de unas técnicas metodológicas para el análisis sistémico de los delitos.

Combinando dos técnicas de análisis, como son los hotspots y la métrica de redes topológicas complejas, se pudo visualizar el patrón que siguen los homicidios en tres ciudades intermedias colombianas y en particular con una escala de análisis barrial.

En este estudio se logró evidenciar que existe un patrón de distribución espacial, hallado por medio de la interpretación de los hotspots de homicidios, similar para las tres ciudades, hecho que resulta gráficamente evidente en los respectivos mapas. Este patrón evidencia que las zonas más calientes se distribuyen en un nodo central y en dos ejes satelitales que se interconectan por medio de un “puente”.

En la ciudad de Bello, los ejes satelitales fueron ubicados en los barrios del Norte (Niquía, Altos de Niquía, Ciudad Niquía) y en los barrios del sur de la ciudad (Zamora, Acevedo, La Madera) y el eje central fue el centro de la ciudad y barrios aledaños como El Cóngolo, El Carmelo y Manchester. En la ciudad de Palmira, los ejes satelitales se ubicaron en el centro occidente de la ciudad (Llano Grande), centro oriente (Campestre) y en el norte (Zamorano y Los Mangos) y el eje central se ubicó en el centro sur de la ciudad (La Emilia). En Pereira, la distribución se dio en los ejes satelitales ubicados en el suroriente (Villasantana), sur occidente (Cuba) y Nororiente (Parque Industrial) y el eje central se ubicó en el centro administrativo de la ciudad (Parque de La Libertad hasta el río Otún).

Esta información fue coincidente con los elementos hallados de las redes topológicas. Las cuales, además de medir la distribución espacial del delito (como complemento de la técnica de los hotspots), permitió calcular la intensidad que tienen estos homicidios en los barrios más críticos, a través de las conexiones que se generan cuando los homicidios se presentan de manera simultánea. En este sentido, se pudo encontrar que en Bello hay una red pequeña con altos grados de interconexión y con una alta coherencia muy característica del ejercicio de organizaciones criminales que controlan los territorios.

En Palmira, esta red es muy densa y tiene comunidades muy amplias con altos niveles de intensidad, sobresale el alto nivel de coherencia (muy cercano a 1,0), hecho que permite afirmar que

el modelo explicativo conseguido con este método topológico es una muestra muy fiable, que tiene un alto factor explicativo en cuanto al comportamiento de los homicidios en esta ciudad.

Por su parte, en Pereira, la red es más grande y a su vez densa, pero el nivel de coherencia es el más bajo de todo el estudio, aunque valga afirmar que sigue siendo un nivel alto, en el que sobresalen dos ejes, también reconocidos en el hotspot como: Villasantana y Parque Industrial. Esta distribución homicida es una clara muestra de la dinámica criminal de Pereira, la cual se encuentra concentrada en espacios periféricos de la ciudad.

Es preciso concluir que este tipo de análisis sistémicos permiten comprender los patrones homicidas y conocer de forma indirecta la capacidad de control territorial que tienen las organizaciones de crimen organizado en las ciudades colombianas. El conocimiento de este patrón es útil para las autoridades de control coercitivo, ya que con base en esta información se pueden planear esquemas de vigilancia y seguridad, planear estrategias lúdicas y pedagógicas por el respeto a la vida y a los valores socioculturales, entre otras acciones estatales que permitan legitimar la administración de la violencia por parte de las autoridades civiles legales. Es así, que estos insumos metodológicos validados permiten no solo construir información, sino potenciar y complementar la calidad de los análisis que se tienen sobre fenómenos complejos como lo son el delito y la violencia.

BIBLIOGRAFÍA

Abdullah, A., Razak, N. A., Salleh, M. N. M. & Sakip, S. R. M. (2012). Validating Crime Prevention through Environmental Design Using Structural Equation Model. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36 (june 2011), 591–601. En: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.065>

Ackerman, W. & Murray, A. (2004). Assessing spatial patterns of crime in Lima, Ohio. *Cities*, 21 (5), 423–437. En: <https://doi.org/doi:10.1016/j.cities.2004.07.008>

Anckar, C. (2008). On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the Most Different Systems Design in Comparative Research. *International Journal of Social Research Methodology*, 11 (5), 389–401.

Arias, E. D. (2006). *Drugs & democracy in Rio de Janeiro : trafficking, social networks, & public security*. University of North Carolina Press.

Beato, C., Peixoto, B. & Andrade, M. (2004). Crime, oportunidade e victimacao. *Revista Brasileira de Ciencias Sociais*, 19 (55), 73–90.

Bedoya, J. (2006). Seguridad y ciudadanía en los 90s en Medellín: El surgimiento de las empresas Colombianas de protección violenta. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 31 (62), 87–130. En: <https://doi.org/10.1080/08263663.2006.10816903>

Bordorf, A. (2003). La segregación socioespacial en ciudades latinoamericanas: el fenomeno, los motivos y las consecuencias para un modelo de desarrollo urbano en América Latina. In *Transformaciones regionales y urbanas en Europa y América Latina*. Barcelon: Publicaciones de la Universidad de Barcelona.

Briceño-León, R. (2002). La nueva violencia urbana de América Latina. *Sociologías*, (8), 34-51. En: <https://doi.org/10.1590/S1517-45222002000200003>

_____. (2007). *Sociología de la violencia en América Latina*. (FLACSO, Ed.) (Primera). Quito.

Briceño-León, R., Ávila, O. & Camardiel, A. (2012). *Violencia e institucionalidad*. (Alfa Editores, Ed.) (Primera). Caracas.

Bruinsma, G. & Bernasco, W. (2004). Criminal groups and transnational illegal markets: A more detailed examination on the basis of Social Network Theory. *Crime, Law and Social Change*, 41 (1), 79–94. En: <https://doi.org/10.1023/B:CRIS.0000015283.13923.aa>

Bursik, R. & Grasmick, H. (1993). *Neighborhoods and crime: the dimensions of effective community control*. American Journal of Sociology. New York: Lexington.

Caldeira, T. P. do R. (2011). *Ciudad de muros*. Barcelona: Gedisa Ed.

Carrión, F. (1993). De la violencia urbana a la convivencia ciudadana. PGU. Serie Gestión Urbana, 5-22.

_____. (2008). Violencia urbana: Un asunto de ciudad. *Eure*, 34 (103), 111–130. En: <https://doi.org/10.4067/S0250-71612008000300006>

Carrión, F. & Ron, I. (2009). *Violencia y seguridad ciudadana*. Colección fronteras. Quito: IDRC - FLACSO.

Chardon, A.-C. (2008). Amenaza, vulnerabilidad y sociedades urbanas. *Gestión Y Ambiente*, 11 (2), 123-136.

Churruca, C. (2014). El reto de la seguridad humana en América Latina: El problema de la violencia endémica. *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política Y Humanidades*, 16 (32), 315-337. En: <https://doi.org/10.12795/araucaria.2014.i32.16>

Cocco, M. & Lopes, M. (2010). Violência entre jovens: dinâmicas sociais e situações de vulnerabilidade. *Revista Gaúcha de Enfermagem (Online)*, 31 (1), 151-159. En: <https://doi.org/10.1590/S1983-14472010000100021>

Contento, D. (2015). Las Bandas Criminales en Colombia y su dimensión internacional ¿Neoparamilitares o grandes carteles de narcotráfico? Pontificia Universidad Javeriana.

Cortés, Y., De León, I., Penilla, H. & García, L. E. (2015). Frontera imaginaria. Una aproximación desde el quehacer policial. *Análisis de Ingeniería Jurídica*, (4).

Cortés, Y., Gómez, C. & García, L. E. (2015). Lineamientos de política para la gestión pública contra la comercialización de estupefacientes. *Gestión Territorial de La Seguridad Ciudadana*, (3), 3-12.

Dammert, L. & Linecke, A. (2004). La Prevención del delito en Chile. Una visión desde la comunidad. Santiago de Chile: CESC; Universidad de Chile.

Dammert, L. & Oviedo, E. (2004). Santiago: Delitos y violencia urbana en una ciudad segregada. In C. De Mattos, M. E. Ducci, A. Rodríguez, & G. (editores) Yáñez Warner (Eds.), *Santiago en la Globalización: ¿Una Nueva Ciudad?* (pp. 273-294). Santiago de Chile: Ediciones SUR. Retrieved from: www.sitiosur.cl/publicaciones/Ediciones_Sur/10santiago.pdf

DANE. (2016a). Estimaciones 1985-2005 y proyecciones 2005-2020 de hogares nacional nacional y departamental por área. (DANE, Ed.). Bogotá.

_____. (2016b). Mercado Laboral. Pereira AM. Bogotá. Retrieved from http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo#boifm_1

De León, I. & Velásquez, E. (2012). Cohesión social, confianza y seguridad en América Latina: un estudio exploratorio. In *Violencia y cohesión social en América Latina* (pp. 28-48). Santiago de Chile: CIEPLAN - PNUD.

De Oliveira Muniz, J. & Proença Júnior, D. (2005). Bases conceptuales de métricas y padrones de medida del desempeño policial (SENASP/MJ). Brasilia.

De Quinto, J. & Arcila, A. (2004). Inventario y valoración de los efectos económicos de la producción y venta de drogas ilícitas en Colombia. UNISCI Discussion Papers, (4), 1-35.

Del Olmo, R. (2000). Ciudades duras y violencia urbana. Nueva Sociedad, (167), 1-15.

Delmas, E., Besson, M., Brice, M.-H., Burkle, L., Dalla Riva, G., Fortin, M.-J. & Poisot, T. (2017). Analyzing ecological networks of species interactions. bioRxiv, 112540, 1-20.

Departamento Nacional de Planeación. (2012). Algunos aspectos del análisis del sistema de ciudades colombiano, 51.

Dietz, R. (2002). The estimation of neighborhood effects in the social sciences: an interdisciplinary approach. *Social Science Research*, 31, 539-575.

Dorogovtsev, S. & Mendes, J. (2003). *Evolution of Networks: From Biological Networks to the Internet and WWW* Oxford. Oxford: Oxford University Press.

Duncan, G. (2005). Del Campo a la Ciudad en Colombia. La Infiltración Urbana de los Señores de la Guerra. Cede, 2, 1-74. Retrieved from: http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicaciones/documentos_cede/2005/del_campo_a_la_ciudad_en_colombia_la_infiltracion_urbana_de_los_senores_de_la_guerra

Escobar, G. (2012). El uso de la teoría de la desorganización social para comprender la distribución de homicidios en Bogotá, Colombia. Revista INVI, 27 (74), 21-85.

Estrada, E. & Rodriguez-Velazquez, J. (2005). (2005). Subgraph centrality in complex networks. , 71(5), 056103. Physical Review E, 71(5), 56103-1-9.

Franco, S. (1999). El quinto no matar: contextos explicativos de la violencia en Colombia. Bogotá: I.-U. N. de Colombia Ed.

Frühling, H. (2003). Policia comunitaria y reforma policial en América Latina ¿Cuál es el impacto? Santiago de Chile Instituto de Asuntos Públicos: Universidad de Chile, Ed.

Frühling, H. & Gallardo, R. (2012). Programas de seguridad dirigidos a barrios en la experiencia chilena reciente. Revista INVI, 27 (74), 149-185.

Galster, G. (2001). On the nature of neighbourhood. Urban Studies, 38 (12), 2111-2124.

Gaviria, A. & Pagés, C. (1999). Patterns of crime victimization in Latin American cities. Journal of Development Economics, 67 (1), 181-203. En: [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(01\)00183-3](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(01)00183-3)

Gonzalez, G., Cabrera, C. E., Vega, M. G., Vega, A. & Munoz de la Torre, A. (2012). Mortalidad por homicidios en México: tendencias, variaciones socio-geográficas y factores asociados. *Ciencia & Saude Coletiva*, 17 (12), 3195-3208.

Guzmán Barney, Á. (2007). Acción colectiva y región: Valle y Cauca (1995-2007). *Revista Sociedad Y Economía*, (13), 7-26.

Heidegger, M. (1994). Construir, Habitar, Pensar. Retrieved may 1, 2012, from: <http://ured.manizales.unal.edu.co/modules/uncontextos/admin/archivos/4050072/habitarpensar.pdf>

Jiménez García, W. G. (2013). Hábitat y vulnerabilidad, reflexiones desde lo conceptual. *Luna Azul*, (37), 196-218.

Jiménez García, W. G. (2014). Hacia una tipología de lugares peligrosos . Caso de estudio de la comuna 11 de Dosquebradas , Colombia Palavras-chave. *Revista Criminalidad*, 56 (1), 133-156.

Jiménez García, W. G. (2015). Hábitat, vulnerabilidad y violencia: elementos conceptuales para estudios de ciudad. *Cardinalis. Revista Del Departamento de Geografía. Universidad Nacional de Córdoba*, (5), 59-79.

Jiménez García, W. G. (2016). La violencia y cohesión social, una aproximación a la construcción de un índice de cohesión social. Estudio de caso comuna 11 de Dosquebradas, año 2013. *Revista de Direito Da Cidade*, 8 (2), 483-512. En: <https://doi.org/10.12957/rdc.2016.21195>

Katzman, R. (2002). Notas sobre la medición de la vulnerabilidad social. Documentos de trabajo de IPES (Vol. 2). Montevideo.

Kearns, A., & Parkinson, M. (2001). The Significance of Neighbourhood. *Urban Studies*, 38(12), 2103–2110. <https://doi.org/10.1080/00420980120087063>

Kessler, G. (2004). *Sociología del delito amateur*. (Paidós, Ed.). Buenos Aires.

Lunecke, A. (2012). Violencia Urbana, Exclusión social y Procesos de Guetización: La Trayectoria de la Población Santa Adriana. *Revista INVI*, 27 (74), 287-313.

Manzano, L. (2009). *Violencia en barrios críticos (Primera)*. Santiago de Chile: RIL editores-CESC.

Milo, R., Shen-Orr, S., Itzkovitz, S., Kashtan, N., Chklovskii, D. & Alon, U. (2002). Network motifs: simple building blocks of complex networks. *Science*, 298 (5594), 824-827.

Montoya, A. (2009). Asalariados de la muerte. Sicariato y criminalidad en Colombia. URVIO. *Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, (8), 61-74.

Muggah, R. (2012). *Researching the Urban Dilemma: Urbanization, Poverty and Violence*. Ottawa: IDRC. Retrieved from: <https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Images/Researching-the-Urban-Dilemma-Baseline-study.pdf>

Newman, M. (2010). *Networks: an introduction*. Oxford: Oxford University Press.

Onnela, J.-P., Saramäki, J., Kertész, J. & Kaski, K. (2005). Intensity and coherence of motifs in weighted complex networks. *Phys. Rev*, 71 (6), 1-5.

ONU-Habitat. (2012). Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana. Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos. Nairobi: CEPAL-BAF-FLACMA-MINURVI.

Park, R., Burgess, E. & McKenzie, R. (1984). *The City*. Chicago: University of Chicago Press.

Pastor-Satorras, R. & Vespignani, A. (2002). Immunization of complex networks. *Physical Review E*, 65 (3), 12-24.

Paternain, R. (2006). Teoría de los cuatro escalones. *Apuntes sobre violencia y criminalidad. Violencia Y Criminalidad*, 4, 277-291.

Pedrazzinni, Y. (2006). *A violencia das cidades*. Rio de Janeiro: Editora vozes.

Perea, C. M. (2016). *Vislumbrar la paz: Conflictos en la ciudad latinoamericana*. Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial S.A. En: <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Petrella, L. & Vanderschueren, F. (2003). Ciudad y violencia: Seguridad y ciudad. In CEPAL & Naciones Unidas (Eds.), *La ciudad inclusiva* (pp. 215-236). Santiago de Chile.

Policía Nacional de Colombia. (2017). *Delitos en Colombia, 2003-2016*. Bogotá D.C.

_____. (2017). *Delitos y operaciones policiales, años 2003-2017*. Pereira: Centro de investigaciones criminológicas de Pereira.

_____. (2017). *Observatorio del delito de la Policía Nacional*. Retrieved november 11, 2017 from: www.policia.gov.co/observatoriodeldelito

Relanzón, J. (2009). Diseño y planificación de una red inteligente de videovigilancia. Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III de Madrid.

Rentería-Ramos, R. & Soto, J. (2016). Diseño de un modelo basado en agentes para estudiar el impacto de la cohesión social y la victimización el comportamiento de un criminal. *Ingeniería Y Ciencia*, 12 (24), 105-127. En: <https://doi.org/10.17230/ingciencia.12.24.5>

Rodríguez-Rodríguez, M., Jordano, P. & Valido, A. (2017). Functional consequences of plant-animal interactions along the mutualism-antagonism gradient. *Ecology*, 98 (5), 1266-1276.

Rotker, S. (2000). Ciudades escritas por la violencia. *Nueva Sociedad*, 7-22.

Ruíz, J. (2008). Medellín: fronteras de discriminación y espacios de guerra. Centro de Estudios de Opinión. Universidad de Antioquia, 1-23. Retrieved from: <https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/6496/5965>

Sampson, R. (2002). Organized for what? Recasting theories of social (dis)organization. *Crime & Social Organization: Advances in Criminological Theory* Volume 10. New Brunswick, NJ, Transaction Publishers, pp. 95-110. New Brunswick: Transaction Publishers.

Sampson, R. & Groves, B. (1989). Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization Theory. *American Journal of Sociology*, 94 (4), 774-802.

Sarmiento, T., Cantillo, J., Realpe, J. & Montoya, J. (2016). Desmantelamiento óptimo de redes delincuenciales. Una perspectiva desde el modelado matemático y computacional. *Ingeniería Y Ciencia*, 12 (24), 83-103. En: <https://doi.org/10.17230/ingciencia.12.24.4>

Silva, B. (2014). Social disorganization and crime. Searching for the determinants of crime at the community level. *Latin American Research Review*, 49 (3).

Strogatz, S. H. (2001). Exploring complex networks. *Nature*, 410 (6825), 268-289.

Vargas, A. & García, V. (2007). Violencia urbana , seguridad ciudadana y políticas públicas : la reducción de la violencia en las ciudades de Bogotá y Medellín (Colombia) 1991-2007, 249-270.

Villareal, A. & Silva, B. (2006). Social cohesion, criminal victimization and perceived risk of crime in brazilian neighborhoods. *Social Forces*, 84 (3), 1725-1753. En: <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/sof.2006.0073>

6

CAPÍTULO
SEIS

6. HOMICIDIO EN LA FRONTERA: ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA HOMICIDA EN EL ESTADO TÁCHIRA, VENEZUELA⁴⁹

Pedro Manuel Uribe⁵⁰

Rina Mazuera-Arias⁵¹

Erika Murillo⁵²

Neida Albornoz-Arias⁵³

49 Capítulo de libro producto de los proyectos de investigación: 1. Análisis comparativo de los elementos sociales, políticos, económicos y psicológicos del contrabando en el Departamento Norte de Santander y Estado Táchira; de la Universidad Simón Bolívar – sede Cúcuta, Grupo de investigación Altos Estudios de Frontera –ALEF–. Fecha de inicio: 01 de agosto de 2016. Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2016–. 2. Violencia homicida, crimen organizado y su regulación jurídica en Venezuela de la Universidad Católica del Táchira en el postgrado de Derecho Penal. 3. El Táchira en cifras 2015. El contrabando en las ciudades de frontera desde la perspectiva de la institucionalidad. Universidad Católica del Táchira, Venezuela. Fecha de inicio: 01 de enero de 2015. Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2017.

50 Abogado, Universidad Católica del Táchira. Doctor en Filosofía, Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibersitatea, España. Docente Asistente, Universidad Católica del Táchira.

51 Abogada, Universidad Católica del Táchira, Venezuela. Doctora en Derecho, Universidad de Zaragoza, España. Especialista en Derecho Administrativo, Universidad Católica del Táchira. Especialista en Derecho Tributario, Universidad Santa María, Venezuela. Docente e Investigadora Universidad Católica del Táchira. Docente e investigadora Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta Colombia, miembro del Grupo de investigación Altos Estudios de Frontera – ALEF, Universidad Simón Bolívar, Colombia.

52 Abogada, Universidad Católica del Táchira, Venezuela. Especialista en Derecho Penal Universidad Católica del Táchira, Venezuela.

53 Contador Público, Universidad Católica del Táchira, Venezuela. Doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad de Córdoba, España. Especialista en Análisis Bursátil y Gestión de Carteras, IEB Bolsa de Madrid, España. Miembro del Grupo de investigación Altos Estudios de Frontera – ALEF, Universidad Simón Bolívar, Colombia. Docente e investigadora de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta y la Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, Venezuela.

Resumen

El presente documento otorga una perspectiva sobre la violencia homicida en Venezuela, especialmente en la región tachirense, en la frontera con Colombia. Mediante la recopilación y análisis de datos disponibles provenientes de organizaciones no gubernamentales y universidades por la inexistencia de cifras oficiales, el estudio documental de doctrina y jurisprudencia nacional, se presenta un trabajo estructurado en tres partes: Introducción, Análisis de la violencia homicida en Venezuela y Conclusiones. El segundo apartado se divide en dos secciones: un análisis de la violencia como fenómeno y el homicidio. El trabajo concluye con la imposibilidad de solventar el flagelo sin la asunción de la crisis estructural y la implementación de planes de concierto nacional ante una crisis de tal envergadura.

Introducción

La vida es uno de los bienes jurídicos más significativos, por no decir que el más importante. Su existencia presupone el goce de lo demás derechos tutelados por el ordenamiento jurídico de cualquier país. Así, el homicidio, figura jurídica a través de la cual se prescribe y sanciona la agresión a la vida, ha estado presente en las regulaciones desde siempre y aunque inicialmente las conceptualizaciones dadas eran básicas, paulatinamente fueron ampliándose, al punto de pormenorizar y detallar distintos aspectos para agravar o atenuar sus consecuencias jurídicas.

El homicidio supone ocasionar de manera intencional la muerte a otra persona, estos requisitos, aunque simples, están en todas las regulaciones a pesar de las particularidades de cada región. Sin embargo, el homicidio no es solo un hecho jurídico, sino un indicador de los niveles de violencia que experimenta un país, reflejo de la dinámica que la delincuencia y la criminalidad tienen en una determinada región.

En este contexto, es oportuno ubicar a Venezuela, y particularmente al estado Táchira, donde los altos niveles de violencia, criminalidad e inseguridad que experimenta el país, le han convertido en centro de controversia, debate y cuestionamiento, a nivel local e internacional. Comúnmente, se registran cientos de casos relacionados con hechos criminales que desencadenan la muerte.

En los diarios de circulación nacional se documenta un sinnúmero de casos de muertes violentas, bajo diversos móviles, pero frecuentemente ligados a la delincuencia organizada. Se estima que al menos el 50% de los homicidios que ocurren en Venezuela se encuentran relacionados con el Crimen Organizado (El Universal, 2015). Las cifras extraoficiales evidencian un vertiginoso y desmedido ascenso de la violencia homicida que, para 2016, estimó una tasa de 91,8 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que ubica a Venezuela como el segundo país en índices de violencia homicida en el mundo (Observatorio Venezolano de Violencia - OVV, 2016a).

El crimen organizado no siempre emplea la violencia como fin, sino como medio para mantener el control y dirección de las distintas actividades de orden ilegal que desempeñan, por ello la violencia y fuerza física están comúnmente presentes en la violencia homicida. En 2017, alrededor de 67 bandas de Crimen Organizado operaban en Venezuela, y de ellas 19 “megabandas” lo hacían en estados fronterizos (El Nacional, 2017).

La frontera colombo-venezolana es considerada como una de las más concurridas de América Latina por su gran extensión, porosidad y el constante intercambio comercial que históricamente se ha registrado. Esto facilita la comisión de múltiples hechos ilícitos en virtud de la debilidad institucional en ambos lados de la frontera en tanto al control, la movilidad y las diferencias cambiarias propiciadas por el mercado extraoficial.

Debido a la fuerte crisis económica y social que experimenta Venezuela, el mercado negro cambiario funge de caldo de cultivo para el fortalecimiento del crimen organizado y la violencia homicida, afectando especialmente al estado Táchira, que ocupa el decimotercer lugar entre los estados más violentos del país, con un índice de 72 muertes violentas por cada 100 mil habitantes (OVV, 2016b).

Es necesario analizar la violencia homicida en Venezuela y particularmente la del estado Táchira, porque este flagelo es el reflejo de una profunda y arraigada crisis interna que se viene desbordando en el país y, aunque el estado Táchira no encabeza las cifras a nivel nacional, sí representa un porcentaje significativo, toda vez que el 46,65% de las 11 modalidades delictivas evidenciadas en el Táchira se refieren a homicidios (OVV, 2016b) con una tasa de 30,14 por cada 100 mil habitantes, lo que lleva a ubicarlo dentro de los 5 estados con mayor incremento en este delito (Herrera, 2016).

Para llevar a cabo este examen, en este documento se revisará y analizará la identidad conceptual y sistemática del homicidio en el sistema jurídico venezolano, se identificarán los factores determinantes de la violencia homicida y se cuantificará la violencia homicida en el Táchira durante los últimos seis años, con arreglo a la estadística recogida en las fuentes disponibles.

Análisis de la violencia homicida en Venezuela

Aproximación conceptual

La caracterización de la violencia, a través del tiempo, ha sido diversa y gradualmente ampliada. Así, el maltrato físico, los vejámenes o penas inhumanas, que en la Edad Media eran comunes, empezaron a reprocharse y prohibirse en los siglos XIX y XX, mientras que actualmente tanto el maltrato psicológico y el financiero son considerados formas de violencia. La violencia,

además de tener la desaprobación social y consecuencias legales, actúa como una enfermedad grave, deteriorando las condiciones físicas y puede causar la muerte, pero claro, su punto de partida es diferente pues “resulta de una acción intencionada del hombre que provoca el malestar y sufrimiento de las víctimas” (Andrés-Pueyo, 2012, p. 202).

La violencia puede definirse como un “acto que implica el uso de la fuerza física, moral o psicológica que ocasiona daños, en el cual participan y se relacionan individuos, grupos, instituciones o el Estado” (Gutiérrez, Magdaleno & Yáñez, 2010, p.107). Esta definición arroja la violencia individual y colectiva, mientras que otros autores dicen que puede definirse como el empleo de la fuerza para constreñir a alguien a realizar algo por mecanismos que este no puede tolerar (Rombolá & Reboiras, 2006).

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, la define como “el comportamiento deliberado de unas personas contra otras personas que probablemente causa daños físicos o psicológicos” (1999, p. 2), limitando la violencia a la esfera física y a la psicológica, sin entrar a considerar mayores aspectos que pueden confluir en su manifestación. Todas estas definiciones presentan puntos de concordancia, pero dependen del enfoque que quiera dársele o el aspecto que quiera enfatizarse, pues los comportamientos o actuaciones que se pueden considerar como violentos tendrán que ver con los factores sociales y culturales del lugar del que se trate.

El ordenamiento jurídico venezolano trata la violencia en distintas formas. En primer lugar, el Código Civil (1982) la considera un vicio del consentimiento y por ello una causa de nulidad de los contratos. Este instrumento cataloga la violencia directa e indirecta, así como la violencia contra las cosas y hace una salvedad en su artículo 1153: el mero temor reverencial no califica como violencia. En segundo lugar, se encuentra la Ley

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2014), que define la violencia bajo una orientación de género:

Artículo 14: La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente Ley, comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento física, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.

Este concepto cubre distintos tipos de manifestación de la conducta humana que podrían afectar la esfera personal, pero únicamente desde una perspectiva parcializada de género que se puede percibir desde la propia exposición de motivos de la ley. Por último, la denominada Asamblea Constituyente emitió una norma con el nombre de Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia (2017) que contiene una veintena de referencias contra la violencia, la mayoría de ellas bajo un espectro genérico que da facultades amplias a quien sea que debe aplicar su contenido⁵⁴.

Existe otra definición de violencia, mucho más amplia pues integra aspectos de tipo individual, interpersonal y social con relación a actos físicos y también psicológicos, y que proviene de la Organización Mundial de la Salud – OMS (2003):

El uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (p. 5)

54 La alusión a esta disposición normativa surgida de la Asamblea Constituyente no recoge ninguna valoración sobre su legitimidad, legalidad ni constitucionalidad. Su mención atiende exclusivamente al contenido referido a la violencia que es el objeto de estudio en este apartado.

En esta definición, la intencionalidad juega un papel importante en la determinación de la violencia, no en el entendido de que con ella se busque causar un daño a otro, sino que el actor debe tener la determinación de hacer uso de la fuerza, de manera tal que su acto sea consciente, voluntario e inequívoco, aunque las consecuencias no se correspondan con la intención (OMS, 2003). De esta manera, la violencia puede ser definida de diversas formas, dependiendo del enfoque que se asuma para ello, por lo que es posible clasificarla conforme a estos enfoques para su mejor comprensión.

Tipología de la violencia

Tal como ocurre con la definición, la tipología de la violencia varía de un autor a otro. En ellas se recogen y exponen, a grosso modo, algunas de las clasificaciones más empleadas de la violencia: según su naturaleza, la motivación, la causalidad, el sector que afectan y/o la intensidad. Si se atiende a la naturaleza, se distinguirá la violencia física, psicológica, sexual e inclusive de abandono y negligencia, que implica el no prestar la atención básica debida (Rodríguez, 2008).

En cuanto a la clasificación por la motivación del agresor, Spierenburg (citado por Rodríguez, 2008) considera que puede depender de los estímulos desagradables generados por la víctima, que se denomina impulsiva –como es el de las amenazas o riñas– en donde el empleo de la violencia constituye el fin último. Por su parte, Moser (citado por Rodríguez, 2008) subcategoriza la motivación en política, económica y social, según la intención sea mantener u obtener poder político, económico –en donde se ubicarían los hurtos, secuestros, tráfico de sustancias, etc.– o social.

En relación con la causalidad, la violencia atiende a sus causas y motivos. En este caso Moser (citado por Rodríguez, 2008) la clasifica en estructural, institucional, interpersonal e individual.

La estructural está referida al “medio de la política, lo económico y lo social. Incorpora las opiniones, las creencias y las normas culturales presentes en la sociedad” (Moser citado por Rodríguez, 2008, p. 127).

La institucional se refiere a la ocurrida en relación con las instituciones sociales formales o no, el capital social, el trabajo, la comunidad, las redes sociales y demás grupos de la sociedad; la interpersonal atiende a las relaciones que se dan en el entorno más cercano; y, finalmente, como violencia individual, en donde los factores endógenos de historia persona del agente inciden en la respuesta violenta o ante la violencia (Moser citado por Rodríguez, 2008).

En cuanto al deterioro que genera la violencia, su estudio se enfoca a si afecta estructuras, medios de producción, y similares, se hablará de una violencia en contra del capital material; si lo que afecta es la vida, la integridad de las personas o aquello que interviene en su desarrollo, se estará en presencia de violencia contra el capital humano; si afecta las instituciones sociales se hablará de violencia contra el capital social; y, si es contra el medio ambiente, se hablará de violencia contra el capital natural (Rodríguez, 2008).

La violencia también puede clasificarse atendiendo a su intensidad. En este caso, la OMS (2003) a través del departamento de Lesiones y Prevención de la Violencia, mide la intensidad partiendo de la tasa de homicidios por cada 100.000 personas menores de 24 años, en violencia alta, media, baja y muy baja. Otros criterios de clasificación se orientan debido a los sujetos, de forma que según la víctima sea hombre o mujer, niño, joven o adulto, se hablará de violencia de género, violencia infantil, violencia escolar o laboral, etc. (Andrés-Pueyo, 2012).

Aunque las clasificaciones mencionadas abordan diversos factores que intervienen en el desarrollo de conductas violentas,

la clasificación dada por la OMS (2003) con base en la definición de violencia, distinguió entre la violencia autoinfligida, en donde se incluye el suicidio y las manifestaciones agresivas contra la propia integridad; la interpersonal, en donde se incluye la ocurrida en el núcleo familiar y la comunitaria que es perpetrada por desconocidos; y la colectiva, referida a aquella perpetrada en medio de conflicto armado, bandas, grupos insurgentes etc. Tanto la violencia autoinfligida como la colectiva tienen una ocurrencia menor que la interpersonal.

La violencia se manifiesta en diferentes tipos de crímenes y delitos que se desarrollan en el entorno social. Uno de los indicadores de la violencia es la tasa de homicidios. Para el año 2007 la tasa media de homicidios fue de 8,8 por cada cien mil habitantes, mientras que la media latinoamericana era de 19,3 (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, 2014). Para el año 2012, se calculaba que casi medio millón de personas habían sido víctimas de homicidios, de los cuales el 36% ocurrieron en el continente americano (UNODC, 2014). El alto índice de incidencia de la violencia interpersonal es un llamado a la revisión de los hechos que conducen a esta crisis nacional.

La violencia interpersonal

La violencia interpersonal supone la ausencia de relaciones previas entre el agresor y la víctima, por lo que el factor emocional, que caracteriza la violencia interpersonal dentro de las familias, no está presente en este tipo de violencia (Andrés-Pueyo, 2012). Este tipo de violencia es asociada comúnmente a la violencia homicida. El Estudio Mundial sobre Homicidio (UNODC, 2014)⁵⁵ señala que las muertes acaecidas en el curso de conflictos entre

⁵⁵ El documento aquí citado es el resumen ejecutivo en español, pero el estudio completo *Global study on homicide 2013* (United Nations Office on Drugs and Crime, 2014) da toda la información detallada en inglés, siendo de utilidad su consulta para quien desee profundizar en los datos aportados.

víctima y victimario, así como las que se producen por disputas por una propiedad o venganza, llamado homicidio interpersonal, representan un alto porcentaje de homicidios en el mundo.

En el mismo sentido, los homicidios ocurridos durante la comisión de otros delitos mantienen cifras generalmente “estables”, tal es el caso del robo cuya, comisión representa “un promedio de 5% de todos los homicidios cometidos cada año en América, Europa y Oceanía” (UNODC, 2014, p. 5). Conforme este estudio “el homicidio constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir la violencia” (UNODC, 2014, p. 1) ya que permite cuantificar y contrastar la intensidad y nivel de seguridad e inclusive de justicia con que cuenta un determinado país (UNODC, 2014).

De manera global, el 79% de las víctimas del delito de homicidio son hombres y el 95% de los homicidas también, independientemente de la clase de homicidio a que se haga referencia o del instrumento para perpetrarlo; en tal sentido, los índices de homicidio masculino casi cuadriplican el de mujeres, ubicándose como la mayor tasa la de América, con 30 por cada 100 000 hombres, lo que es “casi siete veces mayor que la de Asia, Europa y Oceanía” (UNODC, 2014, p. 3); de igual forma, en cifras, cerca del 50% de las víctimas están en edades que oscilan entre los 15 y los 29 años de edad (UNODC, 2014).

Aunque la tendencia de la región es a la baja, Venezuela no escapa de este tipo de violencia pues alberga las tasas más altas de homicidio de Latinoamérica y el Caribe, ocupando para 2013 el tercer lugar con una cifra de 51,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que para el 2015 fue ampliamente superada y ha llevado a Venezuela a ocupar el segundo lugar a nivel mundial, con una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que significa que, del total de 145 mil homicidios ocurridos en el año 2015, en Venezuela tuvieron lugar el 19% de ellos (OVV, 2016c).

Estas cifras dan cuenta de este tipo de violencia y proporcionan datos que no producen las fuentes oficiales. Hay un porcentaje considerable de muertes entre hombres jóvenes además de evidenciar un vertiginoso incremento año tras año. Desde el año 2005 el Estado venezolano no rinde cifras oficiales, por lo que a través del Observatorio de Violencia se logra una determinación de las cifras de muertes violentas con base en los homicidios legales, averiguaciones de muerte y las muertes ocurridas en los procesos de resistencia a la autoridad, recabadas inclusive a través de reportes de prensa.

Si bien es cierto que Caracas se destaca a nivel mundial por sus índices de violencia, la región tachirense presenta un interesante desarrollo en dicho campo. Su ubicación geográfica, el ser la frontera más extensa y porosa de Latinoamérica, la situación política del país, la realidad colombiana, marcada por un conflicto de medio siglo; hacen atractiva esta documentación de la violencia en la región que pone de relieve factores de alta importancia.

Factores de incidencia: el modelo sociológico de la violencia en Venezuela

La causa de la violencia homicida en Venezuela y, consecuencialmente, en el estado Táchira, no responde a un único factor. La causa es la confluencia de varios aspectos que crean un clima propicio para la violencia y su mejor representación: el homicidio. Los factores que inciden en el desarrollo de conductas violentas son igualmente diversos; no obstante, algunos autores coinciden en que factores biológicos y endógenos del individuo, su entorno, relaciones interpersonales e inclusive los valores y creencias inciden en el desarrollo de conductas violentas (Rodríguez, 2008; Andrés-Pueyo, 2012).

Para explicar los factores de incidencia en la violencia, la OMS (2003) usa el modelo ecológico, que reconoce cuatro niveles que interfieren en la manifestación de la violencia: a) el nivel

individual, que enfoca la atención en las características propias del individuo; b) el nivel relacional, que explora la integración con su núcleo cercano, con el que se dan relaciones continuas; c) el nivel comunitario, que analiza las características y la forma en que se desenvuelven las relaciones institucionales (escuelas, centros de formación), locales, laborales, etc., que pueden hacer propicia o favorecen la violencia; y, d) nivel social, referido a la integración con las disposiciones culturales de mayor o menor aceptación de comportamientos violentos o la consideración de determinadas actitudes como violentas.

Aunque algunos de los factores de riesgo que allí se exponen son prevalentes en determinados tipos de violencia en específico –autoinfligida, interpersonal, o colectiva–, en muchos casos un determinado tipo de violencia puede compartir diversos factores de riesgo y también puede estar conectado con otros tipos de violencia. En el caso del estado Táchira, los factores geopolíticos no escapan a la realidad venezolana: un país con una marcada crisis económica, política y social.

Como zona fronteriza, el Táchira se concibe como un lugar apropiado para la promoción de la criminalidad, toda vez que su situación permite eludir controles y jugar con los vacíos legales que el paso entre los dos países deja, así como la incidencia en los procesos culturales y económicos debido a la magnitud de los delitos que se cometen en la región, cuyas consecuencias son nefastas.

En el Táchira, el crimen organizado se manifiesta en actividades como el contrabando, el tráfico de drogas o sustancias psicoactivas, así como a la formación de grupos al margen de la ley dedicados al control y dominio de tales actividades. Los grupos insurgentes controlan gran parte de la frontera, al tiempo que, debido a los niveles de corrupción en Venezuela, mantienen fuertes lazos con los organismos de seguridad elevando la potencialidad de la violencia. Esto está evidenciado en las cifras,

pues en 2015 el 46,65% de los delitos en el Táchira, fueron homicidios (OVV, 2016b), siendo la tasa de homicidios de 30,14 por cada 100 mil habitantes, ubicándose entre los cinco estados con mayor incremento en este departamento (Herrera, 2016).

Ante la oleada de inseguridad e inestabilidad social, son numerosos los grupos criminales que tienen participación en acciones violentas en el Táchira, tanto en la práctica de actividades propias de la delincuencia organizada, como en actos en contra de ciudadanos inconformes que manifiestan su descontento contra el gobierno nacional. Los que actúan con arreglo al segundo criterio, son conocidos como “colectivos”, de quienes se alega contar con apoyo del Estado venezolano, y cuya actividad ha sido reportada por organizaciones como Human Rights Watch y Foro Penal (2017).

Por su parte, Amnistía Internacional (2017) afirma que “tiene evidencia de varios casos de grupos civiles armados que han atacado a la población civil con la aquiescencia de las autoridades, lo cual también parece vincularse con una misma política estatal de violencia”. En el caso de los grupos insurgentes, se conoce de la presencia de tres grupos entre la frontera con Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, estos son: los Urabeños, los Rastrojos y las Águilas Negras. Los tres grupos se dedican al narcotráfico, el lavado de activos, el secuestro y la extorsión. Adicionalmente, el aumento de las atribuciones de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano ha generado un aumento de la violencia como consecuencia de la represión desmedida (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017).

La violencia se intensifica cuando en la lucha antidrogas grupos subversivos, que se financian del narcotráfico, se involucran en la respuesta armada a esta lucha; o cuando la resistencia a la erradicación de cultivos culmina con muertes de quienes cultivan (González, 2014). Además, son pocas las políticas antidrogas para refrenar la producción y tráfico de sustancias ilícitas, y la frontera tachirense es zona caliente en tema de narcotráfico.

La Militarización represiva de la Seguridad (OVV, 2016c), conlleva a un aumento de los índices de violencia, toda vez que para contener y dominar la situación criminal las fuerzas policiales y de seguridad de la nación son cada vez más agresivas y lesivas. Además, la insatisfacción social incrementa las manifestaciones en todo el país como consecuencia de la agudeza de la crisis. Si se pone el foco en las respuestas del Estado ante esta realidad, el primer ejemplo son las “Operaciones de Liberación del Pueblo—OLP” iniciadas en julio de 2015, en las cuales participaron de manera conjunta los diferentes cuerpos de seguridad del país y que dio cuenta oficial de 505 muertes a manos de dichos órganos de seguridad, cinco en Táchira (Ministerio Público, 2017a).

Con estos indicadores, y haciendo uso del modelo sociológico de la violencia que “no pretende ser exhaustivo, sino colocar las condiciones sociales y psicosociales que [son] relevantes para una sociología comprensiva y, por lo tanto, se diferencia de las propuestas de explicación propiamente individuales” (Briceño-León, 2007, p. 37).

Este modelo toma en consideración la vinculación entre los distintos niveles sociales, así como las causas que llevan a la violencia desde un punto de vista material, circunstancial y cultural (Briceño-León, 2007; 2008), lo que permite organizar mejor los elementos presentes en Venezuela. El primer nivel es el Macrosocial (Briceño-León, 2008), que es aquel donde se origina la violencia, atendiendo a las condiciones sociales y culturales.

La desigualdad social, entendida como el desequilibrio en el acceso a bienes y servicios, a la educación y al mercado de trabajo, y no como la pobreza dentro de un territorio, son factores incidentes en este nivel. En Venezuela, la escasez de alimentos y productos básicos de la cesta alimentaria y medicamentos se une a las estafas en las importaciones públicas de estos productos. Los anaqueles se vacían, los delitos contra el consumo se incrementan y aparece, de la mano de políticas económicas erráticas, la hiperinflación.

Mientras que el promedio proyectado de inflación anual para toda América Latina en 2018 –exceptuando a Venezuela–, es del 1,9% (Fondo Monetario Internacional–FMI, 2018), la inflación de Venezuela se estima entre 2.400% y 13.000% (El Nacional, 2018).

En Venezuela, entre 1999 a 2016, la base monetaria ha presentado un vertiginoso incremento de 33.000% (Sutherland, 2016) ocasionando una gran pérdida de capital, por lo que el Bolívar ha perdido su valor, al punto de que en la actualidad las operaciones comerciales se hacen en divisas extranjeras, como el peso colombiano o el dólar, mediante operaciones de mercado no oficial, negro o paralelo.

En lo que concierne al Táchira, su condición fronteriza facilita la adquisición de bienes y servicios provenientes de Colombia, pero, como contrapartida, se ha fortalecido el mercado paralelo que incide en la inflación, que a su vez hace más costoso adquirir bienes y servicios y, además, ocasiona mayor fricción y violencia en la vida cotidiana del tachirense. Bajo estas condiciones pocas personas pueden satisfacer sus necesidades básicas, mientras que para la mayoría no es posible por carecer de los recursos necesarios, los altos precios inciden negativamente en la alimentación de los tachirenses (Diario La Nación, 2018), y por ende, en su calidad de vida.

La mayoría de las víctimas de esta situación son jóvenes sin ocupación definida o formal, a causa del desempleo, su escasa o nula formación educativa, así como la imposibilidad de generar recursos que permitan hacer frente a la realidad del país, haciéndose vulnerable a las actividades ilícitas. Además, la migración ha hecho que los roles familiares se vean alterados y con esto su estructura, así como la pérdida del poder coercitivo del factor religioso, debilitan los mecanismos de control social y ello crea un campo propicio para la violencia (Briceño-León, 2008).

Existe una relación entre los ingresos económicos y la tasa de homicidios, así lo afirman el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo–PNUD, la OMS y la UNOCD (2014), quienes afirman que entre el 2000 y el 2012 hubo un pequeño descenso en la tasa de homicidios a nivel mundial, registrándose en mayor cantidad, hasta un 39%, en aquellos países con mayores ingresos, mientras que, en los países de ingresos medios-bajos, el descenso es menor.

Establecido esto, puede pasarse al segundo nivel de este modelo, el Mesosocial (Briceño-León, 2008), referido a los aspectos que estimulan la violencia. Uno de estos es la organización territorial de las ciudades, pues la violencia se concentra en áreas con características demográficas específicas y que albergan una población significativa.

Con la intensificación de las migraciones en el año 2016, para escapar de la crisis venezolana, se han conjugado factores que hacen más onerosa esta empresa, de manera tal que en algunos casos la política migratoria de los países a los que emigran los venezolanos se ha endurecido, el desplazamiento solo es posible a través de divisa extranjera a costos inaccesibles, limitándose el fenómeno a aquellas personas con cierto poder adquisitivo.

Esto ha propiciado la migración interna que tiene efectos en la redistribución espacial de la población, en las comunidades, en los hogares y en las personas, tanto en tema de crecimiento como en estructura de la población, desde el punto de vista social, cultural y económico (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018). Esta se ha producido desde zonas pobres y marginalizadas hacia la frontera, en donde se topan con los incentivos para la práctica de actividades ilegales, la formación de pandillas, los controles de vecindarios y territorios por parte de bandas, el tráfico de drogas y el comercio informal.

Esta situación se une al debilitamiento de los cuerpos de seguridad del Estado, que se muestran pasivos frente a la incidencia de la violencia y que en múltiples oportunidades –bien en ejercicio de sus funciones o fuera de ellas– terminan ocasionando víctimas fatales de actos violentos, apareciendo la justicia privada como una opción para el ciudadano, quien lo cree viable y hasta necesario para hacer frente a la violencia social.

Como resultado, aumentan el sicariato, el porte y posesión de armas de fuego, el linchamiento y otras formas de violencia. Solamente en Táchira, para el año 2012, de los 934 sucesos registrados el 22,3% tenían como móvil el sicariato (Observatorio Social del Estado Táchira-Universidad Católica del Táchira – OSET-UCAT, 2012); en el 2013 se registraron 721 sucesos, de los cuales el sicariato representó el 23,2 % (OSET-UCAT, 2013), mientras que los 719 homicidios del año 2014 tuvieron como móvil el sicariato en un 19% (OSET-UCAT, 2014).

La respuesta gubernamental para disminuir los altísimos niveles de criminalidad parece no llegar, la justicia penal sólo llega a conocer una pequeña parte de los delitos cometidos y el porcentaje que se castiga es aún menor (Briceño-León, 2008). Se estima que la tasa de condenas por la comisión del delito de homicidio es de 24 por cada 100 víctimas en América, lo que indica que la impunidad es elevada (UNODC, 2014), pero en Venezuela, para el 2011, el mismo indicador, la impunidad, alcanzaba el 90% (Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2011), fungiendo como catalizador de la violencia homicida.

La conjunción de pobreza e impunidad fomenta el delito, toda vez que, al debilitarse el poder coercitivo de las normas por la baja o nula respuesta del Estado y la inopia, el crimen y las acciones violentas se desencadenan. La destrucción institucional (OVV, 2016c) es otro factor importante consecuencia del desvanecimiento de la credibilidad en las instituciones del Estado

y la ineficacia de las normas existentes, al tiempo que incrementa la percepción de arbitrariedad del poder con relaciones que se fundamentan en la fuerza, el uso de las armas para controlar a las personas, la violencia y el amedrentamiento. Esto, junto con la impunidad, hace deseable para una parte de la sociedad el acudir a la justicia privada o el apoyo por parte de grupos criminales –incluso de exterminio– que, aunque ilegales, en esta situación gozan de “legitimidad” por esa parte de la población.

Dedicarse al delito se ha vuelto atractivo y la violencia es reflejo de ello, como muestran las cifras del estado Táchira que para el año 2012 tenía un índice de violencia delincuencia del 60,3% siendo el principal móvil el robo (27,5%), seguido del sicariato (22,3%) (OSET-UCAT, 2012). Para el 2013 la violencia delincuencia se ubicó en el 58,1% siendo el principal móvil el sicariato (23,2%), seguido del robo (20,8%) (OSET-UCAT, 2013). Ya para el 2014 la violencia homicida se ubicaba en un 67,1%, volviendo a ocupar el primer lugar como causa del suceso el robo (32%), seguido del sicariato (19%) (OSET-UCAT, 2014).

En los tres años siguientes, la situación no presentó mejoría. Para el 2015 la violencia delincuencia en el estado Táchira alcanzó un 62%; para el 2016 la cifra aumentó y en el primer cuatrimestre alcanzó el porcentaje más alto, un 69,4%, cifra superada por el registro del segundo cuatrimestre en donde la violencia delincuencia llegó al 81,3%, nuevamente sobrepasada por las del último cuatrimestre que ascendió 81,8%. vale la pena acotar que, a pesar de ser la violencia delincuencia la que representa un mayor porcentaje, la violencia policial, entendida como aquella generada por los cuerpos de seguridad del estado, también presentó un aumento que empieza a tomar fuerza y las cifras, que hasta 2014 no alcanzaban el 5%, para el 2015 llegó al 12% (OSET-UCAT, 2014; 2015); para el 2016 inició el primer cuatrimestre con 9,7%, ascendiendo el segundo cuatrimestre a 11,9%, concluyendo en el último cuatrimestre con un descenso que lo ubicó en el 5,5% (OSET-UCAT, 2017).

El último nivel del modelo sub examine es el microsocioal (Briceño-León, 2008). Éste es inocuo para producir la violencia, pero viabiliza la manifestación que se genera en los niveles anteriores. El consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, puede anteceder la comisión del delito y puede también ser la causa de éste, dando lugar a las llamadas muertes en ajuste de cuentas o por encargo. De esta forma “la violencia que se relaciona con la operación de los mercados de estas drogas también puede determinar los niveles de homicidio, a menudo como resultado de la lucha entre varios actores” (UNODC, 2013, p. 6).

Asimismo, el uso de armas de fuego incide significativamente en los homicidios, toda vez que aumenta la letalidad del ataque y son comúnmente empleadas en la comisión de hechos delictivos que desencadenan la muerte. Cuatro de cada diez homicidios se cometen con armas de fuego, en el caso del continente americano “dos terceras partes de los homicidios se cometen con estas” (UNODC, 2013, p. 5). En el análisis del factor social de riesgo que incide en la violencia homicida, se señala que el control del porte de armas de fuego está estrechamente vinculado a la disminución de las lesiones y homicidios (Rodríguez, 2008).

En el Táchira, para el 2012, el 77,3% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego en tanto que para el 2013 hubo un sutil descenso a 73,2% (OSET-UCAT, 2012; 2013). En 2014 el homicidio por arma de fuego alcanzó un 68,6% (OSET-UCAT, 2014). Es importante destacar que para el año 2009 se estimaba que entre 9 y 15 millones de armas ilegales estaban en manos de la población y el acceso a estas era sencillo, siendo incautadas entre 2003 a 2012 cerca de 270 armas de fuego que se encontraban en manos de bandas criminales (El País, 2012).

Igualmente, se ha denunciado que armas de fuego están siendo sustraídas de los batallones y vendidas a grupos al margen de la ley, a la guerrilla colombiana y grupos paramilitares, más

de 11 mil cartuchos de armas de diferente calibre, los que se detectaron como faltantes y cuyas averiguaciones aún no han sido resueltas (Táchira News, 2017).

Hay también factores sociales y económicos que se mantienen de forma estable en el tiempo que permiten comprender la violencia homicida y su aumento en Venezuela. También hay factores circunstanciales que varían con rapidez, como la contingencia política, la falta de legitimidad institucional y la crisis del pacto social.

Finalmente, existen factores especiales a la región fronteriza, como la falta de compromiso institucional binacional sobre materias como el contrabando y el narcotráfico, o la grave debilidad institucional del Estado venezolano en la acción frente a la insurgencia paramilitar en el sector que, como demuestran las cifras, ha afectado el ambiente de la sociedad tachirense y atizado la violencia en detrimento de la convivencia.

Del homicidio

La tutela de la vida, como bien jurídico fundamental, hace que el homicidio sea un tipo penal. A pesar de esta tutela, las cifras son negativas a pesar de la responsabilidad del Estado venezolano de garantizar su preservación. Así está dispuesto en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3 (1948, artículo 3); en el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966); la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4 (1969), entre muchos otros.

En el plano nacional, el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela–CRBV (1999) establece que dicho derecho es inviolable. Por ello, el homicidio es un atropello a este derecho, un fenómeno social complejo que desde la óptica jurídica puede definirse como la privación de la vida

de una persona. Partiendo de ello, diversos doctrinarios han ido sumando elementos que configurarán la especialidad del delito, y así se analizará de seguido.

El homicidio suele distinguirse desde la intencionalidad en dos: homicidio intencional o doloso y homicidio no intencional o culposo; dependiendo de si el agente actuó con la finalidad de ocasionar la muerte al sujeto pasivo o si, por el contrario, la muerte sobrevino por la imprudencia, negligencia, impericia, la no observación de leyes y reglamentos por parte del agente.

La violencia homicida hace que aquí interese el estudio del homicidio intencional y sus dimensiones, pues su ocurrencia es la que incide en la estadística de la criminalidad y la violencia en una región. “La definición más antigua del homicidio se encuentra en Antón Matheo quien dice que el homicidio es la muerte de un hombre, ocasionada por otro” (Cova, 1952, p. 29). Carrara, dice que es “la destrucción del hombre injustamente cometida por otro hombre” (1945, p. 42), añadiendo el elemento de la antijuricidad a la acción. El autor venezolano Grisanti (2005) considera que esta adición de Carrara está de más, y define el homicidio como “la muerte de un hombre [...] dolosamente causada por otra persona física e imputable, siempre que la muerte del sujeto pasivo sea exclusivamente el resultado de la acción u omisión realizada por el agente” (2005, p.17).

Hoy puede hablarse de aspectos circundantes del homicidio. Al respecto, Meneses y Quintana (citados por Vélez et al., 2015) explican varios enfoques para mejor entender los elementos situacionales del homicidio, como las condiciones de modo, tiempo y lugar, que lo ubicarían en el denominado ambiente microespacial de la comisión del delito. Asimismo, apuntan al análisis de los factores que confluyen al inicio, en el desarrollo y el desencadenamiento del evento fatal, todos los cuales permiten conocer el contexto delictivo.

Por último, considera que todo estudio del homicidio debe suponer un análisis de las características particulares de los sujetos que intervienen y las relaciones entre ellos, pues esto permite ver las estructuras que existen y que surgen con ocasión del homicidio. Vélez et al. (2015) distinguen entre homicidios instrumentales y expresivos, dependiendo de la intención del agente. “Los homicidios instrumentales deben entenderse como aquellos que son cometidos con un objetivo claro, premeditado y determinado, es decir, implica la voluntad de una de las partes para llevar a cabo el ilícito” (Vélez et al., 2015, p. 19).

Por su parte, en el homicidio expresivo el agente no obra bajo una estrategia o plan trazado, pues carece de premeditación, ya que se hace de manera visceral, en algunas ocasiones posiblemente orientado por el consumo de sustancias psicoactivas (Vélez et al., 2015). Esto, se puede sumar a las clasificaciones tradicionales: homicidio doloso y culposo, también dependientes de la voluntad del actor.

Clasificación del homicidio doloso según UNODC

La UNODC (2013) distingue tres tipos de homicidio doloso: el homicidio vinculado a otras actividades delictivas, el homicidio asociado a conflictos interpersonales y el homicidio vinculado a motivos sociopolíticos. El homicidio vinculado a otras actividades delictivas se produce durante la comisión de otro delito relativo a la delincuencia organizada o no, incluyendo los acaecidos en disputas por territorios o rutas de tráfico comúnmente ocurridos entre grupos estructurados, así como los que ocurren en enfrentamientos contra la autoridad.

Su fin va más allá de lo económico, pues busca conseguir un efecto estratégico o servir como misiva a otro grupo criminal (Vélez et al., 2015); su ocurrencia fluctúa, siendo inestable tanto en el tiempo como de región a región (UNODC, 2014). Dentro de esta categoría se encuentran los homicidios vinculados a

la comisión de delitos comunes como el robo, en donde el homicidio incrementa las probabilidades de éxito del delito o su encubrimiento (Vélez et al., 2015) y cuyas cifras son estables en las diferentes regiones (UNODC, 2014).

El homicidio asociado a conflictos interpersonales puede tener su origen en las relaciones intrafamiliares por lo que la víctima está relacionada afectivamente con el agente (Vélez et al., 2015), su índice varía de región a región. Aunque en cifras mundiales su incidencia es baja en comparación con otros tipos –14% según el estudio de la UNODC (2014) – no deja de ser relevante su inclusión.

También se incluye en este tipo de homicidios, aquellos que ocurren entre sujetos desconocidos o que carecen de nexos fraternales, y que son el resultado de un castigo o como solución a un problema (UNODC, 2014). Para finalizar, están los homicidios relacionados a motivos sociopolíticos, que tienen lugar en el marco de las relaciones políticas cuando se busca establecer una posición de poder. Suelen tener un alto impacto social y pueden llegar a representar un alto porcentaje de los índices de homicidio en una región específica (UNODC, 2014).

Niveles o esferas que afecta el homicidio

El homicidio afecta diversas esferas o niveles: el personal, el político, el económico y el psicosocial. La esfera personal supone la afectación del bien jurídico tutelado, la vida, y que permite gozar del resto de derechos reconocidos. En el nivel político, afecta la relación entre sociedad y Estado, especialmente cuando es frecuente. La relación se tensa y se llega a cuestionar la justicia, se asocia a impunidad y hace frágiles las relaciones institucionales (Vélez et al., 2015). En la esfera económica, el homicidio tiene consecuencias patrimoniales importantes, tanto para el individuo afectado –gastos fúnebres, atención psíquica de las víctimas

indirectas, el descenso en los ingresos familiares–, como para el Estado, que debe poner en marcha el aparato judicial para sancionar el delito (Vélez et al., 2015).

En la esfera psicosocial, el homicidio afecta a las víctimas indirectas, quienes tenían lazos afectivos o consanguíneos con la víctima; pero también afecta a la sociedad en general, pues quien presencié o tuvo conocimiento del hecho delictivo de consecuencias fatales, traduce tal muerte en temor e inseguridad, de allí que el mayor impacto dependerá de la magnitud de la violencia ejercida en la comisión del hecho (Vélez et al., 2015).

Factores jurídicos que determinan el tipo penal homicidio en Venezuela

La doctrina penal ha sido consistente en los elementos o requisitos que un hecho debe reunir para ser considerado un homicidio: la intencionalidad, el resultado fatal y la relación de causalidad. Por supuesto, cada variable modificará las circunstancias en tanto se trate de un homicidio simple, agravado o calificado. Sin embargo, aquí se hará examen de las tres indicadas antes.

o La intencionalidad

La intencionalidad es requisito sine qua non para la verificación de ciertos tipos penales. Así, el Código Penal (2005) dispone en el artículo 61: “Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión...”. Si bien la norma no dispone una definición de intención, sí evidencia el papel determinante de la misma en la configuración del tipo.

La intencionalidad de matar o *animus necandi* es constitutiva del delito de homicidio por ser impretermitible para su verificación.

El dolo es fundamental para castigar el hecho antijurídico, dado que, para todo acto, “en paridad de formas, que sea o no un delito depende de la intención” (Carnelutti., 2000, p. 119). Este factor tiene una connotación subjetiva o interna que incluso puede considerarse de tipo psicológico. Implica que el agente tenga la resolución de cometer el acto antijurídico, que representando la acción internamente la consienta y desee proyectarla sobre la finalidad que no es otra que dar muerte al sujeto pasivo.

Esa motivación como proceso psicológico, es la que termina desencadenando la acción y configura el llamado dolo; interpretado como la voluntad orientada a aquello que la ley prevé como delito, de allí que sea acertado afirmar que, en principio, el homicidio es un delito doloso (Carnelutti, 2000). El dolo es una creación doctrinaria, que inclusive es desarrollado por la jurisprudencia venezolana hasta el punto de que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia–SCP-TSJ ve posible sancionar el homicidio intencional a título de dolo eventual (Sala de Casación Penal, Sentencia N.º 1703, 2000).

El examen doctrinal sobre el dolo se dirige al análisis de la culpabilidad del actor del delito para poder determinar el grado de punibilidad, por ello se define como la voluntad dirigida en acción, en la que el agente mediante un proceso intelectual se hace consciente de lo que desea y de las consecuencias de ello. El dolo está compuesto por dos elementos: el cognoscitivo y el volitivo.

El volitivo implica, a su vez, tres etapas inseparables: la del deseo, la previsión y la elección cuya confluencia es la que termina desencadenando la acción. En este sentido, el evento “es doloso en cuanto presente los caracteres penales del evento deseado, o todavía de otro modo, en lo que sea si no físicamente idéntico, jurídicamente equivalente a este último” (Carnelutti, 2000, p.132). Existen casos en los que, aunque el evento no se corresponde con el resultado deseado internamente por el agente, sigue habiendo

delito. Para ello es necesario que el agente sepa o haya podido saber que su acto encaja en las consecuencias típicas establecidas, para que se considere configurada la intención.

El dolo puede manifestarse en distintas formas: el dolo directo o de primer grado; el dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias y el dolo eventual o de tercer grado condicionado, o de consecuencias eventuales. Determinar cada tipo conlleva analizar el grado de coincidencia entre el evento querido y el resultado causado, así como la diversidad de intenciones que pueden rodear el hecho. El dolo directo o de primer grado es aquel en donde el resultado coincide con la intención del actor del delito. El agente quiere dar muerte a un sujeto cualquiera y lo consigue.

En el dolo de consecuencias necesarias –en el contexto del delito de homicidio– la motivación no es la de dar muerte al sujeto pasivo, sino de ejecutar otros actos que inciden en el resultado letal, de forma tal que la actuación desplegada, aunque no persigue la muerte de la víctima, si la consiente, aquí “el autor no quiere que el delito se produzca, pero se percata que, para conseguir su fin, inevitablemente debe llevarse a cabo la comisión de dicho delito, aceptando tal circunstancia” (Arráiz, 2011, p.156).

En el dolo directo el agente es consciente de las consecuencias que su actuar acarrea y en virtud de ello lo hace, la parte volitiva y cognoscitiva van en la misma dirección. En cambio, en el dolo de segundo grado el agente no desea con su acción desplegar la conducta típica, pero es consciente de que esa acción acarreará la consecuencia típica y lo consiente. Este es el caso de quien desea matar a un sujeto determinado y está dispuesto a matar a otros para alcanzar el cometido final.

En lo que atañe al dolo de tercer grado o dolo eventual, es una figura que ha sido tratada por la SCP-TSJ mediante diversas decisiones (Sentencia N.º 1463, 2000; Sentencia N.º 1703, 2000) en dónde abordan la mixtura entre dolo y culpa, y que el dolo

eventual se ubica en un nivel un poco inferior al dolo directo, pero superior a la simple culpa. En esta situación se asume que el agente, a pesar de conocer el peligro coetáneo de su actuar, lo acepta por lo que también acepta y hasta desea el resultado.

Hay dolo eventual, aunque el agente inicialmente no ha querido el resultado, al ejecutar la acción conociendo que dicho resultado puede generarse, acepta el riesgo (SCP-TSJ, Sentencia 302, 2013). Aquí, el agente no representa como insoluble la ocurrencia de la consecuencia fatal, sino que la ve probable, a pesar de lo cual continúa con la resolución de actuar, con lo que implícitamente acepta el riesgo. Es fundamental destacar que en Venezuela la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia 490, 2011) ratificó la existencia del dolo eventual, definiéndolo así:

Que actúa con dolo eventual aquella persona que, a sabiendas que posiblemente va a lesionar el interés penalmente tutelado “(...) despliega su obrar aceptando, asintiendo, consintiendo, asumiendo, abarcando, tolerando, afirmando o conformándose con tal circunstancia que, en definitiva, se incluye dentro su organización o planificación y, por tanto, dentro del dolo”. (Curiel, 2012, pp. 109-110)

Esta decisión fue una respuesta a la Sala de Casación Penal (Sentencia N.º 554, 2009), que al abordar la punibilidad del dolo eventual ha señalado que la calificación del homicidio a título de dolo eventual constituye una violación al debido proceso, específicamente al Principio de Legalidad, toda vez que tal tipo penal no se encuentra previsto por lo que en orden a tal consideración mal puede ser sancionado, decisión debidamente anulada por la Sala Constitucional, que sobre el agente afirma, entre otras tanta cosas, que obra “con imprudencia consciente quien advierte la posibilidad de producción el resultado, pero no se la toma en serio y en consecuencia tampoco se resigna a ella en caso necesario, sino que negligentemente confía en la no realización del tipo” (Sentencia 490, 2011).

Cualquiera sea el grado de dolo con el que actúa el agente, éste estima las consecuencias de sus acciones u omisiones. La reducción del dolo al simple elemento cognoscitivo es una forma de facilitar la adecuación del obrar en la determinación de la imputación objetiva y facilitar su probanza; toda vez que, como la intencionalidad o el dolo corresponde a una fase o elemento subjetivo, la determinación y valoración de ambos elementos internos, presenta dificultades de comprobación.

Determinar el tipo de dolo es independiente del hecho típico, pues cualquiera sea el grado, todos son una forma de obrar volitiva, pero que requerirán de una sanción adecuada al hecho concreto, pues a mayor gravedad mayor la pena. La voluntad del agente debe ser examinada por el juzgador a través de un proceso lógico, razonado y de inferencia, con apoyo en los indicios y hechos probados.

Hay ciertos parámetros que sirven de referencia a los efectos de hacer esto a través de elementos objetivos fundados en una serie de circunstancias que permiten tal determinación. Así, la proximidad o lejanía de las heridas en las zonas vitales, su reiteración, las relaciones interpersonales del actor con la víctima, el medio empleado para producir el resultado letal y la actitud del agente antes, durante y después de la comisión del hecho son algunos de los factores que, en conjunto, permiten inferir la actuación dolosa del agente (Grisanti, 2005). La jurisprudencia señala que el *animus nocendi*:

Deberá deducirse de la naturaleza del arma empleada, el número y dirección de las heridas y acudiendo a signos objetivos anteriores de la acción (existencia de amenazas, personalidad del agresor y de la víctima y relaciones entre ellos); coetáneos con dicha acción (región afectada por la agresión, manifestación de las personas involucradas, reiteración de los actos agresivos) y posteriores a la acción delictiva (palabras y actitud del agresor ante el resultado producido). Estos criterios son indicativos de la intención del sujeto. (SCP-TSJ, Sentencia N.º 584, 2005)

En el mismo sentido, la misma SCP-TSJ (Sentencia N.º 242, 2012; Sentencia 305, 2010) ha sostenido que el análisis de los factores que inciden en el elemento subjetivo, como el arma empleada, la ubicación y la reiteración de las lesiones, debe tomarse en consideración para llegar a la conclusión de que el agente obró con intención de matar, y que no basta con que el juez llegue a la convicción personal de la intencionalidad, sino que así esté demostrado en los autos.

Algunos autores como Gimbernat (citado por Marzabal, 2013) manifiestan su disconformidad al respecto al considerar que, aunque analizar el arma empleada y el lugar de las heridas facilita determinar la intención de matar en algunos casos, resulta insuficiente en aquellos supuestos en que dichos factores no sean idóneos y que supondrían sancionar un delito de lesiones sin considerar que puede estarse en presencia de un homicidio tentado o frustrado.

Antes de realizar el análisis de los presupuestos de deducción o inferencia de la intención, deben conocerse tres asuntos importantes: en primer lugar, debe realizarse en análisis indiciario que supone que los indicios deben ser varios, suficientes y probados; en segundo lugar, debe tenerse en cuenta que los parámetros guía no son cerrados, pues no son inmodificables o inalterables, sino que cada juzgador considerará los normalmente señalados por la doctrina y la jurisprudencia, pudiendo tomar en cuenta otros elementos fácticos propios del caso específico; y, por último, en tercer lugar, se deberá estimar el valor que cada uno de ellos tiene en dicho análisis, así para la jurisprudencia española el arma empleada y el lugar donde fue producida la agresión tienen un valor de primer grado sin que esto suponga un carácter de prueba tasada sino que debe realizarse un análisis global de las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, pues es ello lo que en conjunto permite concluir si existía en el agente la intención de cometer homicidio (Marzabal, 2013).

o De la consecuencia letal

Como se observó en párrafos precedentes, la intencionalidad debe producir una consecuencia letal que no es otra que la muerte. Su ocurrencia es requisito necesario para que se configure el tipo, cualquiera sea la modalidad de que se trate (Cova, 1952; Grisanti, 2005) y, en tal sentido, es la destrucción de la vida lo que permite hablar de homicidio. Esto da cabida a que se hable de la imperfección del delito en forma de tentativa o de frustración.

Esta referencia a la imperfección de un hecho punible supone que el mismo no ha sido consumado porque no ha habido perfección en el acto, sin que los actos que conllevan a su consumación puedan afirmarse impunes, pues, todo lo contrario, existe un reconocimiento de ellos en el orden positivo criminal venezolano en el artículo 80 del Código Penal (2005), que también ofrece una definición clara de ambas modalidades:

Artículo 80.- Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado.

Hay tentativa cuando, con el objeto de cometer un delito, ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo, por causas independientes de su voluntad.

Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado, con el objeto de cometer un delito, todo lo que es necesario para consumarlo y, sin embargo, no lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad.

Aunque el homicidio es un delito de resultado, admite la aplicación de ambas figuras pues, aunque no corresponden a un homicidio consumado, la actuación desplegada por el agente tiene un grado de peligrosidad e intencionalidad (aspecto trascendental en la configuración) que puede ser sancionado, aunque no exista identidad entre lo accionado y el resultado.

Se admite el grado de tentativa en el delito de homicidio, porque puede verificarse de los actos un daño objetivo causado por el agente que, aunque no obtenga la consecuencia deseada, sí ha iniciado los actos conducentes a un tipo penal. Así, el homicidio será tentado cuando el agente, habiendo realizado ciertas actuaciones –más no todas las necesarias– propias para ocasionar la muerte, no lo vea materializado por causas ajenas a su voluntad, cosa que dependerá de los elementos probatorios obtenidos y de si éstos son constitutivos del delito.

Es así como el obrar doloso o intención del agente es un elemento que surge de actos indefectiblemente orientados a perpetrar el hecho, se conjuga con el inicio de la “ejecución del acto” que debe tomar en cuenta el juez para la determinación de la tentativa de homicidio, siendo imperioso determinar conjunta y cuidadosamente tanto la adecuación del medio para ocasionar el resultado como lo propicio de la conducta desplegada por el agente a tal fin (Muñoz et al., 2015).

Debe también tenerse en cuenta todo acto preparatorio pues, aunque necesarios para la comisión del delito no tienen relevancia penal, en el entendido de que no son susceptibles de sanción por no amenazar el bien jurídico tutelado, por lo que no toda actuación desplegada por el agente puede considerarse como propia para la perpetración del delito. Si del análisis de todas las circunstancias se comprueba que el agente realizó todo lo necesario para la comisión del delito, y aun así no lo logró, se tendrá por configurada la tentativa. Sobre la tentativa, en Colombia, para ahondar en su comprensión:

La Corte Suprema de Justicia ha dicho que una acción tiene la connotación de tentativa de homicidio si reúne factores como la modalidad del hecho, el medio de agresión empleado, la dirección y el número de golpes y heridas, las condiciones de modo, tiempo y lugar, circunstancias conexas con la acción delictiva; en lo que se refiere al ánimo, es la intención del sujeto, un elemento subjetivo

de su conciencia que es de imposible acreditación por prueba directa, que entonces debe inferirse de otros hechos objetivos indiciarios que le permitan al juzgador, de acuerdo con las leyes de la sana crítica, afirmar la existencia de una voluntad dirigida al fin del homicidio, entre ellas las relaciones entre autor y víctima, la personalidad de los mismos y sus actitudes. (Muñoz et al., 2015, p. 189)

El caso del homicidio frustrado es distinto, pues surge cuando el actor ha hecho todo lo necesario para producir el resultado típico, pero éste no ocurre por causas extrañas a la voluntad. La SCP-TSJ (Sentencia N.º 178, 2007) ha explicado que la frustración hace referencia a una modalidad de ejecución de delito imperfecto y que en el caso del homicidio tiene lugar cuando el sujeto activo no logra dar muerte a la víctima, pero por circunstancias absolutamente ajenas a su querer.

Para que se verifique el homicidio frustrado, debe tomarse en consideración la calificación clínica sobre la lesión –que realiza el médico forense– así como los diversos aspectos y circunstancias que se han acreditado como hechos en el juicio, que hacen posible establecer el tipo sancionado. Así, la intencionalidad del agente de matar debe ser probada mediante un análisis detallado con base en los elementos probatorios llevados y debatidos en el juicio, junto con las situaciones precedentes y concomitantes al hecho, además de la adecuación del medio para tal fin, de modo que pueda inferir que, de no ser por la circunstancia ajena, el hecho se habría consumado. La misma sala expresa, de forma contundente y definitiva:

La frustración es una actividad ejecutiva imperfecta y el homicidio en grado de frustración se dará, cuando el agente realiza todo lo necesario para quitarle la vida a una persona, no lográndolo por causas completamente ajenas a su voluntad. Hay que analizar los elementos probatorios y las circunstancias de los hechos acreditados en el juicio, de tal manera que de dicho

análisis surjan una serie de fundamentos que en su conjunto lleven al juez a la convicción de que está en presencia del mencionado delito. Entre estos elementos tenemos, la intención de matar (acto intrínseco de voluntad), se debe estar plenamente convencido de que el agente quiso matar y no herir simplemente, pues la intención no puede presumirse, por lo que se tendrá que deducir de los hechos y las pruebas debatidas y probadas en el juicio oral, los actos que procedieron con anterioridad a los referidos hechos concretos, así como la idoneidad de los medios utilizados y el lugar de las heridas y su gravedad. (SCP-TSJ, Sentencia N.º 178, 2007)

o De la relación de causalidad

Aunque es un concepto polémico, la relación de causalidad forma parte de las cuestiones necesarias para poder hablar de un delito:

Se habla de causalidad en un sentido descriptivo, para dar cuenta o explicar un fenómeno de la realidad, natural o social; o en un sentido atributivo, cuando la referencia a la causalidad se utiliza como condición para reprochar a un sujeto por un determinado resultado, ya sea natural o social, y en sentido más o menos violento, dependiendo del contexto y de si el antecedente constituye o no un acto humano. (Krause, 2014, pp. 85-86)

Tomando el sentido atributivo, en el homicidio la conducta exteriorizada debe producir la muerte; así, la relación de causalidad debe existir entre la acción y el resultado, entendido éste como el daño que ocasiona conscientemente el sujeto activo del delito. Por ende, “será necesario además de la constatación de dicho resultado, la verificación de una relación de causalidad que permita afirmar que la conducta en cuestión ha sido antecedente del mismo, exigiéndose en consecuencia una relación de causa y efecto” (Rodríguez, 2011, p. 21). Ciertamente, la actividad probatoria juega un papel importante en este aspecto, pues es

la factibilidad de demostrar que la acción del agente condujo al resultado típico lo que permite determinar la responsabilidad penal.

La relación de causalidad viene a ser el vínculo entre un comportamiento y un resultado específico del mismo que se presenta como su consecuencia, siendo imprescindible analizar si tal resultado puede acreditarse al agente como una manifestación del ataque al bien jurídico, para que se configure el tipo penal (Rodríguez, 2011).

Ese vínculo que se traza entre eventos es generativo, necesario e insuficiente (Krause, 2014); generativo, entre el acto como causa y resultado; necesario porque el resultado existe únicamente como consecuencia del acto del sujeto; e insuficiente en tanto no se exige que sea lo único que contribuya a la realización (Krause, 2014).

Régimen jurídico del homicidio en Venezuela

o El homicidio simple

La legislación venezolana prevé en el Título IX, Capítulo I del Código Penal, lo concerniente al delito de homicidio. El artículo 405 lo describe así: “El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, será penado con presidio de doce a dieciocho años”. De aquí se desprende el carácter doloso del delito que supone una valoración subjetiva de los actos del agente cuya determinación podría ser de difícil determinación dada la complejidad de la psique y de las relaciones humanas, por lo que requiere acudir a elementos externos que hayan sido probados, así como análisis indiciarios para inferir si existía en el agente el deseo de matar.

Del mismo modo, se observa que es un delito de sujetos no cualificados o indistintos, pues el legislador no prescribió característica alguna en el agente o sujeto activo, como tampoco

en el sujeto pasivo. Es decir, no requiere que el agente reúna cualidades específicas o particulares para ser reo del delito como tampoco ocurre en el caso de la víctima, al contrario de los homicidios calificados en dónde, cómo se abordará a posteriori, hay ciertas características propias para su verificación. En el homicidio simple existe una coincidencia entre el objeto material del delito y el sujeto pasivo, que no es otro que el occiso, es decir, quien muere.

o Otras formas de homicidio doloso

Tomando como referencia el homicidio simple, el legislador venezolano contempla otras formas de este delito: calificado, concausal y preterintencional. En lo que respecta al homicidio calificado la Sala de Casación Penal (Sentencia N.º 1316, 2000) considera que cuando en el hecho que reúne las condiciones del homicidio, concurre además con alguna de las circunstancias que fueron previstas por el legislador como calificantes, se estructura un tipo distinto, denominado tipo mixto.

El homicidio calificado parte de la base del homicidio simple, ya que el legislador no conceptualiza qué se entiende por homicidio calificado, sino que agrava la pena en una serie de casos específicos en donde los factores que en un inicio –en el homicidio simple– fueron indeterminados, ahora pasan a tener relevancia, como lo son los sujetos o los medios de comisión.

En Venezuela, al igual que ocurre en otras legislaciones – como la chilena, la mexicana e inclusive la española –, se realiza una tipificación casuística del homicidio, denominándoseles en algunos países como calificado y en otros como asesinato, para distinguir uno de los otros, estableciéndose en todo caso, penas más altas que la prevista en el homicidio simple.

De esta manera el Código Penal venezolano distingue varios tipos de homicidio calificado, contenidos en el artículo 406. En el

primer ordinal está el homicidio realizado mediante los siguientes mecanismos: veneno, incendio y sumersión, con una pena de entre 15 a 20 años. La circunstancia calificadora está en las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal, ya sea por el alto grado de peligrosidad del agente (Grisanti, 2005) o ya sea porque se actúa con premeditación –caso del envenenamiento– o porque pone en riesgo diversos bienes jurídicos tutelados, como, tal es el caso del incendio, en el que el agente podría afectar no solo la esfera vital del sujeto en específico, sino sus bienes, o los de quienes se encuentren en sus adyacencias (Grisanti, 2005).

También es homicidio calificado el ejecutado con alevosía o por motivos fútiles e innobles. La alevosía es definida por el propio Código Penal (2005) en su artículo 77 como actuación a traición o sobre seguro, circunstancia que crea una ventaja para el actor y limita las posibilidades de defensa de la víctima. En este caso, la alevosía no es una circunstancia agravante sino calificante. La misma está compuesta por dos elementos mezclados, uno objetivo relativo a los mecanismos para perpetrar la acción y otro subjetivo, relacionado con la intención al valerse de dichos mecanismos para asegurar la imposibilidad de defensa del sujeto pasivo (Donna, 1999).

En cuanto a los motivos fútiles e innobles, ocurren cuando se comete el homicidio por causas insignificantes o banales, o contrario a elementales sentimientos de humanidad (Grisanti, 2005). Igualmente, se establece en dicho numeral como calificante, el que el homicidio sea consecuencia de otros delitos como el hurto (tanto simple, como agravado y calificado), robo (aun el agravado) y el secuestro.

Debe destacarse que el numeral segundo dispone un aumento de penas cuando concurren dos o más de las circunstancias expresadas. En atención a los sujetos, el ordinal tercero califica el homicidio e impone pena de 28 a 30 años de prisión –límite máximo en el derecho venezolano–. Este calificante de tipo subjetivo toma

en consideración el vínculo familiar o conyugal existente entre actor y víctima, de modo tal que se habla de parricidio, filicidio y conyugicidio, tanto como uxoricidio o virilicidio. De seguido, se califica el delito en razón de la víctima sólo cuando es cometido en la persona del presidente de la república o de quien ejerciera sus funciones, lo que se conoce como magnicidio.

De lo anterior se colige que “la fijación en la consecuencia jurídica que se sigue de su realización y la reconstrucción del modelo de justificación de la aplicación de esa consecuencia recogido por la legislación” (Von Bernath, 2016, p. 725). Es igualmente necesario dar una mirada a la pena, que es la consecuencia de la comisión del delito pues éste sigue siendo el mismo: homicidio, sólo que las circunstancias que prevé el legislador como más gravosas, conllevan una pena más alta.

Cada sistema penal instituye circunstancias específicas que castigan con mayor severidad el homicidio, así, mientras en Venezuela los mecanismos usados se consideran calificantes (incendio, sumersión), en Chile en el artículo 391-1, 4ta del Código Penal (1874); o en España, artículo 139-3(Código Penal, 1995), se considera calificante el aumento deliberado e inhumano del dolor a la víctima.

La distinción entre homicidio simple y calificado radica en la utilidad que permitía en la determinación de la pena capital o de la aplicación de penas mucho más gravosas, para esos casos revestidos de circunstancias graves que requerían severidad, pero no ameritaban la muerte (Von Bernath, 2016). Pero con la eliminación de la pena de muerte en muchas legislaciones, su distinción permanece indemne e igualmente se emplea para potenciar la pena a aplicar en consideración con el homicidio simple; dicho de otro modo, la necesidad de determinar la existencia de una calificante tiene su razón de ser en la función de delimitación de la procedencia de la pena; y no a la crueldad que el empleo de un determinado medio implica, sino que está

orientado a su vez a la peligrosidad del agente que actúa con mayor propensión a la violencia. El uso de sustancias como el veneno, o el incendio o sumersión implican cierto grado de preparación y busca no solo garantizar el resultado, sino que –como se señaló precedentemente– pone al sujeto pasivo en indefensión.

Ahora bien, el artículo 407 del Código Penal venezolano (2005) prevé la figura del homicidio agravado, imponiendo penas que oscilan entre los 20 a 25 años de presidio, conforme ciertas cualidades o circunstancias del sujeto pasivo. Así, constituye agravante la comisión del delito en la persona del hermano – ordinal primero–, o cuando la víctima es el Vicepresidente Ejecutivo de la Republica, Magistrados del Tribunal Supremo, diputados, concejales, ministros, gobernadores y otros funcionarios nombrados en el ordinal segundo, en razón de su alta posición, así como también el homicidio cometido a miembros de las Fuerzas Armadas, pero siempre con razón de las funciones que desempeñan. Se puede afirmar que quien posee una cualidad capaz de gravar la pena es el sujeto pasivo, pues las cualidades del sujeto activo resultan indiferentes.

En cuanto al homicidio concausal, art. 408, (Código Penal, 2005) éste tiene lugar cuando la muerte se produce por la concurrencia de circunstancias preexistentes desconocidas por el agente, o que no fueron consideradas por él. En este caso la pena oscilará entre siete y diez años de presidio para el caso de homicidio simple; de diez a quince años para el calificado; y de ocho a doce años de presidio si concurre la agravante de parentesco prevista en el artículo 407.

Este es el caso de quien pretende matar con arma blanca, pero desconoce que su víctima sufre de hemofilia, por lo que al ejecutor de la acción la víctima muere debido a la pérdida de sangre y no por la lesión ocasionada. La concausa no hace parte del accionar del sujeto activo, ni tampoco es conocida o considerada por éste,

quien despliega su acción orientada a ocasionar la muerte del sujeto pasivo que ocurre solo por una circunstancia preexistente o sobreviniente.

Es menester entender que para que haya homicidio concausal, la acción del agente, individualmente considerada, es incapaz de producir el resultado letal, aun y cuando es el deseado. La concausa puede ser preexistente o superviniente. La primera puede ser de modo normal, atípica o patológica, según se trate de características propias o impropias del organismo o a enfermedades o condiciones congénitas.

El segundo tipo de concausa exige que no exista relación alguna con el accionar del agente, pues en caso contrario su conocimiento implicaría un accionar alevoso que, en vez de configurar este tipo penal, configuraría el de homicidio calificado y en consecuencia se agravaría la pena (Irureta Goyena citado por Grisanti, 2005). De este modo, ni la concausa, ni la acción del agente aisladamente consideradas, son suficientes para ocasionar la muerte y es la aleación de ambas circunstancias la que conlleva al resultado.

Por otra parte, el artículo 410 (Código Penal, 2005) prevé la figura del homicidio preterintencional, que tiene lugar cuando el agente con acciones dirigidas a lesionar ocasiona la muerte al sujeto pasivo, por lo cual la pena a imponer sería de seis a ocho años de presidio en el caso del homicidio simple, de ocho a doce años en el caso de homicidio calificado, y de siete a diez años en el caso en que concurra una agravante de las previstas en el artículo 407, es decir, si se perpetra en la persona del hermano o del vicepresidente de la república o figura semejante.

Como se desprende de su propia palabra, el homicidio preterintencional es aquel que va más allá de la intención real, por lo que el elemento subjetivo, la intencionalidad es determinante. En los demás tipos analizados en párrafos precedentes coincidía

la intención y el resultado, pero en el presente caso, la muerte sobreviene como una consecuencia no deseada por el agente, el resultado va más allá de lo querido. Aquí opera una mixtura entre el dolo y la culpa, pues existe dolo en la acción del agente y su intención de ocasionar un daño al sujeto pasivo; no obstante, el resultado letal no se corresponde con la intención y se produce sin el querer del agente y es allí donde entra en juego la culpa (Irureta Goyena citado por Grisanti, 2005).

Considerar el homicidio de esta manera implicaría calificar desde la perspectiva de la culpa, de manera doble un mismo delito, ello además que la culpa como elemento de la culpabilidad implica la presencia de la negligencia, imprudencia o impericia y el resultado en el homicidio preterintencional no corresponde, ni avizora la existencia de alguno de ellos, sino que toda la actuación desplegada por el agente es dolosa, aun y cuando el resultado obtenido no es querido (Grisanti, 2005).

Finalmente, está previsto también el homicidio preterintencional concausal, que viene a ser la suma de los dos anteriores. En este caso el agente tiene la intención de lesionar, no obstante, la muerte se sobreviene en virtud de la concurrencia de circunstancias preexistentes desconocidas o no previstas por el agente e independientes de su hecho, por lo cual la pena a imponer igualmente se rebaja, de cuatro a seis años en el homicidio simple, de seis a nueve en homicidio calificado y de cinco a siete en el caso en que concurra la agravante de parentesco prevista en el artículo 407.

Conclusiones

Venezuela es uno de los países más violentos de América Latina y el mundo, con 28.479 muertes violentas en 2016 (OVV, 2016a) y 26.616 en 2017 (OVV, 2018). La fragilidad del entorno institucional ha disminuido de forma considerable la calidad y el nivel de vida de la sociedad venezolana, que parece no regirse

por normas y un entorno de respeto por la ley. A esto se suma la parcialidad política de las instituciones y poderes del Estado que, en muchos casos, lejos de proteger al ciudadano común le agreden e impiden el acceso a los órganos que imparten justicia. El ciudadano perdió la confianza en las instituciones y el ambiente, cada día más, es propicio al crimen. En su reporte sobre el año 2016, el OSET-UCAT (2017) contaba que:

El 37% de los tachirenses aceptan el linchamiento como una forma de justicia civil y el 29,6% acepta la regulación de los grupos al margen de la ley en las zonas fronterizas, ello porque el Estado desapareció y más que no regular, no genera confianza para la interacción sana entre los habitantes de la sociedad, así es para el 72% de los encuestados, quienes no confían en ninguna de las instituciones públicas del país. (pp. 196-197)

Del análisis jurídico sobre el homicidio, está claro que la regulación jurídica, similar a la de otros países, no es el problema. En Venezuela, y especialmente en el estado Táchira, confluye una multiplicidad de factores que hacen de la violencia homicida un fenómeno especial: debilidad institucional, inexistencia de verdaderos controles fronterizos, ausencia total de políticas criminales efectivas, inexistencia de política económica razonable que junto al control estatal de todos los factores de producción, han generado una ruptura en la calidad de vida del venezolano, que parece lejos de ser superada por la inexistencia de correctivos desde los responsables políticos.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017 (Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar & Universidad Católica Andrés Bello, 2018) expone un aumento del 38% de la pobreza entre 2014 y 2017, para ubicarse en un 87%; además, el mismo estudio expresa que el 22% de los venezolanos ha sido víctima de algún delito, de los cuales el 65% no denunció por desconfianza en las instituciones. Además, la encuesta revela

que la tasa de homicidios para el 2017 es de 87 por cada cien mil habitantes, que representa un incremento del 345% con respecto a la tasa de homicidios registrada en 1998, antes de la revolución.

Adicionalmente, hay un colapso de los servicios públicos regentados por el Estado y una exacerbación de la corrupción, que ponía al país a la cabeza del índice de corrupción para el año 2016, ocupando la posición 166 (Transparency Internacional, 2017), superándose en 2017 en el puesto 169 de un total de 180 países (Transparency International, 2018). Este flagelo contamina los organismos de seguridad, la administración de justicia y cualquier institución a cargo de la protección de los derechos ciudadanos.

En el caso de las fuerzas de seguridad, estas se han enfocado más en una labor represiva y han sido conniventes con operaciones y movimientos de la delincuencia organizada, por lo que no es extraña la consecuencia clara de incremento del clima de violencia en Venezuela.

El asunto podría abordarse a través de mecanismos jurídicos, pero la realidad es que en Venezuela existen normas que regulan toda esta situación, pues hay una Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012), que contempla una serie de delitos que ya estaban recogidos por otros instrumentos normativos, de forma tal que hay una amplia gama de herramientas jurídicas para la persecución penal del delito relacionado con este tipo de violencia. Sin embargo, debe apuntarse que la falta de técnica legislativa ha ocasionado problemas en la resolución de los delitos en tanto la dispersión normativa.

Esta situación se puede ilustrar desde el punto de vista de varias leyes penales especiales que pueden relacionarse con la norma contra la delincuencia organizada: a) Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia (2007), dispone en sus artículos 46 y 47 la prostitución y esclavitud sexual como tipos

penales, cuando el artículo 16, 11 de la Ley contra la delincuencia organizada refiere la trata de personas; b) la Ley Orgánica de Drogas (2010) contempla el tráfico como tipo, al tiempo que lo hace la Ley contra la delincuencia organizada en el artículo 16, 1; c) la Ley contra el contrabando (2010) cuyas disposiciones son amplias al respecto, a pesar de que el artículo 16, 9 de la Ley contra la delincuencia organizada, también refiere al contrabando entre sus conductas penales típicas.

A esto debe sumarse la aparición de delitos de orden económico, así como ciertos vacíos legales en virtud de la despenalización de conductas que hasta el año 2000 se encontraban catalogadas como delito y cuya comisión se encuentra relacionada con la legitimación de capitales generando impunidad en este respecto, razón que explica que entre agosto y diciembre de 2015 la legitimación de capitales representase tan solo un 1,3% del total evaluado y los delitos financieros solo un 0,3% (Observatorio de Delito Organizado, 2016).

En la frontera, la reventa y el contrabando de dinero en efectivo son usados por empresas criminales, no solo para lavar dinero proveniente del delito, sino para el contrabando de otros bienes y la complicidad de funcionarios aduaneros, difícilmente puede ser controlada y demanda la colaboración de los cuerpos de seguridad y vigilancia del Estado.

El Ministerio Público (2017b) señaló que en 2016 detuvo a 5.164 personas y acusó a 1.190 por delitos de índole económica establecidos en las leyes orgánicas de Precios Justos y contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la Ley sobre el Delito de Contrabando. En ese mismo informe (Ministerio Público, 2017b) se señala al estado Táchira como uno de los focos de fuga de dinero en el país.

El deterioro social que va de la mano con el económico, todo se reduce a la actividad que permita la subsistencia, ya sea el tráfico de drogas, armas o la delincuencia común. Hay venganza privada

porque los individuos sienten que en manos de la administración de justicia sus conflictos no serán resueltos. La proliferación de armas de fuego ha procurado respuesta represiva del Estado que solo ha causado más violencia. Los mecanismos de reinserción social fallan, al igual que los preventivos del delito, en el caso que existan y se apliquen:

Por lo que toca a las percepciones sobre uso, extensión y riesgos asociados a las armas de fuego, el estudio de Táchira permite apreciar que la disposición a contar con armas de fuego para protección pareciera asociada a una menor percepción proporcional de la importancia de la presencia policial y una mayor importancia de las barreras físicas, como rejas y puertas de seguridad. (Gabaldón, 2013, p. 4)

El Estado venezolano dictó una Ley para el desarme y control de armas y municiones (2013), que se ha mostrado inútil como cualquier otra política emprendida contra el flagelo criminal en el país, como bien reporta. El problema no es legislativo, sino estructural como se ha evidenciado de lo narrado en esta investigación. Aquí se ha demostrado que el problema de la violencia homicida en Venezuela es integral: pues incluye una sociedad acostumbrada a la violencia, la ineficacia institucional y una crisis económica patente que es negada de forma sistemática por los responsables políticos a nivel nacional y que se alimenta de la radicalización política, disfrazada de guerra económica.

Los efectos en el Estado Táchira han sido revisados por las instituciones académicas, como el OSET-UCAT (2016), que analiza el contrabando en la región fronteriza durante el año 2015. Sin embargo, más allá de la retórica, las cifras siguen incrementándose y la crisis sigue agudizándose, como lo demuestran las 55 muertes ocurridas en Táchira entre diciembre de 2017 y enero del 2018, mayoritariamente motivados por ajustes de cuentas, llevados a cabo a la luz del día y con arma de fuego (Prensa OVV Táchira, 2018).

La violencia homicida debe ser abordada mediante planes estructurales. Si no se atienden cada uno de los niveles en que se origina, si no se corrigen los desequilibrios macro y microeconómicos, la rampante pobreza (85%), la dramática presencia de delincuencia organizada y si no se recobra la confianza del venezolano en las instituciones encargadas de su resguardo y seguridad, será imposible detener el fenómeno de la violencia que no ha registrado descenso desde 1998.

No basta con la proliferación de leyes, pues las leyes sin eficacia son letra muerta. La disminución de la violencia homicida no es imposible, en Colombia la tasa de homicidios en 2017 ha sido la menor en 30 años, 24 por cada cien mil habitantes (El Colombiano, 2017); mientras en El Salvador, con una tasa de homicidios de 81,2 por cada cien mil habitantes en 2016, a un 60 para 2017 (Insight Crime, 2018). Igualmente, Honduras, con una crisis social importante, marcó un descenso de casi un 20% en las cifras de homicidios para ubicarse en 42,8 por cada cien mil habitantes en 2017 (Insight Crime, 2018). Recordemos que, para el mismo periodo, Venezuela registró, conforme diversas fuentes ya recogidas, un índice superior a 80 muertes por cada cien mil habitantes, que deja claro que el panorama local no será distinto conforme se presenta el año 2018 en el país.

BIBLIOGRAFÍA

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2017). Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017. Recuperado de: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf

Altos costos de alimentos impiden a tachirenses comer de manera sana. (23 de abril de 2018). Diario La Nación. Recuperado de: <https://lanacionweb.com/regional/altos-costos-de-alimentos-impide-a-tachirenses-comer-de-manera-sana/>

Amnistía Internacional. (2017). Venezuela: Violencia letal, una política de estado para asfixiar a la disidencia. Amnistía Internacional Sitio web. Recuperado de: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/07/venezuela-violencia-letal-una-politica-de-estado-para-asfixiar-a-la-disidencia/>

Andrés-Pueyo, A. (2012). Presente y futuro de la violencia interpersonal en las postrimerías del estado del bienestar. *Anuario de Psicología*, 100 (2) 199-211.

Arráiz, E. (2011). El debate jurídico penal del dolo eventual en la jurisprudencia venezolana. *Revista del Ministerio Público V Etapa*, (10), 151-187.

Briceño-León, R. (2007). *Sociología de la violencia en América Latina*. Quito: FLACSO

Briceño-León, R. (2008). La violencia homicida en América Latina. *América Latina Hoy*, 50, 103-116.

Carnelutti, F. (2000). *Teoría general del delito*, vol. 5. México: Oxford University Press.

Carrara, F. (1945). Programa del curso de derecho criminal, vol. III, parte especial. Buenos Aires: Depalma.

Código Civil. (1982). Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 2.990. Caracas, Venezuela. 26 de julio de 1982.

Código Penal. (2005). Gaceta Oficial N.º 5768 Extraordinario. Caracas, Venezuela. 13 de abril de 2005.

_____. (1874). Ministerio de Justicia. Santiago de Chile. 12 de noviembre de 1874.

Código Penal, Ley Orgánica 10/1995. (1995). Boletín Oficial del Estado N.º 281. Madrid, España. 24 de noviembre de 1995, revisado el 28 de octubre de 2015.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018). Migración interna y distribución espacial de la población. Recuperado de: <https://biblioguias.cepal.org/migracioninterna>

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial N.º 36.860 Extraordinario, 30 de diciembre de 1999; con enmienda N.º 1, Gaceta Oficial N.º 5.908 Extraordinario, 19 de febrero de 2009.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). (1969). Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32), Organización de Estados Americanos, 22 de noviembre de 1969. Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Cova, L. (1952). Homicidio con jurisprudencia de casación y doctrina extranjera. Caracas: Ediciones Jaime Villegas.

Curiel, G. (2012). El dolo eventual el en Tribunal Supremo de Justicia: análisis de las sentencias 554 de la Sala de Casación Penal y 490 de la Sala Constitucional. *Revista Cenipec*, 31, 97-128.

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948). Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 217 (III), de 10 de diciembre de 1948. Recuperado de: <http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>

Donna, E. A. (1999). *Derecho penal, Parte Especial*, Tomo I. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia—UNICEF. (1999). *Innocenti Digest: Niños y violencia*. UNICEF: Florencia.

Fondo Monetario Internacional. (2018). *Perspectivas de la economía mundial: Actualización-enero 2018*. Recuperado de: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018>

FMI prevé inflación de 13.000% y caída del PIB en 15% para Venezuela. (28 de enero de 2018). *El Nacional*. Recuperado de: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/fmi-preve-inflacion-13000-caida-del-pib-para-venezuela_220292

Gabaldón, L. (2013). *El desarme en Venezuela: rol de las organizaciones sociales*. Caracas: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.

González, O. L. (2014). *Violencia homicida en América Latina*. Orda revue l'ordinaire des Amériques (216). Recuperado de: <https://orda.revues.org/1216>

Grisanti A., H. (2005). *Derecho penal, parte especial*. Caracas: Vadell Hermanos Editores.

Gutiérrez, P., Magdaleno, G. & Yáñez, V. (2010). Violencia, Estado y crimen organizado en México. *El Cotidiano*, (163), 105-114.

Herrera, E. (2016). Evolución de la Criminalidad en Venezuela (1990-2015) Informe presentado a la Asamblea Nacional del Venezuela. Caracas. Paz Activa. Recuperado de: <http://pazactiva.org.ve/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Asamblea-Nacional-FINAL-Criminalidad-Ernesto-Herrera.pdf?platform=hootsuite>

Human Rights Watch & Foro Penal. (2017). Arremetida contra opositores. Brutalidad y persecución política en Venezuela. Recuperado de: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela1117sp_web.pdf

Insight Crime. (19 de enero de 2018). Balance de Insight Crime sobre homicidios en Latinoamérica en 2017. Insight Crime. Recuperado de: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-homicidios-en-latinoamerica-en-2017/>

Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana. (2011). La Violencia Homicida en Venezuela, Examen Periódico Universal, 2011 EPU. Ginebra. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Recuperado de: <http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/VE/INCOSEC-InstitutoInvestigacionesConvivenciaSeguridad-spa.pdf>

Krause, M. (2014). La relación de causalidad ¿quaestio facti o quaestio iuris? *Revista de Derecho*, XXVII (2), 81-103.

Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. (2017). *Gaceta Oficial* N.º 41.274. Caracas, Venezuela. 8 de noviembre de 2017.

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. (2012). Gaceta Oficial N.º 39.912. Caracas, Venezuela. 30 de abril de 2012

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (2014). Gaceta Oficial N.º 40.548. Caracas, Venezuela. 25 de noviembre de 2014.

Ley para el desarme y control de armas y municiones. (2013). Gaceta Oficial N.º 40190. Caracas, Venezuela. 17 de junio de 2013.

Ley sobre el delito de Contrabando. (2010). Gaceta Oficial N.º 6.017 Extraordinario. Caracas, Venezuela. 30 de diciembre de 2010.

Marzabal, I. (2013). El animus necandi y factores de riesgo en el delito de asesinato de pareja o ex pareja: predicción de la violencia. *Revista de derecho UNED* (12), 439-461. doi <https://doi.org/10.5944/rduned.12.2013.11702>

Ministerio Público. (2017a). Actuaciones del Ministerio Público relacionadas con las OLP en Venezuela (julio 2015-marzo 2017). Recuperado de: <http://pazactiva.org.ve/wp-content/uploads/2017/10/INFORME-OLP-MP-2017-Folleto-OLP-2017-min.pdf>

Ministerio Público. (2017b). Informe anual de gestión 2016. Recuperado de: http://observatoriodeviolencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/08/MP_InformeAnualGestión_2016-1.pdf

Muñoz, P. L., Támara P. L., Sánchez C. O., Fontanilla D. G., Castellanos M. C., Dueñas M. L., Gil, M. D., Afifi N., Peña R. N. & Castellanos M. U. (2015) Aportes de la clínica forense para conceptualizar en materia probatoria el riesgo para la vida en el delito de tentativa de homicidio en Colombia. *Revista Derecho Penal y Criminología*, 37 (101), 181-202. doi: <http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v36n101.07>

Observatorio del Delito Organizado. (2016). Monitor delito organizado transnacional agosto-diciembre 2015. Recuperado de: <http://observatoriodot.org.ve/cms/images/documentos/INFORMEHemerograficoDELITOORGANIZADOAGOSTODICIEMBRE2015.pdf>

Observatorio Social del Estado Táchira-Universidad Católica del Táchira. (2012). Estadísticas del observatorio de prensa, violencia interpersonal 2012. Recuperado de: http://www.ucat.edu.ve/nuevo/INVESTIGACION/observatorio/violencia_interpersonal/estadisticas_2012.pdf

_____. (2013). Estadísticas del observatorio de prensa, violencia interpersonal 2013. Recuperado de: http://www.ucat.edu.ve/nuevo/INVESTIGACION/observatorio/violencia_interpersonal/estadisticas_2012.pdf

_____. (2014). Estadísticas del observatorio de prensa, violencia interpersonal 2014. Recuperado de: http://www.ucat.edu.ve/nuevo/INVESTIGACION/observatorio/violencia_interpersonal/estadisticas_2014.pdf

_____. (2015). Estadísticas del observatorio de prensa, violencia interpersonal 2015. Recuperado de: http://www.ucat.edu.ve/nuevo/INVESTIGACION/observatorio/violencia_interpersonal/estadisticas_2015.pdf

_____. (2016). El Táchira en cifras 2015. El contrabando en las ciudades de frontera desde la perspectiva de la institucionalidad. San Cristóbal: Universidad Católica del Táchira. Recuperado de: <http://www.ucat.edu.ve/nuevo/INVESTIGACION/Observatorio%20Social/Publicaciones/OSET%20UCAT%20El%20Táchira%20en%20cifras%202015%20Doc%206.pdf>

_____. (2017). El Táchira en cifras 2016. La violencia interpersonal: ruptura de la convivencialidad, un grave problema social. San Cristóbal: Universidad Católica del Táchira. Recuperado de: http://www.ucat.edu.ve/web/download/facultades/investigacion_y_postgrado/investigacion_y_postgrado/observatorio_social/publicaciones/8-La-violencia-interpersonal_2.pdf

Observatorio Venezolano de Violencia. (2016a). Informe anual 2016. Recuperado de: <http://observatoriodeviolencia.org.ve/2016-ovv-estima-28-479-muertes-violentas-en-venezuela/>

_____. (2016b). 46% de los delitos que se cometen en el Táchira son homicidios. Recuperado de: <http://observatoriodeviolencia.org.ve/46-de-los-delitos-que-se-cometen-en-el-tachira-son-homicidios/>

_____. (2016c). Informe anual 2015. Recuperado de: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/2015-tasa-de-homicidios-llego-a-90-por-cada-100-mil-habitantes/>

_____. (2018), Informe anual 2017. Disponible en: <http://observatoriodeviolencia.org.ve/informe-ovv-de-violencia-2017/>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2014). Estudio mundial sobre el homicidio 2013. Recuperado de: http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Organización Mundial de la Salud. (2014). Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014. Disponible en: <http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/global-status-report-on-violence-prevention-2014.html>

Olivares, F. (18 de octubre de 2015). Delito Organizado. El Universal. Recuperado de: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/delito-organizado_89696

Organización Mundial de la Salud. (2003). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Recuperado de: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112670/9275315884_spa.pdf;-jsessionid=67D1802703FA59EB1329582A8273383B?sequence=1

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. (1966). Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 2200 A (XXI). Recuperado de: http://www.derechos.org/vp/wp-content/uploads/pacto_int_dcp1.pdf

Prensa OVV Táchira. (27 de febrero de 2018). Táchira: entre diciembre de 2017 y enero de 2018 se reportaron 71 sucesos violentos. Observatorio Venezolano de la Violencia. Recuperado de: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/tachira-entre-diciembre-de-2017-y-enero-de-2018-se-reportaron-71-sucesos-violentos/>

Primera, M. (1 de junio de 2012). Venezuela prohíbe la venta de armas a la población civil. El País. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2012/06/01/actualidad/1338542574_088241.html

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización Mundial de la Salud & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2014). Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014. Recuperado de: <http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/global-status-report-on-violence-prevention-2014.html>

Rodríguez, M. (2008). Violencia Homicida: clasificación y

factores de riesgo. *Medicina UPB*, 27 (2), 125-139.

Rodríguez, M. (2011). *El tipo penal y su imputación jurídico-penal*. Caracas: Vadell Hermanos Editores.

Rombolá, N. & Reboiras, L. (2006). *Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales*. Buenos Aires: Editorial Ruy Díaz.

Sutherland, M. (2016, 3 de abril). Venezuela: causas reales de la inflación. La crisis y la alocada emisión de dinero. Sinpermiso.info. Recuperado de: <http://www.sinpermiso.info/printpdf/textos/venezuela-causas-reales-de-la-inflacion-la-crisis-y-la-alocada-emision-de-dinero>

Tasa de homicidios en Colombia es la más baja en 30 años. (26 de diciembre de 2017). *El Colombiano*. Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/colombia/tasa-de-homicidios-en-colombia-bajo-en-2017-GX7918080>

Transparency International. (2017). *Corruption perception Index 2016*. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table

Transparency International. (2018). *Corruption perception Index 2017* https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017?gclid=Cj0KCQjwkpFWBR-DZARIsAAfeXarOhPPzvbekY6Q0ugi8qlj8xJySIFvwqK5RWoeE-BfEVNEzPvjPfsflaAmUYEALw_wcB#table

Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal. (24 de octubre de 2000). Sentencia N° 1316 [Alejandro Angulo Fontiveros].

_____. (9 de noviembre de 2000). Sentencia N° 1463 [Alejandro Angulo Fontiveros].

_____. (21 de diciembre de 2000). Sentencia N° 1703 [Alejandro Angulo Fontiveros].

_____. (12 de agosto de 2005). Sentencia N° 584 [Héctor Coronado]

_____. (26 de abril de 2007). Sentencia N° 178. [Eladio Ramón Aponte Aponte].

_____. (29 de octubre de 2009). Sentencia N° 554 [Héctor Coronado].

_____. (27 de julio de 2010). Sentencia N° 305. [Paúl José Aponte Rueda].

_____. (4 de julio de 2012). Sentencia N° 242. [Deyanira Nieves Bastidas].

_____. (14 agosto 2013). Sentencia N° 302 [Paul José Aponte].

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. (12 de abril de 2011). Sentencia 490 [Francisco Carrasquero].

United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global study on homicide 2013. Recuperado de: http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf

Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar & Universidad Católica Andrés Bello. (2018). Encuesta nacional de condiciones de vida 2017. Recuperado de: <https://www.ucab.edu.ve/investigacion/centros-e-institutos-de-investigacion/encovi-2017/>

Vélez D. V., Salas, M., Martell, E., Rodríguez, O., Fernández,

J., Pérez, V., Díaz, C., Rivas, F., Fernández, L. & Cendejas M. (2015). Homicidio: una mirada a la Violencia en México. México D.F.: Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad. Recuperado de: <http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/ONC-HOMICIDIO-COMPLETO-baja.pdf>

Von Bernath, J. W. (2016). El sistema de graduación de la pena del homicidio en el derecho chileno. *Política Criminal*, 11 (22), 721-756.

Las actuales redes criminales diseminadas en el territorio nacional y auspiciadas de manera recurrente por los poderes legales y grises presentes en los territorios, se erigen como verdaderas amenazas a los procesos de negociación que el Estado entabla con grupos armados ilegales, dinámicas que, de manera directa, están influyendo en las prácticas violentas experimentadas en el territorio colombiano.

Los trabajos que se publican en esta entrega incluyen un grupo diverso de autores y perspectivas articulados en torno a un Programa de investigación en transiciones, violencias y memorias, en el que se analizan -con perspectivas interdisciplinarias-, violencias homicidas y cuestiones criminales en las ciudades intermedias colombianas con elevadas tasas de violencia homicida como lo son las ciudades de Bello, Palmira, Pereira, Cúcuta, Montería, Manizales y Villavicencio.

Los autores parten de diferentes orientaciones teóricas, desde enfoques jurídicos hacia otros marcos sociológicos, como el uso de la noción de campo de Pierre Bourdieu, hasta el análisis de barrios y comunidades de la sociología urbana norteamericana. A su vez, cada trabajo tiene complementos técnicos y uso de metodologías distintas ya sea la teoría de redes, de sistemas de información geográfico, o enfoques etnográficos.

Con perspectiva plural, se exponen distintas problemáticas asociadas a la violencia homicida, al conflicto armado, al crimen organizado y a las reacciones de los afectados. Abarca un conjunto de espacios urbanos diversos dentro del vasto y profundo territorio colombiano. Se reconoce de esta manera, un proceso de post-acuerdo de incalculables secuelas en las endémicas violencias homicidas, las cuales están transformando la vida cotidiana de amplios sectores de la sociedad colombiana.

978-958-722-429-0